La ciudad mentirosa

FRAUDE Y MISERIA
DEL "MODELO BARCELONA"

Manuel Delgado

Índice

INTRODUCCIÓN. LA CIUDAD-NEGOCIO

CAPÍTULO 1. DEL ORDEN DEL IMAGINARIO AL DESORDEN DE LO REAL

CAPÍTULO 2. EL CENTRALISMO SIMBÓLICO

CAPÍTULO 3. EL ESPACIO PÚBLICO COMO CRISIS DE SIGNIFICADO

CAPÍTULO 4. MORFOLOGÍA URBANA Y CONFLICTO SOCIAL

CAPÍTULO 5. LOS JÓVENES Y LA NUEVA VIOLENCIA ARCAICA

CAPÍTULO 6. DEL MOVIMIENTO A LA MOVILIZACIÓN

CAPÍTULO 7. EL MITO DEL ESPACIO PÚBLICO

NOTAS

MANUEL DELGADO

Profesor de Antropología Social en la Universitat de Barcelona, donde dirige el Grup de Recerca sobre Exclusió i Control Socials (GRECS), y forma parte también del Observatori d'Antropologia del Conflicte Urbà (OACU). Ha trabajado especialmente sobre los códigos culturales que organizan los usos de los lugares públicos y, en general, sobre las consecuencias sociales de las dinámicas de transformación urbana. Sobre estas cuestiones ha publicado los libros Ciudad líquida, ciudad interrumpida (1999), El animal público (Premio Anagrama de Ensayo, 1999), Disoluciones urbanas (2002), Elogi del vianant (2005), Sociedades movedizas (2007), El espacio público como ideología (2011) y Ciudadanismo (2016).

Manuel Delgado

La ciudad mentirosa

FRAUDE Y MISERIA DEL "MODELO BARCELONA"

CATARATA

COLECCIÓN RELECTURAS

PRIMERA EDICIÓN: 2007

SEGUNDA EDICIÓN: 2010

TERCERA EDICIÓN ACTUALIZADA: 2017

DISEÑO DE CUBIERTA: CARLOS DEL GIUDICE

© MANUEL DELGADO, 2017

© LOS LIBROS DE LA CATARATA, 2017

FUENCARRAL, 70

28004 MADRID

TEL. 91 532 20 77

FAX. 91 532 43 34

WWW.CATARATA.ORG

CIUDAD MENTIROSA.

FRAUDE Y MISERIA DEL "MODELO BARCELONA"

ISBNE: 978-84-9097-791-0

ISBN: 978-84-9097-294-6

DEPÓSITO LEGAL: M-8.638-2017

IBIC: JFF/RPC

ESTE LIBRO HA SIDO EDITADO PARA SER DISTRIBUIDO. LA INTENCIÓN DE LOS EDITORES ES QUE SEA UTILIZADO LO MÁS AMPLIAMENTE POSIBLE, QUE SEAN ADQUIRIDOS ORIGINALES PARA PERMITIR LA EDICIÓN DE OTROS NUEVOS Y QUE, DE REPRODUCIR PARTES, SE HAGA CONSTAR EL TÍTULO Y LA AUTORÍA.

INTRODUCCIÓN

LA CIUDAD-NEGOCIO

> "Todo intento de realizar un plan urbanístico verdaderamente social es verdaderamente imposible dentro del marco de la sociedad capitalista" (Mercè Tatjer)1.

Barcelona es hoy, como tantas veces antes, una ciudad asediada. Quienes quisieran verla sometida no son ya ejércitos enemigos, ni regímenes políticos que detestan su amor por la vida o su capacidad para generar y albergar mundos, y mucho menos sus cíclicos estallidos de insolencia colectiva. Quien ansía ocupar Barcelona y avasallarla es, hoy, un capitalismo financiero internacional que ha descubierto en el territorio una fuente de enriquecimiento y que aspira a convertir la capital catalana en un artículo de consumo con una sociedad humana dentro. Por supuesto, ese es un fenómeno que afecta a otras muchas ciudades del mundo, todas ellas objeto de recalificaciones masivas al servicio de los intereses de las grandes corporaciones multinacionales; todas ellas víctimas de la codicia de un sistema de mundo al que no le importa deformarlas hasta convertirlas en su propia caricatura o su parodia; todas ellas convertidas en grandes máquinas de excluir y expulsar a cualquier habitante o forastero considerado insolvente… Eso no sería lo que haría singular a Barcelona, en ese contexto general de grandes procesos de transformación urbana en clave gerencial que vemos repetirse aquí y allá de manera parecida. Barcelona forma parte de esa ciudad postindustrial sobre la que tanto se ha escrito y sobre la que apenas hay nada nuevo que decir. Lo que hace sobresalir el caso de Barcelona es la manera en que esas dinámicas globalizadoras han alcanzado el mayor refinamiento en lo que se da en llamar "presentación del producto",

consecuencia de un cuidado extraordinario en la puesta en escena de una falsa victoria sobre las patologías urbanas y una engañosa eficacia a la hora de producir bienestar humano y calidad formal. Esa preocupación en el manejo de la impresión ajena ha sido la clave de su éxito a la hora de vender —literalmente y a lo largo y ancho del planeta— la imagen de una ciudad paradigma de todos los éxitos concebibles, pero de una ciudad que no existe, ni ha existido nunca, que solo es esa imagen que de ella se vende, un mero decorado, una vitrina, un espejismo tras el que lo que se agitan son otras cosas muy distintas de las que las políticas de promoción y las campañas publicitarias muestran.

Es en este sentido que se repite que Barcelona es un modelo. Ahora bien, un modelo, ¿de qué? Oficialmente, "modelo de transformación urbana, mejora de la atractividad y de la posición estratégica de la ciudad"[2]. En realidad, modelo de proyecto alucinado y visionario de ciudad, juguete en manos de planificadores que han creído que sus designios y la voluntad ordenadora de las instituciones que servían eran suficientes para superar y hacer desaparecer los conflictos, las desigualdades, los malestares… Modelo de una vocación fanática de transparencia, el destino de la cual ha sido constituir una ciudad legible y, por lo tanto, obedecible y obediente. Modelo de simplificación identitaria, en busca de una personalidad colectiva estandarizada y falsa, que sirva al mismo tiempo para crear cohesión ciudadana en torno a los valores políticos hegemónicos y la esquematización propia de un producto comercial como cualquier otro. Modelo de intervencionismo tecnocrático y de un despotismo centralizador, que ha hecho bien poco para promocionar la democracia participativa, que se ha aprovechado del debilitamiento del movimiento vecinal y que se ha mostrado hostil y agresivo contra unos movimientos sociales cada vez más activos, hasta que ha conseguido absorberlos. Pero lo más importante es que todas las políticas urbanísticas desarrolladas en Barcelona han sido guiadas, en las últimas décadas, por la voluntad de modelar la ciudad y modelarla no tan solo para hacerla un modelo, sino para hacerla modélica, es decir, ejemplo ejemplarizante, referente a seguir de lo que tiene que ser una ciudad sometida a los lenguajes que le ordenaban ordenarse y mostrarse ordenada.

Es cierto. Barcelona ha devenido un modelo. Modelo en el sentido de

pauta que los planificadores urbanos y los arquitectos de todo el mundo imitan o citan, presunto paradigma de crecimiento, de organicidad, de armonía, de virtuosismo, incluso de inquietud "social"… Modelo en el sentido, asimismo, de maqueta o reproducción ideal de una ciudad que ha visto realizado el sueño dorado de una identificación absoluta entre la perfección del plan diseñado y unas relaciones sociales no menos proyectadas, que han conseguido un máximo nivel de integración, supuestamente sin sobresaltos, sin desasosiegos, sin turbulencias. Igualmente, Barcelona es también una modelo, o mejor, una *topmodel*, una mujer que ha sido entrenada para permanecer permanentemente atractiva y seductora, que se pasa el tiempo maquillándose y poniéndose guapa ante el espejo, para después exhibirse o ser exhibida en la pasarela de las ciudades-*fashion*, lo más *in* en materia urbana[3]. Esa es la Barcelona-éxito, la Barcelona-*fashion*, la Barcelona que está de moda —o, más bien, que es una moda—, como lo demuestra la fascinación que despierta en los turistas de todo el planeta que la visitan.

Pero Barcelona es también modelo de otras cosas. A la sombra de la Barcelona-espectáculo, está esa Barcelona modelo de cómo se administra hoy la ciudad tardocapitalista y del nuevo desorden urbano; de cómo la autopromoción municipal y los elogios de las revistas internacionales de arquitectura solo son posibles escamoteando la otra cara de la moneda, el reverso oscuro de la grandilocuencia oficial y el dialecto del "buen rollo" ciudadanista. Y ahí están los desahucios masivos, la destrucción de barrios enteros que se han considerado "obsoletos", el aumento de los niveles de miseria y de exclusión[4], las batidas policiales contra inmigrantes sin papeles, la represión contra los ingobernables… Contrastando con todas las deslumbrantes escenografías destinadas a un público concebido al mismo tiempo como espectador y como figurante, todas las complicidades vergonzantes, todos los fracasos infraestructurales, todos los exudados en forma de marginalidad que no se han logrado exiliar a la periferia. Eso es lo que hace posible que Barcelona pueda ser lo que hoy es: modelo o prototipo de ciudad-fábrica, urbe convertida en enorme cadena de producción de sueños y simulacros, que hace de su propia mentira su principal industria y que hace de su componente humano un ejército de obreros-prisioneros,

productores y, al mismo tiempo, vendedores de su propia nada. Para que nada distraiga de esta tarea fundamental —producir y vender sin descanso ciudad —, un mecanismo panóptico no pierde de vista nada de lo que pasa en las calles y plazas de la gran factoría, vigilando que toda espontaneidad quede conjurada, toda rebeldía abortada y ninguna desobediencia sin castigo, convirtiendo la ciudad en una prisión en la que solo los sumisos viven contentos.

La capital catalana ha vivido últimamente demasiado absorta en sí misma, demasiado obnubilada por su nuevo, y en tantos sentidos ficticio, esplendor como para darse cuenta de la naturaleza de los procesos en que ha estado y está inmersa todavía y del papel que juegan sus ciudadanos en estas dinámicas de transformación, más allá del de meros receptores pasivos que se les atribuye, una especie de excipiente sobre el que se aplican fórmulas y proyectos. Las autoridades políticas barcelonesas y los técnicos a su servicio han creído que el éxito era suyo, que habían sido ellos quienes habían hecho la ciudad que los ciudadanos tenían la suerte de disfrutar, que todo había sido cosa de una serie de iniciativas municipales y de consignas de urbanidad que habían descendido pentecostalmente, como lenguas de un fuego salvífico, sobre las cabezas de la gente que habita y usa la ciudad. Una cosa similar pasa con los arquitectos, los diseñadores urbanos y los urbanistas que han gozado del favor oficial, que en las últimas décadas han tenido en sus manos la posibilidad de experimentar con la forma urbana como pocas veces se ha visto en otras ciudades, cuando menos en la historia reciente; hasta tal punto ha llegado el poder que les ha sido confiado y que han ejercido demiúrgicamente. Unos y otros, políticos y arquitectos, han procurado hacer posible el proyecto de una ciudad "buena chica", una ciudad bajo control, ejemplar, sosegada, modélica, planificada, previsible…

Tanto los políticos como los planificadores de ciudad a su servicio —o al revés, como se prefiera— han pensado una Barcelona en términos de propuestas, de acciones inmediatas, de proyectos, de decretos, de tipificaciones, es decir, de planes y de planos. En una última etapa, todo ello se ha sazonado con dosis elevadas de "conciencia social". Eso ha tenido, sin duda, aspectos beneficiosos para los ciudadanos. Sería necio negar la evidencia de mejoras sustantivas en el campo de los equipamientos, de una

transformación estética de calidad en el paisaje urbano y, especialmente, en la producción masiva de exteriores concebidos de manera creativa, a menudo atrevida, pocas veces propiciadora de espacios de sociabilidad. He ahí logros que de ningún modo deberían ser olvidados a la hora de hacer un balance de las mutaciones morfológicas que ha conocido Barcelona. Tampoco se encontrará nada en esta obra que ponga en duda la pertinencia, incluso la urgencia, de proyectos y políticas que contemplen la ciudad como un todo integrado y que tomen como objetivo hacer la vida urbana lo más justa y amable que sea posible.

Y es ahí donde una advertencia se impone desde el inicio mismo del presente ensayo. No se plantea aquí la menor duda acerca de la necesidad de un proyecto administrativo que planee el crecimiento urbano y lo proteja de los estragos de un sistema socioeconómico que se nutre de la explotación y el abuso; es más, eso es lo que acaso se encuentra más en falta. Es bien cierto que bajo la exaltación de un despliegue sin trabas de las energías ciudadanas, de un elogio del caos y de una especie de libertarismo urbano, suele esconderse a menudo un argumento propicio para justificar el más descarnado de los liberalismos económicos. Lo que se denuncia es un afán al mismo tiempo especulador y espectacularizador de la Administración, que se desentiende de lo que tendría que ser su misión de crear, gestionar y mantener en buen estado los escenarios dramatúrgicos para la vida democrática —pero no por fuerza, desconflictivizada— de la sociedad urbana, y que acaba poniéndose al servicio de los intereses mercantiles y financieros de una minoría, y lo hace últimamente arropándose de un lenguaje virtuoso. En otras palabras: no se puede estar seguro de que la finalidad de todas las mejoras que han tenido como destinataria Barcelona no haya sido sobre todo la de mejorar la oferta de la ciudad, hablando ahora puramente en términos empresariales. Sería decididamente injusto no aceptar que ha habido una voluntad de aumentar el bienestar de los vecinos y la felicidad de los visitantes, pero todas las obras, las iniciativas, las infraestructuras, los cinturones de ronda, los grandes edificios culturales, la producción de espacios públicos "de calidad", las dosis adecuadas de preocupación social… han parecido no menos preocupados por vender mejor —y más cara— la ciudad. Barcelona, en tanto que proyecto, se ha podido

antojar a veces más como un proyecto de mercado que como uno de convivencia.

Más allá todavía, es razonable sospechar que las políticas urbanísticas que ha conocido Barcelona —y tantas ciudades que en todo momento han seguido su modelo— no han sido sino la continuación de una vieja obsesión de los poderosos por controlar lo que de crónicamente incontrolable ocurre en las calles. Las planificaciones, las mapificaciones, las delineaciones viarias y las zonificaciones han vuelto a ser instrumentos que procuran —sin acabar de conseguirlo nunca— monitorizar lo que realmente sucede al espacio urbano, todas las apropiaciones espontáneas y erráticas a que es sometido por sus propios usuarios, las colonizaciones insólitas e impredecibles que constantemente lo afectan, y que de él hacen un espacio natural de libertad. En el fondo, quizás Barcelona está siendo el último gran experimento de aquella concepción de la ciudad que se inició a finales del siglo XVIII y que aparece empeñada en regular y codificar la madeja de realidades humanas en que consiste toda concentración urbana. El objetivo es acabar con los esquemas paradójicos, azarosos y en filigrana de la ciudad, aplicar principios de reticularización y de vigilancia que pongan fin o atenúen la opacidad y la confusión a que siempre tiende la sociedad urbana. A una buena parte del urbanismo moderno nunca ha dejado de animarlo —en Barcelona también— la intención de constituir una ciudad perfecta, es decir, una contra-ciudad, advirtiendo que quizás la vocación última de cierto urbanismo acaso sea, como sugería Jane Jacobs, asesinar ciudades.

Tenemos así que la Barcelona del siglo XXI es lo que lleva siendo desde que se decidió hacer de ella una "ciudad moderna" hasta que ha incorporado "lo social" a su presentación como producto: usurpación capitalista de la ciudad, expresada, como siempre, en clave de especulación masiva; terciarización, esto es, puesta al servicio de los requerimientos de la técnica y del mercado; desdén por solucionar —hoy ni siquiera al menos aliviar— el crónico problema de la vivienda; apoteosis de postulados y discursos grandilocuentes, a través de los cuales las instituciones políticas aspiran a obtener una legitimidad que no alcanzan por su trabajo; arrogancia proyectadora; obsesión por colonizar de una vez por todas los barrios enmarañados que se resistían al deber de la transparencia; una arquitectura

cada vez más ansiosa de impactos visuales fáciles, que ama por encima de todo lo banal; un dirigismo absolutista hacia las prácticas reales de los ciudadanos, a las que se querría ver plenamente fiscalizadas y cuya espontaneidad se contempla como un peligro a batir; la arquitecturización sistemática de *todo* espacio colectivo y el proyecto por convertir a sus usuarios en consumidores; la tematización de la ciudad, traducida en proliferación de los simulacros y festivales… Frente a esa ciudad soñada por los políticos y sus arquitectos —tranquila, sumisa, desconflictivizada, llena de ciudadanos siempre dispuestos a colaborar, ávida por satisfacer a turistas y a inversores—, toda ciudad es otra cosa: un cuerpo que solo sabe de frecuencias, desasosiegos e intensidades. La Barcelona paradójica, contradictoria, secreta, insumisa… La Barcelona que, de vez en cuando, todavía se niega a obedecer y por la que se desparrama a todas horas aquello que no cristaliza jamás y a lo que no deberíamos dudar en llamar, sencillamente, *lo urbano*.

Este libro trata de advertir sobre los intentos por liquidar una de las ciudades más excitantes del sur de Europa, en nombre de un proyecto político-urbanístico que no prevé la existencia de una sociedad naturalmente alterada y conflictiva, y que procura —a costa de lo que sea— hacer real, o que lo parezca, la quimera imposible de una ciudad arquitectónica, estética, ignorante o domesticadora de las agitaciones que la animan, de la intensidad de los cuerpos que la habitan y la atraviesan, de las perturbaciones que la agotan al mismo tiempo que le otorgan la vida. Como contribución a la defensa de esa ciudad tan oculta como verdadera, sigue ahora una crítica feroz y deliberadamente negativa. No postula alternativas a los males que señala y apenas se detiene en indicar éxitos, logros y virtudes. Para lo primero, el autor no se siente competente, y respecto de lo segundo, la verdad es que hay demasiados voluntarios dispuestos a hacer el elogio entusiasta de lo que hay, o su censura debidamente matizada y constructiva, como para añadir una voz más al coro de los sensatos y razonables. Que no se apunten no quiere decir que no existan opciones a lo que está ahora dado, ni aspectos que merezcan ser resaltados como positivos. Quiere decir tan solo que, de vez en cuando, debe haber alguien que diga lo que piensa y lo que ha visto de manera inmoderada, con escándalo y con rabia, por mucho que la

vehemencia con que lo haga le devalúe académicamente o le haga políticamente inservible. Qué se le va a hacer. Y es que toda esta obra es una larga carta de amor; desaforada, impaciente, exagerada —¿cómo sería una carta de amor "moderada"?—, acaso, como todas las cartas de amor —bien lo supo reconocer Pessoa—, más bien ridícula. Carta de amor a Barcelona, de amor despechado, pues ella, la amada, ha acabado en los brazos de quien poco la amaba y menos la merecía.

---

1. Mercè Tatjer, *La Barceloneta. Del siglo XVIII al Plan de la Ribera*, Los libros de la frontera, Barcelona, 1973, p. 91.

2. Ferran Brunet, "Anàlisi de l'impacte económic dels Jocs Olímpics de Barcelona, 1986-2004", en Miquel de Moragas y Miquel Botella (eds.), *1992-2002. Barcelona: l'herència dels jocs,* Ayuntamiento de Barcelona/Planeta/Centre d'Estudis Olímpics, Barcelona, 2002, p. 270.

3. La imagen de Barcelona como *top-model* la tomo de Monica Degen, "Passejant per la passarel·la global: ciutats i turisme urbà", *Transversal*, Lleida, 23 (junio de 2004), pp. 30-32. A propósito: la campaña que desde la primavera de 2007 promocionaba el renovado teleférico de Montjuïc no podía ser más explícita. Su lema: "Déjate seducir por Barcelona".

4. Según la Memoria 2015 de Cáritas Barcelona, las personas atendidas por la organización no habían dejado de aumentar entre 2009 —17.733— hasta ese año, en que habían sido 23.913. En ese mismo periodo se había pasado de 31.143 servicios prestados a 47.017. Disponible en http://www.caritasbcn.org/sites/default/files/160722_caritas_memoria-web-CAT.pdf; visitado el 28/2/2017.

CAPÍTULO 1

DEL ORDEN DEL IMAGINARIO AL DESORDEN DE LO REAL

TRANSICIÓN, TRANSACCIÓN

Todo el imaginario oficial acerca de lo que han sido las últimas décadas de la historia urbanística de Barcelona parte de un supuesto que nadie o muy pocos se atreven a cuestionar. De hecho, esa premisa de cuya verdad no se puede casi bajo ningún concepto dudar —cuando menos en público— es expresión local de otra análoga, relativa en ese caso a la evolución política del Estado español en ese mismo periodo. Ese axioma —auténtico dogma de fe— es que en 1977 se produjo una mutación política que implicó el tránsito de una dictadura a un régimen de plenas libertades democráticas. No es cuestión de advertir la fragilidad de tal presupuesto —que ya ha sido discutido por los historiadores más valientes[1]—, pero sí de poner sobre aviso lo difícil que es —atendido con cuidado— certificarlo en el caso de la capital de Cataluña. Dicho de otro modo, no es tan fácil sostener en serio —considerados los datos y las realidades— que Barcelona conociera una "nueva era" de la mano de la restauración de las instituciones propias de la democracia formal, que, como mucho, continuaba los avances y criterios desarrollados o apuntados antes de 1936, y que ignoraba o reconocía como vacante el periodo dominado por el régimen político surgido de la ocupación militar de Barcelona en 1939. Un análisis de la historia de los años de gestión municipal anteriores al fin oficial de la dictadura pone de manifiesto lo ilusoria que resulta cualquier idea de ruptura tajante entre el tardofranquismo y la etapa llamada democrática, cuanto menos en materia de

concepción y organización urbanística. Lo que en el plano de las representaciones fue restauración democrática, en el plano de las realidades más materiales no fue sino continuismo e, incluso, en ciertos aspectos, radicalización de algunas de las tendencias iniciadas o apuntadas por la Administración franquista de la ciudad.

La política de diseño urbano que ha hecho paradigmático el urbanismo barcelonés, fuertemente tecnocrático y dirigista, no la iniciaron los ayuntamientos elegidos democráticamente, sino que está prefigurada en el Plan Comarcal de Ordenación Urbana de 1953, más todavía en su revisión de 1964 y, de una forma definitiva —y vigente—, en el Plan General Metropolitano (PGM) que se redacta a principios de los años setenta y se aprueba en primera instancia en 1974, cuando el alcalde nombrado por Franco para Barcelona era Enric Massó, sucesor político de José María de Porcioles, que lo había sido entre 1957 y 1973, y que representó en su momento la asunción, en Barcelona, del poder por parte del Opus Dei y de los sectores más tecnocráticos del régimen. Toda la política urbanística del periodo democrático está inspirada en ese PGM, aprobado en julio de 1976, pero gestado bajo el franquismo por una alcaldía franquista, a pesar de lo cual Oriol Bohigas, sin duda el gestor del tránsito entre los ayuntamientos fascistas y los democráticos, le reconoce su carácter premonitorio, su valor de anticipación, en unos "años fructíferos de gestión de suelo, que arranca fundamentalmente en el periodo predemocrático"[2].

Es más, son los gobiernos democráticos de la ciudad quienes asumirán la tarea de llevar a cabo la ciudad soñada por Porcioles y los sectores sociales que representaba, tal y como aparece en el ambicioso proyecto Barcelona 2000, presentado en 1967, que se concretaría luego en el mencionado PGM. Es en su folleto de promoción donde se habla de "iniciar ventajosamente la etapa competitiva con otras ciudades mediterráneas", es decir, concurrir en el mercado de ciudades con un producto atractivo para turistas e inversores. Lo que se presenta como una deseable "contención de la actividad industrial y de promoción de la actividad", se tradujo, en democracia, en una masa de recalificaciones derivadas de un monumental proceso de desamortización de suelo industrial. El "mantenimiento o recuperación de espacios libres cívicos con dominio del peatón" y la generación de "lugares de encuentro y relación

social", se convirtió, luego de la dictadura, en la política de "espacios públicos de calidad"[3]. El propósito de creación de una "red de vías a distinto nivel de la trama urbana y diseñadas para tráfico rápido" se hizo realidad en la etapa democrática en forma de cinturones de ronda y del litoral, así como los túneles de Vallvidrera. Lo que se presenta como la necesaria "conservación y puesta en valor del patrimonio artístico y cultural de la ciudad", anuncia el papel central otorgado a los grandes contenedores culturales y a la cultura misma como eje central de la oferta de ciudad[4].

La conciencia de que el proceso de desindustrialización sería imparable y que Barcelona tendría que convertirse en una ciudad de servicios y en macroescenario para el consumo de masas ya determina las grandes líneas de transformación urbanística inscritas en el periodo anterior a la reinstauración de la democracia formal[5]. Enormes lotes de territorio que había sido industrial o habitado por sectores populares, que se extendía cerca del mar, entre la Barceloneta y la desembocadura del Besòs, han sido inmolados en aras de la nueva economía y para actividades asociadas a los negocios de la información y las tecnologías punta, o bien reconvertidos en barrios para estratos medios y altos, como la Vila Olímpica o Diagonal Mar. Ahora bien, veremos cómo ese proceso arranca con el Plan Parcial de la Ordenación Urbana de la Ribera —Plan de la Ribera— y se inicia ya en la década de los sesenta[6]. El despanzurramiento de Ciutat Vella, que alcanzaría luego dimensiones de simple destrucción masiva de tejido urbano, es un proceso que venía de lejos y que Porcioles relanza con su política de "saneamiento", destinada a convertir sus barrios en lo que ya en buena parte son hoy: una zona de servicios y para "nuevos vecinos". De hecho, acaso las actuaciones más radicales del urbanismo "democrático" contra lo que fuera un día el Barrio Chino —la apertura de la Rambla del Raval— son continuación natural de la avenida García Morato, abierto en los años sesenta del pasado siglo. Volveremos a ello más adelante.

También los principales logros urbanísticos de los ayuntamientos de la época democrática están ya prefigurados en la última fase de la época franquista. Ese sería el caso, por ejemplo, de la recuperación de patios interiores en el Eixample, de las reservas para espacios verdes y para equipamientos, o el objetivo de esponjar las zonas más densificadas de la

ciudad. Por desgracia, se puede decir lo mismo con respecto a lo que habían sido los pecados capitales de la dictadura en su expresión municipal, que también fueron, en buena medida, heredados. Así, se le reprochó al porciolismo haber propiciado el uso del automóvil —tan indisociable del desarrollismo franquista de los sesenta—, disponiendo auténticas autopistas urbanas que alcanzaban el corazón mismo de la ciudad; pero la construcción de los cinturones y las rondas no fue otra cosa que una manera indirecta de propiciar ese uso perverso del coche para desplazamientos intraurbanos, por no hablar de la proliferación de *parkings* en toda la ciudad —incluyendo su centro histórico—, que no parece estar acorde con los planes oficiales de "pacificación" del tráfico automovilístico. En 1960 causó un notable escándalo la autorización municipal de levantar edificaciones de altura en el centro histórico, entre ellos la propia sede del Ayuntamiento. En la actualidad, el *skyline* de la ciudad testimonia hasta qué punto acabó proliferando esa misma tipología de edificación en altura que durante el franquismo tanto se llegó a denigrar y que con tanta insistencia se ha denunciado como insostenible y antiurbana. En otro plano, no se olvida que el encargo de suculentos proyectos a grandes estrellas internacionales de la arquitectura y la estetización de espacios públicos a cargo de reconocidas figuras internacionales del arte empiezan cuando Socías Humbert gobernaba un Ayuntamiento todavía formalmente predemocrático.

Como ejemplo de la falta de escrúpulos de los municipios franquistas de la época desarrollista se cita el caso de los edificios levantados con materiales deficientes y luego afectados por aluminosis, como ejemplo de la deshonestidad de los constructores mimados por la municipalidad. Ahora bien, dejando de lado que nadie —ni en dictadura ni en democracia— hizo responder de su actuación a los causantes de un mal que afectó a barrios enteros —como el Turó de la Peira, con más de 4.000 viviendas dañadas—, lo cierto es que las instituciones legitimadas por las urnas han continuado estimulando y beneficiándose de actuaciones urbanísticas e inmobiliarias no pocas veces opacas. Recuérdese el caso del hundimiento, en enero de 2005, de una parte del barrio del Carmel —1.300 vecinos desalojados— como consecuencia de unas obras del metro, la gestión de las cuales estuvo —como tantas otras— trufada de irregularidades y que, como se recordará, dio pie a

una agria polémica parlamentaria acerca del destino de un porcentaje del precio de las obras públicas —el 3 por ciento—, asignado "de oficio" a la financiación ilegal de partidos gubernamentales, en este caso de Convergència i Unió (CiU)[7]. Magnífica metáfora, por cierto, del contraste entre una Barcelona que hacía constante exaltación pública de sus ambiciones en materia de infraestructuras y la Barcelona de las clases populares y sus barrios, levantados de mala manera, con materiales deficientes o sobre terrenos inestables, es decir, y una vez más, entre la "Barcelona modelo" que se pavoneaba vanidosa y una Barcelona real que literalmente se hundía[8].

Es cierto que el dilatado periodo porciolista abrió la veda para el enriquecimiento rápido de empresarios sin escrúpulos en pos de beneficios rápidos y abundantes, especialmente en el campo de la construcción. De hecho, se ha sostenido que el propio Porcioles resultó agraciado por los resultados económicos generados por la versión local del desarrollismo franquista. Pero las mismas clases sociales que representaba Porcioles fueron las que continuaron practicando la corrupción, como quedó de manifiesto en el "caso Palau", el desvío fraudulento de millones de euros del Patronato del Palau de la Música a las cuentas de CiU, el partido nacionalista hegemónico en Cataluña en aquel momento, en un asunto una de cuyas derivaciones, el proyecto del Hotel del Palau, acabó implicando el procesamiento y posterior absolución de altos cargos del Ayuntamiento de izquierdas: el teniente de alcalde, Ramón García-Bragado; el gerente de urbanismo, Ramon Massaguer, y el director jurídico de urbanismo, Enric Lambies. Una de las personas que destapó el caso y denunció el papel en él del Gobierno de la ciudad fue la propia concejala de Ciutat Vella, que, como consecuencia de su valentía a la hora de enfrentarse con sus compañeros de consistorio, incluyendo el propio alcalde, el socialista Jordi Hereu, sufrió una campaña de ataques y amenazas anónimas poco antes de comparecer en el juicio contra sus antiguos correligionarios en 2014. Incapaz moralmente de ser cómplice del abuso inmobiliario que se estaba gestando, había dimitido de su cargo en abril de 2010[9].

En junio de 2014, la Sindicatura de Comptes de la Generalitat denunció anomalías millonarias en la gestión del Fórum de las Culturas de 2004, en

cuestiones como los procedimientos de contratación de personal, el incumplimiento de la legislación en materia de sueldos, el pago de complementos y gratificaciones y la selección de patrocinadores, además de subrayar fallos de planificación. El corto periodo de Gobierno municipal nacionalista-conservador ha conocido un asunto de posible corrupción en la gestión de la entidad pública Barcelona Regional en relación con el cual fueron investigados por la fiscalía el responsable de urbanismo, Antoni Vives, y su mano derecha y director de aquel organismo, el arquitecto Willy Muller. En octubre de 2016 se confirmaba el procesamiento de Narcís Serra, alcalde socialista de Barcelona entre 1979 y 1982, a causa del escándalo por los sobresueldos en Caixa de Catalunya. En el marco ya del Gobierno de Barcelona en Comú, una opción política que se presentaba autosometida a un rígido código ético, en mayo de 2016, Ada Colau nombraba como su segundo teniente de alcalde y concejal de Cultura al socialista Jaume Collboni, desde hacía seis meses investigado por el llamado "caso Mercurio", por un presunto tráfico de influencias en un asunto de corrupción urbanística.

La concepción de Barcelona como un escenario para el consumo turístico masivo, que en la actualidad, en el supuesto contexto de renovación política que ha comportado el triunfo electoral de Barcelona en Comú, se plantea como uno de los problemas más graves que padece la ciudad, aparece también bajo el mandato de José María de Porcioles. Es en los años sesenta que se empieza a tomar consciencia de que urgía hacer de la ciudad una desembocadura turística con valor propio, más allá de su dependencia geográfica respecto de los enclaves de "sol y playa" más o menos cercanos, así como dejando atrás la gravitación en torno a los tópicos que imponía el modelo franquista de promoción turística, basados en el flamenco y los toros. La aparición de una instancia como el Centro de Iniciativas y Turismo en 1964 ya ponía de manifiesto la pertinencia de una política institucional y empresarial que proyectase a Barcelona como algo más que "ciudad de ferias y congresos", como rezaba el eslogan de la época, potenciándola como seductora para los forasteros, con una definición singular y autónoma[10], en la senda que hará de Barcelona un destino masivo de visitantes y un recurso estratégico para la economía local, tanto pública como privada.

Por supuesto que la oposición vecinal a las iniciativas urbanísticas

actuales no se puede comparar a la tan intensa que conocieron los ayuntamientos del último franquismo, en el marco de un auge generalizado de las luchas sociales. Pero no es que no haya motivo para ello, sino que un buen número de asociaciones de vecinos han conocido un proceso de acomodamiento, que no ha resultado sino de su institucionalización por parte del Ayuntamiento, que las ha convertido, en no pocos casos, en protagonistas de simulacros de participación y en correas de transmisión de sus intereses y argumentos. La paradoja consiste en que había protestas cuando no había derecho a la protesta y que, en cuanto ese derecho fue conquistado, los vecinos dejaron de protestar o lo hicieron más mansamente, demostrando una vez más la astucia del orden político a la hora de domesticar a sus críticos, convirtiéndolos en cómplices dependientes de la prebenda y la subvención. Más triste si cabe resulta constatar que el supuesto triunfo de la democracia sobre el franquismo implicaría desactivar el grueso de los movimientos barriales. La lucha de los vecinos consiguió detener bajo la dictadura la operación que pretendía despanzurrar el Barrio Chino; la democracia retomó aquel proyecto de destrucción y abrió la Rambla del Raval, solo que, en esta oportunidad, sin apenas resistencia y asfixiando la que se le presentaba[11]. La gente de Poblenou se organizó para detener el Plan de la Ribera, concebido desde los planes urbanísticos franquistas, y aquella oposición fue uno de los factores que hizo que se abandonase. Algunos de los profesionales que se unieron a los vecinos contra aquel proyecto de apropiación capitalista del litoral barcelonés fueron corresponsables de la reforma de la Barceloneta y de la emergencia de la Vila Olímpica, Diagonal Mar o el 22@, y, sin embargo, ahora ejecutan aquel plan impunemente y en nombre de altos valores civilizatorios asociados al deporte, la paz universal y el avance tecnológico.

Tiende a repetirse que el pecado del estado de cosas urbanístico en Barcelona es que la ciudad se ha doblegado a los imperativos de las dinámicas del capitalismo mundial, pero esta no es que no sea una característica singular de la actualidad en materia de iniciativas urbanas de Barcelona, sino que la clave internacionalizadora ha sido un elemento esencial de la lógica del crecimiento urbano en Barcelona, cuyo primer paso fue la Exposición Universal de 1888, que sirvió para urbanizar el espacio de las primeras instalaciones militares abandonadas —la Ciutadella— y su

entorno y una parte del frente marítimo. Esa lógica, que deja en manos de grandes acontecimientos el crecimiento urbano, continuará con la adecuación de la montaña de Montjuïc y la creación de nuevas infraestructuras para la Exposición Universal de 1929. El Congreso Eucarístico de 1952 es no solo el primer gran éxito diplomático del régimen franquista, sino también la excusa que permite urbanizar los aledaños del sur de la Diagonal y eliminar el poblado de barracas allí existente, y servirá como precedente no confesado de lo que mucho más tarde será el espíritu ecuménico —en torno ahora a los nuevos valores místicos posmodernos— del Fórum de las Culturas en el 2004. El mismo José María de Porcioles concibió la idea de celebrar en Barcelona una Exposición Universal en el año 1982, cuyo destino hubiera implicado la transformación de la parte "pendiente" de Montjuïc —los barrios de Can Clos y del Polvorí— y el remodelado de los alrededores del Carrer Tarragona, con la apertura de un gran corredor urbanizado que uniera el recinto ferial de Montjuïc y la entrada del entonces ya previsto túnel de Vallvidrera: la Avenida de la Exposición. Sorprende cómo los argumentos de Porcioles en defensa de su idea de un gran acontecimiento para impulsar la transformación de la ciudad serían idénticos a los que luego alimentarían el proyecto olímpico o el Fórum 2004: "La exposición puede y debe ser el instrumento adecuado para encauzar la expansión de Barcelona y promover, a la vez, su reforma interior, de acuerdo con las exigencias que implica su crecimiento y obliga la profunda transformación social"[12].

Y lo peor es que no solo no se ha mejorado lo que era el modelo porciolista de crecimiento urbano —salvo por las concesiones a una participación vecinal reducida con frecuencia a mera caricatura—, sino que se ha retrocedido en algunos de los aspectos positivos del urbanismo de la etapa predemocrática. Es cierto que casi treinta planes urbanísticos parciales que se aprobaron durante el mandado de Porcioles —con tres mil hectáreas afectadas— consistieron en el levantamiento de edificaciones de pésima calidad o, como hemos visto, enfermas, pero implicaba una consideración en primer término del tema de la vivienda social que los ayuntamientos elegidos por sufragio universal no heredarán. El PGM preveía el mantenimiento de todas las áreas industriales, pero la dinámica de terciarización en que los ayuntamientos posteriores entraron ha acabado expulsando a la mayoría de

fábricas, talleres y almacenes fuera de la ciudad y recalificando como residenciales o destinados a nuevas tecnologías una buena parte de lo que fuera terreno fabril. Ya se ha mencionado la proliferación de rascacielos en Barcelona —Torre Agbar, Mapfre, Hotel Arts, Carrer Tarragona, Diagonal Mar—, pero cabe añadir que contraría la limitación de la edificación en altura que contenía el PGM en su borrador de 1974. También se ha dicho que la reforma de la línea de costa entre la Barceloneta y la desembocadura del Besòs ya estaba prefigurada en el Plan de la Ribera, pero por el camino se ha perdido la dimensión social de aquel proyecto, en buena medida elaborado por quienes luego ocuparían el poder en la ciudad, a favor del asentamiento de los sectores más promocionados del barrio o de nuevas clases privilegiadas —"*yuppies* de medio pelo", escribió Horacio Capel[13]—, que han acabado ocupando un espacio concebido o generado siguiendo los modelos que han caracterizado, en buena medida, la expansión urbana en Estados Unidos.

Desazona y entristece regresar a los argumentos que se desplegaron en su momento contra el proyecto franquista de ciudad y reconocer hasta qué punto muchos de ellos podrían ser aplicables al momento actual y han estado a cargo de quienes los esgrimieran. Tómense, por ejemplo, los números monográficos que la revista del Colegio de Arquitectos Técnicos (CAU) dedica a Barcelona. Uno de ellos lleva por título *La Barcelona de Porcioles*, y en él se denunciaban las maquinaciones de promotores, gestores y ejecutores de lo que entonces ya se presentaba como la "reconstrucción" de la ciudad y en el que se aludía a actuaciones recalificadoras —cinturones de ronda, túneles del Tibidabo, Plan de la Ribera…— que los ayuntamientos nacidos de las urnas llevarían a la práctica[14]. Otro monográfico fue el que apareció bajo el epígrafe *Gran Barcelona,* coordinado por Jordi Borja y al que contribuyeron firmas como la de Marçal Tarragó, Pau Verrié, Joaquim Lleixa o Manuel de Solà-Morales, algunos de ellos teóricos y ejecutores de la Barcelona inmediata. En aquel número se denunciaba cómo "el Plan de la Ribera puede permitir las ventas de terrenos para uso privado —en lugar de expropiación pública— para utilizarlos como fachadas al mar y convertirlo en una tradicional operación especulativa de construcción de viviendas de *standing* medio con un índice de edificabilidad alta"[15].

En esa misma dirección, véase el monográfico *Barcelona* que dirigió en

1974 Manuel de Solà-Morales, que lleva el elocuente subtítulo de *Remodelación urbana o desarrollo capitalista en el Plan de la Ribera* y en cuya introducción se advierte cómo aquel momento se caracterizaba por la creciente concentración financiera de los operadores interesados en la remodelación urbana, cuya actuación se lleva a cabo "mezclando el capital privado con grandes inversiones públicas"[16]. O cualquiera de los números de la revista *Serra d'Or* de los años sesenta y primeros de los setenta, desde cuyas páginas, cada mes, Oriol Bohigas o Josep María Martorell señalaban la catástrofe urbanística que se estaba perpetrando en Barcelona y su periferia. O las reflexiones de Ignasi de Solà-Morales sobre el papel que estaba jugando la arquitectura en el apogeo del desarrollismo urbanístico en la ciudad, con la primacía de un punto de vista urbano en la consideración más general de la arquitectura y de su pertenencia a los sistemas ideológicos dominantes[17].

En 1974 aparece el libro *Barcelona, ¿a dónde vas?*, de Francesc Martí Jusmet —futuro delegado del Gobierno español en Cataluña entre 1982 y 1993— y el abogado Eduard Moreno. En él se formulan los pecados capitales de lo que estaba siendo en aquel momento la Barcelona tardofranquista en materia urbanística, que arrancan "en una serie de hechos violentos, pues violencia consideramos todo lo que sea explotación o lucro injustos, a costa de los más desfavorecidos". Estos factores violentos son: 1, la especulación; 2, los grupos económicos de presión; 3, la utilización de recursos públicos para la financiación de procesos especulativos; 4, la construcción de infravivienda social; 5, los ataques al medio ambiente; 6, la hegemonía interesada otorgada al tráfico rodado, y 7, el abandono de la ley, es decir la corrupción[18]. Todas esas aberraciones que conoció la fase desarrollista del franquismo municipal en Barcelona son las que presenta la Barcelona actual; todas excepto las pésimas políticas franquistas en vivienda accesible, que han sido sustituidas…, por nada o poca cosa. En algunos casos, sí que podrían reconocerse avances, como la peatonalización de zonas del centro de la ciudad o de sus barrios, o la ampliación de aceras emprendida a partir de los años ochenta, que parece haber dejado atrás las quejas de otro libro pionero en la crítica a la Barcelona de Porcioles, *Barcelona, adéu,* de Carles Lladó Badia, que titula uno de sus capítulos "Los peatones ya no cuentan; las calles son para los coches"[19]. Lo que ocurre es que esa contribución al éxito

de la humanización de la ciudad que es liberarla del intrusismo del coche no se ha puesto tanto al servicio del bienestar público como al de la generación de auténticos centros comerciales "al natural".

¿Quién iba a decir de aquella pesadilla de una ciudad completamente postrada a los intereses capitalistas en materia urbana que acabaría alcanzando su apogeo no gracias a la brutalidad de un régimen fascista, sino a la legitimidad democrática?

Porcioles fue, con mucho, el principal alcalde franquista de Barcelona, quien asumió la tarea de imponer a nivel municipal las políticas del régimen impuesto por las armas en 1939. Además, se le considera beneficiario directo de los grandes negocios inmobiliarios que propició su mandato, marcado por el auge de la especulación y los negocios sucios[20]. A pesar de ello, tanto con motivo de su 80 aniversario en 1984 como con el de su fallecimiento en septiembre de 1993, Porcioles no solo recibió elogios desde un catalanismo del que fuera expresión posibilista bajo la dictadura, sino también de quien hubiera podido antojarse su antagonista, el alcalde socialista de Barcelona, Pasqual Maragall, al frente de un equipo municipal que conformaban también independentistas catalanes y comunistas. Uno de los titulares de *La Vanguardia* del día 5 de septiembre de 1993 era explícito: "Porcioles es el referente de la actual política de Maragall". Manuel Vázquez Montalbán escribía poco después que Maragall "ha asumido la Gran Barcelona, el proyecto de Porcioles, no porque coincida exactamente con su ideal urbanístico original, sino por mandato genético: el estamento social es origen y fin y se ha hecho una Barcelona tal como la había pretendido la burguesía novecentista"[21]. Prueba de hasta qué punto el ahora adulado alcalde franquista había entendido cuál era su misión de garantizar una continuidad entre lo que representaba y quienes le sucederían. En unas declaraciones a *La Vanguardia* publicadas el 22 de abril de 1973 ofrecía su propia versión del "atado y bien atado" del último mensaje del Caudillo: "Hice cuanto pude y dejé las cosas preparadas para que los demás las hicieran"[22].

La deuda de los criterios de crecimiento y desarrollo de la Barcelona "democrática" respecto de los de la "franquista" es tan explícita que dio pie a polémicas como la desatada a raíz de la emisión en la televisión pública catalana, en octubre de 2004, de un documental que retomaba el formato de

uno de los mencionados números especiales de *CAU*, el dedicado al porciolismo, que se formulaba como un "abecedario". En aquel programa se hacía poco menos que una exaltación de la figura del principal alcalde franquista de la ciudad, al que se mostraba como un visionario precursor que había abierto el camino al desarrollo posterior de la capital catalana, prefigurando lo que serían las líneas principales de su evolución, al tiempo que se ocultaban los motivos que habían hecho de él uno de los personajes más odiados, y por más gente, de la historia de Barcelona: las sospechas sobre su enriquecimiento personal a costa de la ciudad, la desconsideración a cualquier cosa que obstaculizara sus recalificaciones salvajes, su desprecio hacia la provisión de equipamientos y servicios, la persecución policial contra la oposición de los vecinos, etc. Sorprendían —aunque no hubiera motivos para ello— las alabanzas que vertía sobre Porcioles Narcís Serra, el primer alcalde socialista de la ciudad, que reconocía las virtudes prospectivas de su idea de Barcelona, que él mismo, en democracia, empezaría a concretar[23].

En cambio, nada de esto debería resultar extraño si pensamos que los personajes centrales de la concepción y gestión del "modelo Barcelona" habían estado a las órdenes directas de José María de Porcioles. La mayoría de ellos ya estaban trabajando en lugares estratégicos de la Administración municipal predemocrática, en las tareas de revisión del Plan Comarcal de 1953, que se desarrollan a partir de 1963. Se trataba de altos funcionarios no franquistas cuyo papel no habría de ser marginal, sino determinante en todos los sentidos, puesto que si algo caracterizó la hegemonía del franquismo desarrollista fue la responsabilidad y la independencia asignada a los técnicos, que, en el caso de Barcelona, venía reconocida por la estratégica Carta Municipal que Porcioles se encarga de hacer aprobar en 1960. Así, Joan Anton Solans —el principal diseñador del PGM en la primera mitad de los setenta— fue concejal en el primer consistorio democrático y ocupó hasta 1980 el lugar de delegado de sus Servicios de Urbanismo. Otra personalidad clave en la reorganización territorial de la ciudad bajo la dictadura fue el ingeniero Albert Serratosa, director del PGM entre 1970 y 1975 y, posteriormente, del Plan Territorial Metropolitano de Barcelona, y presidente del Institut d'Estudis Territorials de la Generalitat de Catalunya. Los futuros

alcaldes socialistas de la ciudad, Narcís Serra y Pasqual Maragall, se incorporarán a los equipos municipales a mediados de los años sesenta y participarán en la última fase de la elaboración del PGM, en el caso del segundo, como responsable del correspondiente estudio económico y financiero.

Uno de los principales ideólogos de la Barcelona modélica, el entonces comunista Jordi Borja, se incorpora al gabinete de ordenación urbana municipal en 1968 y permanece hasta 1971 con otros críticos vinculados a la izquierda antifranquista, como Marçal Tarragó, Carles Teidixó, Alfons Bayraguer, Lluis Beau, Pau Verrié o Joaquím Lleixí. En el equipo redactor del Plan, Serratosa agrupó a especialistas vinculados a núcleos democráticos, radicales de izquierda e incluso contraculturales (Lluís Racionero), así como futuros responsables técnicos o políticos de la etapa democrática y, en algunos casos, hasta ahora mismo o hace poco: Joan Busquets, Ricard Pié, Miquel Roca i Junyent, Juli Esteban, Amador Ferrer, Jacint Ros-Hombravella, Manuel de Solà-Morales, Ole Thorson… El resultado fue que aquel Plan recibió consideraciones de apoyo en aquellos momentos y fue recurrentemente mencionado luego como la base de las transformaciones que conocería Barcelona de la mano de los ayuntamientos de izquierda que sucederían a los franquistas, en cuyo seno fue elaborado. De hecho, Oriol Bohigas lo reconocía así: "Barcelona no ha de plantear su situación urbanística partiendo de cero y anulando los precedentes de planeamiento… El PGM es, pues, nuestro punto de partida, es decir, el instrumento a corregir, a mejorar, a transformar, de acuerdo con su propia predisposición a hacerlo"[24].

Por supuesto que el protagonismo de todos estos profesionales en la organización urbanística de Barcelona bajo el porciolismo no supone que dieran por buena su naturaleza autoritaria y antidemocrática, ni siquiera que no les guiara la mejor de las intenciones, incluso la convicción de que estaban actuando a la manera de "infiltrados" del urbanismo progresista en el seno del franquismo municipal[25]. Se trata, más bien, de reconocer que la incorporación de estos y otros profesionales de izquierda al diseño de una idea de ciudad que ellos mismos se encargarían de aplicar más adelante no respondió a la candidez de un sistema político que se dejaba invadir por todo

tipo de caballos de Troya en materia de planeamiento urbano. Esa aparente anomalía —técnicos, a veces, de hasta extrema izquierda al servicio de gobiernos de extrema derecha— resulta de las fuerzas y poderes reales de los que dependía e iba a depender el futuro de Barcelona, que ya eran conscientes de qué tipo de transformaciones se adecuaban mejor a sus proyectos por incorporar competitivamente a la ciudad a los requerimientos del nuevo capitalismo global.

Hay testimonios de que José María de Porcioles era consciente de que el futuro de "su" Barcelona estaban en manos de sus supuestos enemigos políticos. Albert Serratosa, director del PGM entre 1970 y 1975, que se había ganado él mismo la reputación de comunista, narraba en una entrevista que, un día, Rodolfo Martín Villa se refirió a sus colaboradores jóvenes como los "los maoístas de Serratosa"[26]. Cuando la periodista le interrogó sobre si Porcioles estaba al corriente de esa circunstancia, Serratosa contestó: "Incluso lo fomentaba. Decía que no le gustaban los pusilánimes, ni quienes no tenían una visión amplia"[27]. De hecho, el propio PGM fue acusado por ciertos sectores de socialista o comunista, tal y como relata quien fuera su director[28]. En una situación parecida se encontraba Xavier Subias, arquitecto municipal entre 1956 y 1973, a quien también se acusaba de haberse rodeado de comunistas, "los comunistas de Subias". Relata que en una oportunidad le comentó al alcalde franquista de Barcelona que estaba preocupado por si le causaba problemas el que se dijera de él que tenía a los comunistas detrás. "¿Sabe lo que me contestó? 'No rompa con ninguno; sea amigo de todos'"[29].

En otras palabras, la actual Barcelona no es, como se pretende, genuinamente posdemocrática en su concepción y en su diseño, sino que partió de la determinación, por parte de las clases dominantes, de, como hasta entonces, continuar poniendo la ciudad a disposición de los intereses del capitalismo inmobiliario y financiero, adaptando sus actuaciones a lo que se podía anticipar que serían las nuevas formas de liberalismo internacional en materia de ciudades. Determinación en la que los posteriores gobiernos municipales nunca han cejado, aunque hayan adornado su servilismo con concesiones en materia de equipamientos y embellecimiento que, con frecuencia, han servido como mecanismos paralelos de revalorización del

suelo.

LAS ETAPAS DE LO MISMO

Por lo que hace a la evolución en sí de las políticas municipales tras la llamada transición democrática suelen reconocerse diferentes etapas. Cuatro, si atendemos a la sugerencia del arquitecto Josep Maria Montaner en 2004[30], a las que se le añadirían dos posteriores propuestas por él mismo[31]. Una primera etapa se extendería desde la restauración parlamentaria a la designación de Barcelona como capital olímpica en 1987. Se trata de un primer momento en el que el cambio político abre la perspectiva de realización de las ilusiones democraticistas que encarnaron la oposición antifranquista y los movimientos vecinales. Este ambiente se tradujo en la apertura o remodelación de parques, la generación de espacios públicos "creativos" o la siembra en el territorio de equipamientos civiles o culturales y obras de arte público. Se trata de una etapa más moralista y moralizante, de reconstrucción formal y simbólica de Barcelona, orientada por un cierto despotismo ilustrado, inaugurada con el nombramiento de Oriol Bohigas como concejal de urbanismo por Narcís Serra, en el año 1980[32], con un papel protagonista asignado a Joan Busquets y su proyecto de generación de lo que se designó como *nuevas centralidades*[33].

Pero, sobre todo, lo que caracteriza esta etapa es una preocupación central por el trabajo ideológico, es decir por el despliegue de una retórica que legitimara la supuestamente nueva situación en nombre tanto del interés colectivo como de valores universales, lo que en la práctica se tradujo, por una parte, en una labor de formación de cuadros especializados en municipalismo democrático, pero también en un papel central asignado a la labor de publicistas, diseñadores gráficos y especialistas en marketing[34]. Ello significa la aparición, por una lado, de todo tipo de manuales para la gestión de los municipios en clave democrática, y, por otro, de publicaciones que se presentan conjugando verbos como *recuperar*, *reformar*, *reconstruir*, *reencontrar*, *reinventar*… Barcelona[35]. Ese iba a ser uno de los rasgos de la nueva situación: una preocupación central por producir un sistema de

representación que era al mismo tiempo doctrinal, en torno a altos valores de civismo y ciudadanía, y de mera promoción publicitaria, consistente en la proyección hacia dentro y hacia fuera de un determinado imaginario "de prestigio", centrado en la cultura, el diseño vanguardista, la arquitectura de calidad, etc. Con ello, se corregía uno de los defectos de las políticas franquistas en materia de urbanismo: "La escasa importancia de las funciones ideológicas del Estado"[36].

Ese periodo ilusionado e ilusionante resultó alterado cuando, en 1987, se confirmó la designación de Barcelona como ciudad olímpica en octubre. Esto supuso el punto de partida para extraordinarias operaciones urbanísticas y de ingeniería que implicaron, a su vez, la entrada en escena de los grandes operadores inmobiliarios, de seguros, bancarios, de la industria hotelera y del ocio, etc., que hicieron prevalecer más descaradamente los imperativos de las dinámicas de mundialización capitalista a los que nunca dejó de estar sometida Barcelona. Se funda Procivesa, empresa municipal que tendrá un papel estratégico en la adquisición con dinero público de suelo para su posterior recolocación en el mercado libre. Se abren en Barcelona todo tipo de establecimientos de referencia internacional, cuya presencia es interpretada como galardones internacionales: Virgin, Planet Hollywood, Hard Rock, Sogo, Dive!… Estos suceden al cierre de locales emblemáticos de la edad de oro de la cultura *underground* en Barcelona, por ejemplo, el del Zeleste, en un barrio, el de la Ribera, que se convertiría en la zona de bares pijos de la ciudad. También desaparecen escenarios emblemáticos de la Barcelona popular, como los chiringuitos de la Barceloneta. Esos años, recuérdese, son los del hundimiento del comunismo en Europa, los del "fin de la historia" y el "nuevo orden mundial", fenómenos de los que las Olimpiadas de 1992 habían de ser resumen dramatizado. Ese era el momento en que Barcelona se convertía en, al mismo tiempo, un proyecto y una producción de ciudad: el "modelo Barcelona"[37].

Después vino el paréntesis inmediatamente posterior a la celebración de los Juegos Olímpicos de 1992, en el cual se produjo una pérdida de inercia como consecuencia de las deudas municipales contraídas y la necesidad de acabar proyectos inconclusos, todo ello en un marco de crisis económica generalizada. Fue lo que Oriol Bohigas adivinó que iba a ser la fase

postolímpica: "Una travesía del desierto" (*La Vanguardia*, 17 de febrero de 1993), en la que se empiezan a configurar grandes *clusters* culturales, como el del Raval, con el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) y el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), o el de la Avinguda Meridiana, junto a la Plaça de les Glòries, con el Teatre Nacional y el Auditori, con los que se confirma la política de asignar proyectos a arquitectos-estrella —Richard Meier, Rafael Moneo, Ricardo Bofill— y el de la asignación de la cultura como nueva religión de Estado, también a nivel local.

Lo que ya es imparable es el encumbramiento de Barcelona como la Meca del diseño urbano y la arquitectura, hasta el punto de que la convocatoria en la ciudad del XIX Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos (UIA), en julio de 1996, se convierte en un auténtico acto de masas…, de arquitectos. Al evento —comisariado por Ignasi de Solà-Morales y Xavier Costa— acuden casi 12.000 estudiantes y profesionales, que desbordan la organización e invaden la ciudad. Pero no fue solo eso. Barcelona era claramente un modelo de diseño urbano y arquitectura "de calidad", pero también lo era de gestión y de ideologización de las iniciativas urbanísticas. Multitud de ciudades, sobre todo latinoamericanas, recibían asesoramiento desde Barcelona acerca de cómo amparar en elevados discursos de ciudadanía y civilidad grandes dinámicas de transformación urbana destinadas, en última instancia, a la generación de plusvalías.

Otro factor nuevo a considerar, a la hora de valorar la etapa 1993-1997 como clave, es el siguiente: desde el ascenso al poder de la izquierda en el Ayuntamiento de Barcelona, se había impuesto la paz social en Barcelona, sobre todo por la ya anotada connivencia de las otrora combativas asociaciones vecinales con las nuevas autoridades municipales, principalmente a partir de la crisis de 1982, cuando el presidente de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) dimite luego de haber denunciado que la izquierda oficial había abandonado a las asociaciones y solo esperaba de ellas complicidad o sumisión[38]. En Barcelona se demostraba que esa era la ventaja de que al franquismo municipal le siguiera la victoria de las izquierdas, "que representan la movilización cívica anterior y cuyos programas democratizadores y

regeneracionistas son aceptables más o menos por los sectores empresariales. Estos necesitan unas políticas públicas que puedan crear una oferta urbana de calidad, para que invertir en la ciudad sea rentable, y, al mismo tiempo, que se den respuestas que regulen la conflictividad social en el territorio"[39]. Y fue así que, durante toda la etapa de hegemonía ecosocialcomunista en Barcelona, las luchas barriales fueron escasas y la única movilización importante que asumió la FAVB, sin haberla iniciado, no fue contra el Ayuntamiento, sino contra los abusos en el recibo del agua entre 1992 y 2002[40]. Esa larga tregua, que hace de Barcelona una ciudad en buena medida desconflictivizada, se rompe en octubre, cuando la policía irrumpe en el centro social autogestionado instalado en el edificio de lo que fue el antiguo Cine Princesa, en la Via Laietana, un episodio en que se venía a reconocer que la única oposición real a las políticas municipales estaba siendo el movimiento okupa, uno de los pocos sectores de la sociedad civil que no había sucumbido ante el espejismo de la ciudad modélica.

Según la teoría de las etapas claramente diferenciadas de las últimas décadas de políticas urbanas en Barcelona, el triunfo a nivel planetario de su imagen hizo que Barcelona no pudiera resistir la tentación de verse convertida en fuente de negocio. Nos hallamos, pues, en el paso del *modelo* Barcelona a la *marca* Barcelona, es decir, de referente de construcción ético-urbanística de una ciudad a poco más que un logotipo comercial destinado a su promoción competitiva en el mercado. Ese cambio se hace explícito con la sustitución, en septiembre de 1997, de Pasqual Maragall por Joan Clos, también socialista y también al frente de un Gobierno de coalición con ecosocialisas y comunistas. Empieza ahí una cuarta fase más pragmática y asociada de manera descarada a la nueva economía y a la renuncia, en gran parte, a un proyecto global de ciudad, aspectos no rectificados por la designación de Josep Antoni Acebillo como arquitecto jefe por el alcalde Clos. Una etapa, esta, que traiciona —se afirma[41]— las anteriores —sobre todo, la primera— y se define por la aclimatación a las dinámicas globalizadoras internacionales, con planteamientos más aleatorios, que utilizan otras escalas territoriales y hacen prevalecer la red o la malla y la acumulación de intervenciones de apariencia autónoma y sin vocación de coherencia. A las primeras dos fases, todavía impulsadas por ideas de

centralidad, estructura, congruencia, estrategia, le sucederían otras de creciente renuncia a tales principios, que desembocaban en una ciudad más bien difusa, borrosa, acentral, acontinua[42].

Esa fase se corresponde también con pequeñas y grandes movilizaciones sociales en Barcelona como consecuencia de la repercusión del movimiento altermundista, como las protestas contra la cumbre del Banco Mundial en 2001 o la de presidentes y jefes de Gobierno europeos en marzo del año siguiente, y, por supuesto, contra la guerra de Irak en 2003. A nivel vecinal, se registran conflictos que suponen una impugnación del papel de la FAVB, es decir, de las asociaciones de vecinos más institucionalizadas, como la defensa del Forat de la Vergonya o la lucha contra la destrucción de las Casas Baratas del Bon Pastor en los primeros años de la década de los 2000. Por supuesto, también se dan en ese lapso las expresiones de rechazo del macroproyecto de referencia en esa fase, el fracasado Fórum Universal de las Culturas 2004, una burda coartada para justificar una actuación urbanística, o más bien inmobiliaria, en el noroeste marítimo de la ciudad y en el entorno sur de la desembocadura del río Besòs[43].

Lo que sigue al fiasco del Fórum 2004 es un periodo en el que el poder municipal lo ocupa el mismo tándem de izquierdas gobernante en las décadas anteriores hasta 2011, liderado primero por Joan Clos y luego por Jordi Hereu, en que la ciudad se hunde todavía más en la explotación meramente mercantil de su imagen "de prestigio", en un primer momento inmersa en plena burbuja inmobiliaria y cómplice pública de sus desmanes, incluido el *mobbing*, el acoso contra inquilinos recalcitrantes que se negaban a abandonar sus hogares. Es entonces cuando se aprueban "normativas cívicas" destinadas a castigar a los pobres y hacerlo en nombre de los mismos principios éticos superiores de las "buenas prácticas ciudadanas"[44]. Se aplican medidas de "urbanismo preventivo", suprimiendo bancos públicos o gradas susceptibles de ser usadas como tales, cierre de porches, vallado de plazas. La brigada antidisturbios de la Guardia Urbana es denunciada por la brutalidad de sus métodos y en febrero se producen unos hechos que, arrancado en el desalojo de una casa okupada en el barrio de la Ribera en los que un policía municipal es herido gravemente, se desarrolla un escándalo policial del que resultan varias condenas a prisión luego de una causa llena

de irregularidades. Una de las encarceladas, Patricia Heras, se suicida aprovechando un permiso: es el caso 4F. También es entonces cuando arrecian las protestas contra el precio de la vivienda, impulsados por colectivos como V de Vivenda, uno de los gérmenes de lo que luego será la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca y, más adelante, el movimiento 15-M. Junto a esas grandes movilizaciones, el periodo se ve salpicado de pequeñas luchas, como la de los vecinos de Sant Gervasi en defensa de un azufaifo que se levantaba en el Carrer Arimon y que un plan urbanístico había decidido derribar[45].

En 2007 estalla la crisis económica y Barcelona queda a merced de la industria turística, la única que sobrevive a sus envites. En 2011 se produce un relevo en el Ayuntamiento. La coalición de socialistas, ecosocialistas y comunistas pierde las elecciones del 22 de mayo de 2011 y cede el poder CiU, otra alianza, en este caso conservadora, entre democratacristianos y liberales, que no harán sino exacerbar las políticas neoliberales en torno a la "marca Barcelona" de quienes la habían inventado, es decir, los gobiernos municipales de izquierda. Todavía más descaradamente si cabe y, por ende, sin poner la debida atención al trabajo ideológico, que quedaba ahora ya del todo convertido en mera publicidad de "se vende todo". Los barrios quedaron abandonados, como correspondería a la nula sensibilidad social de la derecha, y las operaciones urbanísticas —en plena crisis económica— quedaban limitadas a zonas pudientes o centrales de la ciudad: Passeig de Gràcia, Diagonal, Via Augusta, Balmes, Pau Casals, Josep Tarradellas, más la propuesta de reforma del Port Vell y, conectada a ella, del Paral·lel, pórtico de los muelles que reciben a los grandes cruceros turísticos que llegan al puerto de Barcelona. Es durante ese mandato conservador, a finales de mayo de 2014, que se producen los graves disturbios en el barrio de Sants, luego del desalojo del centro social de Can Vies.

Esta secuenciación por etapas que apunta a una especie de secuestro o usurpación del "auténtico" modelo Barcelona es del todo discutible. El corte entre lo que podríamos llamar "etapa Fórum" y la de la conversión de "modelo" en "marca" no fue la negación de la fase preolímpica, como se sostiene, sino su exacerbación, en tanto es, en muchos sentidos —sobre todo en los más negativos—, deudora de las que la precedieron. No podría ser de

otra manera, pensando que Josep Antoni Acebillo formaba parte del equipo de Oriol Bohigas, siempre siguiendo esta dinámica en que los personajes centrales de una fase aparecen protagonizando también la siguiente y garantizando la continuidad. La aberración del nudo viario de la Plaça de les Glòries es una buena muestra de hasta qué punto Barcelona llevaba tiempo sometiendo sus iniciativas infraestructurales al imperio del coche, y es una obra inaugurada en enero de 1992. Es posible que la subordinación a los intereses de los grandes promotores inmobiliarios haya orientado la organización final de la desembocadura del Besòs con la excusa del Fórum 2004, pero no se puede decir que la edificación de la Vila Olímpica y de la estructura viaria anexa pueda presumir de haber sido ajena a este tipo de determinantes procedentes del papel central del mercado en las decisiones urbanísticas.

También las recalificaciones sospechosas y la dimisión de las autoridades municipales a la hora de fiscalizar operaciones inmobiliarias, cuanto menos "extrañas", han sido constantes a lo largo de todas las fases en que se quiera dividir la historia de la Barcelona de las últimas tres décadas. La escandalosa recalificación de los terrenos del campo del Espanyol, por ejemplo, tiene lugar durante el mandato de Maragall, mucho antes de la generalización de este tipo de casos, con ejemplos tan significativos como la instalación de El Corte Inglés en Nou Barris, las tribulaciones del edificio de Telefónica en la Avinguda de Roma, el Plan Caufec en Les Corts, los solares de Gas Natural en el Besòs, la Sandoz en Sàrria, la Clínica Quirón en Gràcia o de la Bayer en el Eixample, entre otros. En realidad, los verdaderos rectores del urbanismo barcelonés nunca han sido los dirigentes políticos de la ciudad, sino grupos empresariales, grandes bancos y sagas familiares —incluso personas individuales— que habían venido siendo los mismos a lo largo de las últimas décadas, en algunos casos desde la etapa franquista[46].

Si se atiende a los cronistas nostálgicos de la etapa gobernada por Pasqual Maragall de las políticas urbanísticas de Barcelona, se les verá a veces empeñados en buscar lo que diferencia unas etapas de otras, sobre todo para mostrar cómo las últimas decepcionan las expectativas democraticistas y sociales de las anteriores. Se podrá llegar, siguiéndoles, a la conclusión de que la censura de los abusos inmobiliarios y las justificaciones simbólicas

que lo encubren corresponden a tendencias decepcionadas por la traición a lo que fuera una edad de oro del urbanismo barcelonés. Eso no es en absoluto cierto y parece más bien responder al despecho de "especialistas" que medraron en un determinado momento y se vieron postergados luego, lo que les lleva a criticar el abandono o incluso la traición al "auténtico modelo Barcelona" que ellos se arrogan haber concebido y gestionado. En cambio, esa primera fase aparentemente inocente fue fundamental —como veremos más adelante— para la constitución de las bases materiales e ideológicas de cuyo consenso iba a depender lo que vendría después, inviable sin una legitimación simbólica capaz de disuadir y persuadir.

Por otra parte, las políticas sistemáticas de desalojo y expulsión a nuevas y viejas periferias de vecinos "inconvenientes" a los planes de reconversión urbanística arrancan precisamente con la necesidad de las nuevas autoridades democráticas de adaptarse a los nuevos contextos definidos por el tardocapitalismo y su concepción de la ciudad. En otras palabras, que todo lo que se denunció luego en materia de acoso contra propietarios o inquilinos molestos para los nuevos planes de recalificación de barrios enteros considerados "obsoletos" ya se denunciaba en la edad de oro "progresista", tanto en forma de campañas populares como de estudios académicos o posicionamientos intelectuales. En el primer caso, recuérdese la campaña "Aquí hi ha gana" ("Aquí hay hambre"), desarrollada durante los primeros meses de 1987, o la de los vecinos de Poblenou bajo la consigna "No volem canviar de barri" ("No queremos cambiar de barrio"), contra las remodelaciones que iban a mutar los escenarios de su vida cotidiana. Las dinámicas de deterioro inducido y el vaciamiento hacia la periferia del centro histórico de Barcelona, que parecerían asociarse a las fases de decadencia y traición del "modelo Barcelona", ya estaban siendo estudiadas y denunciadas a mediados de los ochenta, antes de la designación olímpica[47].

Una vez obtenida la perspectiva de ver cumplido el "sueño olímpico", no todo fueron contribuciones al éxtasis colectivo que parecía haberse desencadenado a todos los niveles. Desde las ciencias sociales de la ciudad se emitieron críticas a lo que ya se percibía como una política de aparador que ocultaba la mercantilización de la ciudad y su conversión en un colosal mecanismo de dualización social, así como la manera en que, valiéndose de

la legitimidad que les otorgaba su naturaleza "avanzada", los ayuntamientos surgidos de las urnas asumían o reasignaban al sector privado o mixto las negociaciones encaminadas a la expropiación desventajosa de residentes mayores o en situación legal precaria en los barrios a "renovar"[48]. No cabe duda de que se han cumplido con creces las intuiciones de las pocas voces que, en el momento culminante del llamado "espíritu olímpico", supieron reconocerlo como un dispositivo puramente retórico al servicio de la terciarización y tematización de Barcelona, de su conversión en un espacio de y para el consumo y su plegamiento a los requerimientos del capital internacional: incorporación a la mundialización, nuevas periferias sociales, refuncionalización del espacio urbano en clave de mercado, reapropiación capitalista de la ciudad...[49]

Tampoco a los intelectuales más críticos o más saludablemente cínicos se les escapó de qué se trataba todo aquel montaje de las Olimpiadas. Fueron excepciones que supieron escapar al clima de consenso estupefaciente que las autoridades lograron generar en torno a sus propósitos de reconversión urbana y urbanística. Pero ahí estuvieron miradas lúcidas como la de Manuel Vázquez Montalbán o Josep María Benet i Jornet, que en no pocos de sus trabajos —incluso en forma de culebrones televisivos como *Poblenou* (1994), en el caso de este último— denunciaban el sentido último de las mutaciones de las que estaban siendo testigos. Algunos vieron la jugada enseguida, como el arquitecto Josep María Montaner, que con el tiempo, y ya como uno de los responsables del "nuevo municipalismo" de Ada Colau, acabaría invocando aquella fase como la edad de oro del urbanismo barcelonés. En un artículo publicado en octubre de 1986 en *El País*, muy poco antes de la designación oficial de Barcelona como capital olímpica, ya avisaba de que la ciudad estaba siendo puesta a los pies del capital y el mercado, lo que requería su conversión en producto comercial promocionable y consumible[50]. Desde la *Revista Tècnica*, otros profesionales ya denunciaban la arquitectura al servicio de lo que inteligentemente se definía como "capitalismo asistido", por la manera en que la Administración municipal se comprometía como diseñadora, garante y ejecutora de los intereses privados. Autores como Félix de Azúa, Sergi Pàmies o Quim Monzó no perdían oportunidad de ironizar sobre la pretensión de hacer creer que el proyecto olímpico beneficiaba a la

cultura, y no a la hostelería. Es significativo que la compilación de cuentos y relatos cortos *Barcelona, un día*, que pretendía ser un elogio literario de la ciudad, elaborado a la sombra del éxito olímpico y con el concurso de plumas de prestigio —Palol, Masoliver, Olga Guirao, Maruja Torres, Moix, Vázquez Montalbán, etc.—, sea una colección de reproches y tristezas ante lo que ya se percibe como la liquidación de una ciudad que había sido apasionada y apasionante[51].

Empezamos a conocer entonces, con el pretexto de la cita olímpica, lo que sería cada vez más un auténtico paradigma de lo que hoy se conoce como "marketing urbano", una estrategia de promoción y venta cuyo objeto no es otro que la propia ciudad[52], mercancía que requiere una adecuada combinación de teorización de las apariencias y de un vocabulario debidamente trufado de invocaciones a los valores abstractos del pensamiento políticamente correcto. Fue entonces cuando, a la sombra de una alucinación colectiva —el éxito internacional de la ciudad— y de un evento extraordinario, se produjo un aumento brutal del precio del suelo edificable, un cambio en la metamorfosis de la ciudad de la que los beneficiarios iban a ser no los ciudadanos —incapaces cada vez más de pagar una ciudad que no iba a ser ya nunca más por ello suya—, sino los bancos, las empresas constructoras, las grandes aseguradoras, las cadenas hoteleras, etc. El intento frustrado de obtener la capitalidad cultural en 2001 y Fórum de las Culturas de 2004 no hizo otra cosa que, todavía con más descaro, reproducir ese dispositivo destinado a convertir la ciudad en un *spot* publicitario y hacerlo invocando valores abstractos que entonces fueron los asociados al "espíritu olímpico" y, doce años después, a los de "la paz", "la solidaridad", "la diversidad cultural", "la sostenibilidad", etc. Lo hizo trivializando estos conceptos hasta la parodia, haciendo de ellos una mera coartada para la promoción turística y comercial de la ciudad, una capa de falso moralismo pseudoprogresista con que cubrir las nuevas macro operaciones de especulación inmobiliaria, destinadas esta vez a explotar las grandes extensiones de suelo que abrió la prolongación de la Diagonal hasta el mar y la urbanización de la desembocadura del Besòs[53].

Por otro lado, las ideas básicas en clave de marketing del Fórum 2004 no se conciben en la fase de "traición" a un modelo de ciudad que se

mercantilizaba. No es solo que el proyecto se presenta en 1996, cuando Pasqual Maragall era todavía alcalde de Barcelona, sino que culmina una de las líneas de lo que podríamos llamar la dimensión moral del "modelo Barcelona", sin duda la clave de su singularidad como producto al mismo tiempo urbanístico, político y de consumo. En los años posteriores a 1992, Barcelona podía presentarse ante el mundo como la antítesis de lo que en aquellos mismos momentos se estaba desarrollando trágicamente en la otra punta del Mediterráneo, en Bosnia y Croacia, donde corría la sangre por culpa de las fatalidades del fanatismo y el odio al distinto. La capital catalana se podía exhibir como la anti-Sarajevo, esto es, como la ciudad en que la convivencia plural podía exhibir sus mejores frutos. En ese escenario, en febrero de 1993, Pasqual Maragall anunciaba la candidatura de Barcelona como capital cultural europea para el 2001.

La iniciativa era anterior y contaba con una propuesta elaborada por Oriol Bohigas en 1991, pero el argumentario que ahora se presentaba lo hacía con una voluntad que, como ocurriera con el proyecto olímpico, presumía de romper con los lugares comunes de este tipo de citas, en este caso tomando como eje la noción de cultura. Se trataba ahora de colocarla bajo el significado que la retórica posmoderna del multiculturalismo le había dado. Se trataba pues de, en palabras del redactor del proyecto, Ferran Mascarell, "reinventar el concepto de capitalidad cultural […], contribuir desde nuestros principios culturales a rediseñar los márgenes del propio concepto de cultura y convertir a Barcelona en líder y escaparate de una cultura europea centrada en la diversidad y el mestizaje (*El País*, 19 de julio de 1994). La capitalidad cultural europea de aquel 2001 fue para Salamanca, pero aquella frustración sirvió para animar un proyecto mucho más ambicioso, pero que trabajaba idéntica pretensión de revolucionar la idea de cultura a base de pluralizarla: *culturas*. El Fórum de las Culturas estaba en marcha, basado en la promoción de Barcelona como capital de lo *multiculti*, uno de los temas estelares de la nueva corrección política.

A todo ello hemos podido ver añadirse la promoción de un concepto de ciudadanía identificado con un tono de "buen rollo" permanente, lo que contrasta frontalmente con realidades sociales duras. Una imagen podría resumir lo que ha pasado y está pasando en Barcelona en este último periodo.

En la primavera de 2004, con el trasfondo del Fórum Universal de las Culturas —341,1 millones de euros de presupuesto—, se nos mostraban las dos caras de Barcelona. Una de ellas se encarnaba en su alcalde Joan Clos, bailando la samba encima de un autobús descubierto, presidiendo un masivo pseudocarnaval por el Passeig de Gràcia, o se cogía las manos en señal de paz y amor ante la Sagrada Familia con motivo del Congreso Mundial de las Religiones. La otra Barcelona era la que veía cómo la policía irrumpía violentamente en la catedral para expulsar al millar de inmigrantes que se habían encerrado en ella para reclamar su legalización, identificando a decenas de ellos, que después recibirían las correspondientes órdenes de expulsión. Por un lado, la Barcelona que los poderosos y los sumisos sueñan, dócil y amable. Por el otro, la Barcelona cuyos mandatarios se muestran como lo que son: encubridores de la miseria; aliados o responsables directos de prácticas excluyentes y represivas; partícipes de la persecución contra los trabajadores extranjeros en situación ilegal, en cumplimiento de una ley de extranjería abominable; practicantes del acoso contra los movimientos sociales que no se prestan a colaborar; sordos y a veces brutales ante las protestas vecinales.

En julio de 2012, el Ayuntamiento conservador de Barcelona inscribe en el Registro de Patentes y Marcas la marca "Barcelona", obedeciendo a un acuerdo del pleno municipal de mayo de 2010, con un Ayuntamiento de izquierdas. Pero la concepción de Barcelona como marca es muy anterior. En abril de 1993, Pasqual Maragall afirmaba que, con las Olimpiadas del 92, Barcelona "debería aprovechar la oportunidad para hacer una ciudad competitiva", es decir "para vender el producto Barcelona"[54]. Hay testimonios de ello. Toni Puig ha sido alguien que ha acompañado prácticamente todas las fases de la evolución de la oferta Barcelona, desde el triunfo de la izquierda a finales de los años setenta, y ha relatado cómo la capital catalana fue promocionada en clave mercadotécnica desde el primer momento. ¿Cuál es el precipitado para colocar con éxito una capital en el *hit parade* de ciudades, haciendo de ella un referente de crecimiento urbano al mismo tiempo servil, ejemplar y rentable? Ideas que precedan a la gestión; un equipo para administrar la complejidad; resultados contundentes; una personalidad definida; un buen motor público; un empresariado con

responsabilidad social; un sector asociativo civil emprendedor; un buen puñado de ciudadanos significativos; un liderazgo sólido y decidido… Es con Maragall que los publicistas y los diseñadores de producto alcanzan un máximo nivel de protagonismo en Barcelona, puesto que es a ellos a quienes se confía la obtención de clientes.

Esta vindicación de la etapa supuestamente esplendorosa y auténtica del "modelo Barcelona" es precisamente la que aparece en la base del proyecto político de Barcelona en Comú. Luego de la paulatina desfiguración del "espíritu Maragall" a cargo de los gobiernos municipales socialistas de Clos y Hereu, los cuatro años de Gobierno de Xavier Trias y la derecha catalanista no hicieron sino confirmar la adjudicación de la ciudad a la depredación capitalista, con el coste social añadido de haberse desarrollado en plena crisis económica. La irrupción en escena de Ada Colau y su oferta electoral no podía encontrar mejor soporte que la evocación —o más bien invocación — de la edad de oro que presidiera Pasqual Maragall, especialmente en su primera etapa, antes de la designación de Barcelona como capital olímpica. De hecho, la "operación Colau" arrancó con la confluencia de tres líneas que de pronto descubrían intereses y objetivos compartidos. Por un lado, la de los movimientos sociales que habían protagonizado la lucha contra la especulación inmobiliaria en los años 2000 y que se van desplazando desde un sector del movimiento okupa a plataformas contra la especulación inmobiliaria, como V de Vivienda, y de ahí a la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, una de las organizaciones convocantes del 15-M. Por el otro, la de asociaciones de vecinos que, de pronto, deciden retomar el tono vindicativo que abandonaran para encastarse o pasar a depender de los gobiernos municipales de la izquierda, luego del traspaso de poderes de la burguesía franquista a la burguesía democrática, que son de hecho las mismas. Por último, la de los restos del partido comunista, el PSUC —es decir, Iniciativa per Catalunya y Esquerra Unida i Alternariva—, que había participado en los gobiernos municipales entre 1979 y 2011, contribuyendo a la planificación urbanística, pero, sobre todo, proveyendo a esta de un soporte ideológico fundamental basado en las ideas abstractas de civilidad y participación.

El concurso de ICV-EUiA fue sin duda clave, y de ahí el papel que en toda la operación jugaron instancias como el Institut de Govern i Polítiques

Públiques (IGOP), históricamente vinculado a ICV y, más en concreto, Joan Subirats, su director, así como el Observatori DESC, dirigido por, de nuevo, el principal ideólogo del "modelo Barcelona", el geógrafo y urbanista Jordi Borja. Está claro que el proyecto de Barcelona en Comú no hubiera conseguido ni siquiera constituirse y menos ganar las elecciones sin el apoyo financiero y la cesión de espacios electorales de ICV-EUiA, la opción política más endeudada en Cataluña en 2011 y cuyas pésimas perspectivas electorales en solitario le auguraban una bancarrota total. El resultado final fue una lista electoral en que se mezclaban activistas procedentes de esa nebulosa llamada "movimientos sociales", procedentes incluso de la okupación; militantes de las nuevas formaciones ciudadanistas surgidas del 15-M —Podem, Procés Constituent—, y cuadros de partidos que habían participado directamente de la conformación del "estilo Maragall", ICV y EUiA. Que la lista electoral presentada en las elecciones de 2015, que llevó a la alcaldía a Ada Colau, asumía la herencia del "modelo Barcelona" pasó a ser explícita cuando incorporó en su número 37 al responsable de su proyección internacional como paradigma a seguir de integración ciudadana en los procesos de transformación urbana: Jordi Borja. Esa asimilación fue todavía más descarada al incorporar al equipo de Gobierno vencedor a antiguos responsables municipales del Partido Socialista, como Jordi Martí como gerente, y ya descarada al pactar el mandato con el PSC y colocar a Jaume Collboni como segundo teniente de alcalde. El resultado final fue que en mayo de 2016 el Gobierno municipal estaba formado por las mismas fuerzas políticas que habían administrado la ciudad a lo largo de tres décadas, es decir, desde la llamada transición democrática.

La clave del éxito de la candidatura de Barcelona en Comú fue presentarse como alternativa al Gobierno de Xavier Trias, que había comandado la ciudad durante los últimos cuatro años (2011-2015), ocultando que la derecha conservadora no había hecho otra cosa que continuar las dinámicas de saqueo capitalista que habían aplicado a lo largo de treinta años antes los gobiernos "de izquierda" y reclamándose heredera de esa época dorada del "auténtico modelo Barcelona" que el "modelo Barcelona degenerado" y la "marca Barcelona" habían hecho malograr, puesto que el "modelo" era sobre todo un modelo moral y cívico, mientras que la "marca" implicaba una simple imagen

de promoción de la ciudad como macroproducto de consumo. Esa asunción se planteó enseguida en forma de una declaración de lealtad histórica cuando, dos meses antes de su victoria, Ada Colau proclamaba que Pasqual Maragall había sido el "mejor alcalde que había tenido Barcelona" (*El Periódico*, 23 de marzo de 2015). A partir de ahí, todo fueron halagos a quien calificaba de "visionario" y a la etapa que él presidiera, no solo por parte de la nueva alcaldesa, sino de su equipo, como cuando la teniente de alcalde de urbanismo, Janet Sanz, hacía el elogio del magnífico momento basado en el "consenso político y profesional que conoció Barcelona en la década de los ochenta y noventa" (*El País*, 20 de octubre de 2015).

Pronto, de los ditirambos verbales se pasó a las ejecuciones concretas. Así, al mismo tiempo, a principios de invierno de 2016, se hacían públicas dos iniciativas. Por un lado, se elevaban a la categoría de bien patrimonial a proteger ejemplos de la arquitecturización de espacios públicos propia de los años 1980, aquellos con los que Barcelona se ganó reputación universal por sus plazas duras —de hormigón, asfalto o granito y carentes de sombra— o por sus proyectos "de diseño", como la Plaça dels Països Catalans, de Albert Viaplana y Helio Piñón; el parque de la Creueta del Coll, de Joan Martorell, Oriol Bohigas y David Mackay, y el Moll de la Fusta, de Manuel de Solà-Morales. Por el otro, se presentaba un nuevo plan de barrios que afectaría los del Besòs-Maresme, Bon Pastor-Baró de Viver, Torre Baró, Ciutat Meridiana, Roquetes, Verneda i la Pau, Sant Genís, Zona Franca y el Raval. Aparecían como responsables Marta Grabulosa, que fue jefa de gabinete de Maragall, y Oriol Nel·lo, impulsor de la Ley de Barrios de la etapa maragallista, aquella que Josep Maria Montaner, recordemos, ahora uno de los técnicos-ideólogos de Ada Colau, había definido como ejemplo de "gentrificación homeopática"[55].

No por casualidad, el nuevo propósito de lo que se exhibía como redención territorial de los desposeídos escogía escenarios significativos para arrancar. Uno de ellos es el de los sectores de aplicación inmediata de la mencionada nueva-vieja Ley de Barrios, Bon Pastor-Baró de Viver, una actuación que se anuncia mientras continúa el proceso de liquidación del barrio de Casas Baratas y se levantan pisos para rentas medias y altas junto al centro comercial de La Maquinista, y ello a los pocos días de que Janet Sanz, la

responsable de urbanismo del Ayuntamiento, urgiera al Ministerio de Fomento para que agilizase las obras de la nueva terminal del AVE de La Sagrera e inyectara millones de euros a las obras no ferroviarias que la rodean (*El País,* 3 de noviembre de 2016). El otro es el llamado Eix Besòs, que afectará barrios como el Besòs y el Maresme y que está destinado a completar la reforma del Carrer Pere IV y su conversión en "eje cívico y patrimonial" y "polo de atracción de actividad económica social y cooperativa"[56]. Por supuesto que la puesta en marcha de las obras en la Plaça de les Glòries, ahora presidida por el edificio Disseny Hub Barcelona, de Oriol Bohigas, junto a la Torre Agbar, de Jean Nouvel, responde a la misma lógica, lo mismo que la habilitación de la *superisla*, que desertiza varias manzanas de Poblenou —y en que aparecen señalizados puntos para las asambleas vecinales como testimonio de los nuevos aires municipales. Contemplado desde una visión de satélite se aprecia que, en su conjunto, incluyendo actuaciones previstas como las de Verneda-La Pau, de lo que se trata es de una gran operación de expansión del 22@ y su conexión tanto con el entorno de la estación de La Sagrera como con la reanudación de la reforma de la zona Besòs —es decir, de la continuación del Plan de la Ribera—, también en marcha.

Pero estas evidencias prácticas no son la prueba definitiva de hasta qué punto el "nuevo municipalismo" de Ada Colau no es otra cosa que restauración maragalliana, esto es recuperación del proyecto imaginado por Pasqual Maragall. Lo que realmente distingue el "toque Maragall" es la dimensión moralizante del discurso en que se justifica, esa voluntad de, en palabras de la alcaldesa en la presentación de lo que es la reedición del Plan de Barrios (*El País*, 1 de diciembre de 2016), "distribuir justicia a los abandonados", es decir, de conceder graciosamente y desde arriba "empoderamiento" a los de abajo, todo ese lenguaje altisonante y pretencioso propio del despotismo ilustrado heredado de quienes mandaron en Barcelona acompañando a Maragall. He ahí la diferencia entre el "modelo Barcelona" y "marca Barcelona": una forma singular de capitalismo urbano, enrollado en lo cultural y paternalista en lo social, aunque acaso ahora cabría hablar más bien de maternal.

La restauración maragalliana que ha supuesto el asalto al poder municipal

de Barcelona en Comú se confirma con la repetición de una de sus virtudes en orden a acallar las luchas. Si, en los años ochenta del siglo pasado, la izquierda en el Gobierno local consiguió acallar la izquierda en las luchas, abandonando o colonizando las asociaciones de vecinos, ahora, el aparente acceso al poder municipal de activistas y teóricos del movimiento antiglobalización, de la lucha por una vivienda digna y de las acampadas indignadas ha derivado en el desmantelamiento de lo que fueron movimientos sociales, que bien podría decirse que han dejado de existir en Barcelona, o al menos de moverse. Y ello a pesar de que las injusticias que padece la ciudad son las mismas o —como veremos enseguida en el caso de los abusos inmobiliarios— han aumentado bajo el mandato de Ada Colau. A principios de 2017 solo existían movilizados contra esta situación, plataformas que, muchas de las cuales, se presentaban, literalmente, como de rescate de vecindarios en vías de extinción y espacios sociales condenados a muerte: Salvem Can 60, Salvem el Sant Pau, Salvem les Dressanes, Salvem Sants dia a dia, Salvem l'Arnau…, o como vecindarios que proclamaban que existían y querían seguir existiendo —Som Paral·lel, Som Sant Antoni…—. Esos colectivos y los surgidos en apoyo a los vendedores informales —los manteros — es lo único que queda de las luchas sociales que culminan —y fenecen— con el 15-M.

Se completa así el círculo que nos lleva de vuelta al punto de partida, que es la toma de conciencia de que era preciso incorporar Barcelona a las grandes dinámicas de rentabilización capitalista del espacio que se inician en la década de los años sesenta del siglo pasado, y hacerlo, en una última etapa, al servicio de lo que Jean-Pierre Garnier llamó el "nuevo orden local", cuya característica es su capacidad de envolver el saqueo y la miserabilización de las ciudades de melifluas invocaciones a la mística de los derechos y las oportunidades. Pero ese proceso de puesta en venta de Barcelona como macroproducto de consumo no se inició con los alcaldes de la decadencia del "modelo" (2007-2011), ni con la derecha gobernante en la ciudad entre 2011 y 2015, sino con el esplendor carismático de Pasqual Maragall, pero también con el de quien él mismo reconocía como su referente, aquel al que la dictadura entregó Barcelona, José María de Porcioles. Esa fue la fórmula mágica del "modelo Barcelona": Porcioles puso

la base, el gran proyecto de una ciudad al servicio total de su propia mercantilización; Maragall solo tuvo que añadir legitimidad política, una cierta sensibilidad socialdemócrata y sobre todo campañas de autopublicidad basadas en "valores". Cuando Ada Colau se volvía a proclamar "heredera de Maragall" (*Ara*, 8 de noviembre de 2016), se proclamaba a su vez heredera de Porcioles y su plan de modernización de la ciudad, léase de su puesta a disposición del gran mercado mundial de ciudades. La "ruptura" que representaba la llegada al poder del "nuevo municipalismo", lo que Josep Maria Montaner tituló el "postmodelo Barcelona" (*El País*, 21 de diciembre de 2016), no fue otra cosa que renovación estética y moralizante de estrategias que arrancan en una administración municipal franquista que tuvo la astucia de poner a su servicio a sus propios sucesores demócratas e izquierdistas.

LA CIUDAD PROHIBITIVA

Como en tantas otras ciudades, entre todas las problemáticas en que se concreta el modelo urbano hegemónico, incluso a nivel planetario —del que, ciertamente, la capital catalana es modelo—, la más punzante es la de la vivienda. Barcelona ha sido una ciudad sometida al dominio absoluto de planes oficiales que se han propuesto afectar a todas las parcelas de la vida ciudadana, excepto precisamente aquellas que más necesitadas estaban de planificación, como la de la vivienda. Como señalaba un manifiesto a favor de la vivienda digna hecho público en otoño de 2006, durante la dilatada etapa socialista:

> Soñar con un piso en condiciones adecuadas se ha convertido en una pesadilla para un gran número de habitantes de Barcelona. Según datos oficiales, tan solo desde finales de 1997 hasta 2008 los precios de las viviendas aumentaron más del 150 por ciento, mientras que los ingresos netos salariales en los sectores con convenio solo lo han hecho un 34,5 por ciento. El endeudamiento medio de los hogares pasó del 45 por ciento en 1990 a más del 60 por ciento en el 2004, antes de la crisis. El precio medio de los alquileres en el área metropolitana subió de 355 euros en 1999 a 617 en el 2004. Al mismo tiempo, continuaba aumentando el número de viviendas vacías: según el censo de 2001, solo en la provincia de Barcelona la cifra superaba las 300.000 y continuó creciendo con unos índices excepcionales. Fue lo que se dio en llamar "la burbuja inmobiliaria[57].

Es decir, aquellas mismas instancias administrativas que, dada su denominación de origen izquierdista, hubieran tenido la obligación de proteger a los ciudadanos de los abusos inmobiliarios aparecían directamente implicadas en las tramas de mercantilización de la vivienda y la exclusión residencial que esto comportaba para los sectores más débiles de la sociedad, como los jóvenes, la gente mayor, los inmigrantes, los pobres en general… Es más, muchos ayuntamientos como el de Barcelona descubrieron en la venta de suelo público una fuente estratégica de recursos para reinvertirlos muchas veces —y en el mejor de los casos— en políticas de autopromoción institucional y en campañas de imagen dirigidas a turistas y a inversores. Las grandes empresas dedicadas a la construcción y venta de pisos vivían entonces en uno de sus mejores momentos, favorecidos en su negocio por las buenas condiciones del mercado dinerario, pero también por el proceso paralelo que llevó a la casi desaparición de la vivienda protegida y de promoción pública, un desinterés por la rehabilitación de casas sin afán de lucro y una oferta de alquileres cada vez más escasa y más cara. Los planes de vivienda estuvieron en el tiempo de las vacas gordas orientados a favor de la promoción de nueva construcción en régimen libre y no atendieron casi en absoluto la demanda de habitación protegida o de alquiler asequible. Ninguna de las grandes iniciativas que habían definido la evolución de la forma urbana en Barcelona implicaron políticas de vivienda social accesible, ni las Olimpiadas ni el Fórum 2004. Aunque el área del Fórum es cinco veces superior a la de la Vila Olímpica, los pisos de protección social que se previeron se ubicaron en los barrios marginales de La Mina y La Catalana.

Cuando en 2005 la misma izquierda que gobernaba en Barcelona se hizo con el poder en Cataluña[58] se animaron nuevas políticas de vivienda —la nueva Ley de la Vivienda y la reforma de la Ley de Urbanismo por parte de la Generalitat—, que se concretaron en el proyecto de 10.000 pisos asequibles entre 2004 y 2007 por parte del Consorcio de la Vivienda de Barcelona, una novedad irrisoria si consideramos las dimensiones y la urgencia de la demanda. La aprobación por el Gobierno catalán de la Ley de Protección del Derecho a la Vivienda, a finales de 2006 —con su propósito de alcanzar el 15 por ciento de vivienda social en veinte años—, no podía ser más que un tímido ensayo por aliviar un problema de enorme magnitud, sobre todo

pensando en que elementos clave del control sobre la especulación —los de orden tributario, el control sobre las hipotecas, etc.— caían fuera de sus competencias. El objetivo —modesto, si se compara con los niveles de vivienda social en otros países europeos— se convertía en osado si se tenía en cuenta el punto desde el que se partía: solo menos del 1 por ciento de la vivienda disponible en Cataluña gozaba de algún tipo de protección oficial; entre 2001 y 2006 solo el 0,1 por ciento del parque construido era de índole social. Las actuaciones cargadas de buenas intenciones y en consonancia con lo que se supone que debería hacer un Gobierno nominalmente de izquierdas también deben ser matizadas[59]. La Ley del Derecho a la Vivienda o la aludida Ley de Barrios, destinada a la rehabilitación de centros y periferias depauperados, en la práctica, como se acaba de apuntar, deberían actuar como un dispositivo de gentrificación, consistente en recuperar esas zonas urbanas deterioradas, pero no para ponerlas a disposición de los sectores sociales más vulnerables y vulnerados, sino para recalificarlos en pos de su diversificación social, léase para atraer vecinos y usuarios de clase media e incluso alta. No era descartable una lectura en esa clave de los planes de intervención integral en barrios como Roquetes, Torre Baró, Ciutat Meridiana y Trinitat Vella, en Nou Barris, o en el núcleo antiguo de Poble Sec, incluidos en los planes estratégicos previstos para el año 2006 en Barcelona y que el Gobierno de Ada Colau rescataría en 2016.

La renuncia a verdaderas políticas de vivienda social por parte de la izquierda continuó con el triunfo municipal de la derecha en 2011, una situación que se agravó con el estallido de la burbuja inmobiliaria, acompañada de una avalancha de desahucios, algunos en verdad dramáticos. Resultado: en diciembre de 2016, con un Gobierno radical de izquierdas, Barcelona era la ciudad con los alquileres más caros de España, con una presión que tiende a expandirse a las ciudades circundantes. Con Barcelona en Comú es cierto que se inició una política de promoción de vivienda social y se obtuvo la cesión de pisos vacíos, pero la envergadura del problema era inmensa. Primero, por la falta de terreno para construir y, luego, por la presencia de una masa de residentes flotantes pertenecientes a una cierta clase media cosmopolita —turistas de corta o larga duración, profesionales nómadas, estudiantes erasmus o similares— que han hecho que el precio de

los alquileres se haya desorbitado. En enero de 2017, con Ada Colau en el Gobierno, se habían registrado 3.887 agentes inmobiliarios en Barcelona, mil más que en 2014. Algunos con carteras de unos pocos pisos, pero con más de una oficina, con la práctica habitual de comprar viviendas para colocarlas en el mercado de alquiler. En ese mismo momento, el precio medio de los alquileres en Barcelona era de 826 euros, con un incremento anual de 16,5 por ciento.

Por otra parte, el fin de la burbuja del tocho lo que hizo fue abrir paso a otra burbuja, la burbuja turística, que implicó la conversión de Barcelona en una suerte de inmenso no-lugar, saturado de hoteles, y una locura especuladora ahora de pisos y apartamentos a disposición de un turismo que ya lo había invadido todo. Con las Olimpiadas de 1992 el sector turístico se convirtió en una de las principales fuentes de negocio en Barcelona —el 20 por cierto de su PIB— y hoy es una de las ciudades más visitadas del mundo y el principal puerto de cruceros de Europa y del Mediterráneo. En 1990, la ciudad acogía a 1.732.902 turistas, con aproximadamente 3.800.000 pernoctaciones; en 2015, visitaban Barcelona 8.303.649 turistas, con 17.656.329 pernoctaciones[60]. Frente a un fenómeno de tales dimensiones, las políticas de Barcelona en Comú de limitación en las licencias para nuevos hoteles y las restricciones sobre los apartamentos turísticos y la persecución de los ilegales son del todo insuficiente. Se continúan levantando hoteles cuya licencia había sido aprobada con anterioridad al nuevo Gobierno y las empresas hoteleras han descubierto el truco de presentar sus propuestas como albergues juveniles o residencias de estudiantes.

Imposible cambiar el modelo turístico mientras no se abandone un modelo de ciudad empeñado en aparecer como "modelo de todo". A principios de 2017 era más difícil que nunca para los barceloneses vivir en una de las ciudades más famosas del mundo, más famosa ahora gracias a su nueva alcaldesa-modelo.

Durante los treinta y dos años ininterrumpidos de gobiernos de izquierda, entre 1979 y 2011, Barcelona fue escenario de grandes ejemplos de la alianza generalizada entre promotores inmobiliarios y gestores públicos. Las expresiones de esta cooperación —catastrófica en sus efectos sociales— fueron bien visibles: incremento de los índices de edificabilidad, aumentando la

altura autorizada en las nuevas construcciones; recalificación de terrenos, convirtiendo zonas industriales o semiindustriales, o inicialmente destinadas a equipamientos o zonas verdes, en barrios residenciales; disminución de la superficie de las viviendas; rehabilitación de barrios considerados obsoletos, con el consiguiente proceso de transformación social en forma de gentrificación, es decir, ocupación por clases altas o medias de lo que habían sido barrios populares; rehabilitación de viviendas deterioradas que las revalorizan y hacen inaccesibles para sus antiguos inquilinos, obligados como consecuencia de ello a desplazarse; actuaciones puntuales de reforma de edificios antiguos en zonas estratégicas, puestos ahora a disposición del próspero mercado de *lofts* para profesionales; mercantilización masiva de suelo público, que acababa generando zonas exclusivas y, por tanto, excluyentes; por descontado, adaptaciones normativas y actuaciones judiciales e incluso policiales que facilitaban todas estas maniobras por parte del sector privado, etc.

La concreción de todo ello la tuvimos, por ejemplo, en las ciento quince manzanas de lo que fue el Poblenou industrial inmoladas en nombre de la nueva economía: el Distrito 22@. Como consecuencia de las actuaciones remodeladoras o "higienizadoras" de barrios antiguos, los desahucios han sido una práctica sistemática que las autoridades han protegido, de la misma manera que han aplicado ellas mismas también el acoso —*mobbing* es el término que se utiliza hoy— contra los vecinos incómodos, a fin de que desalojen viviendas o barrios enteros en fase de recalificación. En un mismo día, la prensa informaba de dos récords que se habían batido simultáneamente y que daban cuenta de qué tipo de ciudad se quería que fuese Barcelona: por un lado, se informaba de la euforia que experimentaba el mercado inmobiliario de oficinas, que en 2006 había experimentado un 46 por ciento de crecimiento respecto al año anterior, con un monto de 1.626 millones de euros, con actuaciones a cargo de empresas internacionales en los centros de negocios más tradicionales —Diagonal, Passeig de Gràcia o Plaça de Catalunya, también el más reciente del Carrer Tarragona— o en las nuevas periferias reconvertidas en grandes zonas de oficinas: el 22@, a costa de Poblenou; Zona Franca, entorno de Plaça Cerdà, a la sombra de la Ciutat de la Justícia… En ese mismo día, por otro lado, el lector de prensa era

puesto al corriente de que aquel año la vivienda nueva había conocido un aumento de precio respecto al año precedente del 20 por ciento, la de segunda mano, del 17 por ciento, y la de alquiler, del 12 por ciento, haciéndola todavía más inaccesible para los sectores de población con las rentas más bajas (*El País*, 16 de enero de 2007).

El proceso continuaba siendo el mismo. De pronto, alguien, en algún sitio, decidía algo que cambiará la forma y la vida de un barrio. Primero se lo declaraba "obsoleto", luego se redactaba un plan perfecto, se elaboraban unos planos llenos de curvas y rectas, se hacía todo ello público de manera atractiva —dibujitos y maquetas— y se prometía una existencia mejor a los seres humanos cuya vida iba a ser, como el lugar, remodelada. A continuación, se proponían ofertas de realojamiento —que siempre perjudicaban a quienes no podrían asumir las nuevas condiciones que indirectamente se les imponían—, se encauzaban dinámicas de participación —orientadas, de hecho, a dividir a los vecinos afectados— y, después, se continuaba sometiendo a ese pedazo de ciudad a un abandono que ya la venía deteriorando, para disuadir a las víctimas-beneficiarios de la transformación de su urgencia e inevitabilidad. Luego no era extraña la aplicación de formas de *mobbing* institucional, una técnica de acoso y derribo —y nunca mejor dicho— consistente en hacerle la vida imposible a los vecinos que se niegan a abandonar casas condenadas por los planes urbanísticos e inmobiliarios, en someterles a una presión que los obligue a abandonar su resistencia y dejar el paso libre a los planes de "refuncionalización" de sus barrios. Ni que decir tiene que de todo ello poca cosa aparecía en los medios de comunicación, para los que el hostigamiento contra inquilinos inconvenientes o díscolos era una conducta perversa de empresas sin escrúpulos y nunca lo que tantas veces resulta ser: una práctica seguida por la propia Administración y aplicada por sus funcionarios, muchas veces con la ley en la mano.

Ese fue el caso de las Casas Baratas del Bon Pastor. En enero de 2006 se iniciaba la primera fase del derribo de las 783 viviendas de una planta edificadas en la década de los años veinte para albergar a barraquistas e inmigrantes, testimonio de las épocas cada vez más lejanas en que la vivienda social era una preocupación para las autoridades municipales, un asunto para el que se procuraban soluciones que, por precarias que fueran, eran al fin y al

cabo soluciones. Los interiores eran pequeños, pero no menos que lo que hoy se propone como "nuevas soluciones habitacionales". Con el tiempo, muchas familias habían adecentado sus casas hasta hacer de ellas un espacio notablemente más amable que el de los bloques de pisos que los rodean. Además de ser un valioso ejemplo de un determinado urbanismo —adaptación humilde de la tipología de la ciudad-jardín—, el barrio era un colosal monumento viviente a décadas de cultura popular urbana, en un escenario que se había demostrado propicio tanto para el encuentro cotidiano, como para los momentos álgidos de la fiesta y de la lucha. Un vistazo a su ubicación en el mapa de la ciudad y un paseo por el entorno desvelan inmediatamente las claves de tanta urgencia por borrar del mapa las Casas Baratas del Bon Pastor: está a un paso de la nueva centralidad que se proyecta para la Sagrera, con la gran terminal del AVE, el espectacular edificio encargado a Frank Gehry y ese nuevo barrio que seguro que no será para el mismo tipo de humanidad que vivía y había luchado allí a lo largo de lustros. Se entiende por qué no se planteó la posibilidad de rehabilitar todas o parte de las viviendas ahora sentenciadas, lo que hubiera permitido que los vecinos pudieran elegir entre quedarse en ellas o no: suculentas hectáreas de suelo de propiedad municipal que pronto valdrían infinitamente más de lo que va a costar su remodelación. Terreno liberado para el mundo que se avecinaba en el que ya no habría vecinos, sino clientes, y en el que las nuevas clases medias que un día fueron progresistas podrán presumir de haberse comprado su magnífico piso en un "barrio popular"[61].

Dinámicas parecidas afectan a un barrio tras otro, en una especie de efecto dominó que, invocando las palabras mágicas de "rehabilitación" o "reforma", transforma barrios obreros en zonas residenciales para clases medias y altas. En la primavera de 2007 le tocaba el turno a barriadas cuya ubicación las hacía codiciables para el negocio especulativo, lo que automáticamente implicaba la consabida operación de reconversión, supuestamente en nombre del interés de unos vecinos condenados, en muchos casos, a dejar de serlo como consecuencia paradójica de la mejora de sus viviendas. Es el caso de la Barceloneta, el que había sido el barrio pescador de la ciudad, en una primera línea de playa que las promotoras habían convertido en su próximo objetivo a poseer. Focivesa —la empresa mixta responsable del desguace de

la parte vieja de la ciudad— anunciaba en febrero un "plan de regulación de la edificación tradicional" que preveía la destrucción de más de mil viviendas con la excusa de la instalación de ascensores. Como mínimo, un 20 por ciento de los afectados no podría recuperar sus casas y tendría que ser realojado fuera del barrio. Muchos propietarios estaban abocados a no poder hacer frente al coste de las obras y no pocos arrendatarios se verían incapaces de hacer frente al aumento del precio en los alquileres que se iba a producir. Hoy, la Barceloneta es un barrio sometido a la turistificación masiva, lo que motivó movilizaciones vecinales en los veranos de 2014 y 2016 contra los en torno a 900 pisos turísticos ilegales que se calculaba que hacían imposible la vida ordinaria de los vecinos. Con una diferencia entre esos dos momentos: la moderación sobrevenida de unos líderes vecinales que pasaron de encabezar las manifestaciones a incorporarse a lugares clave del Gobierno municipal después del triunfo electoral de Ada Colau en 2015.

Barrios antiguos de la parte alta de la ciudad —La Salut, el Coll— también se veían en el punto de mira de operaciones destinadas a capitalizar las magníficas vistas que desde allí se disfrutan y que se supone que las clases populares asentadas no acababan de merecer. Vallcarca quedará irreconocible después de las transformaciones que destruirán buena parte de lo que fue el tejido social, industrial y sentimental del barrio y lo convertirán en un paisaje bombardeado. Todo al servicio de los nuevos clientes de la ciudad-negocio, que no podrá ser la gente trabajadora o la menestralía pequeño-burguesa que habían sido su carne y su alma, sino los profesionales y técnicos, los "nuevos señores" de la sociedad catalana[62]. El objetivo era, además, "adecentar" los accesos al Parc Güell, evitando a los turistas un "desagradable" recorrido por un barrio popular, generando un amplio paseo que uniría la Plaça Lesseps con la falda de Collserola, a costa de la destrucción del Carrer Bolívar. La crisis económica obligó a suspender el proceso, que quedó estancado durante varios años y con una amplia extensión del barrio conformada por solares como consecuencia de los derribos. Las nuevas perspectivas económicas permitieron en 2014 reabrir el proceso de transformación —léase de destrucción— del barrio, para hacer crecer hacia la montaña la mancha ya gentrificada de Gràcia, ese barrio en una de cuyas paredes podía leerse a principios de 2007 una pintada que decía: "Si usas

gafas de pasta y te dedicas al diseño de interiores, este es tu barrio; antes era el mío"[63].

Ya se ha mencionado el Plan de la Ribera, aprobado por el Ayuntamiento de Barcelona en 1969, que implicaba adecuar seis kilómetros del litoral barcelonés, entre la Barceloneta y la desembocadura del Besòs, terciarizando grandes lotes de terreno industrial o ferroviario y expulsando tanto a vecinos de Poblenou —sobre todo de la barriada del Taulat— como de los barrios de barracas que ocupaban las playas, un proceso que de hecho ya se había iniciado con la destrucción del Somorrostro y la apertura del Passeig Martínim entre 1959 y 1969. Dada su desconsideración hacia los intereses vecinales y su naturaleza abiertamente especulativa, fue objeto de una fuerte oposición vecinal y de la descalificación de arquitectos y urbanistas[64]. Estos dos factores, más el inicio de la crisis económica de principios de los setenta, hizo que se desistiera del proyecto, aunque al poco fueron las nuevas autoridades democráticamente elegidas las que, con motivo del "desafío olímpico", lo retomaron. Entonces, a mediados de los años ochenta, se trató del derribo de los Baños San Miguel, los últimos que quedaban luego de que las excavadoras acabaran con los de Astilleros y San Sebastián, además de con los tinglados del puerto y los entrañables chiringuitos de la Barceloneta. Luego vino la Vila Olímpica, la apertura de las playas de Poblenou, gracias al soterramiento de la línea de ferrocarril y la destrucción del barrio de Icària, la puesta en funcionamiento de la Ronda Litoral; después, con la coartada del Fórum de las Culturas, Diagonal Mar y el proyecto de la Nova Mina, con lo que se completaba toda la franja litoral prevista por el Plan de la Ribera, que implicaba liberar todo el sector a la industria hotelera y a la oferta de vivienda en clave de exclusividad. La inauguración en septiembre de 2009 del Hotel W Barcelona, el llamado "Hotel Vela", fue el colofón de ese proceso, que ni siquiera se tomaba en serio la Ley de Costas y destruía uno de los lugares más entrañables y populares del rompeolas barcelonés.

Ese proceso de remodelación de la costa barcelonesa ha continuado hasta el momento actual, insistiendo en sus objetivos de hacerla apetecible para los operadores turísticos, hoteleros e inmobiliarios. Se concreta, hoy, en la turistización total de la Barceloneta y el proyecto de reforma del Port Vell de Barcelona[65]; la depauperación del barrio del Besòs-Sur en Barcelona, para

dejarlo listo para su transformación en clave mercantil[66]; la invención del 22@ como distrito empresarial, a costa del Poblenou[67]…, aunque con el obstáculo de la imposibilidad por el momento de destruir de una vez por todas La Mina[68], y el fracaso de la utopía arquitectónica de la Vila Olímpica[69]. De ahí que Josep Maria Montaner se refiriese a esa perspectiva titulándola "Besòs: tierra prometida"[70]. Ese objetivo, el de convertir lo que fue periferia en "nueva centralidad", se ha mantenido hasta ahora y ha sido recuperado con los ayuntamientos de signo supuestamente radical surgidos de las elecciones de marzo de 2015. Así, en febrero de 2016, los alcaldes de las poblaciones del eje Besòs —Barcelona, Badalona, Santa Coloma, Montada i Reixac y Sant Adrià— sellaban una alianza en pos de la conversión de la zona en "una nueva centralidad metropolitana"[71].

Cuando se habla o se escribe desde la política, el urbanismo o la arquitectura de las grandes transformaciones urbanas, no se habla de sus consecuencias sociales nunca. Los análisis y los balances aparecen repletos de planos y estadísticas, pero en ningún caso los encargados de realizarlos se preguntan qué pasa cuando las excavadoras ya han acabado su trabajo, a dónde va a parar la gente que allí vivía, que será de sus vidas. Raras veces reconocen que *reformar* quiere decir siempre *expulsar*, y que *rehabilitar* un barrio suele implicar inhabilitar a quienes allí vivían. Eso ocurrió en, por ejemplo, la Colonia Castells, una barriada de casas de una planta levantadas como vivienda obrera a finales de los años veinte del siglo pasado, que fueron condenadas a muerte porque no se les perdonaba su insolente ubicación en Les Corts, demasiado cerca además de Pedralbes Center, el centro comercial de los barrios ricos de Barcelona[72]. En abril de 2016, el Ayuntamiento y los vecinos acordaban los dos últimos tramos de la liquidación de lo que había sido un ejemplo de la vida obrera barcelonesa.

LO VIEJO Y LO NUEVO

Una cosa ha sido ese universo ideal de planes y de planos en que han vivido imbuidas las autoridades políticas en Barcelona y sus técnicos y otra muy distinta el empecinamiento de las realidades sociales a ser lo que siempre

han sido: desigualdad, conflicto, fealdad, pero también luchas, pasiones, formas incontroladas e incontrolables de solidaridad y de belleza. En cualquier caso, parece claro que la magnificencia y la osadía formal de los nuevos órdenes visuales ven constantemente delatada su superficialidad y cómo se frustra su vocación de ser escenario teatral de amables dramaturgias urbanas al servicio de los grandes valores de la humanidad.

Las pomposas declaraciones programáticas de las autoridades o las elaboraciones teóricas de los arquitectos y urbanistas-ideólogos se han visto una y otra vez desmentidas por las prácticas reales. Así, las invocaciones a favor de la sostenibilidad y la calidad ambiental contrastan con iniciativas destructoras. Iniciativas como Diagonal Mar o 22@ podrían ser cualquier cosa menos ejemplos de sensibilidad ecológica, hechos como estaban de concesiones al consumismo compulsivo de masas, al despilfarro de energías no renovables o a los intereses de grandes multinacionales tecnológicas y financieras abundantemente denunciadas como cómplices o responsables del deterioro del medio ambiente —cuando no de la paz— a nivel planetario. Por no hablar de la privatización —léase la destrucción— de buena parte de los pulmones de la ciudad, los parques de Collserola y de Montjuïc, víctimas de todo tipo de agresiones urbanísticas. En esa misma línea de traición a los valores ecológicos esgrimidos oficialmente, y también a lo que se presenta como una constante apuesta a favor de la ciudad compacta, hemos visto —también en Barcelona, como en tantos otros sitios— prodigarse topologías urbanísticas dispersas, desordenadas y de baja densidad, constituidas en casas adosadas o en bloques aislados y con frecuencia cerrados sobre sí mismos. Esto, como consecuencia de que no solo se ha expulsado al sector secundario de la ciudad, sino que también se ha obligado o animado a una parte importante de la población a exiliarse a la periferia[73]. En unos casos, porque los precios han hecho imposible a las parejas jóvenes acceder a una vivienda en la propia ciudad; en otros, porque las clases medias y altas se han sentido atraídas por un estilo de vida inspirado al mismo tiempo en la utopía pequeño-burguesa del "retorno a la naturaleza" —cuya expresión local sería el mito romántico de *"la caseta i l'hortet"*—, pero también por los referentes impuestos desde la hegemonía cultural norteamericana en materia de urbanización. Esa doble dinámica ha llevado a un crecimiento

descontrolado y a un despilfarro de recursos en las poblaciones del cinturón de Barcelona —Sant Cugat, Cerdanyola, Esplugues…—, generándose un inmenso suburbio incompatible con los ideales de sostenibilidad promovidos oficialmente porque supone la depredación masiva de territorio y el aumento no menos masivo de los desplazamientos, tanto para trabajar como para acceder a cualquier servicio o práctica de aprovisionamiento.

En la Plaça de les Glòries, en los alrededores de la emblemática Torre Agbar, diseñada por Nouvel, se esperaba tan solo la presencia de una disciplinada multitud de consumidores que acudían a la zona comercial próxima. En cambio, allí mismo, en el centro ajardinado del nudo viario y en el cercano Bosquet dels Encants, se desplegaba una especie de continuación espontánea y aparentemente incontrolada de els Encants Vells —el mercado de las pulgas tradicional en Barcelona—, y cada mañana se reunían centenares de inmigrantes sin trabajo, de vagabundos y de otros miserables que compraban y vendían en un enorme bazar surgido espontáneamente, donde se podía encontrar todo tipo de objetos recogidos de los contenedores de basuras. De vez en cuando, la Guardia Urbana los desalojaba de malas maneras, pero siempre volvían, hasta que el Ayuntamiento cerró definitivamente estos espacios, sin que ello pudiera impedir que el mercado espontáneo de objetos recogidos de la basura reapareciera en otros lugares. Esa dinámica se reprodujo cuando, en 2013, se inauguró la nueva construcción que albergaría els Encants Vells, un espléndido trabajo de Fermín Vázquez, ahora con el papel de completar la ampliación por Glòries del 22@ y su conexión con el clúster cultural de la Avinguda Meridiana —Teatre Nacional, Auditori—. La magnificencia de los volúmenes de autor y la ambición del horizonte urbanístico no pudieron impedir que los menesterosos volvieran a extender sus puestos de venta de basura. Todas estas verdades sórdidas e injustas no existen oficialmente, no aparecen en las guías turísticas, pero tampoco en las revistas de arquitectura en las que, con magníficas ilustraciones fotográficas, Barcelona es exhibida ante los profesionales de la ciudad como un ejemplo de transformación urbanística, ni se mencionan en los lujosos libros que edita el Ayuntamiento para alardear de sus iniciativas.

Políticas urbanísticas poco o nada guiadas por el bien común también se

podrían encontrar en la base de la aparición de lo que de forma mediática es mostrado como "guetos", es decir, zonas donde la inmigración más falta de recursos económicos y sociales se concentra forzosamente, provocando todo tipo de dificultades tanto para los que llegan como para los que ya residían. Hay excelentes trabajos recientes sobre cómo se concretan estas problemáticas de establecimiento de miles de extranjeros atraídos por las demandas del mercado laboral de mano de obra barata y cómo se están desarrollando procesos de reorganización de la sociedad como consecuencia de los nuevos flujos migratorios[74]. En efecto, la textura humana de los barrios populares de Barcelona está en pleno proceso de transformación como consecuencia de la inyección de vitalidad que recibe de las nuevas dinámicas demográficas, en un marco hecho de luchas individuales y colectivas, de especulación inmobiliaria, de vigilancias políticas y sociales, de procesos de inferiorización de capas enteras de la sociedad, de retorno de formas de explotación que se habían presumido superadas. Los nuevos asentamientos humanos provocan configuraciones sociales que son al mismo tiempo viejas y nuevas, que es verdad que cambian los barrios, pero que cambian barrios que no habían hecho otra cosa que cambiar como consecuencia de la inmigración desde hacía más de un siglo. Irrumpe en escena una dinámica intrincada de superposiciones, mixturas, encuentros y topetazos, que constituye la interculturalidad real, no la que imagina el discurso oficial sobre la "diversidad cultural" y sus bondades éticas abstractas, es decir, no en el sentido trivial que han popularizado los políticos y los medios de comunicación, sino como una madeja de definiciones y redefiniciones, de conjunciones y disyunciones, de dobles lenguajes y de malentendidos. En cada barrio, en cada calle, en cada escalera de vecinos, un nudo que no se puede deshacer, en el que se mezclan inercia cultural, estereotipos, astucias, construcciones ideológicas, intereses, proyectos vitales…, precipitado de que el juego de las identidades es el resultado, no la causa, como a menudo se cree y se proclama.

Los llamados inmigrantes sufren las consecuencias de lógicas sociales —vinculadas, en este caso, a la gestión pública y privada del suelo— de las que las víctimas son también, como hemos visto, los jóvenes, la gente mayor y los sectores más desfavorecidos de la misma población autóctona. Es un efecto

óptico, deliberadamente destacado desde el imaginario social y político dominante, el que pretende hacer creer que son los recién llegados más pobres los causantes de los mismos problemas de los que son víctimas. Los trabajadores extranjeros y sus familias, en efecto, tienen que sufrir las condiciones negativas de una realidad territorial de la que son sistemáticamente mostrados como factor desencadenante, como si fueran acusados de haber provocado, con su presencia, un deterioro de ciertos barrios que, en realidad, ya estaban deteriorados o en vías de abandono, es decir, que no se devaluaban porque esos nuevos vecinos hubieran llegado, sino a los que ellos habían llegado porque ya se habían devaluado, aunque fuera provisionalmente y a las puertas de su reconversión en zonas residenciales de nivel más alto. Los inmigrantes se ven abocados a hacinarse en viviendas de mala calidad, cuando no —y como veremos— a practicar formas difusas de un nuevo barraquismo invisible, que está generando en Barcelona un comercio de realquiler de camas, balcones, cobertizos, patios interiores…

El cierre masivo de la mayoría de las viejas pensiones agudizó todavía más la situación de desamparo de los recién llegados y de los más humildes en general. El alquiler de viviendas degradadas, en zonas a menudo también deterioradas, sirve, a su vez, como fuente de ingresos para pequeños dueños de pisos —a menudo también empobrecidos— que rentabilizan sus propiedades cediéndolas —no pocas veces, en condiciones abusivas— a demandantes fragilizados por la inseguridad laboral y jurídica y por el rechazo social cotidiano. Los inquilinos también se ocupan de racionalizar su situación y lo hacen maximizando el aprovechamiento de las casas en mal estado que consiguen alquilar por medio del hacinamiento y de sistemas de gestión comunitarista de cada unidad residencial. Esta dinámica de ocupación del espacio habitable casi siempre se produce sobre la base de la relación directa con los arrendatarios, que de hecho detentan el monopolio de este mercado —el único al que los inmigrantes tienen acceso—, sin que las agencias inmobiliarias, las entidades financieras y los gobiernos locales intervengan. También, a menudo, esta situación es la antesala de intervenciones de reordenación del territorio destinadas a la conversión de centros antiguos en parques temáticos donde se escenifica una pseudoverdad

histórica o cultural o en escenarios para la gentrificación, es decir, de asentamiento de clases medias en busca de un reencuentro con la "vida de barrio", al que se le han añadido unas dosis controladas y controlables de "multiculturalismo" como el nuevo sabor local que ha de atraer a clientes de vivienda nueva o reformada en barrios antiguos.

La manera en que se hizo frente a la nueva situación demográfica en Barcelona y al asentamiento de los nuevos vecinos provenientes de la migración encuentra una excelente ilustración en la reforma de Ciutat Vella, un caso especialmente escandaloso e hiriente. Al cobijo de los llamados planes especiales de reforma interior, se inició, a partir de mediados de los ochenta, una serie de actuaciones que se presentaron como *esponjadoras*, *revitalizadoras*, *renovadoras*, etc., de zonas consideradas víctimas de la degradación social y urbana del núcleo antiguo de Barcelona. La premisa ideológica era, pues, una vez más, que un buen plan urbanístico lo arregla todo, porque nada puede resistirse a una planificación adecuada y creativa. De nuevo, ordenar la ciudad aspiraba a ser equivalente a disciplinar la sociedad que la habitaba, someterla a un orden de jerarquías que se querría ver trasladado al espacio físico real. Como antes, a lo largo de la historia del urbanismo se esperaba que la aplicación de criterios ordenadores claros fuera capaz, por sí sola, de resolver problemas sociales e infraestructurales profundos, no por la vía de un cambio en estructuras sociales brutalmente asimétricas, sino por el de una redefinición de los lugares y de su organización.

Fue a partir de esa confianza ciega en el poder demiúrgico del proyecto con el objetivo de pacificar territorios crónicamente turbulentos cuando se empezaron a ejecutar iniciativas que recuperaban el espíritu "higienizador" de las grandes reformas urbanísticas del XIX, "destrucciones creadoras" de centros urbanos cuyo modelo siempre sería el del barón Haussmann en París. Recuérdese que la concreción de esa voluntad de "saneamiento y reforma" de cascos históricos considerados demasiado tupidos se inició en Barcelona con la apertura de plazas que, a diferencia de lo que había ocurrido con el urbanismo del Antiguo Régimen, que se había limitado a actuar solo en los contornos de la ciudad, apuntando expansiones futuras —el caso de la Plaça Palau, por ejemplo—, se atrevía a intervenir en pleno corazón de la ciudad

antigua, con el fin de modificar radicalmente su forma y su función. Se trató entonces de la apertura de plazas que no solo despejaban la enmarañada trama medieval, sino que se constituían en vacíos a través de los cuales se abría paso —en un sentido casi literal— el nuevo poder burgués: la propia Plaça Sant Jaume en 1840; más tarde, las de Medinaceli, la Reial o el Portal de la Pau, al final de las Ramblas. Luego vinieron el Plan Baixeras de 1889 y el Plan Jaussely de 1903, el resultado de los cuales fue la apertura de la Via Laietana en 1913, con la consecuente destrucción de una parte importante del centro antiguo de la ciudad y la invención del Barri Gòtic, un barrio en el que prácticamente no hay nada verdaderamente gótico[75]. El Pla Macià, el proyecto racionalista auspiciado durante la República, no dejó nunca de acariciar el sueño de un rescate urbanístico del casco viejo barcelonés, pretensión de la que el franquismo maduro fue heredero. La ya mencionada apertura de la avenida García Morato —hoy Dressanes— o de la Avinguda de la Catedral bajo el mandato de Porcioles, encarnarían esa obsesión por la "reforma interior" y serían el nexo que la conectara con las macroactuaciones desoladoras que vendrían a partir de la década de los noventa[76].

Bajo el paraguas de esta voluntad redentora del espacio urbano, e incluso inspirándose en propuestas "progresistas" planteadas todavía bajo el franquismo, empezaron a llevarse a cabo derribos y expropiaciones destinadas a generar nuevos espacios edificados que, con frecuencia, acabaron siendo destinados al asentamiento de clases medias deseosas de sumergirse en un barrio tradicional y ahora hasta multicultural, convenientemente desinfectado de conflictos. Las víctimas: los sectores más vulnerables de la población, sobre todo los ancianos, en barrios con casi un 40 por ciento de las viviendas habitadas por una sola persona mayor. El resultado: una infinidad de pequeñas tragedias individuales o familiares que afectaron a personas que no pudieron incorporarse a los "nuevos tiempos" para la zona[77]. Empresas mixtas como Procivesa —Promoció Ciutat Vella, S. A.— y después Focivesa —Foment de Ciutat Vella, S. A.— fueron demostrando las virtudes fatales de la ya mencionada combinación de sector público y sector privado[78]: el público, para comprar suelo y propiedades a precios públicos; el privado, para venderlos a precios privados —es decir, de mercado— y producir grandes plusvalías; el público, para imponer mandatos

gubernamentales inapelables y contar con empleados para ejecutarlos de forma imperativa, si fuera preciso, por la vía jurídica o policial; el privado, para ir en pos del beneficio económico a toda costa, invirtiendo para ello tantos métodos opacos como sea preciso. Empresas pequeñas y medias se consagraron a comprar a pequeños propietarios de edificios —"se compran fincas con inquilinos", se podía leer asiduamente en los anuncios por palabras de la prensa—, que después revendían con grandes beneficios, no sin haberse "deshecho" de sus habitantes por las buenas —con contraprestaciones ridículas— o por las malas, es decir, recurriendo a la coacción y a todo tipo de tretas legales e ilegales.

Por supuesto que las rehabilitaciones no se destinaron a realojar a vecinos expulsados, sino a generar ofertas de *lofts* y viviendas caras que asegurasen la "renovación" del vecindario, es decir, la gentrificación. Antiguas instalaciones se convirtieron en aparcamientos o instalaciones culturales "de prestigio" —facultades universitarias, centros de arte y cultura, etc.—, en locales de ocio de ambiente moderno o bien simplemente en espacios públicos "de calidad" cuyo destino era aclarar la trama urbana de Ciutat Vella y facilitar su reconversión urbanística. Las reformas afectaron especialmente a barrios como el Raval, Sant Pere, la Ribera o Santa Caterina, que fueron objeto de una destrucción sistemática, generando paisajes que podrían recordar perfectamente a los provocados por los bombardeos que sufrió Barcelona durante la guerra civil[79]. En una palabra, actuaciones sin la más mínima consideración por el contexto histórico, social y morfológico que las rodeaba y a las que, en definitiva, se venía a declarar implícitamente la guerra.

En el caso de lo que había sido llamado piadosamente Distrito V, el barrio canalla por excelencia de Barcelona, la apertura de la Rambla del Raval —estrenada en septiembre de 2000— implicó una especie de hachazo que abría en canal la forma urbana —12.000 metros cuadrados, 50 edificaciones antiguas derruidas, 5.000 vecinos expulsados—, incorporando de una manera traumática un bulevar frío, flanqueado por edificios sin personalidad, más propios de la periferia que del centro histórico que se pretendía enaltecer, llenándolo de los elementos que estaban caracterizando todas las otras actuaciones en la ciudad, en la línea de las inevitables plazas duras, esa "marca de la casa" del diseño urbano. El proceso, en democracia, lo había

iniciado la demolición de la Illa Sant Ramon en febrero de 1988, a partir de la cual una amplísima zona de lo que fuera el mítico Barrio Chino estaba siendo liquidada de una manera expeditiva. La correspondiente campaña mediática y publicitaria acompañó la voluntad oficial para justificar políticas urbanísticas presentadas como higienizadoras de una zona postrada, miserable y conflictiva, que era mostrada como clamando por ser salvada de una vez por todas de la pobreza y de la delincuencia que la habían colonizado desde siempre[80]. El énfasis mediático en los aspectos más negativos del barrio —delincuencia, marginación, prostitución, tráfico de drogas, etc.— venía a demostrar el principio que hace del riesgo un agente urbano de primer orden. Es decir, la rehabilitación del barrio no debía ser tan solo formal, debía ser, sobre todo, moral. El enemigo a batir no era solo la pobreza y la marginación, era el mismo Diablo. Los signos inequívocos de su presencia convertían el esponjamiento, el relevo en el tipo de vecindario, la distribución de templos levantados en honor a la Cultura y la apertura de espacios vigilables en una gran ceremonia exorcizadora de aquellas energías malignas que habían poseído el barrio y que conformaban lo que Gary McDonogh definía como una auténtica "geografía del Mal"[81]. Ahora se esperaba que, gracias a los turistas y a las clases medias ávidas de "vida de barrio" y de ambiente multicultural, la zona quedara libre de la maldición que le había afectado a lo largo de décadas, aunque con el tiempo llegaría la decepción de los nuevos vecinos, que en lugar del bazar multiétnico y ligeramente golfo que esperaban, se encontraban la miseria de lo que despectivamente llamaban Ravalistán y se atrevían a colgar de sus balcones pancartas con el lema "*Volem un barri digne*" —"Queremos un barrio digno"—, como si aquel no hubiera sido siempre un barrio digno[82].

Justo en uno de los flancos de la Rambla del Raval fueron demolidos 50 edificios con 450 viviendas y 90 locales comerciales. En su lugar, se abrió un enorme solar conocido como la Illa Robadors, destinado a un proyecto diseñado por el equipo de arquitectos MBM —Martorell, Bohigas, Mackay—, que incluía 120 viviendas para las cooperativas sindicales de CC OO y UGT, un centro comercial, un aparcamiento subterráneo, un hotel de cuatro estrellas y la inevitable instalación cultural redentora, en este caso, la Filmoteca Nacional[83]. La operación implicó el desplazamiento de cientos de

familias que recibieron —como siempre en estos casos— compensaciones económicas injustas y tuvieron que reinstalarse fuera de la ciudad o como inquilinos en otras fincas de barrios en condiciones a veces mucho peores de las que habían disfrutado. El hotel, diseñado por Pere Puig, era ya de por sí toda una metáfora de la voluntad de redimir al barrio de su pasado y de su presente: 38 metros de altura, planta elíptica y una fachada de cristal que se encenderá de noche. Fue presentado como "una lámpara que iluminará el Raval" (*La Vanguardia,* 8 de marzo de 2002)[84].

Y ya que se ha aludido al indispensable "ingrediente" artístico-cultural que era la Filmoteca en la remodelación redentora del antiguo Barrio Chino, en casi todas las ciudades los grandes procesos de transformación urbana se llevan a cabo hoy, casi sin excepción, acompañados de actuaciones que invocan los principios abstractos del arte, la cultura, la belleza, el saber, etc., valores en los que las políticas de promoción urbana y competencia entre ciudades encuentran un valor refugio con que dotar de singularidad funcional y prestigiar lo que en la práctica son estrategias de tematización y espectacularización, además de constituirse en fuente de legitimación simbólica de las instituciones políticas ante la propia ciudadanía. En Barcelona, la construcción a mediados de los noventa del MACBA en uno de los inmensos solares abiertos en el barrio, la reconversión de antiguos edificios religiosos para instalar en ellos el FAD, el Centre d'Art Santa Mònica, diversos campus universitarios y el CCCB no pueden separarse de la traumática reconversión del Raval en nueva zona residencial y destino turístico. Lo mismo valdría para la otra zona de Ciutat Vella, el entorno de la basílica de Santa María del Mar, el Born —convertido ahora en un santuario del nacionalismo catalán— y el Museo Picasso, que, previa expulsión de los vecinos más incómodos —inmigrantes, pobres, viejos, jóvenes sin recursos… —, se ha convertido ya en un sector monopolizado por la oferta de *lofts* para profesionales, tiendas de moda y restaurantes y bares destinados a turistas y gente "de nivel"[85].

Con el tiempo, la mancha gentrificadora ha escapado de las murallas simbólicas que rodean Ciutat Vella y ahora se expande más allá de lo que indica el perímetro de una de ellas: la Ronda Sant Pau. Atravesándola desde el Carrer de la Cera, lo que fue el asentamiento gitano del Raval, se llega a

Sant Antoni, un barrio con la morfología reticular del Eixample que, en unos años, acompañando la reforma del mercado de Rovira i Trias que le da nombre, se convirtió en uno de los nuevos objetivos de la rapiña especuladora. Todo empezó con la moda que hizo atractivo el Carrer Parlament para los hípsters. Al poco, el barrio se hizo atractivo para ir a vivir y, por tanto, para el mercado inmobiliario, ahora de vivienda de alquiler. Allí, la técnica ha consistido en sondear a los propietarios ya asentados, fijarse en especial en los más mayores, en orden a saber quién puede estar interesado en vender o qué pisos van a quedar vacantes en breve; subir de manera desorbitada los alquileres con tal de desalojar inquilinos —826 euros de media—; hacer firmar contratos de alquiler por tres años o menos; priorizar las ventas de pisos a inversores antes que a nuevos vecinos… En octubre de 2016, se registraba un imparable exilio de habitantes que no tenían más remedio que mudarse de barrio[86].

Siguiendo el camino en dirección a la montaña de Montjuïc, lo que uno encuentra primero es lo que fue el bulevard popular de Barcelona, el equivalente obrero del Passeig de Gràcia de la burguesía: el Paral·lel, objeto durante el mandato de Xavier Trias de un plan de remodelación que lo adecuara para su papel de puerta de entrada de los miles de cruceristas que recalan en el puerto de Barcelona. El Gobierno de Ada Colau lo paralizó, pero ni esa medida, ni la moratoria de nuevos hoteles ni el plan de usos pudieron evitar que el Poble Sec, otro de los barrios emblemáticos de proletariado urbano barcelonés, esté siendo víctima de un verdadero asalto gentrificador que está expulsando a quienes estaban habitándolo. Allí se están abriendo nuevos hoteles disfrazados de albergues juveniles; se presiona a los vecinos para que se marchen del barrio y cedan sus pisos de alquiler al mercado inmobiliario —el regreso del *mobbing*, esa práctica contra la que tanto había luchado Ada Colau—; el ocio intensivo nocturno no deja de aumentar, sobre todo en torno a la discoteca Apolo, y el Carrer Blai, la calle mayor del barrio, se ha llenado de bares "modernillos" a los que los vecinos no van.

Esta crítica a las intervenciones urbanísticas en el núcleo antiguo de Barcelona tiene que ser matizada, justo para que no se confunda con la defensa romántica y en última instancia reaccionaria de la "esencia perdida"

del barrio. La desembocadura inevitable de este tipo de críticas acaba mezclando la perfidia de las autoridades y las empresas inmobiliarias con las consecuencias no menos perversas que se atribuye a la presencia de nuevos vecinos provenientes de la inmigración. No se plantea aquí una censura al hecho de que las ciudades y los barrios cambien, ni al principio de acuerdo con el cual eran urgentes las intervenciones que mejorasen la calidad de vida de sus habitantes. Lo que se critica es que las actuaciones respondan al hecho de que a políticos y promotores les parezca inaceptable que, justo en medio de la ciudad, vivan obreros, inquilinos de rentas bajas y otros elementos escasamente decorativos que puedan asustar a los turistas y a los nuevos propietarios, a los que se pretende atraer a toda costa. He ahí un nuevo ingrediente del "modelo Barcelona": el proceso inexorable de ilegalización de la pobreza[87].

Un ejemplo desvela hasta qué punto la llegada de Ada Colau al Gobierno de Barcelona no ha cambiado demasiado las cosas en una ciudad en la que tras casi dos años de nueva orientación política la normativa cívica aprobada por Joan Clos para perseguir a los miserables y disidentes no ha sido revocada, aunque se haya suavizado su aplicación en algunos de sus puntos y se hable de su modificación. El 28 de julio de 2016, la nueva alcaldesa inauguraba de manera solemne y emocionada un monolito que, en la playa de la Barceloneta, rendía homenaje a los cientos de inmigrantes que habían muerto al intentar atravesar el Mediterráneo. El acto coincidía con la proclamación de Barcelona como "Ciudad Refugio". Ada Colau había hecho de su participación en una protesta contra el centro de detención de extranjeros de la Zona Franca una de sus primeras apariciones públicas luego de haber sido elegida. En el descubrimiento del monumento, pronunció unas emocionadas palabras de recuerdo a quienes, procedentes de Asia o de África, no habían conseguido llegar a las playas europeas. Jordi Savall cerraba el acto con una interpretación al violoncelo de "El cant dels ocells". La gravedad del momento quedó, no obstante, alterada por el grupo de vendedores informales —los *manteros*—, que protestaban por el ensañamiento con que eran acosados por la policía municipal y la detención, aquella misma mañana, de siete de sus compañeros. "Hipócrita", "cobarde", "vergüenza", gritaban. Tenían sus razones: los mismos que se lamentaban por

quienes mueren en la travesía, persiguen y maltratan a quienes consiguen llegar.

Se repite con ello uno de los principales rasgos del "modelo Barcelona", el auténtico, el que ensayara Pasqual Maragall y ahora reedita, lo quiera o no, Ala Colau. Con una mano se abandona la ciudad a las lógicas del capitalismo avanzado y se garantiza que los pobres y disidentes serán mantenidos a raya mediante la violencia si es preciso; con la otra, se elevan cánticos de paz y amor a la humanidad, al tiempo que se despliegan todo tipo de efectos especiales destinados a satisfacer la buena conciencia de los virtuosos.

CAPÍTULO 2

EL CENTRALISMO SIMBÓLICO

¿TIENEN ALMA LAS CIUDADES?

Tenían razón quienes hicieron notar, en un sentido no necesariamente crítico, que las bases teóricas sentadas por la Escuela de Chicago para unas ciencias sociales de la ciudad no habían sido en realidad sino las del estudio del proceso de modernización en general —industrialización, burocratización, politización, etc.—, o, lo que es lo mismo, del proceso de homogeneización cultural en que consistía la dinámica mundializadora, tal y como podía —y puede todavía ahora mismo, por supuesto— ser contemplada, sucediendo en ese nicho ecológico particular que son las metrópolis contemporáneas[88]. La tendencia que encabezaron Park, Burguess y Wirth en el Chicago de las primeras décadas del siglo XX elaboraba sus propuestas analíticas precisamente desde la constatación de que el rasgo definitorio de la cultura urbana era justamente su inexistencia en tanto que sustancia dotada de uniformidad. Si esa cultura urbana era alguna cosa, esta no podía consistir sino en una tupida red de relaciones crónicamente precarias, una proliferación infinita de centralidades —muchas veces invisibles—, una trama de trenzamientos sociales fragmentarios y efímeros y un conglomerado escasamente cohesionado de componentes grupales e individuales.

Así concebida, la ciudad era un dominio de la dispersión y de la heterogeneidad sobre el que el control político directo era difícil o imposible, y donde multitud de subculturas autónomas hacían frente a la integración a la que se las intentaba someter sin apenas éxito. La ciudad era percibida

entonces como un mosaico de microsociedades copresentes, el tránsito entre las cuales era abrupto y daba pie a multitud de intercisos e intervalos que eran inmediatamente habitados por todo tipo de marginados y desertores. "Hay pocas posibilidades de que el individuo llegue a tener una concepción de la ciudad como conjunto o considere su posición en el esquema común", escribía Louis Wirth[89]. No podía ser de otro modo, puesto que, como él mismo nos hacía notar, una ciudad es siempre algo así como una "sociedad anónima", y sus ventajas, como sus inconvenientes, se deben precisamente a que, por definición, una sociedad anónima "no tiene alma[90]". La ciudad pasaba a ser entendida de este modo como un organismo dotado de vida pero carente de espíritu, es decir, sin aquel campo representacional en que se supone que deberían proyectarse en términos sagrados los principios axiomáticos y morales en que se sustentaba todo pacto societario. Lo urbano quedaba así reducido a un marco medioambiental en el que se aglomeraban intereses e identidades incompatibles entre sí, a los que con frecuencia mantenía unidos aquello mismo que los separaba, es decir, la hostilidad o la indiferencia.

Decididamente una antropología urbana no podía, por ello, sino aparecer condenada a atender estructuras líquidas, ejes que organizan la vida social en torno a sí, pero que no son casi nunca instituciones estables, sino una pauta de instantes, ondas, situaciones, ritmos, confluencias, encuentros, encontronazos, fluctuaciones… Pétonnet se ha referido a cómo el etnólogo urbano no ha escogido para ejercer su profesión un territorio estático, sino más bien una extensión sin límites fijos, "permeable, que se infla y se retrae al hilo de los días, al hilo del tiempo[91]". Por otro lado, la ciudad puede, también por lo mismo, constituirse en objeto legítimo de estudio antropológico, no tanto, como pudiera antojarse, como un recurso de salvación para el etnólogo repatriado a la fuerza, que vuelve a casa y se ve obligado a competir con el sociólogo en las jurisdicciones que fueron de este. Por el contrario, el comparador de culturas lo que hace es reconocer cómo la diversidad humana que las sociedades urbano-industriales habían puesto en trance de desaparición en su expansión ha venido a reproducirse en su seno. Al tiempo que lo exótico se extinguía en aquellos territorios remotos a los que el antropólogo había sido enviado, viejas y nuevas formas de diferenciación

cultural reaparecían al cobijo de las ciudades del mundo capitalista avanzado. Es así como, en realidad, las sociedades lejanas que habían sido la razón primera de la antropología como disciplina científica solo pueden sobrevivir ya bajo la protección que les brinda el anonimato y la tendencia al desapego que caracteriza las sociedades urbanas. La tarea del etnólogo pasa a ser entonces la de mostrar de qué está compuesta una sociedad aparentemente "de masas", cuáles son los elementos constitutivos que se ocultan tras esa indiferenciación que es, en realidad, un recurso adaptativo con que los distintos hacen frente a la integración forzosa que los amenaza, una artimaña de mimetización que le sirve a la variedad de las especies culturales para burlar el acecho de sus depredadores.

Pues bien, todo ese dinamismo hecho de fragmentos en contacto o sobrepuestos sucede de espaldas a un orden político que lleva siglos intentando que la ciudad renuncie a su condición intrínsecamente turbulenta y contradictoria, que deje desentrañar sus oposiciones y acabe por acatar su autoridad. La aspiración de todo proceso de centralización política es, en efecto, la de constituir y hacer respetar una cierta unidad de espíritu que haga viable una experiencia de lo urbano como una cultura homogénea y unificada, susceptible de generar y movilizar afectos identitarios específicos. Para ello se intenta una y otra vez convertir la urbanización en politización, no en tanto que conciencia de lo político, entendido como lo relativo a las relaciones sociales de dominación, sino como dominio de la política, es decir, como asunción del arbitrio del Estado y sus profesionales sobre la confusión y los esquemas paradójicos que organizan la ciudad. En esa dirección, la concepción estatal de la ciudad sabe que resulta indispensable el establecimiento de centros que desempeñen una tarea de integración tanto instrumental como expresiva, tan atractiva para el ciudadano en el plano de lo utilitario como en el de lo simbólico. Manuel Castells establecía cómo, tras la idea de "centro urbano", lo que hay es la voluntad de hacer posible una "comunidad urbana", es decir, "un sistema específico, jerarquizado, diferenciado e integrado de relaciones sociales y de valores culturales[92]". Es en las ciudades donde se puede seguir la renovación de esa lucha contra la heterogeneidad para la producción de identidades centralizadas, adecuadas a los intereses de sus elites políticas y económicas, capaces de respetar solo

aquellas idiosincrasias que previamente han puesto en circulación.

Cabría reconocer, en ese orden de cosas, que ese trabajo de centralización y control políticos se traduce no solo en una tarea meramente funcional y funcionarial, sino que también trabaja la dimensión semántica. Es en ese campo de la producción significante que se procura forjar una "cultura urbana" unificada, adecuada a los intereses políticos y económicos de sus inspiradores y beneficiarios. Su objetivo era reeditar mecanismos parecidos a los que posibilitaron la irrupción de los nacionalismos de base territorial e histórica en el siglo XIX, destinados a hacer posible la modernización, entendida como proceso de control y centralización bien sobre una multitud de subgrupos fluidos y efímeros, bien sobre unos no menos numerosos segmentos corporativos autosuficientes, mediante la asunción por parte de todos ellos de un sentimiento de adscripción a una sola cultura "nacional" políticamente santificada, susceptible de trascender la tendencia a la inconexión entre fragmentos, a la plurijerarquización y a la atomización que determinaron la manera débil de vincularse entre sí las unidades particulares que caracterizaron a las sociedades extra o premodernas, pero que vemos reproducirse hoy en contextos actuales plenamente urbanizados.

Son ahora las ciudades el nuevo escenario de aquella sacralización de idiosincrasias artificiales, toda la retórica sobre la singularidad cultural de los nuevos territorios estatalizados que había permitido el nacimiento de los nacionalismos modernos y que ayudó, y todavía ayuda, a nacer a las naciones-Estado de los países que se van incorporando al proceso de mundialización. Es en las ciudades donde puede contemplarse cómo la colonización de la pluralidad de las maneras de hacer y pensar ha vuelto sobre sus pasos para someter a la algarabía de sus habitantes, y para imponerles la estandarización cultural que debe corresponder a toda unidad política. Es en las ciudades donde se puede seguir el proceso de producción de una identidad central, adecuada, por supuesto, a los intereses de sus elites políticas locales y fiel al gran proyecto de instauración, también en las aglomeraciones urbanas, del monocultivo a nivel planetario de un solo sistema de mundo. Para ello se ha operado una actualización de las estrategias de persuasión de que se valen las identidades políticas para implantarse eficazmente entre los sentimientos de los individuos. A la

colectividad identitaria clásica provista por el nacionalismo decimonónico, que depositaba su fortaleza y su solidez en saber construir una comunidad de las conciencias, le viene a sustituir otra forma de identificación basada en una comunidad que es ahora de experiencias y de sensaciones. A la invención de tradiciones "antropológicas" y de raíces históricas seculares le suplanta hoy, con idéntica intención, la escenificación de paralenguajes persistentes y la ritualización dirigida del espacio urbano. Son estas algunas de las bazas fundamentales mediante las que los miniestados ciudadanos procuran suscitar la adhesión emotiva de sus súbditos y proveer de una unidad moral capaz de vencer la contumaz resistencia de las sociedades urbanas a cualquier intento de centralización, tanto simbólica como administrativa. Es mediante un férreo control político sobre los signos que las ciudades están siendo exaltadas hoy a la categoría de patrias.

Ahora bien, ni el concepto de "patria" ni otros con él emparentados como "hogar" o "pueblo" corresponden a sustancias. Se trata más bien de la manera en que designamos a las consecuencias sentimentales de relaciones que son siempre de un modo u otro de orden simbólico, asociables a esa categoría a la que es frecuente ver remitirse en los últimos tiempos: la *identidad*. Para que las personas se refieran a ciertos territorios como *su* hogar o *su* patria o a determinadas comunidades humanas como *su* pueblo, es preciso que sean consecuencia de una configuración significativa, de un conjunto de engranajes representacionales que soporten y hagan practicable la identidad y resulten lo bastante elocuentes como para desencadenar una cierta emoción compartible. Pero sabemos que la identidad es una estructura, por mucho que sentimentalmente pueda presentarse bajo el aspecto de una esencia. Todo *nosotros* presuntamente único y homogéneo en el que los individuos se consideran de algún modo integrados resulta de una masa conectada de instituciones, de rituales, de mitos, etc., y es esta condición que las identidades tienen de nudos de conexiones —y, por tanto, no menos de desconexiones— lo que hace apasionante atender cómo se mueven, cómo mudan sus contenidos o sus vehículos de significación o cómo mueren o agonizan, no pocas veces absorbidas o aniquiladas por otras identidades más poderosas. Pero constituye un privilegio ser testimonio de su generación, en especial cuando se produce bajo la forma característica de las nuevas

etnicidades, ya no nutridas como hasta ahora de vínculos de parentesco, religiosos, idiomáticos o de territorialidad, sino de puestas en escena y de urdimbres comunicacionales compartidas.

Barcelona podría ser un buen ejemplo de ello. Dejando al margen la cuestión concreta del ocultamiento de los fracasos infraestructurales y de los exudados en forma de marginalidad que no se han conseguido exiliar, el objetivo de la dotación simbólica de la nueva Barcelona es la de lograr un *community spirit,* una personalidad propia precariamente existente durante décadas en una urbanidad caracterizada por la dispersión social, la plurietnicidad y la compartimentación provocada por el agregado de barrios fuertemente singularizados y, en gran medida, autosegregados de un centro débil y casi imperceptible, que habían ido formando por aluvión el actual conglomerado físico y humano de la ciudad. Esa unificación simbólica, esa asunción de elementos simbólicos aglutinadores es lo que cualquier proyecto político requiere si es que aspira a ver reconocidos como legítimos sus intereses y los intereses a los que sirve. Y en ello justamente consistió, en buena medida, aquella primera etapa aludida en el capítulo anterior, la que sigue a la transición de la dictadura al parlamentarismo formal y que vimos identificada con el momento ideal del "modelo Barcelona", aquel en que se supone que todavía no había sido contaminado ni pervertido por el liberalismo urbanístico hegemónico después, ese mismo que el Gobierno de Barcelona en Comú aspiró a restaurar. En efecto, aquel instante debería ser entendido como fundamental para generar eso que Jordi Borja —acaso el ideólogo principal tanto del "modelo" como de su segunda edición con Ada Colau— llamó *barcelonismo,* que él mismo imaginaba a principios de los ochenta como requisito para "un proyecto de futuro movilizador que sea un gran estímulo y un marco coherente para la inversión pública y privada para la reconstrucción y la revalorización de la ciudad y de toda el área metropolitana. Este proyecto deberá poseer suficiente fuerza política y cultural para poder movilizar los recursos sociales e intelectuales existentes[93]". Lo que tenemos es, así, que el trabajo de producción de significados en que consistieron los primeros momentos del "modelo Barcelona" fue la preparación de lo que enseguida sería la explícita alianza entre poderes públicos, tecnocracia urbanística e intereses empresariales en

Barcelona. Su objetivo parecía orientado a demostrar cómo el medio ambiente ciudadano podía ser manipulado para hacer de él argumento y refuerzo simbólico de una determinada ideología de identidad favorecida desde instancias políticas[94].

La estrecha alianza entre políticos y arquitectos de la que la Barcelona modélica fue escenario vino a ilustrar formidablemente el carácter funcionarial e institucional que pueden asumir los segundos como instrumentos de formación de un ambiente humano adecuado a los intereses de los primeros, un cuadro que, en el caso catalán, era prefigurado por la atención demostrada por los diseñadores urbanos dependientes del poder municipal por los ensayos de formalización estética e ideológica que había conocido Barcelona en el periodo que se extiende entre las Exposiciones Universales de 1888 y 1929. Se trata de la etapa histórica en la que la capital catalana se hizo digna de denominaciones como París del Sur o Ciudad de los Prodigios, en tanto se convirtió en el gran experimento de modernización bajo la dirección de la burguesía en el Estado español, que quedará interrumpido por las convulsiones económicas, políticas y bélicas de los años treinta y, después, por cuarenta años de franquismo, una fase esta de la que, como se ha razonado anteriormente, las posteriores no han dejado de ser continuación.

La asunción de estos referentes se concreta en una remisión recurrente a tres movimientos ideológicos y estéticos concretos y a los proyectos arquitectónico-urbanísticos que les correspondieron. En primer lugar, tenemos las versiones catalanas del socialismo utópico del XIX, que se concretan en el gran proyecto de ensanche debido a Ildefons Cerdà, vindicado para explicitar una voluntad de llevar a la práctica el gran proyecto utopista de una ciudad racionalista, ideal, concebida a la manera de un espacio abstracto y selecto, planificado a las antípodas de una ciudad orgánica que se desarrollase siguiendo los ímpetus de su propia espontaneidad. Un antecedente este que ya reclamará como propio el racionalismo urbanístico y arquitectónico de los años treinta en Cataluña —agrupado en torno al Grup d'Arquitectes i Tècnics Catalans per al Progrés de l'Arquitectura Contemporània (GATCPAC)—, y que las tendencias hegemónicas posteriores han asumido con ciertas reservas relacionadas con la condición anticentral —y, por tanto, antimnemotética y en buena medida

antipolítica— del plan Cerdà[95]. Del modernismo —que en Cataluña experimentó una fuerte ideologización, con lo que trascendió los presupuestos meramente estéticos del *art nouveau* o el *jugendstil*— se reconoce el ascendente tanto de su arquitectura —Gaudí, Rubió, Puig i Cadafalch y Domènech i Montaner, sobre todo—, como de sus producciones en las artes decorativas y plásticas en general. Pero de las tendencias modernistas más innovadoras se asumía más aún la vindicación optimista de las virtudes de la vida en la ciudad —como habían hecho Baudelaire y los simbolistas franceses—, con el fin de hacer partícipe a Barcelona de las dinámicas que hoy llamaríamos globalizadoras, haciéndolo, eso sí, manteniéndose fieles a una cultura autóctona como la catalana, constituyendo la ciudad en escenario para la síntesis entre modernidad y nación, cosmopolitismo e identidad, en una línea que encarnará de forma inmejorable la figura intelectual de Gabriel Alomar.

Con respecto del noucentismo —la versión catalana del *novecento* italiano —, se marcan distancias por lo que hace a algunas adscrecencias reaccionarias y se discute el valor de su aportación específicamente arquitectónica —con la excepción de ciertas realizaciones, como algunos edificios de Puig Gairalt o de Goday—, pero se asumen otros aspectos, como puedan ser las propuestas urbanísticas en sí, el modelo de institucionalización cultural de Prat de la Riba[96], con su proyecto de una construcción nacional de Cataluña de base fuertemente municipalista y metropolitana, los instrumentos principales del cual fueron la Mancomunitat y las diputaciones provinciales. No se debe olvidar que, para los hombres de la Lliga Regionalista que accedieron al Gobierno de Barcelona en 1901 —ambos, Verdaguer i Callís, Puig i Cadafalch, Prat de la Riba mismo—, la capital catalana tenía que ser el referente principal de todos sus planes de regeneración y modernización para el país, el epicentro de los cambios infraestructurales y relativos a la organización centralizada de la vida pública —sanidad, educación, cultura, bienestar social— que exigía el nuevo liderazgo del capitalismo financiero e industrial. Pero del noucentismo se toma, sobre todo, una doctrina sobre la "ciudad ideal" que apuesta por la asunción generalizada de un ciudadanismo consistente en el triunfo de ideas abstractas de concordia civil sobre la conflictividad y el enfrentamiento entre clases.

Es fácil encontrar en la actualidad las huellas de aquella misma obsesión noucentista por la armonía, el dominio racional y consensuado sobre las desavenencias, la conversión de la ciudad en un centro de ciencia, de arte y de cultura, sembrado por doquier de belleza pública. Deuda extraordinaria también con las propuestas para una urbanidad específicamente barcelonesa —templada, equilibrada, proporcionada, integradora, interclasista, regeneradora y regeneracionista, atenta a las pedagogías que se le imparten desde las instituciones…—, en tantos sentidos opuesta a la imaginada como española, pero que también implicaba un desprecio por la que J. V. Foix había llamado —en un artículo así titulado, en 1920— la *Barcelonota,* la ciudad fea, apropiada de y para la chusma y en la que vindicar el "buen gusto" podía ser perfectamente revolucionario. En esa línea se encuentra la obra sobre todo de Eugeni d'Ors —a quien volveremos enseguida—, pero también las de Jaume Bofill o Josep Carner, con una cierta dosis de escepticismo en este último caso. De ahí la preocupación novecentista —restablecida tan enérgicamente hoy en día— por la decoración urbana y por otorgarle al arte público un papel central en un proyecto que se inspiraba en una cierta imagen de las ciudades clásicas o renacentistas, asociadas a la idea de ciudad como clave o metáfora de la nacionalidad e incluso del imperio. Fue aquella sensibilidad orientada al orden la que convocó a los artistas para que hicieran su aporte a una didáctica de los principios de civilidad, civismo y urbanidad, y ayudaran a exorcizar con la belleza de sus obras expuestas en calles, jardines y plazas las amenazas constantes que acechaban desde el corazón mismo de la ciudad: el conflicto, el desorden que encarnaban los obreros y los sectores populares con sus antiestéticas luchas[97]. Es en la década de 1920 cuando se extiende la convicción de que la propia ciudad debía ser considerada como una obra de arte, que en ella debía producirse la comunión mística entre urbe y creación. Para ello se aplican principios de ordenación que enfatizan la domesticación de los entornos naturales, la generación de parques y jardines, la arquitectura y el urbanismo entendidos como discursos y, por descontado, el arte de la decoración y estetización de la vida urbana. Por último, recuérdese también que es del noucentismo de donde se asume una idea de "mediterraneidad" que, como se sabe, orientará retóricamente buena parte de las políticas

urbanísticas de los ayuntamientos barceloneses de las últimas décadas —bajo la dictadura y en democracia formal—[98], y que encontramos presente en la literatura, por ejemplo, de un Josep María López-Picó, y al que no es ajena la retórica reaccionaria de Paul Morand y del despuntante fascismo italiano.

Inspirándose en tales modelos se genera uno de los ejemplos más claros de un proyecto a gran escala de generación de espacios protésicos, desplegados con la finalidad de actuar como soporte adaptativo a nuevas realidades, lo que viene a implicar que Barcelona se llegó a constituir en una suerte de laboratorio en el que se experimentaban las maneras de instaurarse las relaciones entre *ideología* y *lugar*, así como de la manera en que el entorno podía y debía convertirse en sostén para una estructura motivacional y en una guía para la acción. Se postuló en un determinado momento que la ciudad había abandonado su fase de expansión para iniciar otra de reconstrucción, una reconstrucción que, por su obsesión textualizadora y por la conformación controlada de mapas mentales, podríamos designar como eminentemente semiotizante. Reconstruir Barcelona quería decir, ante todo, según Pep Subirós, uno de los proveedores de discurso para los nuevos planes político-urbanísticos, *reinventarla*, es decir, crear las condiciones políticas que permitieran literalmente rehacer la ciudad, "dotarla de una nueva coherencia, que la haga funcional, que la haga convivencial, que articule las partes…[99]".

El destino de estas realizaciones reconfiguradoras fue dotar al usuario-consumidor semántico de la ciudad de esquemas imaginativos por medio de una organización autoritaria del medio urbano que lo predispusiese para ser percibido y evaluado de acuerdo con determinadas expectativas que habían devenido dominantes. Como explicitó otro de los ideólogos y al tiempo ejecutor de este proceso, Oriol Bohigas, la voluntad de producir identidad se traduce en la búsqueda de una "homogeneidad cuantitativa y cualitativa de la ciudad […], subrayando la representación unitaria de la ciudad en los mismos sedimentos históricos[100]". Los recursos que se desplegaron para hacer eficiente esta metaforización territorial —y, como veremos, también temporal— adoptaron desde el principio un estilo fundamentalmente pedagógico, en el sentido de pensado para hacer aprender al ciudadano, indicándole lo que ha de ser mirado y cómo ha de ser mirado. Esta intención de convertir al urbanita en algo parecido a un escolar medioambiental

perpetuo se formalizó mediante todo tipo de producciones litúrgicas destinadas a paliar, por la vía de una cierta grandilocuencia ornamental, las posibles carencias de legitimidad simbólica.

La ritualización del espacio-territorio como consecuencia de un proyecto político de construcción identitaria se completa con la ritualización del espacio-tiempo, que también busca conformarse en fuente de recursos simbólicos cohesionadores. El dispositivo con el que se cuenta para ello es, una vez más, el de la fiesta, entendida como la dramatización altamente condensada del poder autónomo y creativo de los grupos vivientes, que se produce en el momento en que se reúnen para poner en escena y, al mismo tiempo, contemplar como espectáculo su propia existencia y su sentido de la identidad. Por descontando que la ciudad es el marco idóneo para la festivalidad, ese marco en el que todo orden social rememora sus orígenes caóticos y la victoria sobre el desorden inicial que hizo posible la construcción del universo civil. Porque toda ciudad viene a ser consciente de que se funda y reproduce gracias a una situación de permanente conflicto, de guerra civil constante entre segmentos sociales incompatibles, la fiesta permite explicitar tal condición mediante un doble movimiento paradójico que al mismo tiempo la niega y la institucionaliza.

Si la arquitectura y el diseño constituyeron y consagraron un escenario predispuesto para inspirar, orientar y enmarcar las producciones de identidad ciudadanas, es preciso situar la producción de efectos especiales festivos, que las autoridades municipales barcelonesas favorecieron sistemáticamente, en ese mismo proceso que hizo de Barcelona algo así como un banco de pruebas donde experimentar los efectos y las posibilidades a nivel urbano de la teatrocracia en torno a la que gira la vida política contemporánea[101]. Ambas actuaciones confirman a la ciudad de Barcelona como capital del neobarroco, con la recuperación de aquel estilo, caracterizado por su condición socialmente estéril, que a lo largo de los siglos XVII y XVIII tan propenso resultó a cultivar en arquitectura los efectos realistas y teatrales, para los que el uso funcional de los materiales debía ser sacrificado a las exigencias de la apariencia y donde la ostentación y la aparatosidad festivas merecían un lugar entre las formas de sociabilidad inspiradas desde las instancias del poder político. Ante el espectáculo de los varios cientos de

miles de ciudadanos boquiabiertos que se reúnen, por ejemplo, para contemplar las grandes exhibiciones pirotécnicas que, con motivo de las fiestas patronales, organiza el Ayuntamiento, es fácil reconocer una reedición de aquella grandilocuencia vacía y laudatoria de los fuegos artificiales en las fiestas barrocas. De igual forma, el *happening* permanente en que ha acabado transformándose la ciudad de Barcelona significa un cierto triunfo de la pomposidad rococó. Cierto es que el frenesí escenográfico que supusieron los fastos olímpicos de 1992 fue el momento culminante de un auténtico delirio festivalizador de la temporalidad urbana[102], que se intentó repetir sin éxito con motivo del fracasado Fórum Universal de las Culturas, pero existen una infinidad de ejemplos menores no menos significativos de usufructo y patrocinio políticos de resortes festivos, es decir, de esos grandes o pequeños templos hechos de tiempo destinados a hacer a quienes en ellos se reúnen sentirse, al menos emocionalmente, una sola cosa.

Lo que resulta más interesante es cómo el papel que las autoridades políticas locales asignaron desde el principio a las fiestas —o, mejor, a ciertas fiestas producidas o controlables institucionalmente, en detrimento de otras consideradas menos gobernables, como las de los barrios o como la noche de San Juan—[103], como generadores de cohesión social en torno a ciertos valores promocionados oficialmente, reedita unos mecanismos ya conocidos y aplicados en la ciudad para fines idénticos. En efecto, como Temma Kaplan estableció en su célebre estudio sobre la Barcelona de finales del siglo XIX y principios del XX[104], la invención en septiembre de 1902 de las Fiestas de la Mercè resultó de un intento municipal por reconquistar simbólicamente lo que las tropas y la policía ya habían recuperado físicamente, aplastando la huelga general que meses atrás —en febrero— había demostrado el poder revolucionario de la clase obrera de la ciudad. Lo que quería ser la fiesta mayor de Barcelona sirve para exhibir el poder político, religioso y económico, y lo hace mediante toda la retórica ritual de las procesiones religiosas, de las cabalgatas que exaltan el triunfo de la burguesía, de los desfiles en que se exhibe la pujanza de las clases hegemónicas. A la insurrección obrera —aplastada cruentamente por el ejército y la guardia civil—, la Iglesia y el Ayuntamiento barcelonés oponen los grandes fastos de una nueva fiesta —la Mercè—, que es un canto a la

imaginería católica, al mito de la tradición nacional y a las grandes reformas urbanísticas que están transformando la ciudad para que se parezca a sus clases dominantes. El espacio colectivo de Barcelona se convertía así en *ring* de un combate simbólico entre, por un lado, las masas obreras que cierran sus barrios con barricadas y, por otro, los concursos al aire libre de gigantes y cabezudos y las exhibiciones públicas de la imagen de la patrona de la ciudad, lucha simbólica relativa, en última instancia, a de quién es y qué significa ese mismo entorno sobre el que los sectores sociales en conflicto ejecutan sus prácticas e inscriben sus discursos.

EL NACIMIENTO DE UNA NACIÓN

Acaso Barcelona encarne un episodio más de los esfuerzos que todo orden político ha hecho siempre para imponer sus discursos de homogeneización, centralización y control sobre la tendencia de todas las ciudades al enmarañamiento. Frente al murmullo ciudadano —infinito, indescifrable en realidad—, las instituciones de poder han venido procurando ocultar lo intruso de su presencia, para acabar por establecer como incontestable y sagrado sus planes de esclarecimiento y fiscalización. Como en otros sitios, se reproduce, en clave posmoderna, una operación parecida a la ya aludida de la reforma urbana mediante la que se intentó acabar con la actividad de las "clases peligrosas" y con las grandes luchas sociales que habían conocido a lo largo del XIX las grandes ciudades europeas, y que consistió en el trazado de grandes ejes y la apertura de plazas, cuya vocación era desobturar lo que entonces se llamaron "islotes malsanos", la instauración de la iluminación nocturna, al tiempo que se llevaban a cabo los grandes censos mediante los que se pretendía conocer exactamente la composición social de la población. La *polis*, la *politeia* entendida como administración de la *civitas*, en efecto, nace de la necesidad que las castas dirigentes experimentan en todo momento de hacerse con el control de la crónica condición intranquila de toda ciudad, de negar que esta encuentre en el conflicto al mismo tiempo su génesis y su combustible vital. El objetivo: hacer de la ciudad un verdadero escenario de la transparencia que todo control exige para ejercerse.

En el caso específico de Barcelona, ese pleito entre política y ciudad ha

acompañado su historia y se expresa bajo nuevas formas en el contexto de los grandes procesos de transformación social que acompañan al proceso de modernización desde su mismo arranque a mediados del XIX. Desde el principio, la nueva aristocracia mercantil, industrial y financiera procuró imponer una idea de ciudad que se adecuara a sus intereses e hizo todo lo posible por imponerla en el plano de las representaciones, con la voluntad última de que la realidad acabara plegándose a estas. Lo ha hecho de maneras distintas, para adecuarse a contextos históricos no menos diferenciados, pero siempre con idéntica voluntad de someter la pluralidad compleja y paradójica de la vida urbana a una conciencia compartida de pertenecer a una misma comunidad, regida por valores morales afines a los objetivos políticos y económicos hegemónicos en cada momento. Es lo que Stéphane Michonneau ha llamado, en su valioso trabajo sobre las políticas de la memoria en la Barcelona contemporánea, "centralismo simbólico[105]". En él descubrimos ese esfuerzo de las clases poderosas por imponer una identidad colectiva que subordinase, asimilase o disolviese una cultura popular fragmentada, heterogénea, y en la que la expectativa revolucionaria ocupaba un lugar crecientemente protagonista.

El protagonista de ese primer momento es, sin duda, Francesc de Paula Rius i Taulet, alcalde de la ciudad en cuatro mandatos entre 1872 y 1889. Fue a él a quien le correspondió encarnar el vínculo entre los intereses de los poderes económicos hegemónicos —en aquel momento, los grandes propietarios urbanos— y el diseño de la primera modernización de la ciudad, entendida no solo en términos político-económicos, sino también de homogeneización y unificación simbólicas. Todo lo que ha venido después y hasta hoy mismo no ha hecho sino reeditar esa misma vocación de reforma urbana —también en el plano representacional— subordinada a los intereses capitalistas y lo que hoy llamaríamos globalizadores, que en su caso se concretó en el impulso al ensanche de Cerdà, la urbanización de parte del litoral, la municipalización de edificios militares, la construcción de infraestructuras básicas del poder burgués —el Palau de Justicia, por ejemplo—, la concepción y ejecución de la Exposición Universal de 1888 y, sobre todo, la gestación de un primer "patriotismo urbano" que hemos visto cómo ya se presentó en su momento precisamente como *barcelonismo*.

Esa misma búsqueda de un modelo de ciudad unitaria se reprodujo, a principios del siglo XX y para el caso de Barcelona, en la manera no coincidente en la que dos pensadores —el poeta Joan Maragall y el filósofo noucentista Eugeni d'Ors— se plantearon la necesidad de hallar la *esencia ciudadana* de Cataluña, en una polémica cuya importancia y vigencia resaltaría Eugenio Trías en un remarcable ensayo[106]. El planteamiento común era el que conducía a la necesidad de una nueva noción de país que encontrase las raíces de su identidad no en singularidades históricas o en tradiciones compartidas, sino en una determinada idea de civilidad de la que la Ciudad Condal sería cristalización potencial. Frente a la Cataluña idílica de la *Renaixença*, que ni era sociedad civil ni era Estado; frente a una España fracasada, Estado incapaz de vertebrar en torno suyo una auténtica sociedad civil, Barcelona podía erigirse como un ejemplo perfecto de una sociedad civil que crecía con éxito sin Estado.

Fue esa realidad susceptible de ser pensada como idea-fuerza y modelo de civilización, tanto para España como para Cataluña, la que fue objeto de elogios por parte de intelectuales como Unamuno, que había convocado a Cataluña, y en relación con su capital, Barcelona, a "representar en la Ciudad —así, con letra mayúscula— y fuera de ella la función civil de gran espectáculo"[107]. En ese ambiente general de vindicación de la capital catalana como punto de referencia modernizador hicieron tanto D'Ors como Maragall sus interpretaciones de Barcelona como ensayo de ciudad-patria. Joan Maragall entendía Barcelona como una especie de caos pactado, algo así como un desorden secretamente racional, un concepto que reflejó de manera hermosísima en su poema "Oda nova a Barcelona", escrito en 1909, donde la describe como un amontonamiento pasional de crueldad y dulzura, al mismo tiempo tierna y atroz, tierna y grosera, alegremente infernal, malvada, vanidosa, pía, risueña…, "con tus pecados / ¡nuestra!, ¡nuestra!". Esa misma imagen desgarrada, pero fascinante, de Barcelona la encontramos en otros poetas modernistas a la hora de hacer el elogio trágico de Barcelona. Véanse las casi antiodas a la capital catalana de Jeroni Zanné, Rafael Nogueras i Oller o Apel·les Mestres.

Lejos de esa representación de la ciudad como pasión, en sus artículos periodísticos, firmados con el seudónimo de *Xénius*, Eugeni d'Ors concebía

Barcelona como una entidad elitista y cerrada, de vocación neoateniense y organizada geométricamente, como corresponde a lo que hemos visto que era el sueño noucentista de una capital catalana cosmopolita, culta, cívica, colocada al amparo de las virtudes integradoras y pacificadoras de la cultura, catalanista, pero reclamando un lugar entre las ciudades vanguardistas de la época, y organizada a partir de una armonía interclasista, siempre en pos de esa utopía urbana de la que el poema "La ciutat d'ívori", de Guerau de Liost sería la expresión literaria. No muy lejos de esa postura estaría la de Gabriel Alomar —que acuña el concepto Cataluña-ciudad—, que opone el autismo de la mera nación con la capacidad irradiadora de la ciudad. La nación es culto al pasado; la ciudad, al futuro. "Si en la nación hay sentimentalidad, en la ciudad hay pensamiento y voluntad".

A pesar de esa mirada tan alejada acerca de Barcelona, tanto para Maragall como para D'Ors lo deseable en común era hacer realidad una verdadera patria urbana, un objetivo para el que era indispensable algo más que un proyecto intelectual lleno de premoniciones. Lo necesario era superar la ausencia de una auténtica autoconciencia de ciudadanía, un *amor cívico* capaz de dotar de consistencia sociohumana vertebrada sólidamente, lo que no podría resultar, sin tal requisito, otra cosa que una entelequia. D'Ors lo planteaba reclamando para Barcelona ese espíritu que la Escuela de Chicago le negaba a las ciudades y que él quería ver erigirse más allá de la mezquindad de las meras existencias individuales: "¡Pero, no! Platón me valga, para recordaros y para acordarme cómo por encima de las almitas miserables de los hombres, está la gran alma de la Ciudad. Y la Ciudad nuestra quiere ser salvada, ha de salvarse. Podremos no convertir a Pau, Pere, Berenguera en hombres civiles. Pero Barcelona, pero Cataluña, ha de ganar Civilidad definitiva, así nos muramos todos[108]". Con todavía mayor claridad lo expresaba Joan Maragall en las palabras con que cerraba un famoso artículo suyo de 1909, en el que reaccionaba ante el espectáculo de la Barcelona espasmódica de la Semana Trágica: "Aquí tal vez había habido una gran población, pero bien cierto que nunca existió un pueblo[109]".

Tuvieron que transcurrir algunas décadas para que las visiones contrapuestas del naturalismo modernista y el idealismo noucentista encontraran las vías para su realización sincrética, y lo hicieran al servicio de

un programa político que aspiraba a trascender las limitaciones del nacionalismo tanto catalán como español, considerados caducos precisamente por su adscripción a los viejos modelos de identificación étnica de base lingüística, territorial o histórico-tradicional. Esta consideración no es intuitiva: responde a los precisos términos en que se ha venido ejerciendo el propio discurso político de los gobiernos del Ayuntamiento de Barcelona en las últimas décadas. En su declaración de principios sobre lo que era y debía ser la ciudad —y, en concreto, en un capítulo nada casualmente titulado "Más allá del nacionalismo"—, el entonces alcalde barcelonés, el socialista Pasqual Maragall, optaba por la idea de la Cataluña-ciudad frente a la de un "nacionalismo clásico" que era generado por "el sentimiento de pertenencia y adscripción propios de colectivos más reducidos e históricamente previos, como la familia y la tribu" y que acababa transformándose en un código político[110].

Fue Pasqual Maragall quien asumió la tarea de sintetizar la doble herencia de la Barcelona "auténtica" poetizada por su abuelo, Joan Maragall, y el horizonte de una ciudad toda ella civilidad y cultura. Adopta sobre todo el valor Cataluña-ciudad, que implicaba una Cataluña muy urbanizada, con una Barcelona culturalmente vertebradora pero no muy poblada y con servicios dispersos en todo el país que, siguiendo el modelo de la capital, potenciaran las capitales de provincia y de comarca: Girona, Lleida, Tarragona, Tortosa, Vic, Manresa, Reus, etc. O, en palabras del propio alcalde Maragall, Cataluña como "sistema de ciudades": "Cuando se habla de Cataluña-ciudad, se quiere decir lo siguiente: que Cataluña es urbana, que está vertebrada y articulada a través de una red de municipios[111]". Cabe destacar aquí que se está hablando del plano puramente representacional. En la práctica, el modelo escogido no ha sido tanto el de la Cataluña-ciudad metafísica como el de una Barcelona-metrópoli depredadora y absorbente que se ha mantenido fiel a los grandes propósitos urbano-imperialistas de la etapa franquista, representada de forma inmejorable por el finalmente enaltecido alcalde José María de Porcioles[112]. En el plano de la administración política, esta orientación patriotizante cristalizó en que el Ayuntamiento de Barcelona se condujera como el Gobierno de una auténtica ciudad-Estado, desde donde se administraba no solo la capital de Cataluña, sino también las grandes

ciudades-dormitorio que conforman la conurbación barcelonesa, el Área Metropolitana —la súper Barcelona o *Gross Barcelona,* tomando como referencia el modelo del *Gross Berlín*—, con un total de 633 kilómetros cuadrados, 36 municipios y en torno a 3.239.237 habitantes en 2014, lo que hacía de ella una de las diez mayores metrópolis europeas.

Todo ello traduce y concreta el viejo propósito de las elites políticas y económicas barcelonesas de dar con una "tercera vía" que distinguiera su proyecto tanto de un españolismo saturado de concomitancias imperialistas y reaccionarias, incapaz de merecer confianza y prestigio, incompetente a la hora de hacer creíble su asociación a un horizonte de veras modernizador, como del catalanismo ruralizante, conservador y reaccionario que en el siglo XIX catalizaría en el carlismo. En aquel momento esa voluntad de escapar de esos dos nacionalismos antimodernos se especificó en lo que Michonneau llama "liberalprovincialismo", de intenciones federalistas, moderadamente progresista, capaz de cabalgar entre el cosmopolitismo y la vindicación de una catalanidad de la que obtenía legitimidad cultural e histórica. Todo en la "teoría de Barcelona", que propone otro de sus ideólogos —Pep Subirós—, está en esa línea de mostrar la capital catalana como la reificación final de simbiosis perfectas: tradicional y moderna, nacional e internacional, local y global, barrial y metropolitana, histórica y vanguardista, obrera y aristocrática, popular y cultivada… "Barcelona constituye uno de los ensayos más coherentes y prometedores llevados a cabo hasta ahora de lo que puede ser una moderna ciudad democrática, es decir, un proyecto en el que tiene tanta importancia la forma como la función, la belleza como la utilidad, la ciudad como los ciudadanos[113]".

Esa búsqueda de equilibrio y singularidad es justamente lo que tan bien ha sabido encarnar en las últimas décadas la socialdemocracia en el poder en Barcelona y su autodefinición de "catalanista y de progreso", es decir, esencialista en lo cultural, sin dejar por ello de reclamar su lugar bajo el sol de la más radical de las modernidades, ni del concierto universal de sus grandes ciudades de referencia. No se olvide que ese fue el argumento central del enfrentamiento político, prolongado en Barcelona durante más de dos décadas, entre la coalición CiU —gobernante en Cataluña entre 1977 y 2004 —, cuyo representante más emblemático fue Jordi Pujol, y el cosmopolitismo

de los equipos nominalmente de izquierdas que ha dirigido los grandes conglomerados urbanos y que los alcaldes de Barcelona han venido personificando hasta ahora, con el paréntesis que encarnó el conservador Xavier Trias entre 2011 y 2015. La apuesta es aquí de nuevo por lo que vimos que Jordi Borja había llamado *barcelonismo*, reedición de aquel patriotismo urbano encarnado a finales del XIX por Rius i Taulet y que volvía a servir ahora como opción alternativa a un mismo tiempo al catalanismo romántico y al españolismo tanto reaccionario como jacobino[114]. O, como teorizara el propio Pasqual Maragall: Barcelona como capital de Cataluña y modelo de referencia para su modernización política y social[115]. Y no es solo eso, sino que una orientación tal ha servido para promocionar conceptos como el de "Europa de las ciudades", justamente en ese mismo sentido de ofrecerse como alternativa tanto a la "Europa de los Estados", derivada del modelo de los países políticamente centralizados, como a la "Europa de las naciones", suscitada desde los diferentes movimientos de nacionalismo no estatal en Europa[116].

A subrayar como ese esfuerzo diferenciador del catalanismo progresista —y su pariente ideológico, el "catalanismo popular"— para colocarse como "tercera vía" entre los nacionalismos catalán y español se reedita en la posición permanentemente ambigua de Ada Colau y las organizaciones que le daban apoyo en relación con el proceso que, en el momento de su acceso al poder municipal en 2015, aspiraba a separar Cataluña de España, el llamado "proceso soberanista[117]". La insistencia en generar un espacio político intermedio, que implicaba una reedición del "nacionalismo" barcelonés o barcelonismo propuesto por Pasqual Maragall, se tradujo en auténticas batallas de memoria, como la suscitada por lo que el patriotismo catalán interpretó en tanto que "profanaciones" de los santuarios del catalanismo tradicionalista, como la instalación de una estatua decapitada de Franco ante el Born Centre de Cultura i Memòria, en octubre de 2016, en una exposición sobre el pasado franquista de la ciudad, y, poco después, en enero de 2017, en una intervención artística en el Fossar de les Moreres, el memorial que conserva el recuerdo de los héroes de la defensa de Barcelona en 1714.

Todo ello es lo que hace doblemente interesante el caso barcelonés. Por un lado, nos coloca en lo que sin equivocarnos podríamos definir como los

esfuerzos por dar a luz una instancia al mismo tiempo administrativa y simbólicamente singular, el verdadero nacimiento de una nación, es decir, de una entidad colectiva específicamente moderna, con un imaginario compartido y eficaz para desencadenar sensaciones de pertenencia y que, además, implica un propósito específico de soberanía política. Es más, que se formula como lo que, parafraseando uno de los lemas del nacionalismo franquista español —"España como unidad de destino en lo universal"—, Eugenio Trías proponía definir como una auténtica "unidad de destino en lo particular"[118]. La aparición de lo barcelonés como singularidad se despliega como una completa colección del tipo de estrategias que permiten conformarse hoy a las nuevas identidades, los parámetros estéticos que constelan —tan deudores, por cierto, del lenguaje publicitario—, los mecanismos generativos que los animan y hacen viables, y la red, en fin, de articulaciones, confluencias y disyunciones que se organizan para dar a luz la conciencia de sí, de un nuevo ser colectivo. Podemos decir, en definitiva, que Barcelona se ha convertido en un observatorio inmejorable desde el que contemplar y analizar los términos en que una identidad política florece y se configura como discurso y como espectáculo. Y esto por el trabajo de una suerte de ingeniería simbólica sobre quienes han de convertirse en sus actores, por mucho que, en realidad, sea tan solo en el papel de comparsas en el gran espectáculo que el poder político intenta en todo momento brindar de sí mismo.

La revancha del ritual en la sociedad tardocapitalista parece, en ese sentido, haber encontrado en la ciudad de Barcelona un marco perfecto para devenir indiscutible. Y es así con una meta que no se antoja menos clara: la de construir las bases escenográficas, cognitivas y emocionales de una identidad política emergente. De una identidad política, hay que añadir, que se impone a la multiplicidad de identidades lábiles y sobrepuestas, a la pluralidad de eventos y situaciones, de ramificaciones, de líneas, de bifurcaciones. Movimiento perpetuo, ballet de figuras imprevisibles, heterogeneidad, azar, rumor, interferencias… Barcelona. Es negando esa ciudad magmática como el orden político instaura su nueva religión de la Acrópolis, la sólida patria recién inventada que llama a lo distinto a acudir al cobijo de sus presuntas certezas y, finalmente, a morir y disolverse en ellas.

CAPÍTULO 3

EL ESPACIO PÚBLICO COMO CRISIS DE SIGNIFICADO

LA IDEOLOGÍA EN SU LUGAR

La planificación de las ciudades europeas tiende cada vez más a basarse en tendencias ya preexistentes: la grandilocuencia ornamental, la ideologización del espacio y la monitorización de toda la vida social. Con ello, el urbanismo actual no hace sino demostrar hasta qué punto está predispuesto a repetir una función que, desde Hipodamos y con otros nombres, se lleva siglos ejerciendo con eficacia, y que no es otra que la de intentar someter lo urbano por la vía de su simplificación, reduciendo al máximo la impredecibilidad, la complejidad, las paradojas cognitivas que la caracterizan. Al servicio de tal intención domesticadora, el diseño urbano, en la mayoría de sus expresiones, aparece marcado hoy, como ayer, acaso todavía más, por una voluntad expeditiva de agotar las tramas, de no dejar ningún territorio sin redimir por la vía del proyecto y del monumento, por arquitecturizarlo todo a toda costa, como si un buen número de planificadores fueran víctimas de una especie de *horror vacui*, un miedo casi irracional a que la más mínima fracción de espacio quede sin ordenar. Espanto ante cualquier *terrain vague*, preocupación obsesiva ante la posibilidad de un asilvestramiento súbito del territorio… Urgencia en cierto modo por salvar la ciudad de la acción del tiempo y de los humanos. Como si la tarea en última instancia colonizadora del urbanista que muchas veces se arroga tuviera como su peor enemigo la tendencia que todo espacio socializado experimenta hacia la ambigüedad, hacia la indefinición, como consecuencia de la propia naturaleza

indeterminada de los usos que registra.

Proliferan en las ciudades lo que los arquitectos llaman "espacios de calidad". Ahora bien, ¿qué cabe entender por espacios de calidad? Rapoport lo conceptualizó de manera inmejorable: "Idealmente las ciudades están diseñadas para ajustarse a las preferencias de sus mandos en cuanto a lo que hacen, a lo que debería ser un medio ambiente de calidad"[119]. Generar espacios de calidad no quiere decir solo tener cuidado de las dimensiones formales, ni preocuparse por ofrecer un mínimo de satisfacción a las demandas públicas. Es sobre todo proponer un fondo afectivo, administrar de manera significativa recursos emocionales, y hacerlo por la vía de la esquematización, para poner los conjuntos resultantes al servicio de una congruencia ideal, de una coherencia representacional a años luz de lo enrevesado de las prácticas urbanas reales. Este esclarecimiento perceptual de la estructura del entorno, esta reducción radical de la complejidad asume una función didáctica y normativa. Funciona —o, cuando menos, pretende funcionar— como una especie de caja de Skinner, dispositivo inductor de actitudes, laboratorio conductista en el que cada uno de los elementos morfológicos presentes es concebido para desencadenar una especie de reflejo condicionado en el usuario espacial. En otras palabras, el llamado "espacio de calidad" hace asequibles determinados indicios que son auténticas instrucciones de uso tanto práctico como simbólico: orientan la acción, controlan las interacciones, exorcizan cualquier sobresalto, señalan qué conviene hacer, pero también qué convendría pensar, sentir, anhelar.

Tal voluntad didáctica y de refuerzo conductual no parece ajena a la concepción del urbanismo como máquina de homogeneizar y clarificar el medio ambiente urbano. Volviendo a Amos Rapoport, de lo que se trata por parte del proyectista es de "calmar" la excitación producida por la vida urbana, y hacerlo dotando al usuario de los espacios colectivos de imágenes estructuradoras, tanto en el plano afectivo como en el cognitivo y perceptual, imágenes cuya función sería, en última instancia, la de "encarnar valores y simplificar la visión del mundo, eliminando lo irrelevante en cada caso y representando las expectativas"[120]. Según Rapoport, en efecto, el problema principal a la hora de coordinar conducta y asentamiento era el de que, en la ciudad, a diferencia de lo que ocurría en otros contextos, "cuanto más

complejo es el sistema, menos comunica el medio ambiente, en parte por la destrucción sistemática de las áreas homogéneas con su redundancia polisensorial"[121]. Todo ello requiere que el proyecto busque sobre todo la congruencia entre forma y actividad, y que lo haga a través de la estereotipación y la esquematización de los entornos. Es al servicio de esa voluntad de reducir la tensión urbana y de propiciar una identidad social diáfana que se postula la disposición de "información congelada" que se espera que sea capaz "de comunicar los valores socioculturales y dar los índices de comportamiento adecuado"[122].

En resumen, los teóricos que han abordado desde el urbanismo la relación entre comportamientos sociales, pautas culturales y medio ambiente urbano lo han hecho, casi siempre, enfatizando los peligros que para una lectura adecuada —léase una obediencia— de los indicios reconocidos en el proyecto como pertinentes implica una heterogeneidad considerada excesiva o no decodificable con facilidad. Diseñar quiere decir lo mismo que, primero, filtrar la complejidad, hacerla asequible, reducir la sobreexcitación que producen las informaciones desbocadas que emite el espacio urbano; luego, codificar, facilitar e incitar a la legibilidad de lo previamente textualizado. Kevin Lynch había postulado algo parecido al afirmar que el sentido de un asentamiento aludía a la claridad con que podía ser percibido o identificado, y la facilidad con que sus elementos podían ser relacionados con otros acontecimientos y lugares en una representación coherente del tiempo y del espacio, de tal manera que esa representación pudiera ser conectada con conceptos y valores no espaciales[123]. Partiendo de una misma tradición de denuncia de la rigidez y la insinceridad crónicas de la ciudad, Lynch reclamaba una mayor legibilidad de lo urbano, un sistema reconocible de signos que fuera capaz de superar la ansiedad derivada de la imposibilidad de comprender su lenguaje[124].

El destino de este trabajo sobre las estructuraciones significantes del espacio consiste en buena medida en conservar determinados ingredientes pretendidamente idiosincrásicos del lugar. En ese marco general, el papel del monumento vuelve a ser estratégico y a jugar el mismo que siempre tuvo de organizador simbólico del territorio en que se erige y marca, al mismo tiempo que de mecanismo destinado a imponer una determinada relación con un

pasado que se supone común. Levantando o indicando altares a determinados elementos ensalzables del ayer, se promociona y se pone en circulación el capital emotivo que representan —o se entiende que deberían representar— ciertos puntos para los vecinos y los transeúntes. La misión de esta señalización sería la de institucionalizar ciertos aspectos del pasado urbano y procurar la conversión de lugares identificables en lugares identificadores. Todo ello recoge y quiere activar el papel de una supuesta memoria común en la génesis y en la evolución de los tejidos urbanos, aferrados a ciertas concreciones del paisaje de la ciudad. Oriol Bohigas ha hablado de estos puntos también como "elementos primarios", aquellos en los que la colectividad, en el transcurso histórico, parece haberse expresado con "rasgos de permanencia", es decir, signos de la voluntad colectiva, puntos fijos de la dinámica urbana que pueden explicarse como receptores de las actividades fijas, o como componentes no estrictamente funcionales, cuyo valor se encuentra en su propia esencia expresiva, incluso como integradores a un nivel más psicológico de la imagen de la ciudad[125].

Este recurso a las esencias morfológicas y a las estructuras mostradas como transcendentes queda reflejado en la multiplicación de lo que se dan en llamar *lugares de memoria*, más en concreto, hoy, en la protección de restos fabriles y en su conversión después de verdaderas capillas de lo que se conjetura que es una "memoria colectiva". En el plano de la especulación estética, el modelo que prestaba la arquitectura, la tipología y la iconografía industriales —"el poder icónico de la Revolución Industrial", del que hablaba Robert Venturi[126]— ya había tenido un papel importante dentro del Movimiento Moderno, incluso inspirando muchas de sus apuestas formales, como alternativa a las consideradas obsoletas fórmulas del eclecticismo y otras tendencias precedentes. Ya hemos hablado de los neorracionalistas italianos, para quienes la referencia industrial no era solo interpretable en clave estética, sino también como apelación al modelo panóptico o torre panorámica de vigilancia que tanto admiraba Aldo Rossi y que, como se sabe, había estado destinado por su inventor, Bentham, para ser aplicado a espacios industriales y no a los carcelarios a los que finalmente fue destinado. Para los posmodernos se trataría de lo que Paolo Portoghesi describía como "la puesta en circulación de preciosos residuos evocadores"[127], incluyendo aquí la

vernacularidad industrial, cuyo valor es el de carcasa, envoltorio, una pura escenografía seductora al servicio de quien haya encargado el trabajo, sea un centro comercial, una promotora de viviendas o la Administración Pública. Se trata de un historicismo sin materia, caprichoso, vacío, que promueve una memoria trivializada y virtual y de la que resulta un decorado de cartón-piedra no demasiado distinto del que se empleaba en las grandes superproducciones de Hollywood. El detalle vernáculo es entonces un puro ornamento de resonancias históricas, impulsado más con fines teatrales y populistas que no tectónicos, a la manera de "citas" que se relacionan de forma arbitraria y desenfocada con el contexto vivo en que se ubican.

De hecho, bien podríamos decir que el monumento permite no tanto recordar el pasado como anularlo, negarlo, aniquilarlo a través de un tratamiento que, como ocurre con los mitos de origen, hace pensable lo diacrónico como hallándose presente en lo sincrónico, y viceversa. O, más bien, podríamos decir también que el monumento no es ni sincrónico ni diacrónico, sino puramente anacrónico, en tanto que representa la pura ahistoricidad. En este caso, la función de las chimeneas y otros rastros fabriles elevados a la condición de monumentos no es diferente de la que desempeñan los documentos de los archivos, los objetos de los coleccionistas y otros vestigios memorables, que, tal y como hiciera notar Lévi-Strauss en un célebre pasaje de *El pensamiento salvaje*, si desapareciesen, arrastrarían con ellos las "pruebas" del pasado, y nos dejarían huérfanos de ancestros y raíces[128]. Estos documentos son, nos advierte Lévi-Strauss, el acontecimiento en su contingencia más radical, puesto que le otorgan a la historia —la historia oficial, la de las instituciones, claro está— una existencia física. De estos objetos espaciales se podría decir, a su vez, lo que Jean Baudrillard apuntaba acerca de los "objetos singulares" —antiguos, exóticos, folclóricos —: son signos en los que se pretende descubrir la supervivencia de un orden tradicional o histórico que, en realidad, no existiría de no ser por el esfuerzo que se pone en representarlo[129].

Las muestras exaltadas de arqueología industrial están donde están para significar, y para significar justamente el tiempo o, mejor, la elisión del tiempo. Como cosa "auténtica", es decir, exclusivamente representacional, la chimenea monumentalizada tiene lo que le falta a los demás objetos

funcionales que podemos encontrarnos en la ciudad: la capacidad de transportarnos a realidades abstractas inexistentes en sí mismas —la infancia, la patria, la historia, el pueblo— de las que la verdad o la impostura son del todo irrelevantes a la luz de la eficacia simbólica que ejecutan. Lo que se busca con la acumulación casi religiosa de testimonios del pasado histórico son los signos visibles inequívocos de "aquello que fue", puntos fulgurantes que rediman lo que se experimenta como la miseria y el absurdo del espacio cotidiano, núcleos en los que dar con algo que nos hable de nuestra grandeza oculta o de lo que fuimos alguna vez: estigmas felices de "la diferencia", aquella que hace chispear lo que, en caso contrario, no sería más que una inhallable identidad política compartida.

A otro nivel, relativo ahora a los intereses en materia de legitimidad de los propios arquitectos y diseñadores urbanos, la preocupación monumentalizadora pretendería hacer comprensibles y mentalmente habitables los resultados de su propia tarea. No se olvide que el destino de estas estrategias de sacralización de la arqueología industrial suele ser el de conservar, enalteciéndolos, determinados elementos que se suponen idiosincrásicos de todo territorio sujeto a mutaciones urbanísticas. Se trataría entonces de aplicar una fórmula destinada a facilitar la aceptación popular de una producción urbanística fuertemente dirigista, marcada por un cierto despotismo respecto de una opinión pública con frecuencia hostil a sus propuestas de especulación formal. Una actitud que se resume en la manera en que Bohigas le daba la razón a Umberto Eco: "Suele ser más fácil para las masas usuarias vivir en la mala arquitectura que en la buena arquitectura"[130]. En esta misma dirección, en otro sitio escribía: "Con el problema entre la 'opinión pública' y la autoría personalizada, hay que tener el coraje de enfrentarse. No se ha de pensar que lo que dice el pueblo está necesariamente bien, ni que los conocimientos técnicos pueden estar al alcance de la opinión general[131]".

Por medio de ciertas concesiones sentimentales, que las conciliarían con los marcos morfológicos y humanos en que irrumpen, se intentaría evitar que las expresiones de arquitectura o diseño ambiental más o menos "vanguardistas" fuesen percibidas como contrarias a los intereses y gustos de sus usuarios-consumidores. Un factor este especialmente importante cuando

la línea dominante en las intervenciones urbanísticas es la de repetir unos mismos esquemas formales estandarizados, de manera que la imagen singular de los barrios, hasta hace poco claramente diferenciados, tiende a recular en favor de una homogeneización estética cada vez más descarada, paralela a aquella otra que se está produciendo a nivel orgánico y funcional. El objetivo de la monumentalización oficial de elementos no artísticos del entorno sería entonces el de influir en el tratamiento cognitivo que los habitantes vayan a hacer de las nuevas ofertas en materia de medio urbano, amortiguando la emergencia de lo que los sociólogos del entorno llaman "disonancias estructurales", es decir, oposiciones o resistencias con que pueden topar las intenciones de los administradores políticos o de los técnicos a sus órdenes[132].Tendríamos entonces, en resumen, que el establecimiento de elementos primarios o singulares basados en la memoria tendría como objetivo, entre otros, encontrar solución a conflictos derivados de la falta de comunicabilidad, comprensibilidad y popularidad de las innovaciones en materia urbanística.

LA CIUDAD COMO MONUMENTO

La concreción de ese trabajo de producción e impostación de memoria la encontramos, en el caso de Barcelona, en el lugar asignado oficialmente a ciertos puntos del paisaje de la ciudad, a los que, debidamente subrayados, se les encarga la tarea de ejercer una elocuencia políticamente pertinente. Se trataría entonces de lo que Bohigas designaba como elementos "en los que la colectividad, en el transcurso histórico, parece haberse expresado con 'caracteres de permanencia': signos de la voluntad colectiva, puntos fijos de la dinámica urbana", que pueden explicarse "como receptores de las actividades fijas, o como componentes no estrictamente funcionales cuyo valor urbano está en su misma presencia expresiva, hasta como integradores a un nivel más psicológico de la imagen de la ciudad"[133]. Tal tarea didáctica, basada en la organización significativa del espacio y su celebración, se explicitó en dos dominios prioritarios de la actuación municipal desde el principio de la etapa nominalmente democrática. Uno fue el que se presentó como *rehabilitación*, actuación destinada a la redención del espacio y al

esponjamiento clarificador de un paisaje considerado como demasiado denso y con tendencia a la opacidad. El fin reconocido de esa purificación del territorio era el de generar identidad, puesto que de lo que se trataba, según Bohigas, era de obtener "la recuperación de la dignidad formal que ayude a mejorar la conciencia colectiva"[134]. El otro ámbito de semantización preferente es el de la monumentalización. "Monumentalizar la ciudad quiere decir organizarla de manera que se subrayen los signos de identidad colectiva, en la que se respalda la conciencia urbana"[135]. En ese contexto teorizador se define el monumento como "un elemento urbano de carácter permanente, cuya significación, más que estrictamente funcional, asume un estado de espíritu colectivo que participa preponderantemente en el proceso morfológico de un área ciudadana"[136]. De ahí, a su vez, que se llegue a la conclusión de que "la implantación de *monumentos* de fuerte arraigo simbólico puede disminuir la tendencia de disgregación del vecindario de las grandes urbes, al tener un punto de referencia para reconocerse como barrio, una agrupación urbana cada vez menos cohesionada"[137].

Estamos ante uno de los vectores centrales de la política de ritualización del espacio urbano con que las autoridades públicas barcelonesas se comprometieron a completar la tarea de resignificación de dicho espacio que debían administrar a partir de la llamada transición democrática. En general, la dirección que tomó la ordenación simbólica del medio ambiente urbano en Barcelona adoptó como objetivo disminuir los dinteles de ruido semántico y funcionó, como toda ritualización, para desatascar el exceso de información que una ciudad siempre genera, mucho más si se trata de una urbe como Barcelona, extremadamente sobrecodificada y sometida a mutaciones constantes, factores estos a los que se añadía la exuberancia perceptiva que siempre ha tendido la tradición vernácula de las ciudades mediterráneas. Esta intención de esquematizar y hacer diáfanos al máximo los índices cognitivos y de colocar los resultados de esta reducción en un código elemental al servicio de focalizaciones de identidad podría perfectamente haber sido inspirada por Kevin Lynch: "Al hablar del sentido de un asentamiento, me refiero a la claridad con que se puede percibir o identificar, y la facilidad con que sus elementos pueden ser relacionados con otros acontecimientos y lugares en una representación coherente del tiempo y del

espacio, y que esta representación se pueda conectar con conceptos y valores no espaciales"[138].

En esta labor a la que se entregaron las autoridades políticas barcelonesas, consistente en una metaforización territorial destinada a proveer de sentimientos de identidad, jugaron un papel fundamental las operaciones de dramatización espacial, sobre todo —y como veremos con detenimiento enseguida— por lo que hace a la hipervaloración del testimonio arqueológico. Este último aspecto implicó una cierta concesión a las formulaciones de identidad, que bien podríamos llamar tradicionales, que obtienen sus fuentes de legitimización en un pasado histórico más o menos adaptado, del que se procura hacer proliferar las evocaciones. Es evidente que la nueva etnicidad barcelonesa no renunció a los programas esencialistas —con formas adaptadas a los axiomas estéticos del gusto posmoderno, es cierto— apoyados en la invocación constante de un pretérito del cual el *ahora* pretende mostrarse a un tiempo como prolongación y como proyección. Este recurrir a las esencias morfológicas y a estructuras mostradas como trascendentes quedó reflejado en la multiplicación de los ya aludidos lugares de memoria, puestos en valor de segmentos del territorio que tan útiles se han demostrado para la habitabilidad intelectual de cambios vertiginosos y desfiguradores, tanto culturales como tecnológicos y topográficos.

El Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por la izquierda a lo largo de más de tres décadas, fue plenamente consciente de la importancia crucial de una política de lugares o, lo que es lo mismo, de una política de la memoria. Intentó con ello hacerse con el dominio de aquellos mecanismos enunciadores mediante los que todo territorio puede ser pensado. Son dispositivos de esa naturaleza los que acuerdan concederle a los lugares propiedades lógicas, entre las que destaca una inalterabilidad que no poseen las palabras, los hechos o los actos a los que están asociados circunstancialmente. Se produce entonces una reificación de un determinado instante del espacio que pasa a convertirse en un objeto dotado de plusvalía simbólica, punto de calidad que se puede pensar como el sitio en que la ideología o los sentimientos relativos a los valores sociales o personales se revelan. Esa fetichización es lo que hace del lugar un nudo, un lazo que permite resolver las fragmentaciones, las discontinuidades que el paso del

tiempo le impone a la conciencia. El lugar se conduce así haciendo que el presente esté presente en el pasado y el pasado presente en el presente, integrando a uno y a otro en una clasificación de los objetos del paisaje que, en tanto que sistema, no puede ser sino sincrónico.

Se reconoce entonces que a los grupos y a los individuos el territorio solo les puede pertenecer en base a esa tarea poética que consiste en localizar —es decir, dotar de memoria— el cruce entre dos itinerarios y asignarle así a ese punto una significación. Cada cual traza su propio mapa mental de la ciudad, que puede coincidir con los otros planos en sus puntos de referencia, pero no en su organización. Ese ejercicio es aquel que el orden político hace por usurpar, sobreponiendo sus propias producciones simbólicas a las que constantemente generan los practicantes de lo urbano —moleculares o masivos—, que penetran y colonizan el espacio urbano con innumerables memorias aparentemente menores. Es para vigilar y domesticar esa máquina de pensar en que deviene toda ciudad que la política procura imponer sus alternativas y, con tal fin, lleva a cabo una auténtica ocupación simbólica de la ciudad. Contra el murmullo de las calles y de las plazas, contra los emplazamientos efímeros y las trayectorias en filigrana, contra la infinita e inabarcable red latente que trazan las evocaciones multiplicadas de las microsociedades y los individuos que conforman la diversidad contradictoria de la ciudad, el poder político ocupaba la ciudad e intentaba sobreponer, instituyendo sus propios nudos de sentido, la ilusión de su autoridad[139].

Este disciplinamiento de la memoria que instiga toda política monumentalizadora presenta numerosas plasmaciones en Barcelona, consistentes todas ellas en la instauración de lugares retóricos. Por un lado, tenemos la erección de monumentos laudatorios de episodios o personalidades emblemáticos para la historia política, auténticas tumbas vacías rescatadas de su supresión por el franquismo —monumentos a la República, al Trabajo o al doctor Robert— o de nueva factura —president Macià, Ferrer i Guàrdia, Brigadas Internacionales, Guimerà, Pau Casals, víctimas de los bombardeos fascistas, etc.—. Por el otro, la colocación de obras artísticas encargadas especialmente a creadores de renombre —Miró, Pepper, Lichtenstein, Oldenburg, Chillida, Botero, Tàpies, etc.— destinadas a *marcar* los espacios recién troquelados. Pero cabe remarcar sobre todo la

auténtica obsesión que los responsables de la monumentalización parecen experimentar por preservar algunos —y solo algunos— edificios supuestamente proveedores de una identidad espacial, muy especialmente, por convertir restos fabriles —sobre todo, las grandes chimeneas— en verdaderas capillas de memoria colectiva. Ruinas industriales que son insertadas, con frecuencia presidiéndolos, en los nuevos paisajes arquitectónicos, como muchas de las hipnóticas plazas duras con las que los diseñadores de la Barcelona olímpica ganaron el prestigio internacional.

Ateniéndonos al caso barcelonés, la función de estos pecios industriales enaltecidos sería, en una primera instancia, evocar la etapa en que la ciudad era un gran conglomerado de fábricas y talleres, constituyéndose en documentos que demostraban físicamente y hacían la apología de un pasado histórico reciente en que la vitalidad de la ciudad alcanzó sus más altas cotas creativas, ese momento en que, en las primeras décadas del siglo, Barcelona se había abandonado a sus propias energías, encarnadas incompatiblemente y entre frecuentes espasmos de violencia por una burguesía consciente de su papel histórico y por fuerzas populares agrupadas en torno al anarquismo y al republicanismo radical. Es en esa etapa convulsa, y al mismo tiempo sublime, cuando la ciudad mereció el nombre mitológico de Rosa de Fuego. Todo nuevo espacio construido bajo el signo del diseño de vanguardia pasa a concebirse como un museo arqueológico al aire libre que evoca las virtudes fundadoras de esa fase histórica. Pero ese pasado glorioso —se enfatiza— está definitiva e irrevocablemente pasado. Los grandes talleres convertidos en contenedores destinados al consumo o a la cultura, las plazas o parques infantiles que rodean esas imponentes chimeneas exentas fueron —se viene a proclamar— lugares inhóspitos, malolientes, sórdidos, escenarios de la explotación, marcos para la lucha de clases. Helos ahí, ahora: limpios, polifuncionales, asépticos, redimidos del ruido y del humo, sin obreros sucios de grasa, sin patrones abusivos, sin huelgas. Ese es el mensaje definitivo, el que se enorgullece de haber vencido la mugre industrial y el descontento obrero. En un lúcido artículo referido al caso de Barcelona, Juan de la Haba escribió sobre esas ruinas fabriles hoy exaltadas:

> Ellas son una permanencia ornamental al servicio de la nueva escenografía urbana, a través de la cual los barceloneses se encuentran confrontados con una imagen ideal de sí mismos, la

imaginación de una nueva ciudad postindustrial que se pretende limpia, sin humos, saneada, como si hubiese sido liberada de los maltratos del maquinismo. Lo que verdaderamente parecen significar e informar es de la pugna por una calidad de vida, eufemismo de la cultura de un capitalismo "adelantado", de una metrópolis terciaria de nuevo crecimiento y nuevo consumo[140].

Toda política de producción de identidad requiere, como se ha visto, una institucionalización de la memoria, pero, precisamente por ello, al mismo tiempo, una institucionalización igualmente severa del olvido. El escamoteamiento, la ocultación, el borrado de todos aquellos aspectos que pudieran resultar inconvenientes o inútiles para significar pasa a ocupar un lugar de la máxima importancia en la confección de una cultura urbana homogénea. Lo que, por cierto, vuelve a advertirnos de la deuda que los mecanismos de producción de identidad desplegados actualmente en las ciudades tienen con respecto de aquellos que propiciaron en el siglo pasado, y por la vía de lo que Hobsbawm llamó "la invención de tradiciones"[141], los nacionalismos políticos modernos. En efecto, fue Ernest Renan quien llamó en aquel momento mismo la atención sobre el papel que jugaba la amnesia en la formación de las naciones y los nacionalismos: "*L'oubli et, je dirais même, l'erreur historique sont un facteur essentiel de la création d'une nation*" (*Qu'est-ce qu'une nation,* 1882)[142].

Aislando o levantando sitios interesados en constituirse en altares a ciertos —y solo ciertos— aspectos del ayer común, se promociona y se pone en circulación el capital emotivo que representan ciertos puntos y ciertos trayectos para los vecinos, a base de remarcar su función connotativa de un espíritu compartido y como nexos que vinculan las etapas del devenir, siempre tal y como los historiadores oficiales lo conciben y lo organizan. La misión de esta labor de señalización sería entonces doble. Por un lado, y en un primer nivel, rentabilizar partes debidamente institucionalizadas de la memoria urbana. Por el otro, relativo esta vez a los intereses en materia de legitimidad de los propios arquitectos y diseñadores urbanos, la preocupación por monumentalizar pretendería hacer comprensibles y mentalmente habitables los resultados de su labor. Se trataría en este caso de una fórmula para facilitar la digestión popular de una producción urbanística y arquitectónica fuertemente dirigista, marcada por el más absoluto despotismo

con respecto a una opinión pública a veces francamente hostil a sus propuestas[143]. A través de ciertas concesiones sentimentales que las conciliarían con los marcos morfológicos y humanos en que irrumpen, se intentaría evitar que las expresiones de arquitectura o diseño ambiental vanguardistas fueran percibidas como imposturas o excesos contrarios a los intereses y gustos de sus usuarios-consumidores. Citando la opinión de los teóricos italianos pioneros en este tipo de perspectivas, el propio Oriol Bohigas reconocía que la orientación preocupada por el establecimiento de elementos primarios basados en la memoria tiene como objetivo, entre otros, encontrar "una respuesta completa al conjunto de problemas suscitados por la cuestión de la comunicabilidad entre arquitectura moderna y comunidad", y se enmarca en "la sensibilidad por los problemas de comprensibilidad y popularidad de la arquitectura"[144].

Nos reencontramos en la Barcelona posmoderna con el viejo esfuerzo que todo monumento implica: el de la *polis* por someter a la *urbs*. El monumento quiere imponer lo lógico sobre lo heterológico, lo normalizado sobre lo heteronómico o sobre lo anómico. El monumento expresa la voluntad de hacer de cada espacio un territorio acabado, definido, irrevocable. El monumento fetichiza el espacio, lo rescata de la acción subversiva del tiempo cotidiano, de la zapa a que se entregan sin descanso las prácticas ordinarias. El monumento está siempre ahí, indiferente al paso del tiempo —como en aquella canción de Suburbano sobre la Puerta de Alcalá de Madrid, que popularizaron Ana Belén y Víctor Manuel—, de espaldas a las repeticiones y las diferencias, centro estable al que no parecen afectar la cascada de sucesos que se desencadenan sin parar a su alrededor. Inalterable, ajeno a los conflictos, a las contradicciones, a las paradojas que lo asedian desde abajo, todo monumento —Henri Lefebvre lo entendió bien— expresa la voluntad de afirmar con toda rotundidad un principio debido a Hegel: a saber, el Tiempo histórico engendra el Espacio en que se extiende y sobre el que reina el Estado[145].

El monumento es la consecuencia de la preocupación de toda administración política por mantener puntos poderosos de estabilidad, lugares exactos que representan lo que no transcurre, lo que está a salvo del tiempo. De ahí el acierto de Deleuze y Guattari al sugerir una oposición

sustancial entre ciudad y Estado, parecida a la de *urbs versus polis*. La ciudad mantiene una relación de analogía con la carretera, puesto que esta solo puede ser los circuitos, que no hacen otra cosa que recorrerla en red. La ciudad se define por las entradas, por las salidas, pero, sobre todo, por los itinerarios que en ella se inscriben sin descanso. Por eso, la ciudad es, para Deleuze y Guattari, un *fenómeno de transconsistencia,* a diferencia del Estado, que es un *fenómeno de ultraconsistencia*[146]. De ahí el empeño de este último en hacer resonar los puntos en que consiste su voluntad de cristalizar a toda cosa —es decir, en estabilizarse y estabilizarlo todo—, en mostrarse como natural e irrevocable, en marcar de manera lo más indeleble posible las fijaciones en que presume estar, puesto que el Estado ante todo *está,* a diferencia de lo urbano, que no está, sino que *acaece.*

LUGARES DE OLVIDO

Acabamos de ver cómo las grandes políticas de monumentalización suelen ir en pos de un objetivo bien claro: superponer producciones simbólicas institucionalmente adecuadas a las que constantemente genera la vida real, aquella que va sembrando sin descanso el espacio urbano con sus memorias innumerables. Las políticas monumentalizadoras lo son, en realidad, de y para una memoria de mentirijillas, una magna operación de maquillaje que convierte el recuerdo en una parodia basada en la réplica y el simulacro, evocación de espacios inexistentes que contrastan con la proliferación de espacios desmemoriados, pérdidas en masa de significado en nombre de una pseudomemoria cosificada y fraudulenta. Ahora bien —también lo hemos visto—, esas políticas de memoria emprendidas por las autoridades suelen ser, en realidad, políticas de y para el olvido.

En Barcelona, por ejemplo, no se ha tenido ningún escrúpulo a la hora de destruir ámbitos emblemáticos de barrios enteros, como la Barceloneta, el Poblenou o Sàrria, o, como hemos visto, desguazar una buena parte de Ciutat Vella, donde una necesaria reforma interior se ha llevado a cabo sin la más mínima sensibilidad. La puesta en escena de los imaginarios urbanos oficiales no ha respetado apenas nada, excepto chimeneas, dependencias fabriles aisladas y nombres de antiguas instalaciones —la Espanya

Industrial, la Pegaso, l'Escorxador, la Sedeta, el Moll de la Fusta, la Fari nera, Can Felipa, la Maquinista…—, todos ellos restos reconvertidos en un mero acompañamiento decorativo de un estilo urbanístico uniforme y uniformizador. Las expresiones radicales de este principio han sido barrios enteros, como la Vila Olímpica o Diagonal Mar, espacios atractivos, previsibles, controlados, pensados para que en ellos habitaran vecindarios ejemplares. Al lado del tratamiento estetizante de las reminiscencias del pasado, las intervenciones urbanísticas realizadas en los últimos años en Barcelona han seguido una orientación en extremo homogeneizadora, de manera que la diferenciación entre barrios, hasta entonces con una fuerte personalidad social y formal, ha ido disminuyendo gradualmente. La tan elogiada apertura de los bulevares en Nou Barris o la de la Rambla del Raval y la extensión de la Diagonal hasta el mar, pongamos por caso, han seguido criterios formales prácticamente idénticos. No hay que decir que en casi ningún caso se ha realizado estudio alguno de cuáles son los referentes sensitivos que los usuarios habituales de las zonas reformadas utilizaban en sus prácticas cotidianas.

Se ha denunciado que iniciativas como la urbanización de la zona de Glòries, el Distrito 22@ de Poblenou o la embocadura marítima de la Diagonal no dialogaban con la memoria del lugar y eran ejemplos de una arquitectura casi autista. No era esta una característica de los nuevos aires que dominaron las políticas urbanísticas en Barcelona, después de que se abandonaran las ideas de nueva centralidad. Es verdad que el edificio Fórum de Herzog y De Meuron o la Torre Agbar de Nouvel son implantaciones extrañas en el tejido urbano en que se instauran, pero no lo fueron menos el Auditori de Moneo o el Teatro Nacional de Bofill en relación con el barrio de Fort Pienc en el que se ubican ignorándolo. Es destacable la crítica que señala el centro comercial de La Maquinista, en Sant Andreu, como un ejemplo de amnesia consumista, puesto que no se rinde el justo homenaje a lo que había sido la factoría metalúrgica de ese nombre que ocupó durante décadas su terreno[147]. En cambio, se ha mantenido el nombre del lugar, cosa que no ha pasado con Glòries Center, una obra de y para el 92, donde se ha mantenido la fachada, pero nada —ni el nombre— evoca que allí había estado la Hispano-Olivetti. Al mismo tiempo, hemos visto organizar un

auténtico culto a los maestros del modernismo de cara al turismo —Quadrat d'Or, Año Gaudí—, a la vez que magníficos exponentes del movimiento han sido destruidos.

Es, por ejemplo, el caso de la Can Buxeres, suprimida por la apertura de la Rambla del Raval, pero hay un puñado de otros no menos escandalosos. La apertura de la Illa Sant Ramon supuso la destrucción del conjunto histórico de Can Gelabert, de los siglos XVIII y XIX, también en Ciutat Vella. La de la Illa Robadors implicó la destrucción de la Casa Josep Botey y de la Casa Josep Ticò, también de notable valor[148]. Entre las edificaciones amenazadas había, paradójicamente, la de Joan Bohigas, el abuelo de Oriol Bohigas, en la Carrer de la Riera Alta. El descubrimiento de los restos del barrio de la Ribera que las tropas borbónicas habían obligado a destruir a sus propios habitantes suscitó una extraordinaria polémica sobre cuál debía ser su destino y el grado de su enaltecimiento. En cambio, al mismo tiempo, un número indeterminado de yacimientos arqueológicos antiguos o medievales fue destruido por la construcción de *parkings* en el centro histórico. Un conjunto del siglo XIX tan interesante como el de la barriada del Taulat en el Poblenou ha caído bajo el empuje del 22@. La ampliación del Museo Picasso, en el Carrer de Montcada, afectó a diversos palacios góticos e hizo irreconocible la primera ampliación ortogonal de Barcelona en el siglo XII, así como la ampliación del Museo de la Ciencia ha "obligado" a La Caixa ha destruir los restos de lo que había sido la Nova Betlem, un manicomio emblemático de la historia de la psiquiatría hospitalaria europea de finales del XIX[149].

Ciertos elementos del pasado fabril han merecido el indulto y han sido ensalzados a albergar centros administrativos o lugares de culto a la Cultura. Imitando la lógica de la amortización de los bienes eclesiásticos en otra época, algunas fábricas son ahora museos, centros de cultura, universidades, bibliotecas, centros sociales… Pero los defensores oficiales del patrimonio industrial, que ordenaban fetichizar algunos de sus aspectos convenientemente descontextualizados y redimidos de sus antiguas funciones, son los mismos que han sentenciado a muerte espacios industriales emblemáticos, como la Neufville, en Gràcia, o la fábrica noucentista de Myrurgia, en la Sagrada Familia. En febrero de 2016, la Aso-

ciación de Vecinos de Poblenou denunció que el Ayuntamiento llevaba cuatro años sin ocuparse de mantener en condiciones el centenar de restos industriales catalogados en el barrio, algunos especialmente representativos de su pasado obrero, como Can Ricart, las cocheras de TMB o La Escocesa.

Los grandes depósitos de gas que dominaban el norte de la sierra de Collserola —los famosos "huevos de Porcioles"— fueron desmantelados a finales de 1991 en nombre de la preservación de un paisaje que poco después sería desfigurado por las nuevas cocheras de autobuses en Horta. Ni que decir tiene que resulta especialmente escandaloso el arrasamiento masivo de todo el paisaje industrial que se extendía a lo largo de litoral barcelonés, para dar pie al nuevo *skyline* de la ciudad, con los nuevos barrios de clase media y alta, los hoteles de lujo y los edificios singulares para todo tipo de multinacionales: en esa parte de Poblenou, donde hubo cientos de fábricas y talleres, vemos levantarse la Vila Olímpica, Diagonal Mar o el 22@. Y las agresiones contra el patrimonio industrial de Barcelona, hechas en nombre de la desidia o la codicia, son mucho más numerosas y se extienden a diestro y siniestro de la ciudad[150].

Se han continuado erigiendo los lugares de la memoria oficial, mientras que las memorias menores y masivas de los ciudadanos han ido perdiendo sus auténticos puntos de referencia vivenciales: cines de barrio que no se han podido reconvertir en asépticas salas multicine; locales como el Salò Iris o el Price; teatros o salas de fiesta como La Paloma, la Cibeles, la Bodega Bohemia o el Arnau, lugares fundamentales para el verdadero patrimonio perceptual y sentimental de los barceloneses, como el conjunto que formaban en la Plaça d'Espanya las diversas construcciones en ladrillo diseñadas por Rubió i Tuduri. De todas las cosas en que se hubiera podido convertir el abandonado edificio de TVE en Miramar, se ha escogido la opción de un hotel de lujo, del estilo del que se levanta en l'Illa Robadors, justo enfrente del punto donde murió asesinado Salvador Seguí, el Noi del Sucre, uno de los referentes morales del movimiento obrero catalán del siglo XX. Una paradoja no muy distinta de la que implica que se bautice con el nombre del líder del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), Andreu Nin, la plaza que hoy domina la sede de El Corte Inglés en Nou Barris. El Sepu es ahora la sede de Nike; el café Canaletes es una hamburguesería de la cadena

McDonald's. El turismo ha arrasado con casi todos los comercios y locales tradicionales de las Ramblas, el Gòtic, la Barceloneta, el Raval… Todo el centro de Barcelona se ha llenado de locales "de ambiente", concebidos para una clase media cosmopolita que puede satisfacer precios nada populares. El Turó de la Rovira, en el Carmel, ha pasado de ser un lugar delicioso al que se acudía para contemplar la mejor vista de Barcelona a convertirse en un hervidero de turistas. Es cierto que otros lugares no menos emblemáticos habían ido desapareciendo y que todos los que hemos mencionado acaso debían correr más tarde o temprano la misma suerte, pero no todos, ni al mismo tiempo, ni de esta manera.

Ni con tanta desvergüenza. Acaso una de las reflexiones más profundas y sentidas sobre la desolación que está sufriendo Barcelona es la debida a Juan José Lahuerta, en un librito que es todo él una pequeña joya que resume en unas pocas páginas hermosamente editadas el error y el horror de lo que el mismo título del libro —*Destrucción de Barcelona*— es síntesis. Refiriéndose a la devastación de la ciudad y los simulacros de memoria con que se pretende disimularla, escribe Lahuerta: "¿Qué puede haber más cruel, más feroz, que aspirar toda la carne de un barrio conservando sus huesos o caparazones, y más desvergonzado que usarlos como signos de supuesto respeto, de recuerdo o de memoria? Memoria: ¿de qué o de quién?"[151].

Esta lucha contra la memoria popular encuentra su culminación en macrocentros comerciales que pretenden convertirse en escenarios para una especie de sucedáneo de vida ciudadana. Como el nombre de uno de ellos explicita —l'Illa Diagonal, diseñada por Rafael Moneo—, estos complejos pretenden crear auténticas islas, territorios claramente recortables de su entorno, en los que el visitante-consumidor puede encontrar maquetado un tipo de ciudad virtual, una escenificación del microcosmos urbano, con sus calles, plazas, cruces, bancos, establecimientos de *fast-food*, juegos para los niños, bares y cafés con sus terrazas en el exterior, cines multisala, por supuesto tiendas, etc., todo adobado con músicos y cómicos falsamente ambulantes distribuidos estratégicamente por la propia empresa administradora del lugar. En Barcelona tenemos un buen número de ejemplos de ello. Glòries Center da la espalda al Clot y se inauguró abriéndose a un espacio en blanco, sin edificaciones, a la espera de una urbanización de los

alrededores que tardaría todavía más de una década en reiniciarse. Diagonal Mar existe negando que cerca de allí le acecha La Mina, el barrio marginal por antonomasia en el imaginario social dominante. Heron City es un parque de atracciones difuso que ignora deliberadamente la barriada de Sant Andreu que lo rodea. La mencionada Illa Diagonal espera que sus clientes sean vomitados directamente de su *parking* subterráneo; se desentiende de Les Corts, el barrio que tiene detrás. Una franja de terreno de seguridad separa La Maquinista de Sant Andreu y la Sagrera y no sabe nada de su pasado de efervescencia industrial y de luchas obreras. El gran centro lúdico-comercial de Les Arenes no dedica ningún rincón a evocar que aquello fue el escenario de encuentros de masas fundamentales en la historia proletaria y rebelde de Barcelona.

Bien podríamos decir que estos entornos pseudourbanos se conforman como auténticas reservas naturales, en las que la especie protegida es la vieja cultura de las aceras, puesta al abrigo de las inclemencias del tiempo y del tráfico de vehículos, pero no menos de los mendigos, de las manifestaciones de protesta y de los disturbios, es decir, en resumidas cuentas, de la crónica tendencia al conflicto que experimenta el espacio público en cuanto se le deja de veras ser público, es decir, accesible a todos. Su funcionamiento no es distinto del de los modernos parques de atracciones temáticos, en el sentido que procuran una imagen falsificada de la vida urbana, puro decorado para una ciudad-farsa. Se pretende escenificar en ellos un espacio público tranquilizado, permanentemente vigilado por cámaras de vídeo y guardias jurados, donde los peatones, liberados de cualquier motivo de desasosiego, puedan abandonarse al paseo, al ocio y, por encima de todo, al consumo. Hay ejemplos especialmente patéticos de ello. La burda imitación del aire de los pasajes comerciales decimonónicos en Gran Via 2, en la Zona Franca, sería uno de ellos. Barcelona debe ser la única ciudad del mundo que, en una apoteosis difícilmente superable del reino del simulacro, puede presumir de tener un muelle donde nunca ha recalado ningún barco: el del Maremagnum, que, en efecto, tuvo que instalar uno para justificar su declaración de zona portuaria y permitir que sus comercios abrieran los días festivos[152].

Estos complejos comerciales —cuya proliferación y crecimiento han quedado limitados desde el Gobierno de Ada Colau— implican una negación

absoluta del territorio con memoria, incapaces de expresar identidades, sin marcas relacionales o históricas. Cada uno de ellos implica un hueco, un agujero, un paisaje ausente. Llama la atención la manera en que han impreso su estilo a las concepciones actuales del espacio público en general. Los vestíbulos de las grandes estaciones de tren, de las correspondencias del metro o de los aeropuertos están transformándose en galerías comerciales. De hecho, cada vez más puede afirmarse que no es que el centro comercial imite la ciudad, sino que es la ciudad la que copia el modelo que le prestan los centros comerciales. Los núcleos históricos de las ciudades están siendo peatonalizados para hacer de ellos superficies comerciales polifuncionales. Barcelona es un ejemplo. La Plaça de Catalunya, el Portal de l'Àngel y las calles que desembocan en la parte alta de La Rambla se presentan como un centro comercial natural y lo asumen de una manera explícita, designando el conjunto como Barna Center[153]. Los alrededores de la Plaça María Cristina son también un gran espacio comercial que imita los *molls* de y para el consumo.

Siguiendo este referente, en Cataluña todas las poblaciones importantes han hecho de su núcleo una réplica de los centros comerciales, en la que los monumentos y las catedrales se añaden a la escenografía y dan al conjunto un cierto *look* vernáculo. Se alcanzan así, justo en medio de las ciudades, territorios eximidos de cualquier cosa que pueda obstaculizar los itinerarios y los altos de los compradores, espacios, no hay que decirlo, rigurosamente vigilados. Los comerciantes del Carrer de Sants, en Barcelona —un magnífico ejemplo de ese tipo de dinámicas—, se anuncian presentándose como "el mayor centro comercial de Cataluña". Más allá todavía, es la ciudad entera la que se brinda como un colosal *shopping*. Desde la Navidad de 1997, un lema de promoción de los comerciantes barceloneses, finalmente asumido por la propaganda oficial, proclama como lema: "Barcelona, la mejor tienda del mundo"[154].

La memoria oficial y la memoria mercantil significan, en realidad, una amnesia total, o mejor, la voluntad de camuflar aspectos inconvenientes o molestos del pasado real de la ciudad. Las políticas publicitarias sobre Barcelona llevan años proclamando la mediterraneidad de la ciudad y mostrando como un éxito "la recuperación" de su litoral marítimo. Barcelona

—se ha repetido— ha vivido demasiado tiempo "de espaldas" a su realidad mediterránea y era urgente "abrirla al mar". Curiosa afirmación, que supone olvidar que la ciudad había tenido barrios pescadores hasta hacía poco, empezando por la Barceloneta, pero incluyendo también esa trastienda ignorada que se extiende al otro lado de Montjuïc y que fue la Marina de Sants, con barrios marítimos como Mare de Deu de Port y —antes de convertirse en un barrio de barracas— Can Tunis, después absorbidos, en los años sesenta, por la ampliación del puerto y el establecimiento de la Zona Franca.

Supone igualmente —y eso acaso es más grave— olvidar que, durante décadas, miles de personas vivieron literalmente en la playa, en los grandes asentamientos de chabolas del Somorrostre, el Bogatell, el Camp de la Bota, la Mar Bella, el Pekín. Pero esta subciudad de chabolas no existió nunca o aquellos que en ella vivieron no hace tanto, por lo visto, no eran auténticos barceloneses. Por otra parte, esta debilidad a la hora de exaltar los valores marítimos no ha sido inconveniente para eliminar los entrañables chiringuitos de la Barceloneta. O para que la zona comercial del Hotel Arts, a la sombra de la gran escultura en forma de pez de Frank Gehry, devorara una buena parte del Passeig Marítim. O para que los hoteles y viviendas de alto *standing* y los hoteles de Diagonal Mar acabaran levantando entre la ciudad y la playa una muralla mucho peor que la que supusieron en otra época las abominadas vías del tren. Por no hablar de las catastróficas consecuencias de las obras del Fórum 2004 sobre el litoral barcelonés, de dudosa legalidad a la luz de la ley de costas y denunciadas en su momento por Greenpeace por sus efectos sobre el medio ambiente. ¿Fueron muestras de "recuperación del mar" agresiones directas contra el horizonte como el Imax del Port Vell, el Word Trade Center —esa apoteosis del quiero y no puedo que está saturando el "modelo Barcelona"—, que amputa la desembocadura visual de La Rambla, o el nuevo edificio de Catalana de Gas, que literalmente tapona la perspectiva desde el paseo de Sant Joan y el Arc de Triomf?

Se prohíbe que los vecinos tiendan la ropa en unos balcones que muchas de las nuevas edificaciones ya ni prevén. Se han eliminado los Encants Vells, en la Plaça de Glòries. Un rincón tan cargado de evocaciones como era la Escollera, el rompeolas del puerto, ha sido destruido por el Hotel Vela, una

nueva ampulosidad retórica de Ricardo Bofill. En el Turó Park, la zona verde diseñada en 1938 por Rubió i Tuduri, en noviembre de 2003 se talaron dos de sus tres tilos centenarios. El inventario de las destrucciones o los abandonos patrimoniales es enorme, y lo conformarían todos aquellos que, en las antípodas de los lugares de memoria, haríamos bien en designar como auténticos lugares de olvido[155].

Desaparece en nombre de la uniformización moral, política y estética de Barcelona todo aquello que estimuló la imaginación literaria de Orwell, de Pierre Mac Orlan, de Malraux, de Kessel, de Eduardo Mendoza, de Henry Miller, de Francis Carco, de Italo Calvino, de Carmen Laforet, de Jean Genêt, de André Pieyre de Mandiargues, de Luis Goytisolo, de Vassilis Alexakis… De Vázquez Montalbán, que había llorado sobre los escombros del Céntrico y que percibió este proceso con una lucidez especial: "[Barcelona] destruye su arqueología de la lucha de clases, dispersa sus barrios residenciales o los pinta de yuppi, derriba sus carnes marginales y las expulsa hacia la periferia, fumiga su mezquindad hasta convertirla en fantasmas risibles que vagan por laberintos destapados por *bulldozers*… Yo no sé quién hará en el futuro literatura de esta ciudad de yuppis, dividida entre pensadores de la nada y del poco y habitada por empleados transitorios y ricos *fastfood*"[156]. Comentando la inauguración de la nueva sede de Edicions 62, en el Carrer Peu de la Creu, justamente donde antes se levantaba el cine Céntrico, Vázquez Montalbán recordaba que aquello estaba "a pocas manzanas de donde asesinaron al Noi del Sucre o de donde un panadero que dormía más que vivía en mi calle sorprendió a su mujer follando con un pulidor de metales"[157].

Todas estas reflexiones seguramente se le antojarían a Oriol Bohigas como una expresión de lo que él llama el "síndrome Pessoa", una atracción morbosa hacia las miserias suburbiales que experimentan ciertos esnobs. "El síndrome Pessoa es el más peligroso, porque tiene un punto de romanticismo agónico —como la tuberculosis del XIX— que entusiasma todo tipo de nihilismo poético"[158]. Todos los argumentos precedentes podrían parecer síntomas de este tipo de enfermedad, pero no lo son en absoluto. Las ciudades cambian —nos lo recordaba Baudelaire— "más que el corazón de un mortal" y es verdad que puede haber mucho de afectación pequeño-

burguesa en la devoción por ciertos ambientes muchas veces artificialmente cochambrosos y envejecidos, como imagen de una cierta idea no menos prototípica y tematizada de la vida urbana. No se trata de denunciar como perversa toda transformación urbana, sino de señalar a quiénes favorecen tales transformaciones, que no suele ser a la mayoría social.

Ahora bien, hay un escamoteamiento más doloroso que todos los otros, que afecta a los magníficos nuevos espacios de la Barcelona reformada con motivo del Fórum Universal de las Culturas. Más imperdonable que el olvido de aquellos que vivieron allí es el de aquellos que encontraron en aquel lugar una muerte trágica e injusta. En lo que acabaron siendo los territorios del Fórum, a la sombra de los hoteles del lujo, de los centros de convenciones, de los edificios de alto *standing* de Diagonal Mar, de su centro comercial, allí donde estaba prevista la presencia de miles de visitantes que practicarían una urbanidad sosegada y previsible, allí se levantaba un siniestro parapeto del que algunos todavía pueden acordarse. Contra aquella pared, en el Camp de la Bota, un número de personas difícil de calcular —oficialmente 1.704— fueron fusiladas a lo largo de la década de los cuarenta y hasta el Congreso Eucarístico de 1952. Nadie pensó en ellas a la hora de elaborar los planos, los proyectos, las maquetas, los folletos de promoción, las campañas publicitarias. El monumento que se había erigido en memoria de los ejecutados no figuraba indicado en ninguna de las guías del recinto que recibían los visitantes del Fórum. Como si no estuviera. La única excepción a este olvido fue el muro que Josep Lluís Mateo levantó en el flanco norte de su Palau de Congressos, una pared picada que evoca los impactos de bala de aquel otro muro que allí mismo había sido escenario de una mortificación humana practicada sistemáticamente y en masa[159]. Las nuevas funciones asignadas al castillo de Montjuïc o lo que venga a ocupar el solar que deje la Cárcel Modelo tampoco evocarán que aquellos fueron también sitios de ignominia, de martirio y de ajusticiamientos de luchadores por una democracia bien diferente de aquella que ahora se supone que disfrutamos. No existe en Barcelona ningún lugar que hable de ellos[160].

¿Qué hay que recordar? ¿Qué conviene olvidar? ¿Qué interesa tener presente? ¿Y para qué? ¿No es mejor proclamar a gritos —sin decirlo— que el parapeto no existió, que los centenares de no fusilados allí nunca no fueron

fusilados? Porque nadie fue fusilado allí ni en ningún sitio, nadie fue perseguido en esta tranquila ciudad que abría sus puertas al abrazo cósmico entre culturas. Aquí nadie fue torturado, nadie murió acribillado, porque no hubo ninguna guerra, ni ninguna posguerra, ni barracas, ni miserables, y, todavía menos, muros de fusilamiento. Antes del Fórum no había nada. Un espacio vacío y virginal que esperaba ansioso la llegada de los arquitectos y los publicistas, impaciente por ser rescatado de la nada.

Se han hecho muchos análisis para explicar el fracaso del Fórum 2004, aquel acontecimiento que iba a cambiar el mundo —prometía la publicidad — y al que acudirían millones de personas. Sin embargo, es difícil no sospechar que aquel espacio desolado y desolador que fue el recinto del Fórum durante casi toda su celebración no resultara víctima de una maldición. Como si los muertos en el Camp de la Bota hicieran pagar el pecado imperdonable de su ostracismo. Porque ellos continuaban allí. Sus cuerpos nunca fueron retirados; seguían amontonados el uno sobre el otro, en una pila inmensa que nadie veía, pero que allí estaba. El mal olor que no se consiguió disimular y que los visitantes al Fórum tenían que sufrir no procedía de la depuradora sobre la que se extendía su vacía grandilocuencia. La peste provenía de los cuerpos putrefactos de muertos que se negaban a marcharse. Quizás un día, al amanecer, a la hora de los ajusticiamientos, los espectros de los ejecutados despierten para ajustarle las cuentas a la ciudad que se atrevió a negarlos, a ellos y a la deuda que con ellos tenía contraída y que nunca les podrá pagar. Los visitantes del Fórum no sabían que caminaban entre fantasmas que los odiaban, porque odiaban —con razón— el olvido a que se les condenaba.

CONTRA EL LABERINTO

Se ha hablado de *lugares de memoria* y se ha hecho dando por buena una noción que la historiografía francesa puso en circulación hace algún tiempo[161]. Pero quizá sería momento de someter ese valor a una cierta consideración crítica. Para los historiadores, un lugar de memoria es aquel punto en que se produce un retorno reflexivo de la historia sobre sí misma. Ahora bien, acaso deberíamos reconocer, de entrada, que un lugar solo existe

en tanto la memoria de un modo u otro lo reconoce, lo sitúa, lo nombra, lo integra en un sistema de significación más amplio. Dicho de otro modo: un lugar solo lo es porque un dispositivo de enunciación puede pensar o decir de él alguna cosa que por él o en él es recordada, esto es, tenida presente[162]. Decir "lugar de memoria" no deja de ser entonces un pleonasmo, puesto que un lugar solo llega a ser distinguible a partir de su capacidad para establecer correspondencias que permiten dibujar una cruz sobre la superficie del territorio en que se ubica. *Lugar* se entiende entonces como sinónimo de *sitio*, un punto que ha merecido ser resaltado en el mapa, apoteosis del territorio, lugar de la cosa, es decir, accidente topográfico que se define por haber sido ocupado o estar a la espera de un objeto o entidad que lo reclama como propiedad —"un sitio para cada cosa, una cosa para cada sitio", se dice—, lugar que existe a propósito para una acción o conducta adecuada —"saber estar en su sitio"—, plasmación espacial de un determinado papel o estatuto —"poner en su sitio" a alguien; considerar "este es mi sitio"—. De ahí también la noción de *sitiar* como acción de asediar un territorio defendido, para rendirlo o apoderarse de él. Como ha escrito Fernández de Rota, un sitio es "un espacio perpetrado de moralidad"[163].

Se habla entonces de una cosificación territorial de algo o alguien que no puede ser sustituido por nada o por nadie más, marca concreta hecha sobre el espacio, un punto de calidez en el que la ideología o los sentimientos relativos a valores sociales o personales se revelan. Esta fetichización es la que hace del lugar un nudo, un lazo que permite resolver tanto social como intelectualmente las fragmentaciones, las discontinuidades que toda complejidad le impone tanto a la consciencia como a la percepción. El control sobre estos mecanismos es lo que todo orden político intenta en sus relaciones con el espacio social. Es para cumplir este objetivo que hemos visto que se orientan las políticas monumentalizadoras y que se instauran puntos del paisaje oficialmente elocuentes. Pero estas operaciones de domesticación-unificación de la memoria pública solo son posibles en la medida en que suplanten o parasiten las que lleva a término una multitud inmensa de grupos e individuos que someten el territorio que usan a una tarea idéntica de poetización, consistente tan solo en *localizar*, es decir, dotar de memoria, el cruce entre dos itinerarios y asignarles así una significación.

Lo urbano deviene entonces urdimbre de caminos e intersecciones, con los que cada cual levanta, solo o en compañía, su propio mapa de la ciudad, que puede coincidir con los otros planos en sus puntos de referencia, pero no en su organización. Como escribió magistralmente Maurice Halbwachs a principios del siglo XX, la diferencia entre la memoria social en las sociedades tradicionales y la memoria social en las ciudades es que la primera es *compartida*, mientras que la segunda es *colectiva*[164]. En efecto, no todo lo que es colectivo ha de ser por fuerza común. La memoria urbana puede ser perfectamente fractal y atómica, dispersa e inestable, y es justamente esto lo que le permite ser hasta tal punto integradora. La memoria institucional, en cambio, quiere ser memoria orgánica, memoria reducida, central, unificada, complaciente, tranquila…, y todo ello se deriva de su esperanza de beneficiarse de lo que pueda quedar de añoranza de una organicidad social ya irrevocablemente enajenada.

Con la memoria urbana pasa lo mismo que con la imagen de la ciudad. Raymond Ledrut titulaba una de sus obras más emblemáticas *Les images de la ville,* para oponerse a "la imagen de ciudad" postulada por Kevin Lynch[165]. Al hacerlo, advertía que ese campo de significación que es la experiencia urbana es un sistema heterogéneo y diferenciado, hecho de encabalgamientos y cruces de significaciones, no por fuerza armoniosos, puesto que en él las incompatibilidades y los choques son constantes. Eso es lo que le permitía a Ledrut señalar la distancia inmensa que suele haber entre el imaginario del urbanista y los esquemas imaginarios que aplican o que reconocen quienes están o recorren un espacio urbano cualquiera, del vecino al merodeador. Del mismo modo tampoco existe una memoria urbana. Existen *memorias urbanas,* o, en cualquier caso, una memoria al mismo tiempo coral y diseminada, una polifonía de pasos que sigue todo tipo de rastros en todas direcciones y a todas horas, un único mecanismo interactivo que manipula los mismos elementos cronológicos y topográficos de una forma infinitamente diversa.

Ante el engrudo de evocaciones múltiples que conforman la memoria urbana, la memoria institucional opera de forma similar a como lo hacen otras formas de memoria. Los grandes teóricos pragmáticos del recuerdo —G. H. Mead y Henri Bergson—, y los epistemólogos constructivistas después, han

distinguido dos tipos de memoria: una memoria en sucio, por así decirlo, constituida por la totalidad almacenada de evocaciones posibles, y otra memoria extremadamente selectiva, que escoge entre todas las imágenes del pasado disponibles, entre todas las historias posibles, aquellas que mejor se adecuan a los intereses prácticos del presente. Esta última memoria —una memoria de segundo orden, en realidad— es sobre todo memoria viable, memoria en acto, memoria destinada a dotar de congruencia una acción que se presupone orientada hacia objetivos, entre los cuales destaca el de dotar de sentido y legitimidad al presente o atenuar las dosis de incertidumbre que oscurecen el porvenir. Dicho de otra manera, no es el presente lo que resulta del pasado, sino —como muy bien intuyó George Orwell— el pasado conmemorado, monumentalizado, enaltecido, etc., lo que resulta de las contingencias prácticas del presente y de las metas a alcanzar en un futuro, siempre según la versión, no hay que decirlo, de quienes controlen en cada momento los medios de producción de significados. La memoria imita en el plano simbólico lo que hace la memoria específica, que fija genéticamente la conducta de los animales, o la memoria cultural, que garantiza la transmisión de las tecnologías humanas: escogen sus contenidos en función de unos movimientos intencionales y de unos intereses que, por definición, no se contempla que puedan ser ni contradictorios ni indeterminadamente diversos.

Esta memoria de segundo orden es también una colosal máquina de olvidar, un extraordinario dispositivo amnésico, que borra todos aquellos elementos que pudieran considerarse superfluos, disfuncionales o contraindicados en relación con las metas ideológicas a alcanzar. Se trata de la construcción afectual, simbólica y escenográfica de una filiación identitaria, solo relativamente distinta, como vimos, de aquella que se propiciara desde el viejo nacionalismo decimonónico. La finalidad continúa siendo la misma: salvar en la medida de lo posible un principio de agrupación social unitaria y cálida, inviable por la acción de fuerzas igualmente poderosas, aunque contradictorias —globalización y desintegración de las experiencias—, con las que el proceso de modernización amenaza con liquidar los restos de cualquier comunalismo. Esta identidad compartida al servicio de la politización de los territorios —otrora las naciones, hoy las ciudades— solo es posible obedeciendo una

pauta paradójica: negación absoluta de lo que se es, en realidad, la supresión de raíz de todo recuerdo impertinente o inútil con el objetivo de producir una cultura urbana homogénea y una mística de la ciudad. Porque implican un propósito pedagógico, destinado a dirigir la percepción y su tratamiento mental para el vecino y el transeúnte, la arquitectura y el diseño urbanos actuales están en gran medida consagrados, hoy, a hacer aprender de memoria un determinado orden del pasado, una gramática estandarizada y unificada que exige la desmemoria o, cuanto menos, la devaluación de todos los dialectos con los que se había venido enunciando la multiplicidad de historias moleculares.

Y es que todo orden estructural, cualquier organicidad exige inexcusablemente una "memoria". No es que tenga una historia, sino que afirma *ser* esa historia. Toda pretendida reducción a la unidad, en otras palabras, toda presunta *identidad*, aparezca esta bajo argumentaciones nacionales, étnicas, culturales o, como en nuestro caso, ciudadanas, requiere beneficiarse de la misma ilusión que supone una "historia natural", entendida como una memoria de los sistemas vivos. Porque el orden político quiere hacerle creer a todo el mundo su propia alucinación de una ciudad plenamente orgánica y desconflictivizada, requiere inventar y publicitar este principio de identidad que no puede resultar más que de esconder la dimensión perpetuamente alterada del universo que administra. En los palacios gubernamentales hay quien piensa que gobierna, pero su reino es una interminable red de corredores, cloacas y cañerías siempre en laberinto, por los que se agita una sustancia extraña y viscosa. Cree que su dominio es una población e incluso, en el mejor de los casos, un pueblo, pero en realidad es un océano abismal desde el que, entre espasmos, seres sin rostro le contemplan con indiferencia. A veces, con hostilidad.

El orden político hace lo imposible por sobreponer sus propias producciones simbólicas a las que constantemente generan las multitudes urbanas, que penetran y colonizan el espacio abierto de la ciudad con innumerables memorias. Es la inteligencia secreta de esa masa viva la que llena de monumentos la ciudad, invisibles para quienes no los han erigido, perceptibles solo desde la memoria personal o grupal, que los identifica y, haciéndolo, se identifica. Cada uno de sus lugares-reminiscencia es, a su

manera y para quien en ellos ata el pasado y el presente, una suerte de centro que, a su vez, define espacios y fronteras más allá de los cuales otros seres humanos se definen como otros en relación con otros centros y a otros espacios.

Los mapas de poder, como aquellos otros destinados al turista, se basan en la simplicidad. Son, ante todo, artefactos que hacen legible el espacio que presumen sintetizar mágicamente sobre el papel. Ni el poderoso ni el turista aspiran a conocer nada nuevo. Pasean por las calles con la ambición de reencontrarse con aquello mismo que ellos han colocado antes en los sitios con su fantasía: el político, los monumentos a sus héroes, a sus antepasados y a sus dioses; el turista, los objetos ya vistos antes en las guías, en las postales o en los documentales publicitarios. Al margen —es decir, en el centro mismo de lo social—, lugares de y para la historia pública. Universo de los lugares sin nombre, una ectoponimia, que no es sino lo contrario de una toponimia. Las calles y las plazas son archivos secretos y silenciosos, relatos parciales de lo vivido, recuerdo de gestas sin posteridad, marcos incomparables para epopeyas minimalistas para quienes solo tienen su propio cuerpo y su sitio, incapaces de pensarse si no es en términos al mismo tiempo somáticos y topográficos. Memorias potentes sin poder, que se enfrentan a las de un poder impotente, a sus ciudades espectaculares, conmemorativas, triunfales, falsas.

Los practicantes secretos de lo urbano no hacen más que llenar las ciudades de monumentos, cada uno de ellos evocador de un momento histórico, de un encuentro al más alto nivel, de una batalla incruenta, de un recibimiento triunfal, de una derrota, de un levantamiento, de un naufragio, de una catástrofe, de un portento, de una defensa heroica, de una aparición, de un adiós para siempre. Registros escriturales polivalentes y palimpsésticos, levantados con una caligrafía ilegible. Infinita superficie de inscripción de huellas innumerables, en que se marcan constantemente intrincadas correspondencias. Puerto y desembocadura de memorias. Las calles, las plazas, los vestíbulos de las grandes estaciones, los andenes del metro, incluso los triviales centros comerciales, están saturados de esa delirante lógica que suma y remueve toda la infinita red que forma lo inolvidable de todos. Esos monumentos son, no obstante, implícitos, en la

medida en que no aparecen en ningún catálogo ni en ninguna guía turística.

Es cierto que, como ha puesto de manifiesto Richard Sennett en otro celebrado ensayo[166], la ciudad ha tendido a ser pensada por sus relatores en relación analógica con el cuerpo humano. Pero ese cuerpo humano que los arquitectos y diseñadores urbanos han tomado como referente ha sido invariablemente el cuerpo *de hombre*. No se trata ya de que la ciudad se pliegue a las proyecciones del poder y el prestigio masculinos y de que, por ejemplo, la organización oficial de la memoria urbana —a través de los nombres del callejero, por ejemplo, como pone de relieve Teresa del Valle[167] — prime con descaro figuras de varones, sino de que, como lo humano genérico, lo urbano, y sobre todo lo urbanizado, se identifica sistemáticamente con lo viril. Es ahí donde se muestra revelador que, en las raíces, coincidiendo con la invención del urbanismo moderno como forma de control y sometimiento de lo urbano, en la segunda mitad del siglo XVIII, compitan dos visiones sobre la invención de la arquitectura[168]. Una, la vitrubiana, postula un origen mimético-naturalista de toda construcción, que toma como modelo el cuerpo masculino bien constituido. La otra es de orden simbólico, y atribuye la inspiración inicial de la arquitectura a un original culto al poder generativo del macho, concretado en su miembro viril. Tanto en un caso como en otro, es el cuerpo del hombre al que todas las teorías sobre la ciudad acaban remitiendo por una vía o por otra.

Se antoja que Barcelona es un ejemplo especialmente ilustrativo de ello. Contemplada en perspectiva, la ciudad se ofrece como una apoteosis de la exaltación del falo, como símbolo del poder masculino, es decir, del Poder a secas. Reconózcase: esa multitud de chimeneas solitarias y arrogantes diseminadas a lo largo y ancho de la ciudad, esos monumentos o construcciones insinuantes, algunas tan descaradas como *La Dona i l´Ocell*, de Joan Miró, en el parque que lleva su nombre, o la misma Torre Agbar, que domina —en un sentido literal— todo el paisaje de la ciudad contemplado desde cualquier punto de vista. Y no hace falta ser un freudiano, ni participar de las tesis "feministas" de Lacan sobre el falocentrismo, para percibir —en Barcelona más claramente que en otros sitios— los intentos de sometimiento, por la vía de la monumentalización, del espacio urbano como proceso de masculinización. El monumento no es una erección *en el* territorio, sino una

erección *del* territorio.

Todo monumento es una expresión vicaria del Palacio, en tanto que lugar cimero de la representación arquitectural del poder político. Su función es la de proclamar una centralidad que es a la vez —en un intercambio de códigos abundantemente conocido— política y sexual, puesto que expresa el simbolismo común del cetro monárquico y del despotismo viril, ambos manifestaciones externas del imperio absoluto de lo Único. Pero ese dominio del Uno es un dominio en el fondo inútil y sobre nada. Esos monumentos que se yerguen sobre los paisajes de lo hiperconcreto, en los que los poderes contemplan impotentes la proliferación de estratagemas de los desconocidos que allí se agitan, son el desesperado intento por hacerse ver y recordar por una realidad —lo urbano— que a veces lo adula, pero que casi siempre lo ignora, que transcurre ajena a un orden del que podría prescindir en cualquier momento. Esa presencia intrusa no es otra que la del Poder, que se plasma escenográficamente en tanto que ciudad fálica. Ahora bien, en torno a él se multiplican inquietantes, se extienden infinitamente, todas las expresiones de la Potencia. A ras de suelo todo son intersticios, grietas, ranuras, agujeros, intervalos… La ciudad profunda y oculta, la república de lo Múltiple. Lo uterino de la ciudad.

CAPÍTULO 4

MORFOLOGÍA URBANA Y CONFLICTO SOCIAL

UNA ESPECIE DE ESPUMA QUE GOLPEA LA CIUDAD

Ya se ha remarcado suficiente que resulta ingenua e injustificada la pretensión, que desde el diseño de ciudad suele sostenerse, de que la constitución desde el proyecto de una morfología urbana determina de manera automática la actividad social que se va a desarrollar en su seno. Esa suerte de idealismo urbanístico trabaja a partir de la premisa de que la forma urbana es una especie de sistema conductista que orienta las actuaciones humanas a partir de reflejos condicionados de los que la fuente es la disposición de los volúmenes arquitectónicos o la distribución de los elementos de un espacio público.

En cambio, sabemos que es otra morfología —la social— la que tiene siempre la última palabra acerca de para qué sirve y qué significa un determinado lugar construido o diseñado. Ahora bien, no es menos cierto que los estímulos físicos procurados por un medio ambiente proyectado están en condiciones de desencadenar ciertas pautas de comportamiento, o, cuanto menos, predisponer a ellas, de forma que una toma de postura por parte de un grupo humano podría a su vez depender "de una determinada configuración de los estímulos existentes en un determinado contexto urbano"[169].

Las movilizaciones colectivas son un excelente ejemplo de cómo la morfología urbana no es un factor determinante, pero sí condicionante. La manera en que los grupos humanos que mantienen determinados intereses en común deciden salir a la palestra para visibilizarlos tiene en cuenta el

espacio sobre el que despliegan sus deseos o sus impugnaciones. Con frecuencia ese espacio devenido marco para la vindicación y la protesta es el centro de la ciudad en que se vive o incluso otra distinta a la que los protestatarios se desplazan, pero no es menos frecuente que el lugar en que la movilización lo es en un sentido literal —puesto que implica que el grupo humano litigante hace aparición física como unidad, se reúne y aglomera en una plaza o se desplaza de manera compacta por una calle— sea el entorno de su vida cotidiana, las proximidades de su propia vivienda —su calle, su plaza…—, sobre todo cuando las reclamaciones planteadas se refieren a las condiciones de vida más inmediatas, como puedan ser los servicios públicos, las infraestructuras barriales o la vivienda. Así ha sido desde que existen ciudades y en ellas se escenifican conflictos sociales de cualquier tipo: una fracción agraviada de la sociedad toma los entornos de su propia cotidianeidad y, si es preciso, los convierte en baluartes a defender de enemigos externos que pretenden tomarlos. Ha ocurrido una y otra vez con motivo de todo tipo de luchas obreras y, más recientemente, en el marco de luchas específicamente barriales, no porque las anteriores no lo fueran —en el sentido de que escogían el propio entorno inmediato como arena para el enfrentamiento—, sino porque las motivaciones para la acción colectiva estaban directamente relacionadas con condiciones de vida que los propios vecinos, en tanto que tales, consideraban inaceptables.

En todos los casos, y desde que existen, los polígonos de viviendas —los barrios populares de bloques, las ciudades satélite, las ciudades-dormitorio… — han sido escenario de muchas de esas movilizaciones y con frecuencia han aparecido como núcleos de acción antagonista o impugnadora difíciles de controlar y capaces de demostrar una notable capacidad para la actuación concertada. Como se sabe, los conglomerados urbanizados basados en grandes bloques de viviendas responden a un modelo que se empieza a experimentar y da a conocer sus expresiones más interesantes en los años treinta —los *siedlungen* alemanes o las *höfe* austriacas, por ejemplo—, se pervierte de la mano de los urbanismos nazi-fascista y soviético y se generaliza, ya completamente envilecido, en la década de los cincuenta y sesenta, en la que todas las grandes ciudades europeas y otras muchas del mundo entero ven desperdigarse por sus periferias grandes barrios de bloques

de casas que obedecen un esquema, cuya expresión más elocuente y espectacular serían los *grands ensembles* franceses o los *new towns* británicos. Se trata de las postreras expresiones de un modelo de crecimiento urbano que se generaliza en Europa en un contexto marcado por la expansión económica e industrial de las ciudades, por la proliferación de polígonos industriales en las periferias urbanas, por las transformaciones que acabarán con grandes extensiones de suelo agrícola, por las grandes avalanchas de inmigrantes que llegan a las ciudades provenientes de las zonas más deprimidas de cada país o de países más pobres, por las mejoras en los transportes y las comunicaciones…[170] Ese cuadro socioeconómico animará la construcción de grandes concentraciones de viviendas, proyectadas, levantadas y gestionadas de manera unitaria, a menudo faltas de los mínimos requisitos infraestructurales y que se aprovechan de la adquisición privada o expropiación pública de grandes lotes de terreno rurales o residuales a precios muy baratos, activación primaria de grandes parcelas a base de instalar en ellas enormes paquetes de viviendas desconectadas de cualquier centro, de espaldas a menudo a no importa qué definición urbana y casi de espaldas a la arquitectura.

Cada sistema urbano —política y socioeconómicamente determinado, por supuesto— genera soluciones con el fin de absorber flujos migratorios intensos, atraídos por las demandas del mercado laboral. En el caso español, en los años cuarenta y cincuenta se desarrollan distintas formas de crecimiento urbano relacionadas con las llegadas masivas de inmigrantes a las grandes ciudades procedentes de las zonas más depauperadas del propio Estado y requeridas por las dinámicas de industrialización de las que los acogen. Algunas de estas fórmulas eran ya conocidas, como la anexión de aglomeraciones del extrarradio, de manera que Madrid, entre 1947 y 1954, todavía incorpora trece municipios, entre ellos El Pardo, Vallecas, Barajas… Lo que destaca es que, entre 1940 y 1960, se agudiza una ampliación de las tramas urbanas basada en el barraquismo[171], que ya estaba ampliamente extendido a principios de siglo. Acabada la guerra, gran parte de los flujos migratorios acaba asentándose en la conversión irregular de suelo rústico en suelo urbano y en su ocupación por viviendas autoconstruidas. El fenómeno tiene concreciones tan espectaculares como las barriadas de chabolas que

constituirán el sector de Puente Vallecas, Pozo de Tío Raimundo, Palomeras o La China, en Madrid; Cañada de Puente de Duero, Torreón, Bombilla, Las Flores, en Valladolid; Bonavista, en Tarragona; etc.

Para paliar lo que se antojaba como un fenómeno inaceptable y para hacer frente a las dinámicas de asentamientos que lo habían provocado y que no hacían sino intensificarse, se concibieron diferentes planes urbanísticos, entendiendo por planes urbanísticos lo que en la práctica fueron meras racionalizaciones de la simple y pura segregación residencial de los sectores sociales más desfavorecidos. Se recurrió entonces a un cierto modelo de urbanismo luego recurrentemente abominado, una forma maldita de habitar, que entre nosotros se asimiló al desarrollismo franquista y que se tradujo en la proliferación de polígonos de viviendas, grandes concentraciones de localización más bien periférica, de trama geométrica, construidas con escasos equipamientos y que amplificaban los criterios que ya habían orientado la construcción de casas baratas durante la dictadura de Primo de Rivera y la República[172]. Se trata de los "núcleos satélites", los "poblados de absorción" o "dirigidos", promocionados por la propia Administración, que darán paso en la década de los sesenta a los grandes grupos de viviendas de iniciativa privada como Moratalaz, San José de Valderas, San Blas o la Ciudad de los Ángeles, en Madrid; así como aquellos otros que responden a las políticas de concentración de la mano de obra propia de empresas como Ensidesa, en Avilés, o la SEAT, en Barcelona.

Esos barrios están orientados vagamente desde el modelo descrito como inspirado por el funcionalismo, por mucho que en el canon de bloques abiertos y elevados, rodeados de zonas verdes y de equipamientos, se viera distorsionado por una fuerte segregación en los usos, que convertía estas zonas en grandes ciudades-dormitorio, y por unos criterios de edificación en los que los presuntos beneficios sociales del urbanismo racionalista eran suplantados por la búsqueda de beneficios económicos inmediatos que raras veces respetaban los planes parciales de los terrenos sobre los que se construía. En materia de producción de la forma urbana, el franquismo primó procesos ajenos por completo al control democrático, sin ninguna preocupación por los equipamientos comunitarios, basados en un desarrollismo despótico y sin escrúpulos, y cuya consecuencia fueron centros,

barrios y redes de una calidad espacial ínfima. Era lo que se dio en llamar "barraquismo vertical".

Barcelona y su periferia conocen ese fenómeno. A partir de los años cuarenta vemos aparecer barriadas de barracas en diferentes puntos de la ciudad: en las faldas de Collserola o en las colinas que se levantan en plena ciudad —Torre Baró, el Carmel o Roquetas—; en las playas —las referidas de Pekín, Bogatell, Somorrostro o Camp de la Bota—; en la Sagrera: la Perona, la última en demolerse a mediados de los setenta; en Montjuïc —Can Valero—; en Can Tunis, en la Zona Franca. El fenómeno migratorio no logró sino hacer más acuciante el problema del déficit de vivienda, que en 1957 era de 62.000 viviendas, de las que 42.000 se consideraban urgentes[173]. Las políticas de vivienda con las que se hizo frente al problema supusieron la descentralización residencial de una clase obrera proveniente de la inmigración y la generación de una gran área metropolitana alrededor de Barcelona, particularmente hacia una segunda corona que acaba abarcando comarcas como el Vallès occidental y el oriental, el Garraf y el Maresme. Más allá, el fenómeno implica, a su vez, la concreción del auge de la industria inmobiliaria y políticas de vivienda social masiva que reciben la afluencia de ingentes inversiones tanto públicas como privadas[174]. El punto de partida: el relanzamiento del Patronato Municipal de la Vivienda, el ya mencionado Plan de Ordenación Urbana de Barcelona y su zona de influencia, el llamado "plan Soteras" y el Plan Provincial de 1959, que instituye el desbordamiento metropolitano de la ciudad de Barcelona. A esta primera fase le sigue otra definida por el Plan Director de 1968 y basada en polígonos de viviendas de promoción pública o privada, etapa caracterizada por la concentración de la gestión y la desvinculación entre urbanización y edificación. Con antecedentes en forma de ensayos en los cincuenta, el gran proceso se inicia en los años sesenta con polígonos como los de Bon Pastor, Ciutat Meridiana, Sant Ildefons o la Guineueta, dentro del término municipal de Barcelona, y se exagera con los grandes polígonos metropolitanos, como Bellvitge, La Mina, Ciutat Badia, Cinc Roses, Gornal, Fonollar, Sant Cosme, entre otros. Esa fase se localizaría en la primera mitad de los años setenta, cuando, perdida ya del todo la voluntad en buena medida experimentadora de los primeros momentos —las Vivendes del Congrés o el Polígon Montbau, iniciados a la década de

los cincuenta—, la edificación masiva y en serie genera la aparición de grandes inmobiliarias preocupadas exclusivamente en la rapidez en la ejecución, aunque fuera a costa de la calidad de los materiales utilizados, la dotación de servicios y la adecuación de las infraestructuras[175].

La idea era primeramente levantar elevados conjuntos de bloques de viviendas, al margen de las tramas viarias clásicas y sometidos a una fuerte zonificación, con respecto a la separación entre las viviendas y el resto de actividades. Esta propuesta morfológica tenía o pretendía tener en origen fuertes implicaciones sociales, en la medida en que preveía la dotación de zonas verdes y de recreo interiores en cada isla, instrumentos formales al servicio de las prácticas de sociabilidad y de la articulación de una determinada noción de comunidad. En la práctica, sin embargo, la proliferación de este tipo de morfología urbana vino marcada por la mala calidad de los materiales utilizados, el uso generalizado de sistemas de construcción basados en el prefabricado, el poco cuidado a la hora de generar calidad en los intersticios, la inexistente atención por el mantenimiento de las obras, la escasa o nula actuación en materia de equipamientos y comunicaciones, todo estimulado ya por el atractivo que la explotación del terreno en materia de edificabilidad implicaba para la obtención de beneficios económicos rápidos y abundantes y para el interés de las administraciones por solucionar de manera expeditiva los problemas de demanda masiva de vivienda que los grandes movimientos demográficos hacia las ciudades estaban provocando.

Esa crítica altamente negativa de la vivienda social de masas tuvo ocasión de ser matizada después, una vez abandonada como tipología de crecimiento urbano. Hubo quien planteó la necesidad de un análisis a la crítica fácil contra las agrupaciones de viviendas en bloques, que ha sido dominante en los últimos años desde prácticamente todas las instancias con competencia sobre la cuestión del crecimiento urbano[176]. El argumento de base era que, con todos sus inmensos defectos, la construcción de conglomerados de bloques implicó, en un cierto momento y de entrada, la definición de las expansiones urbanas y de la ciudad misma, colocando en primer término la cuestión de la vivienda social, que adquiría así un protagonismo que ni había tenido nunca, ni recuperará posteriormente. Esta defensa no ignoraba —más

bien, al contrario— los innumerables defectos de este tipo de edificación, como consecuencia de las condiciones de sometimiento a principios de beneficio económico o político-institucional y la pésima calidad arquitectónica de la mayoría de los proyectos, pero sí que subrayaba que la forma de agregación de las viviendas y la provisión de espacios para el encuentro —aparte de otros méritos, como, por ejemplo, las nuevas formas de habitabilidad o la evidencia de que realmente no había alternativas habitacionales por los grandes cambios demográficos que experimentaron las sociedades urbano-industriales europeas— potenciaron expresiones de vida colectiva, una de las cuales fue justamente la de la movilización para la lucha social.

No se olvide que, en buena medida, el sistema de bloques implicaba una alternativa al hacinamiento de la clase trabajadora en determinados barrios viejos o en centros urbanos, ejecutada en nombre de principios de salubridad pública y de bienestar social, pero no menos ante la evidencia de cómo esos barrios populares resultaban fáciles de cerrar con barricadas y se convertían en auténticos fortines desde los cuales los sectores más ingobernables de la ciudad se habían hecho tantas veces fuertes y habían resistido el asedio de la policía e incluso del ejército. Es bien sabido que esta tendencia de las clases trabajadoras europeas a cerrarse en barrios intrincados y convertirlos en fortines insurreccionales es lo que había justificado, en buena medida, las actuaciones urbanísticas que hemos visto que se presentaron como de "esponjamiento" e "higienización" urbanas a lo largo de los siglos XIX y XX, de las que la de Haussman en París sería el paradigma. Ahora bien, esta alternativa consistente en llevarse a la clase obrera a los suburbios y alejarla de los núcleos de las ciudades comportó resultados imprevistos, entre ellos el de constituirse en artefacto de convivencia tampoco tan distinto del de la vecindad tradicional, incluyendo su capacidad para devenir, en ciertas circunstancias, escenario para la defensa de intereses de clase.

Inmediatamente después de que empezara a aplicarse esa política de exilio de la clase trabajadora a los alrededores de las ciudades se puso de manifiesto que la ciudad burguesa iba a pasar de sentir el enemigo de clase en su corazón a sentirlo alrededor, rondándole, levantando un sitio permanente en torno a ella. Se le daban razones para que Le Corbusier notara

lo que era cierto en el momento en que se redactó la *Carta de Atenas* y que lo es en la actualidad. Primero, "que los suburbios son los descendientes degenerados de los arrabales" y, después, que el suburbio "es una especie de espuma que golpea la ciudad"[177].

Ya en las jornadas de junio de 1848 en París se vio a los obreros asentados en las comunidades periféricas marchar sobre el centro de la capital francesa, y lo mismo pudo contemplarse en la Comuna de 1871. Las *banlieues* —convertidas en nidos revolucionarios o de agitación social— empezaban a ocupar el papel de los *faubourgs* en las luchas sociales ya desde mediados del siglo XIX, en un proceso del que en las últimas décadas no hemos hecho sino conocer nuevos episodios en todo el mundo: descontentos que cercan literalmente las ciudades o multitudes de trabajadores o desheredados que, desde sus barrios de concentración en la periferia urbana, acuden a los centros urbanos para inundar con sus protestas —a veces rabiosas— las hasta entonces confiadas zonas de negocios, o para hacerse presentes físicamente en los centros históricos ante las sedes de las instituciones que consideraban causantes de sus desgracias. La historia de los cinturones rojos europeos es la historia de los episodios en que columnas de trabajadores en protesta salen de ellos para invadir y conquistar sus respectivos centros metropolitanos[178].

Para entender el papel de los grandes barrios de bloques en las formas de lucha social de las últimas décadas, podríamos fijarnos en el caso estudiado por Manuel Castells y un equipo de investigadores por él dirigido de uno de los *grands ensembles* franceses por excelencia, el de Sarcelles, finalizado en el año 1974, con 13.000 viviendas y más de 60.000 habitantes en aquel momento[179]. Allá se desarrollaron conflictos de gran entidad contra el Estado, en tanto que administrador del crecimiento urbano del que los vecinos de aquella ciudad-dormitorio se sentían víctimas. La tesis de Castells es que lo que allí se produjo fue una traslación al campo vecinal de una dinámica casi idéntica a aquella de la que había surgido el primer sindicalismo obrero a mediados del XIX, en la medida en que los altos niveles de socialización de los entornos habitados que conocieron las viviendas de masas descubrieron un conjunto de intereses comunes, en una unidad de vecindad que reproducía las condiciones de concentración

capitalista de la producción y la gestión que habían conocido los grandes núcleos fabriles de la revolución industrial y que estuvo a su vez en el origen de los primeros sindicatos obreros. Esto se podría traducir en un cambio no solo en las formas de lucha obrera, sino en el propio escenario escogido para ellas, que no es únicamente el de la esfera de la producción, sino el de áreas metropolitanas en donde se ha reproducido, en términos espaciales, la lógica del fordismo.

La producción en cadena de la fábrica se traslada ahora, de manera generalizada —justo de la mano de los grandes polígonos de vivienda—, a la "vida en cadena" que caracteriza —o se supone que debería caracterizar— la manera de habitar los grandes polígonos de viviendas en las periferias urbanas. Se pasa de la lucha de los vecinos-obreros, en tanto que obreros, haciéndose fuertes en sus barrios en las grandes revueltas urbanas, a la lucha de los vecinos-obreros, en cuanto vecinos, en los grandes conglomerados de viviendas que rodeaban las grandes ciudades europeas desde finales de los años sesenta y a lo largo de toda la década de los setenta. En los nuevos barrios de bloques europeos se desarrollan luchas por la mejora en las condiciones en que se ejecuta el sistema de reproducción y en lo que se da en denominar "salario indirecto": vivienda, transporte, escuela, servicios públicos, infraestructuras, equipamientos…[180]

Se está hablando, pues, de cómo en estas condiciones, tan directamente vinculadas a la proliferación de polígonos de viviendas, se podía producir por primera vez una percepción en clave de lucha de clases del significado del fenómeno urbano. Entra en cuestión entonces un aspecto fundamental en la vieja discusión sobre el valor y el sentido del urbanismo producido por el Movimiento Moderno en materia de vivienda de masas. Si se pusiera el acento en su evaluación positiva, tendríamos que, por criticables que fueran con respecto de las condiciones de proyección, ejecución, asignación, mantenimiento, etc., respetaron elementos de aquel proyecto moderno de grandes núcleos orgánicos de vivienda social que se derivaban directamente de su inspiración sindicalista, como, por ejemplo, la adopción de islas abiertas, la incorporación de centros cívicos y, sobre todo, la apología que hacían del modelo de unidad de vecindad. Si, por el contrario, interpretamos las propuestas racionalistas de grandes concentraciones aisladas de vecindad

obrera como una estrategia al fin y al cabo destinada a generar conformismo entre los trabajadores, lo que tendríamos es que la situación urbanística generada acabaría propiciando tarde o temprano que los conflictos latentes devendrían abiertos, lo que acabaría haciendo "posible el aprovechamiento de tales espacios comunes con fines no deseados"[181].

Cabe insistir en ese último aspecto. Ha habido un elemento común y básico para esa creciente conflictivización de las áreas metropolitanas habitadas de forma homogénea por sectores sociales agraviados por una causa u otra. Ese factor fue el de la concentración y, con ella, la aceleración-intensificación que en cualquier momento podían conocer las relaciones cotidianas entre personas con parecidos intereses sociales para hacer lo mismo, en un mismo momento y lugar, en función de unos mismos objetivos compartidos, todo ello como consecuencia directa de un hecho físico simple, pero estratégico, que era la copresencia y la existencia de un nicho de interacción permanentemente activo o activable.

La acción colectiva resultaba entonces casi inherente a una vida cotidiana igualmente colectiva, en la que las personas *coincidían* en el día a día, "se veían las caras", tenía múltiples oportunidades de intercambiar impresiones y sentimientos, se convertía en vehículo de transmisión de todo tipo de rumores y consignas. No era, como se ha escrito una y otra vez, el fracaso de la socialización, sino el desenmascaramiento de la socialización institucionalizada y su sustitución por formas extremadamente enérgicas de sociabilidad fusional. La contestación, además de la revuelta, estaban ahí, predispuestas e incluso presupuestas en un espacio que las propiciaba a partir de la facilidad con que en cualquier momento se podía "bajar a la calle", y además a la propia calle, la que se extendía inmediatamente después del vestíbulo de la escalera de vecindad, en un espacio exterior en el que el encuentro con los iguales era poco menos que inevitable y donde era no menos inevitable compartir preocupaciones, indignaciones y, luego, la expresión de una misma convicción de que era posible conseguir determinados fines por medio de la acción común.

Por rudimentarios y maltratados que fueran los espacios de coincidencia suscitados, el modelo racionalista de vivienda de masas que pervivía todavía en los polígonos había propiciado un ambiente estructurante, en el sentido de

desencadenante —en otros casos, inhibidor—, de determinadas relaciones sociales, entre ellas las asociadas a la actuación colectiva en pos de objetivos comunes. *Concentrar* se reconocía una vez más como sinónimo de *concertar*, o, dicho de otro modo, nos volvíamos a encontrar con las consecuencias del factor aglutinante en los procesos de contestación, factor que no resulta de otra cosa que de la existencia de contextos espaciales que favorecen la interacción inmediata y recurrente[182]. De ahí que resulte del todo plausible la existencia de una voluntad de, vista la experiencia histórica, evitar a toda costa la concentración si ya no de una clase obrera nacional en buena medida domesticada y en cierto modo disuelta hoy, sí de aquellos grupos sociales que por una causa u otra pudieran resultar ingobernables; evitar que pudieran enrocarse para conspirar o para defenderse en aquello que había sido la intricada trama de ciertos barrios antiguos de las grandes ciudades y, más tarde, las grandes concentraciones de bloques sociales, convirtiendo unos y otros en focos permanentes de perturbación social.

EXPLOTADOS CONTRA EXCLUIDOS

En la última semana de octubre de 1990 se produjeron diversos acontecimientos que resumían lo que estaba siendo, y sería todavía más, la política urbanística que aspiraba a modificar de forma radical la forma urbana de Barcelona y, de paso, también su fisonomía social. Ya se ha hablado de la reforma del Moll de la Fusta —la remodelación que adaptaba los cambios en el frente litoral de la ciudad al diseño del cinturón del litoral—, del derribo de los Baños, del de los chiringuitos de la Barceloneta, en uno de los episodios que más claramente advertirían de la falta total de sensibilidad de las autoridades municipales ante el patrimonio sentimental de la ciudad. También se presentaba en público el diseño del puente móvil que uniría el Portal de la Pau con el Moll d'Espanya y el centro comercial previsto para él —el Maremagnum—. La Torre Mapfre y el Hotel Arts continuaban creciendo. El precio de la vivienda no hacía más que aumentar y los propios pisos de la Vila Olímpica veían incrementar su valor, lo que convertía el nuevo barrio en uno de los más caros de la ciudad y le permitía ofertarse al público en clave de exclusividad. El camino hacia la gran mutación urbana que debía conocer

el sur de Barcelona de la mano de las Olimpiadas y después del Fórum Universal de las Culturas estaba abierto y se antojaba imparable. En la zona, la remodelación —léase destrucción— de Poblenou, el diseño del nuevo barrio 22@ —destinado a la instalación de hoteles y empresas de nuevas tecnologías— y la instalación de otro barrio de lujo —Diagonal Mar— serían los próximos pasos[183]. El alcalde de la ciudad, Pasqual Maragall, anunciaba un ambicioso plan de aparcamientos para el centro urbano, a la vez que reconocía que la diferencia fundamental entre las políticas franquistas en materia urbana en Barcelona —el porciolismo— y las que él mismo estaba impulsando era que en aquella "se hablaba" y en la suya "se hacía", una forma sutil de reconocer que en esta se estaba ejecutando lo que se planeara en la anterior (*La Vanguardia,* 31 de octubre de 1990).

En la periferia de la ciudad se desarrollaban otro tipo de acontecimientos que ignoraban las órdenes de entusiasmo impartidas a la ciudadanía y desmentían el triunfo de la armonía y el consenso entre los destinatarios de los planes urbanísticos en marcha, es decir, los nuevos urbanizados. En la vecina ciudad de Sant Adrià del Besòs y en uno de sus barrios fronterizos con Barcelona, el Besòs —7.000 habitantes, en el límite indistinguible con el barrio del mismo nombre en la capital—, el jueves 26 de octubre se desata el motín urbano más importante que ha conocido el país desde la guerra civil. Todo empieza a las 6 de la mañana del 25 de octubre, cuando los trabajadores de la empresa Gines Navarro, S. A. instalan, bajo una fuerte protección policial, las vallas que indican la ubicación de unas obras inmediatas. Los primeros enfrentamientos se producen en ese mismo momento, cuando unos 400 vecinos intentan impedir el inicio de los trabajos, lo que es atajado con una carga policial. Por la tarde, 2.500 vecinos se manifiestan recorriendo el barrio y acaban topando también con la policía. Se va a repetir el mismo protocolo de protestas día tras día: recorrido masivo por las calles de la zona, con una fuerte presencia de mujeres que la prensa subraya e, inmediatamente, enfrentamientos brutales con la policía por parte de grupos de jóvenes, lanzamiento desde azoteas y balcones de todo tipo de objetos y sustancias contra las fuerzas policiales —salfumán, lejía, botes de conservas, macetas, incluso electrodomésticos y bombonas de butano— y hasta uso de armas de fuego —se encontraron más de treinta casquillos de calibre

magnum 22 y 9 milímetros parabellum, disparados por los habitantes contra la policía—[184].

Ya había habido disturbios en el barrio por los mismos motivos, con ataques contra la valla que indicaba el lugar previsto para las obras, levantamiento de barricadas, choques con la policía. Fueron el 29 de enero y, sobre todo, la noche del 7 de febrero de 1984, pero con una intensidad incomparable a la de los hechos que se sucederían a finales de octubre de seis años después. Entre el 25 y el 30 de aquel mes se produjeron graves altercados, protagonizados por vecinos de todas las edades, que lanzaban piedras, bengalas y cócteles molotov a los Mossos d'Esquadra —la policía autonómica catalana, que recibía allí su bautismo de fuego como fuerza antidisturbios—, incendiaban contenedores, impermeabilizaban con barricadas los accesos al barrio, al tiempo que cerraban los colegios y los establecimientos de la zona. Un editorial de *La Vanguardia* bautizaba los hechos como "la intifada del Besòs" (30 de octubre). El conflicto se desarrolló al margen de la asociación de vecinos y las negociaciones posteriores las asumió una comisión nombrada asamblearíamente.

El símbolo de la lucha vecinal fue la palmera solitaria que abría el amplio espacio en el litigio, justamente la que daba nombre al lugar: el Solar de la Palmera. Es reseñable el fuerte contenido territorial de la protesta, en el sentido de que era el barrio como instancia dotada de unidad identitaria lo que se consideraba amenazado en sus intereses como tal o en su integridad por la presencia de entidades consideradas extrañas y peligrosas, ya fuera en términos inmediatos —la policía— o generales —los nuevos vecinos procedentes de los conflictivos barrios de La Mina y La Catalana—, esto último si cierta interpretación de los acontecimientos fuera correcta. Una acción colectiva planteada tan explícitamente en términos casi etológicos de defensa de un territorio considerado propio y en peligro se concretó en los propios movimientos espaciales de los movilizados, la manera en que estos manejaban el área del conflicto y generaban con ella una cartografía al tiempo simbólica e instrumental.

Instrumental, porque los vecinos demostraban un conocimiento a fondo del terreno y convirtieron el barrio en una trampa para la policía, que tuvo que recurrir finalmente a la ocupación de las azoteas de los edificios como único

recurso para hacerse con el control del barrio. Pero, sobre todo, metafórica. Aquella cartografía que la acción colectiva y su represión suscitaban daba pie, como ocurre siempre en la actuación de colectivos humanos que emplean la calle para expresar sus intereses, a algo parecido a una coreografía, un conjunto de secuencias de movimientos corales —cambios de posición, posturas y técnicas corporales, desplazamientos pautados en secreto, disposiciones somáticas cargadas de significado, diálogo entre masas corpóreas que componían figuras—, que le asignaban a los espacios que empleaban un valor que era también de orden simbólico. El papel central de la palmera que presidía el solar en disputa era la prueba de cómo la conducta colectiva —al igual que la individual— trabaja asignándole a los lugares que usa una plusvalía en cuanto a valores sentimentales y mnemotécnicos. En efecto, la palmera fue el punto a defender por la policía que la custodiaba o a reconquistar por los vecinos, que la consideraban usurpada. Destruir la valla que la circundaba y que indicaba una toma de posesión por parte de la Administración de un territorio que no era suyo era lo que el vecindario no toleraba. De ahí los ataques contra aquella suerte de fortificación del punto caliente por excelencia, aquel en el que se levantaba un elemento paisajístico en el que se reunía todo lo que en aquellos momentos, allí, estaba en juego. No el solar en sí, ni el barrio, sino un árbol solitario levantado poco menos que en medio de la nada[185].

El trabajo simbólico sobre el territorio continúa en la fase inmediatamente posterior al momento crítico del conflicto: se cambia el nombre de calles y plazas, la más importante de las cuales —donde se celebran las asambleas a las que se reconoce valor decisorio— pasa de llamarse Josep Tarradellas a Plaza 25 de Octubre. Por supuesto que la identidad del barrio se refuerza y aparecen poemas épicos, monumentos conmemorativos, héroes, mártires —los vecinos heridos más gravemente, en especial el que perdiera un ojo como consecuencia del impacto de una bala de goma—. Los recorridos por las calles del barrio se invisten pronto de itinerarios rituales. A su vez, se producen incursiones fuera del barrio que consisten en desplazarse a otros puntos de Sant Adrià o de Barcelona para hacerse presentes e interpelar determinados edificios que albergan instituciones consideradas culpables. Es el caso de las repetidas manifestaciones ante el Ayuntamiento de Sant Adrià,

o la que lleva a los vecinos ante las puertas del Born de Barcelona, donde la coalición gobernante CiU organiza un acto político que preside Jordi Pujol, a la sazón máxima encarnación de los poderes responsabilizados del problema.

Especialmente elocuente es la marcha de varios miles de vecinos, el 15 de noviembre, desde el barrio hasta las puertas de la Generalitat de Catalunya en Barcelona, haciendo del propio desplazamiento en metro un espectacular acto de protesta. Una vez en la plaza Sant Jaume, los manifestantes no solo corearon sus consignas, sino que abocaron ante la entrada del palacio del Gobierno catalán restos de los disturbios que habían asolado el barrio días atrás y que, por voluntad de los propios vecinos, tardaron varias semanas en ser retirados por los servicios de limpieza.

El desencadenante fue la noticia de que el Ayuntamiento de Sant Adrià y la Generalitat de Catalunya habían decidido iniciar las obras para la construcción de 196 viviendas de promoción pública en un solar de 13.000 metros cuadrados anexo al barrio, terreno que los vecinos hacía 13 años que reclamaban para equipamientos. De hecho, los primeros ataques con piedras y bolas de hierro se lanzaron contra los trabajadores que se prestaban a instalar las vallas protectoras de las obras. El objetivo de la iniciativa inmobiliaria pública era "esponjar" los barrios de Via Trajana y La Catalana —60 hectáreas edificadas sin calidad alguna—, pero, sobre todo, el crónicamente conflictivo polígono de La Mina, asentamiento al que fueron a parar las familias desalojadas de los barrios de chabolas que se levantaban en las playas del sur de Barcelona y que fueron derribados a finales de los años sesenta. En ese barrio —ejemplo siempre citado de gueto— vivían en aquel momento entre 11.000 y 16.000 personas —imposible de saber con certeza; un 20 por ciento gitanas[186]— en 2.400 viviendas distribuidas en 21 bloques. Solo un 34,5 por ciento de los vecinos disponía, en 1990, de contrato de vivienda y pagaba regularmente su cuota[187]. Se trataba, así pues, de acabar con un problema grave, que era el de la existencia en una zona codiciada por los promotores urbanísticos e inmobiliarios —el sudoeste del Besòs— de una bolsa de marginación social importante, un enclave humano típicamente estigmatizado y estigmatizador, cuyo nombre estaba estrechamente asociado a la imagen de delincuencia y peligrosidad.

Los vecinos que se enfrentaban a la policía y rechazaban tan

vehementemente los planes urbanísticos para su barrio habían llegado allí hacía 27 años, habían constituido hogares estables en pisos estrenados que habían acabado siendo de su propiedad y habían protagonizado —como tantos barrios parecidos en el perímetro interior y exterior de Barcelona— todo tipo de luchas civiles. Ahora tenían hijos —los muchachos que se enfrentaban con el rostro cubierto a los Mossos d'Esquadra— que defendían en no pocos casos su propia herencia, por razones que —con su ingrediente afectivo— no dejaban de tener relación con la creciente inasequibilidad de las ofertas de vivienda fuera del barrio. Los vecinos de Sant Adrià, en general, tenían motivos de sobra para sentirse agraviados, puesto que la ciudad venía siendo un auténtico vertedero al que Barcelona lanzaba sus iniciativas más indeseables: entre finales de los sesenta y primeros años de los setenta, una central térmica, una depuradora de aguas, una incineradora y, sobre todo, un barrio, La Mina, en el que habían sido poco menos que enclaustrados los habitantes de los asentamientos de barracas que se extendían en las playas de la capital.

El barrio del Besòs reúne todas las características de las ciudades-dormitorio levantadas bajo el impulso del desarrollismo franquista por lo que hace a la mala calidad de las condiciones de proyectamiento, ejecución y mantenimiento. Conforma una auténtica isla, cercada por el norte por la Ronda Litoral y el río Besòs —en aquel momento, un auténtico desagüe del Barcelonès—; por el noroeste, por la autopista C-31; al oeste y al sur, la frontera administrativa con Barcelona y su barrio del Besòs, homónimo, pero claramente diferenciado; al este, en aquel momento el solar dirimido y su solitaria palmera; más allá, un barrio cargado de connotaciones negativas: La Mina. Conforman el Besòs 36.262 pisos de protección oficial, en nueve bloques de entre ocho y diez pisos de altura, en los que en 1991 vivían oficialmente 6.294 personas. El polígono comenzó a construirse por la empresa COBASA en 1960, y se dio por finalizado en 1968, momento en que se hacía entrega de los correspondientes pisos a los 220 últimos destinarios, empleados de Transportes de Barcelona. Los pisos cuentan con 60 metros cuadrados, ocupados por una media de cinco personas. En el momento de producirse el motín de otoño de 1990, el Besòs contaba con una población preferentemente joven, de entre 20 y 30 años, consecuencia del *baby-boom*

de los años sesenta. La mayoría de vecinos empleados debía desplazarse a Barcelona o Badalona para acudir a su lugar de trabajo.

Es imposible saber con certeza cuál es el grado de sinceridad de lo que los diferentes actores y agentes proclamaban que eran sus razones. En las pancartas que se exhibían en las manifestaciones y que colgaban de los balcones no había alusión alguna que pudiera ser reprobable por racista y el lema dominante era: "Viviendas no; equipamientos sí". Sin embargo, la clase política, local y nacional, y también la prensa no dudaron en calificar la inspiración de los disturbios como xenófoba y ultraderechista, cuyo objetivo era evitar a toda costa la instalación, en el barrio o en su cercanía inmediata, de familias conflictivas procedentes de La Mina o La Catalana, sobre todo gitanas[188]. De hecho, el espacio en litigio y que ahora ocupa el Parc del Besòs era justamente una especie de colchón o cortafuegos entre el barrio del Besòs y La Mina, una función que es justamente la misma que se busca ver cumplida después con el territorio Fórum, destinado a mantener una distancia adecuada entre La Mina y el nuevo contexto residencial y de servicios de Diagonal Mar. Es decir, se trataba de mantener espacialmente explícita la distancia irreconciliable no solo entre dos barrios, sino entre propiedades y representaciones sociales bien distintas, que eran las que caracterizaban un barrio obrero de un barrio abiertamente marginal, es decir, entre una categoría de habitantes que podríamos asociar al viejo proletariado y lo que, retomando las viejas categorías marxistas, encontraríamos como un ejemplo claro de poblamiento lumpen. Por un lado, un típico barrio de lo que se solía denominar el cinturón rojo de las ciudades industriales europeas, con una lógica de acción comunitaria basada en la cultura popular obrera —en nuestro caso, asociada a la de la inmigración de origen andaluz de los años cincuenta y sesenta—, en la conciencia y la militancia de clase y en el sindicalismo vecinal. Por otro, un barrio con una fuerte presencia gitana, La Mina, afectado entonces y todavía ahora por altos niveles de marginalidad social[189].

Se hace pertinente aquí consensuar una distinción entre *periferiedad*, *suburbialidad* y *marginalidad*[190]. Las tres cualidades dan cuenta de situaciones urbanísticas consideradas deficitarias y a corregir, pero no significan lo mismo para los urbanistas. En urbanismo, *suburbio* implica la

aplicación de un criterio de grado, puesto que define una unidad territorial con niveles de calidad considerados comparativamente por debajo de los estándares medios tenidos por correctos. En cambio, un barrio *periférico* lo es al sometérsele a un criterio de distancia no solo física, sino también estructural, respecto de un centro urbano dado con el que mantiene relaciones de subsidariedad y dependencia. La noción de *marginalidad*, en cambio, no es ni de nivel ni de estructura; no es ni material ni funcional: es, ante todo, moral, puesto que alude a la condición inaceptable de aquello o aquellos a quienes se aplica. Un barrio marginal no es que esté en la periferia o constituya un suburbio; no está en límite exterior de la ciudad o bordeándola: es que está más allá. No está "abajo" en el orden social, sino fuera de él. Es lo que existe, pero no debiera existir. La cuestión se planteaba, por tanto y de manera explícita, como una operación que un editorial de *El País* (30 de octubre de 1990) definía de "reubicación de la marginalidad".

Tanto el Besòs como La Mina eran —y son— barrios periféricos y suburbios que compartían su baja calidad urbanística y constructiva, así como el olvido de que habían sido objeto por parte de las administraciones públicas. Ambos ocupaban —y ocupan todavía— una zona codiciada para el desarrollo de una nueva región metropolitana o, mejor dicho, de la paulatina conexión de los barrios de la desembocadura del río Besòs a la Barcelona metropolitana con el fin de permitir su expansión. No se está hablando sino de la culminación del aplazado Plan de la Ribera, aludido en un capítulo anterior, un colosal proyecto que, en la segunda mitad de los años sesenta, planeó la transformación del litoral barcelonés y que pronto se revelaría al servicio de una demanda inmobiliaria y de servicios "de nivel". Se trataba, en este caso, de una operación de *desperificación* del sudoeste del Besòs[191], que pretendía continuar, siguiendo la costa, las transformaciones en nombre de la "apertura al mar", iniciadas a mediados de los sesenta con la inauguración del paseo marítimo en la Barceloneta y retomadas con las ya referidas en los ochenta en nombre de la coartada olímpica. Como parte de esa dinámica de mutaciones, de lo que se trataba es de emprender una magna operación político-inmobiliaria destinada a una revalorización generalizada del margen derecho de la desembocadura del Besòs. Meta: disponer la gran entrada a

Barcelona desde el Maresme, levantar un imponente centro comercial, desplegar una oferta de viviendas "de calidad", y, en especial construir un gran puerto deportivo para 2.000 amarres y zonas de ocio y comerciales anexas en el litoral (*La Vanguardia*, 25 de enero de 1991). Es decir, convertir lo que había sido un rincón abandonado del Barcelonès en lo que se da en llamar un espacio de "nueva centralidad"[192]. En el asunto, que se desarrolló de forma más bien turbia[193], estaban interesadas todas las administraciones, que lo consideraban estratégico hasta el punto de asumirlo como una auténtica cuestión de estado[194].

En aquella fase del proceso, el obstáculo inmediato a abatir era La Mina[195], una especie de pústula infectada de la que urgía liberarse lo antes posible para que los propósitos de reconversión de la costa barcelonesa pudieran llevarse a cabo. Porque La Mina no solo era un barrio periférico y suburbial, sino que, además, aparecía señalado como la concreción en la Gran Barcelona de lo que se entiende que es un barrio marginal, contenedor de vicio, delincuencia y disolución social. Dicho de otro modo, el proyecto de erradicación de La Mina y el traslado de sus vecinos al Besòs implicaba fundir y confundir un barrio marginal —es decir, un barrio de marginados— con un barrio de "honrada gente trabajadora", es decir, un barrio de clase obrera consolidada e integrada, aunque sea de forma precaria, en el orden de la ciudad[196]. En la jerarquía material pero también simbólica de los espacios, el barrio marginal está en la banda más baja, más todavía que el barrio suburbial o periférico, siempre a punto de precipitarse por el abismo acechante de la desorganización social, un proceso de descomposición parecido al que han padecido, por ejemplo, los territorios que fueron obreros de las periferias urbanas francesas.

Excluidos versus explotados, en un contexto en que la categoría "exclusión" empezaba a aparecer como un espantajo con que asustar a una cada vez más desarmada clase trabajadora, amenazada con caer en cualquier momento en el "riesgo de exclusión" si se negaba a plegarse a las imposiciones de un mercado laboral cada vez más despiadado[197]. El choque podía ser leído, a su vez, entre los dos factores de una distinción clásica: la propuesta por Louis Chevalier entre *clases laboriosas* y *clases peligrosas*[198],

diferentes no solo en tanto que fuentes distintas de peligrosidad para el orden dominante, sino por la distancia que entre ellas se extiende en sus géneros de vida, sobre todo porque esas clases "peligrosas", como las que se concentran en La Mina —o en barrios parecidos, como Sant Roc, en Badalona, o Sant Cosme, en El Prat—, se singularizan por rechazar tanto los modales de clase media como la disciplina de fábrica que la clase obrera acabó asumiendo como propia, incluso para sus desobediencias.

Después de cinco días de enfrentamientos y de un breve periodo de negociaciones, la Generalitat abandonaba el proyecto de la construcción de las 196 viviendas. La explosión de violencia que había conocido el barrio fue rápidamente justificada con el consiguiente rechazo por parte de los portavoces vecinales a los "actos vandálicos" cometidos, que fueron atribuidos a personas ajenas al barrio. En la última fase del conflicto, patrullas de vecinos conocidos se dedicaron a localizar a presuntos alborotadores forasteros. En efecto, la eventual carga negativa del uso de violencia y el posible efecto estigmatizador sobre los habitantes del barrio fueron exorcizados con la consabida denuncia de la presencia de provocadores incontrolados entre los vecinos que protestaban. Es más, en el colmo de las paradojas —y como con una contribución al restablecimiento de los vecinos en un imaginario adecuado a sus intereses y a los intereses políticos en juego— la prensa daba noticia de que ocho de los diez detenidos que pasaron a disposición judicial como consecuencia de los disturbios eran vecinos… de La Mina[199].

La interpretación en clave política de los acontecimientos del Besòs en octubre de 1990 es divergente, y lo mismo valdría para la procedente desde un análisis científico-social de los hechos, que nunca se llegó a producir con verdadera entidad[200]. Por un lado, podía atribuírsele a la revuelta urbana en el Besòs una condición antagonista, impugnadora de los intereses capitalistas en materia de planificación urbana, una insubordinación digna, heredera de las grandes movilizaciones obrero-vecinales de décadas precedentes —aunque empleando otros lenguajes declarativos y organizativos—. Ahora bien, lo que fueron movimientos de vocación fuertemente progresista y emancipadora de la clase obrera habían dejado paso a otro tipo de objetivos bien distintos, de manera que una versión del sentido de los acontecimientos

en el barrio del Besòs podría señalar de ellos que, sin dejar de ser "de clase", mereciera ser clasificada al lado de otras posteriores, en que vecinos de lo que fueron barrios de resistencia obrera se organizaban para asegurar que el estatuto social obtenido —y vivido, seguramente, como precario y frágil— y las ventajas sociales conseguidas en luchas anteriores se vieran malogrados por una cercanía excesiva de la marginación y la pobreza. De hecho, bien podría suponer que lo que sucedió en el Besòs —y el papel que en ello jugó la inquietud por un contacto espacial inmediato con el estigmatizado barrio de La Mina— sería comparable con otras grandes movilizaciones populares en polígonos de viviendas de contenido ideológico escasamente "progresista".

Un año después de los hechos en la desembocadura del Besòs —en octubre de 1991—, los vecinos de la Malvarosa en Valencia se movilizaban organizando "patrullas ciudadanas" dedicadas a la caza del yonqui, con tal de liberar su área de la presencia de drogadictos. Lo mismo pasaba en aquel mismo momento en el barrio de Sant Cosme, en El Prat de Llobregat, en Barcelona. En el año 2000 se produjeron graves desórdenes en uno de los barrios de bloques más emblemáticos de la lucha obrera en la década de los sesenta y setenta: Ca N'Anglada, en Terrassa, referente del antifranquismo de clase en Cataluña, Cipriano García. En aquella oportunidad, se trató de un movimiento en contra de la presencia de inmigrantes magrebíes, a los que se atribuía una súbita conflictivización de un barrio ya relativamente estabilizado y con una población que había ido adquiriendo una cierta estatuación social. Y recuérdese que la principal movilización vecinal de los últimos años en Barcelona ha tenido como protagonista a uno de los barrios de bloques que suele citarse como ejemplo de calidad arquitectónica y urbanística, que es el de Montbau, en la Vall d'Hebron, cuyos vecinos salieron a la calle a mediados de 2006 y llegaron a colapsar repetidamente la ciudad al yugular su cinturón de ronda. La finalidad de aquella acción colectiva fue impedir a toda costa la apertura de un centro de atención a toxicómanos en el barrio[201].

En paralelo a esa interpretación que denuncia un trasfondo reaccionario en la movilización del Besòs, otra la puede presentar todavía hoy como comparable con los espasmos de rabia colectiva que han conocido barrios de bloques en otras ciudades europeas, sobre todo francesas. En esa misma

dirección, cabía destacar el rechazo que los vecinos levantados demostraron hacia las correas de transmisión institucional que eran los sindicatos, los partidos de izquierda o las asociaciones de vecinos consolidadas, lo que llevó a formas de organización abiertamente asamblearias y a la autogestión de la revuelta desde instrumentos de acción y decisión autónomos[202]. Los grupos que ya en aquel momento señalaban la reapropiación capitalista de que estaba siendo objeto Barcelona y su comarca con el pretexto de las Olimpiadas de 1992 no dudaron en apropiarse simbólicamente de la movilización de los vecinos del Besòs. En este caso, se ponía el acento en la recuperación del barrio por sus propios habitantes, de espaldas o contra asociaciones de vecinos consideradas como entregadas a los poderes políticos. Se advierte, además, que no era casual que hubieran sido los colectivos más maltratados socialmente —jóvenes en paro, ancianos y mujeres, quienes permanecen más tiempo en el barrio— los protagonistas principales de las protestas[203]. Por supuesto que los comunicados públicos de las asambleas y las declaraciones de sus portavoces insisten en desmarcarse del supuesto sostenido oficialmente y desde la prensa de que la movilización se reduce a un enfrentamiento entre vecinos de barrios distintos y se vuelve con insistencia a asociar la acción gubernamental en materia urbanística a los intereses especuladores y espectacularizadores que afectan la zona, recordando que los equipamientos revindicados serán utilizables tanto por los vecinos del Besòs como por los de La Mina.

La intención última de los intervinientes en una acción colectiva de amplio espectro como la de los vecinos del barrio del Besòs en el otoño de 1990 es ciertamente difícil de discernir, por no decir imposible. El problema central de una investigación a fondo a propósito suyo continuaría siendo el que planteó Castells en relación con las movilizaciones sociales contra la renovación del centro de París en los años setenta, que es el de establecer cuál es el significado social de las intervenciones urbanísticas, más allá de su aparente asepsia racionalizadora, y hacerlo trascendiendo "la reacción del usuario" para insertar la explicación buscada en un conjunto de contradicciones sociales, estableciendo "cuáles son las condiciones de aparición y determinación de objetivos de los movimientos sociales en el ámbito urbano", estudiando "las interacciones recíprocas entre la

intervención del urbanismo y la dinámica social en sus distintas orientaciones: participadora, reinvidicativa e impugnadora[204]". Ahora bien, en esa labor explicativa siempre existirá una zona de sombra, un punto ciego, que será el de la auténtica motivación de los actores sociales, es decir, en este caso, de las personas que se involucran en la acción colectiva. Los antropólogos hemos distinguido siempre los diferentes niveles en que una información etnográfica ha de ser considerada y sabemos que la versión que los propios protagonistas explicitan acerca de la causa de sus acciones no es nunca un factor explicativo definitivo, puesto que no da cuenta de esas acciones, sino que forma parte de ellas. Así, pues, no cabe sino intentar llegar a conclusiones a partir de la observación directa de los acontecimientos y de sus consecuencias, prestando atención a todo lo que sucede, lo que la gente hace, mucho más de la manera en que racionaliza su actividad a partir de un repertorio de justificaciones que es fácil prever que se va a mantener en lo posible dentro de los parámetros de lo políticamente correcto y va a evitar el estigma que recaería sobre una movilización en caso de ser encontrada culpable, por ejemplo —y siempre como en nuestro caso— de "racista".

La calificación en tanto que "progresista" o "reaccionaria" de una movilización ciudadana siempre es, en última instancia, moral, y es difícil que en el diagnóstico final sobre su naturaleza política no intervengan las adhesiones ideológicas de quien lo efectúa. Pero, dejando a un lado esa consideración que evalúa en términos de positivo-negativo el sentido de una acción colectiva, lo cierto es que la cuestión continúa siendo, cuando menos en el plano formal, la misma: la de cómo el factor aglutinante ha estado en la base de posibilidad misma de un determinado proceso de contestación social. Que sea en una línea impugnadora que lo haga comparable con las grandes movilizaciones vecinales de los sesenta o setenta, o con las revueltas urbanas que se han conocido hace bien poco en las periferias francesas, por ejemplo, o que, por el contrario, pueda ser comparado con los movimientos que culpabilizaban a los poderes de favorecer a los estigmatizados y no a los "normales" —por emplear el término que irónicamente propone Goffman—, es indiscutiblemente importante, pero no a efectos de la presente argumentación, que se centra de forma deliberada en cómo la concentración de habitantes agraviados o agraviables por una causa u otra es un ingrediente

fundamental para que se desencadenen formas de acción colectiva cuyo asunto central son las condiciones de vida en un determinado territorio urbano. Y es ahí donde cabe insistir en la idea de que la construcción de polígonos fue desechada justamente porque no podía dejar de convertir estos en focos de conflictividad. La conciencia por parte de las autoridades políticas y urbanísticas de que iba a ser así, por mucho que no fuera explicitada, tuvo que estar de algún modo presente en los cálculos relativos a cómo afrontar, en materia de vivienda, las nuevas dinámicas demográficas, una vez más alimentadas por el hecho migratorio. Los términos del discurso que tendría que justificar la necesidad de buscar alternativas para albergar a los nuevos y viejos pobres urbanos —o renunciar a hacerlo, que parece ser que fue lo que finalmente sucedió— se han formulado en los últimos tiempos en clave de combate contra la formación de guetos, es decir, de lucha contra la posibilidad de que la nueva clase obrera y el nuevo lumpemproletariado llegara a coagularse en algún espacio que considerase propio y desde el que llegara a tomar conciencia de su capacidad para la resistencia y la impugnación del sistema del que se sentían y se sabían víctimas.

Cuando en octubre de 2015 se conmemoró el 25 aniversario de la intifada del Besòs, el barrio había cambiado poco. Se consiguieron los equipamientos reivindicados, aunque no en lo que fue el Solar de la Palmera, sino cerca de allí. En el escenario de la batalla de octubre de 1990 existe hoy una exigua zona verde, presidida todavía por el mítico árbol y nombrada Plaça de la Palmera, un equipamiento social polivalente, un gran Lidl y unas viviendas de mercado libre. Los problemas estructurales continúan siendo los mismos que un cuarto de siglo antes y la mancha de marginación social derivada de la crisis que tanto se hizo por mantener a raya ha acabado alcanzando al barrio, que en el otoño de ese 2015 había sido invadido por una "plaga" de ocupantes ilegales de pisos y de vendedores de drogas, que habían provocado protestas de lo que fueron un día propietarios-proletarios, incluso enfrentamientos físicos que en noviembre de aquel año ocasionaron la muerte de un vecino[205].

VIOLENCIA URBANA, VIOLENCIA URBANÍSTICA[206]

Esa tendencia de los polígonos de viviendas a resultar escenario de conflictos se ha mantenido en toda Europa, como lo demuestra el hecho de que vengan conociendo periódicamente estallidos de aquello que hemos visto que los medios de comunicación tildan de "violencias urbanas". Se trata de auténticas revueltas protagonizadas por sectores insumisos de la población, sobre todo por jóvenes hijos de la antigua clase obrera —lo que es lo mismo, en casi todos sitios, que decir de la inmigración o las repatriaciones poscoloniales—, que se rebelan contra la postración a que se les ha abocado. En estos casos, la liquidación del sindicalismo de clase tradicional y su desplazamiento de la fábrica al barrio se ha visto sustituida por una creciente miserabilización de determinados polígonos de viviendas cuya población se ha visto victimizada por el paro y la precariedad laboral o por el desguace de las políticas sociales de lo que un día fuera o quisiera haber sido el Estado del bienestar, y ello en todas sus variantes: escolarización, atención sanitaria, servicios sociales y, sobre todo, crisis absoluta del alojamiento social. El tono despiadado que ha tomado la desindustrialización y la revisión liberal del Estado-providencia se ha traducido en un fuerte aumento del malestar, sobre todo entre una masa de jóvenes a los que se les ha escamoteado literalmente el futuro y que han aprovechado la mínima oportunidad para expresar radicalmente su frustración.

Es ese el momento en que la agitación en determinadas grandes concentraciones de viviendas abandona sus argumentaciones político-sindicales para desplazarse a un campo difuso de apariencia anómica, que recuerda las revueltas "sin ideas" en la Europa preindustrial o los levantamientos que protagonizan sectores del subproletariado urbano a lo largo del siglo XIX. Se trata ahora de estallidos de odio contra las instituciones y su policía, motines que —como consecuencia de la creciente etnificación de la miseria y la marginación urbanas— han podido tomar eventualmente el aspecto de "raciales", "étnicos" o —en un último periodo y por la imagen oficial, mediática y popularmente propiciada acerca del Islam — incluso religiosos. Los medios de comunicación pueden entonces mostrar a una nebulosa turba de jóvenes airados, previamente mostrados una y otra vez como asociados a la delincuencia, la drogadicción o al fundamentalismo islamista, abandonarse al pillaje de establecimientos, al incendio masivo de

automóviles y a los enfrentamientos con la policía.

Los ejemplos son numerosos desde finales de la década de los setenta hasta ahora mismo: en los barrios londinenses de Tottenham o Brixton, en octubre de 1985; en Bristol, en octubre de 1992; en el 2001: en Liverpool, en mayo, en Stoke-on-Trent, en julio, y en Oldham —cerca de Manchester—, Brixton de nuevo y Leeds en octubre; en los barrios de Forest y Saint Gilles, en Bruselas, en mayo de 1991, y en el barrio del General Eisenhower, en Amberes, en octubre de 2002…, hasta culminar en los disturbios que, arrancando en un primer estallido en Tottenham, Londres, se extendieron a varias ciudades británicas en agosto de 2011. Aquellos motines sirvieron para demonizar a los jóvenes de barrios obreros, agrupados bajo la etiqueta *chavs*[207], estética y moralmente emparentados, pongamos por caso, con quienes reciben el título genérico despectivo de "killos" y "chonis", hijos e hijas del antiguo proletariado castellanoparlante que pobló los cinturones rojos catalanes, equivalentes a su vez a los pelaos o channis en otras comunidades españolas, o los guaica franceses. En todos esos casos, la mezcla de desprecio y miedo que despierta esta tipología de jóvenes es a su vez la sobreposición y suma de identidades, cada una de las cuales ya señalaba negativa y negadoramente a sus detentadores: joven, habitante de barrios pobres, hijo/a de obreros, extranjero/a…

En Francia, esa conflictivización violenta ha devenido crónica y son cíclicos los motines urbanos, algunos de gran virulencia, en una tradición que arrancaría acaso en el motín de Vaulx-en-Velin, un suburbio de Lyon, en 1979, y que iría repitiendo casi de manera regular sus manifestaciones: en el barrio de Les Minguettes, en Vénissieux, cerca de la misma ciudad, en el verano de 1981 y, después, en 1985; en Reims, en noviembre de 1982; en Vaulx, en 1990; en 1991, en Le Val Fourré, en París; en 1993 y 1997 en Dammarie-lès-Lys, también en París; en Dammarie, en 1997; en Toulouse, en diciembre de 1998, y más tarde en diciembre de 1999, para alcanzar su máxima expresión en la extraordinaria oleada de descontento que conocieron los llamados "barrios difíciles" de casi todas las ciudades francesas —París, Burdeos, Estrasburgo, Lyon, Rennes, Amiens, Rouen, Niza, Dijon, Perpiñán, Orleans…— a lo largo de varias jornadas en el otoño de 2005 y que solo se pudo atajar con la declaración del estado de emergencia en todo el país y el

toque de queda en diversos barrios[208]. Este tipo de estallidos, como dosis "de recuerdo", se continuaron produciendo después: Villiers-le-Bel, en el valle del Oise, al norte de París, en noviembre de 2011; Villeneuve, en Grenoble, en octubre de 2010; Trappes, al oeste de París, en julio de 2013; en la Cité des 3000, en Aulnay Sous Bois, en febrero de 2017…

El caso francés es bien ilustrativo. Determinadas políticas en materia de vivienda social y de prevención de los alquileres impagados procuraron, a partir de mediados de los años setenta, una progresiva sustitución en los *grandes ensembles*: una población compuesta por familias de clase obrera cualificada o de empleados, que tendió a "huir" hacia centros urbanos "recuperados" o a barrios de nueva construcción, fue dando paso a familias pauperizadas, lo que dio pie, a su vez, a un paulatino cierre de comercios de proximidad, una desatención creciente por parte de la Administración, un aumento en los índices de delincuencia, el asentamiento masivo de familias pobres procedentes de las colonias o de la inmigración —con frecuencia, ilegal—, niveles de fracaso escolar y de desempleo muy por encima de la media nacional, sobrerrepresentación de jóvenes y de familias numerosas o generalización del consumo de drogas o alcohol, con frecuencia como instrumentos de sociabilidad. Se había producido la sustitución de los antiguos explotados por los nuevos excluidos, a los que, en una sociedad en que se ha decretado el fin de la lucha de clases, se les escamoteaba la dignidad y la legitimidad como trabajadores o, como en Francia, se les desposeía simbólicamente de su condición de ciudadanos para remitirlos al capítulo clasificatorio de *inmigrantes*. Las cuestiones centrales se trasladaban así al contraste integración/marginación y la división fundamental ya no era de orden vertical —del tipo explotadores/explotados—, sino horizontal, entre gente *dentro* y gente *fuera*, entre grupos y personas *in* y grupos y personas *out*, lo que llevaba a formas relativamente nuevas de segregación espacial[209].

Pero hay algo en lo que no se diferenciaba el papel de los explotados y el de los excluidos a la hora de hacer un uso intensivo del espacio que habitaban, sobre todo cuando se les daba la oportunidad de verse cada día, de estar juntos, de *coincidir* en el tiempo y en el territorio de su cotidianeidad. Habíamos visto afianzarse en las grandes ciudades dormitorio una fuerte actividad centrada en la apropiación del espacio colectivo más inmediato, por

parte de jóvenes para los que en buena medida los centros urbanos aparecían poco menos que vedados. En esos contextos de inmediatez podían organizarse en grupos de afinidad —presentados como "bandas" o "pandillas"—, susceptibles de proveer de identidades de referencia y formas lo suficientemente sólidas de organización y congruencia que contrarrestasen la desarticulación social que experimentaban a su alrededor. Películas como *La Haine,* dirigida por Mathieu Kassovitz (1994), o *Ma 6-T va crack'er,* de Jean-François Richet (1997), describen de una forma bien acertada este clima de hostilidad contra el sistema que ha cuajado en numerosas ciudades-dormitorio francesas, feudos que fueron hasta hace no mucho del Partido Comunista y de sus virtudes organizativas. En ambos filmes se describe de forma eficaz cómo la población joven vive su exclusión del centro de ciudades en las que es difícil no sentirse como intrusos indeseables, cómo han de soportar el hostigamiento de una policía que los desprecia y maltrata, al tiempo que hacen un uso exhaustivo e intenso de sus espacios de reunión más cercanos, convertidos en marcos en que practicar formas específicas de sociabilidad de las que pueden obtener fuentes de apoyo mutuo, generar productos culturales hechos propios —la música *hip-hop*, por ejemplo—, sin dejar de tomar conciencia de su potencia para convertir ese mismo escenario de su vida cotidiana en proscenio para la revuelta. Ahí puede apreciarse hasta qué punto los *grandes ensembles* hacen posible esa puesta en común de estados de ánimo y ese traspaso que convierte la desesperación en rabia contra las instituciones políticas, religiosas, escolares, etc., y contra todo aquello que simbolice la situación de postergamiento que les afecta[210].

Es interesante, en ese sentido, contemplar cómo las grandes discusiones públicas que se plantearon en aquel momento, ante las dimensiones que asumió la revuelta en las *banlieues* francesas, insistieron en colocar en el centro de los discursos la noción de gueto, como si esta fuera la clave que explicaba qué había sucedido y por qué, y como si la solución para los conflictos suscitados no fuera la de mejorar las condiciones de vida de los barrios populares, ni siquiera aliviar los motivos de la desolación de los jóvenes, sino evitar a toda costa que esos sectores sociales que se habían mostrado tan vehementemente ofendidos llegaran a vivir concentrados en áreas demasiado circunscritas, propiciadoras del encuentro cotidiano, la

coincidencia física, la interacción intensa y constante y, derivado de todo ello, dotadas de viabilidad para desarrollar formas de organización y de acción colectivas. El problema, en efecto, no parecía ser la miseria, sino una acumulación excesiva de miserables por metro cuadrado.

Toda esta especie de etnias de edad sirven para encuadrar en ellas a una juventud siempre al borde de convertirse en materia para lo que se da en llamar "justicia juvenil", una muestra más del uso de ese adjetivo para conceptualizar la excepcionalidad crónica que afecta a los jóvenes de las clases populares, percibidos como a un paso de ser abducidos por los mecanismos de control penal sobre los desposeídos, objetivos de políticas de prevención no de la exclusión, sino de la desviación y la indisciplina; destinatarios de un "trabajo social" que aspira a redimirlos antes incluso de que delincan. Es en ese territorio donde se hace palpable la cooperación necesaria entre la gestión mercantil de lo social y la gestión policial de la pobreza, puesto que la primera exige y obtiene de la segunda la labor de mantener a los jóvenes de los barrios populares enclaustrados en algo así como un gigantesco campo de concentración virtual, rodeados de muros y alambradas invisibles y custodiados por agentes estatales —del empleado social al policía— que los mantengan bajo el permanente escrutinio de un gran dispositivo de contención preventiva.

En España, el terremoto que supuso la metástasis de lucha social en los cercanos extrarradios urbanos franceses sirvió precisamente para advertir de los peligros que implicaba la posibilidad de que se formaran guetos de inmigrantes, un asunto que ya hacía tiempo que había cobrado protagonismo en las polémicas acerca de qué había que hacer con los nuevos vecinos de origen extranjero que se iban incorporando al tejido urbano, suscitando necesidades habitacionales crecientes que —se repetía— no podían traducirse en enclaves "étnicamente" homogéneos. El asunto incluso tuvo su réplica en el campo educativo, también en el sentido de la importancia de evitar la formación de guetos o concentración en unos mismos colegios de un exceso de población escolar procedente de "otras culturas". La retórica empleada al respecto no dejaba de insistir en que se trataba de evitar los efectos más perniciosos de la segregación social, de tal forma que importantes bolsas de población se vieran arrinconadas en espacios poco menos que

cerrados, definidos por todo tipo de cargas negativas, y que convirtieran a sus "reclusos" en seres privados de un acceso igualitario a los bienes materiales y simbólicos de los que la vida urbana se supone que es garante.

La noción de gueto es polémica. Se aceptaría como definición adecuada, aunque fuera a título provisional, que sirve para nombrar "un reagrupamiento espacial que asocia estrechamente poblaciones desfavorecidas a territorios circunscritos"[211]. En efecto, a pesar de la confusión conceptual que arrastra y los avatares históricos de su empleo, la noción de gueto se usa esencialmente para hacer referencia a la acumulación en un determinado enclave de familias singularizadas por las dificultades con que se enfrentan en su integración económica, laboral, escolar, etc. Como se ha remarcado, todo lo que se escribe o se dice al respecto del gueto siempre acaba sugiriendo que, si esas personas postergadas no vivieran juntas, sus problemas quedarían solucionados o, cuanto menos, aliviados, cosa que el sentido común tendería a descartar. En realidad, apenas se disimula que la concentración de excluidos no es un problema para los excluidos, sino para lo excluidores. En otras palabras, que la lucha contra la segregación espacial de los inmigrantes —o de cualquier otro sector potencialmente problemático por la tendencia que en cualquier momento puede mostrar a defenderse de los abusos que le afectan— lo es no tanto contra su marginación espacial, sino contra la posibilidad de que esos seres humanos agraviados se agrupen, reconozcan que comparten intereses y objetivos y tomen conciencia de su fuerza y de su capacidad para desplegarla.

El tiempo acaso haya sido injusto con los aportes de la Escuela de Chicago, aquel núcleo de sociólogos que sintieron la necesidad de aplicar una mirada de inequívoca extracción etnográfica sobre la complejidad urbana. Denigrados por su darwinismo social, convertidos en teóricos del liberalismo individualista en materia de ciudad, no se ha apreciado hasta qué punto muchas de sus intuiciones estaban cargadas de sensitividad hacia lo específico del fenómeno citadino y hacia sus cualidades autoorganizativas. Sus perspectivas sobre el gueto, formalizadas en el clásico de Louis Wirth, *The Ghetto,* publicado en 1927, tuvieron el mérito de percibir cómo la concentración en un mismo espacio, incluso la autosegregación, constituía una ventaja para los *no asimilados* —por emplear el término que proponía el

propio Wirth—, que encontraban en la proximidad física continuada un soporte fundamental para aquellas redes de ayuda mutua que les permitían sobrevivir en un universo social —el urbano, entendido como modo de vida — que prescindía de ellos o les era hostil.

Es difícil defender hoy el moralismo de muchas de las sentencias de aquella escuela, ni un culturalismo teñido de idealismo[212]. Ni que decir tiene que, al menos en términos generales, continúa siendo incontestable lo que apuntaran primero Engels, en su célebre estudio sobre la situación de la vivienda entre la clase obrera inglesa de la época victoriana, y después, en su senda, David Harvey, acerca de cómo la segregación espacial resulta en última instancia de las dificultades de la población con recursos escasos para acceder al mercado de la vivienda, como consecuencia, a su vez, de la licitación de esta desde bases capitalistas. Así, pues, nos encontraríamos con un ejemplo más de la necesidad de atemperar los análisis chicaguianos, puesto que no se trata de cuestionar la evidencia de que las personas que habitan zonas residuales y deterioradas lo hagan porque no tienen otra opción, sino que, una vez arrastradas a ellas y encerradas dentro, no hagan de su enclaustramiento forzoso un lugar de y para la resistencia, la solidaridad entre iguales y, en determinadas oportunidades, la contestación política. Digamos que el análisis marxista no se equivoca cuando indica determinantes económicos que, en última instancia, arrinconan a ciertos grupos sociales en centros depauperados o periferias desasistidas, pero tampoco los chicaguianos dejaban de tener razón cuando hacían entrar en juego la manera en que esa distribución acababa haciendo cristalizar energías y fuerzas que eran "naturales", en el sentido de que no eran distintas de aquellas otras que, por doquier en el mundo vivo, articulaban las diferentes formas de existir a sus contextos espaciales en forma de todo tipo de competencias, agenciamientos y simbiosis, en las que la autoorganización ocupaba un papel fundamental. De esa manera, la eficacia funcional del gueto —dejando de la do cuáles habían sido los factores que lo hubieran generado— consistía en su idoneidad para la solidaridad y las iniciativas colectivas[213].

Sin entrar en la dilatada discusión teórica a propósito de las definiciones que se le han asignado, lo cierto es que el gueto ha visto aumentada su mala reputación, sistemáticamente asociado en sus representaciones al desorden, a

la marginación, a la desviación, al vicio, al delito, etc., como si de una colosal concentración de anomia y detritus morales se tratara[214]. Frente a esas imágenes —repetidas una y otra vez desde los discursos oficiales—, el gran argumento en contra del gueto es la nunca del todo ni justificada ni demostrada virtud de la mezcolanza. La premisa teórica es que "el antídoto contra la segregación urbana y la exclusión social es favorecer, mediante la intervención pública, la mezcla social sobre el territorio, la convivencia y la interacción en los espacios urbanos de diversos grupos sociales (sobre todo, por recursos económicos, pero también por religión, por características étnicas)[215]". Como se ve, se supone que intercalar clases y grupos étnicos tiene efectos beneficiosos que, por otra parte, nunca han visto comprobada su presunta bondad para otra cosa que no sea sosegar, por la vía de la disolución, la tendencia que los sectores más desfavorecidos de la sociedad tienen a devenir fuente de intranquilidad para las clases políticas y económicamente hegemónicas. Viviendo unos al lado de los otros y encontrándose cada día por la calle, en la puerta de los colegios, en las plazas, en los comercios, en los bares, los segmentos socialmente desiguales y, con frecuencia, con intereses incompatibles van a renunciar a plantear contenciosos y se van a fundir en un abrazo ciudadano inmenso y onmiabarcador en que se concretaría la utopía al mismo tiempo urbanística y política de una superación de los antagonismos sociales por la vía de la asunción de los valores abstractos basados en el consenso y en la conciencia ciudadana.

Que el elogio oficial de la mixtura camufla objetivos bien poco altruistas es algo que delata una mínima observación sobre lo que ocurre en su aplicación. En Francia, las acciones públicas a favor de la mezcla social han implicado dispositivos de gestión en la asignación de viviendas sociales basados en formas sutilísimas de control y discriminación institucional, que acaban afectando a los hogares más pobres. En una última etapa, a esas cualidades casi místicas de la copresencia armoniosa entre clases, en un escenario urbano predispuesto para la reconciliación, se le añade el atractivo que para las clases medias más "sensibilizadas" supone una dosis controlada y relativa de "diversidad étnica" —una forma nueva de referirse al reencuentro en un mismo espacio físico con los pobres—, que procura una cierta estampa de

multiculturalismo y cosmopolitismo, referente puramente estético destinado a atender las demandas en materia de buena conciencia que reclaman esos sectores sociales interesados en las dinámicas de gentrificación, es decir, en la reocupación por clases medias y altas de centros urbanos rehabilitados, en los que se espera que pulule una cantidad aceptable de inmigrantes que garanticen el nuevo colorido local, el nuevo tipismo pluriétnico. Casos paradigmáticos de ello serían los de los barrios del Raval en Barcelona o Lavapiés en Madrid, festines inmobiliarios en los que el multiculturalismo escénico actúa como gancho para inversores, nuevos propietarios o incluso inquilinos jóvenes o extranjeros que quieran garantizarse periódicas inmersiones —unos meses, un fin de semana— en ambientes de multiculturalismo bien temperado.

También se busca esa superposición de funciones en los propios barrios de bloques, como si la colonización por parte de habitantes y actividades no marginales se constituyera en un factor de redención de lo que hasta hacía poco habían sido focos de marginación y conflictividad. Ese es el caso de proyectos de remodelación como los del propio barrio de La Mina —y Villaverde, en Madrid; El Puche, en Almería; el Polígono Sur, en Sevilla; Orriols, en Valencia, o San Francisco, en Bilbao, unos de los ejemplos más recurrentemente citados de gueto en el Estado español—, para el que se prevé una transformación que coloque precisamente la diversidad en el eje de sus objetivos, para ver cumplida la utopía del reencuentro final entre integrados y marginales, siempre desde el presupuesto que entiende el gueto como el mal a combatir por todos los medios: "El principio de diversidad toma en la ciudad el mayor valor y debe garantizar la mayor riqueza de relaciones entre sus componentes. Diversidad que debe darse en todos los niveles sociales, en la composición de las personas y de los vecinos; física, en la definición de los espacios, arquitecturas y tipologías de viviendas, y económica, en la diversificación de las actividades"[216].

Recuérdese que la actual fobia al gueto arranca, en buena medida, de los mencionados ciclos de revueltas en la periferia francesa, en concreto a partir de los disturbios del barrio de Les Minguettes, en Lyon, en junio de 1991, que dieron pie a una ley explícitamente antigueto que aspiraba a lograr una diversificación social en los espacios metropolitanos y a evitar la

aglomeración de miseria y conflictividad. Desde entonces, los argumentos contra la formación de guetos no han hecho sino insistir en la indeseabilidad de cualquier tipo de iniciativa en materia urbanística que implicase la concentración de desfavorecidos. En Francia, las políticas antigueto impulsadas desde la izquierda —el Partido Comunista en los *grandes ensembles* de los antiguos cinturones rojos— se han basado en el supuesto reaccionario de que la causa del deterioro de los barrios obreros no se debía a los procesos de precarización laboral y a la desarticulación del Estado del bienestar, sino a la concentración espacial de pobres e inmigrantes. En España, la amenaza constantemente subrayada como sobremanera indeseable de que aparezcan guetos es el argumento perfecto para abortar cualquier intento de generar vivienda social, puesto que se da por descontado que esa vivienda de alquiler o venta accesible —que, dadas las dimensiones del problema de la vivienda, implicaría seguramente el regreso a algo que acabaría evocando la antigua política de barrios de bloques— será rápidamente copada por las capas sociales más desfavorecidas, fundamentalmente personas procedentes de la inmigración o familias adscritas a "minorías étnicas" empobrecidas o marginales. De ahí, también, que se enfatice tanto que las pocas promociones de vivienda social se van a destinar a jóvenes, como una forma de tranquilizar el futuro que aguarda a las zonas donde se ejecute ese tipo de iniciativas[217].

GUETO Y PRISIÓN

En todo proyecto urbanístico siempre hay mucho más que una mera intención ordenadora que emplea para sus fines determinadas composiciones formales. Tras cada iniciativa en materia urbanística existe una doctrina relativa a lo que se quiere que suceda o que no suceda en ella, a qué tipo de acontecimientos se pretende propiciar o evitar a toda costa. En ese orden de cosas, es plausible la hipótesis según la cual las dificultades a la hora de controlar política y policialmente los barrios populares de bloques sean una de las razones que determinaron su abandono como tipología. Ahora bien, lo que debería estar claro es que entre estos factores que, incluyendo aquel o no, provocaron el declive de los grandes polígonos de viviendas no figura el

de la solución definitiva de los problemas de acomodo de los más desfavorecidos que justificaron su generalización.

Las detestables y detestadas ciudades-dormitorio de los sesenta resultaron de una intervención pública que ensayó soluciones al cada vez más acuciante problema de la vivienda, que hasta entonces había sido aliviado a través de la igualmente detestable alternativa de la autoconstrucción en agrupaciones chabolistas. No se discute que tanto una solución como la otra fueron indeseables y es difícil justificar un elogio tanto de la infravivienda barraquista como de la construcción casi fraudulenta de bloques en pésimas condiciones. Ahora bien, *eran ciertamente soluciones* a un problema que no ha dejado nunca de existir, si es que en ciertos sentidos no se ha agudizado con la persistencia de una demanda que continúa bien activa: la de los jóvenes que quieren constituir nuevos hogares, la de las personas mayores y los empobrecidos en general, que solo pueden pagar alquileres muy bajos, y una vez más, como siempre, la procedente de una inmigración hacia las grandes ciudades de capitalismo avanzado que se ha vuelto a intensificar por las demandas de los nuevos ciclos económicos[218].

El caso de las dinámicas migratorias que atraen a los núcleos urbanos a individuos y familias destinados a alimentar el mercado laboral es elocuente. Ese mismo tipo de población procedente del exterior, que en fases anteriores se había asentado en barriadas de autoconstrucción y después en los grandes barrios de bloques en las periferias urbanas, se ve hoy condenada a vivir en unas crecientes condiciones de clandestinidad, no solo jurídica y laboral, sino también habitacional. Sin ningún tipo de previsión de vivienda social para ellos, se les obliga a dispersarse por la trama urbana en busca de la escasa oferta de vivienda asequible para ellos. En Francia, en el verano de 2005, poco antes de que estallara la insurrección en los barrios de viviendas de protección oficial, habían ardido en pocos días dos edificios ocupados por inmigrantes, con el resultado de dieciséis muertos en cada caso. Al año siguiente, en agosto de 2006, la policía francesa desalojaba por la fuerza a más de mil inmigrantes de origen africano que desde hacía cuatro años tenían ocupadas unas instalaciones escolares abandonadas en Cachan, cerca de París. Tales sucesos advirtieron de la crudeza de la vida de los inmigrantes más recientes, que tenían que acomodarse como podían en cualquiera de los

cientos de edificios insalubres e inseguros diseminados por los barrios más deteriorados de París, de otras ciudades y de sus respectivos extrarradios. Sus responsables: los llamados *casseurs* o "rompedores", asociados a la estética rapera.

No cabe duda de que el origen de las "violencias urbanas" que estallaron en las *banlieues* francesas en el otoño de 2005, pero que se habían convertido en recurrentes desde hacía casi veinte años atrás y se repitieron luego, trasciende las competencias del urbanismo, pero estas no le son del todo ajenas. Las 752 "zonas urbanas sensibles" censadas por el Gobierno francés eran, en casi todos los casos, grandes conjuntos de vivienda social, esa fórmula de construcción masiva que se consideraba en crisis. Como se acaba de subrayar, hasta principios de los años setenta la política de grandes bloques de viviendas había servido para absorber a los cientos de miles de inmigrantes y de repatriados de las colonias emancipadas. Los grandes conjuntos e incluso las nuevas ciudades fueron la alternativa para asentar a esa nueva población, aunque fuera en zonas mal comunicadas, estranguladas entre infraestructuras viarias, sin apenas equipamientos… En un cierto momento, coincidiendo con la instalación en las cercanías de esos núcleos populares de viviendas unifamiliares destinadas a clases medias, se inicia un proceso de deterioro que devalúa las viviendas y las convierte en las únicas asequibles para la última hornada de inmigrantes. Muchos de esos barrios de bloques son destruidos, algunos de notable valor arquitectónico, como La Cité des 4000 en La Courneuve.

En un artículo copiosamente reproducido en su día —a la sombra de los acontecimientos en Francia del 2005—, el arquitecto y urbanista François Chaslin se preguntaba de qué iba a servir la demolición masiva de las 250.000 viviendas que habían sido un día sociales, en una política que parecía ensañarse extrañamente contra las construcciones más valiosas arquitectónica —los trabajos de Émile Aillaud y Jean Dubuisson, por ejemplo—, patrimonial o hasta sentimentalmente, como en los casos en que los vecinos se movilizaban para impedir la destrucción de sus bloques[219]. La situación en el Estado español no es menos desoladora por lo que hace a políticas de vivienda social, poco menos que inexistentes. Los núcleos de bloques que sirvieron en su día para realojar a los chabolistas han heredado

su estigma y continúan siendo un foco de miseria y marginación que los planes de rehabilitación seguro que ni siquiera lograrán aliviar.

En Barcelona ya hemos visto cómo el proceso que a partir de los años setenta lleva a una recuperación capitalista de los centros urbanos ha conllevado políticas masivas de desalojo de antiguos inquilinos, muchas veces mediante el hostigamiento y la coerción. Los barrios de bloques ocupados por la antigua clase obrera defienden las prerrogativas conseguidas mediante la movilización y con frecuencia se blindan ante nuevos vecinos que puedan alterar la ya de por sí precaria estabilidad social obtenida, a menudo concretada en viviendas de propiedad que han resultado de lo que fuera la política franquista de "un operario, un propietario". En tal marco, las oleadas de inmigrantes que llegan convocados por las demandas de mano de obra informal acaban encontrando viviendas igualmente informales, auténticos sumideros en zonas depauperadas, hacinándose en pisos ruinosos —por los que pagan alquileres abusivos—, aprovechando pensiones ilegales, rearrendando habitáculos a veces insólitos —balcones, patios interiores, camas calientes, apartamentos rotatorios…— u ocupando fincas rurales abandonadas[220]. En los últimos años, la imposibilidad literal de las familias más pobres de acceder a un piso —un problema que el barraquismo había solventado—, está llevando a una oleada de ocupaciones ilegales de viviendas vacantes, propiedad de bancos sobre todo, algunas de ellas para ser posteriormente arrendadas de manera fraudulenta a terceros. En febrero de 2017, según el Ayuntamiento, el 37 por ciento de viviendas de Nou Barris están habitadas por vecinos en situación ilegal[221]. La vieja figura del realquilado aparece ya del todo generalizada. Los jóvenes precarizados tienen pocas posibilidades de adquirir un piso a precio de mercado o de encontrar algo asequible en un mercado de alquiler actualmente, en Barcelona, en manos de la especulación turística, pero, si se dio algún amago de iniciativa inmobiliaria de protección oficial, durante mucho tiempo se insistió en advertir que sus destinatarios serían justamente compradores o inquilinos jóvenes cuya pobreza se entienda que es provisional y superable, en contextos en que no se contemplaba la posibilidad de que alguien pueda pertenecer o acabar perteneciendo a algo que no sea una abstracta clase media universal. Ello en un contexto en que toda iniciativa en materia de

alojamiento social masivo era cuestionada y rápidamente tildada de promotora de guetos. Las políticas de promoción de vivienda pública impulsadas por Ada Colau —el Plan por el Derecho a la Vivienda (2016-2026)—, tan bienintencionadas, son del todo insuficientes para paliar el problema de alojamiento de los sectores más empobrecidos de la población y solo intentan acercarse a los estándares europeos en materia habitacional.

No es cuestión de insistir más en las dimensiones del problema de la vivienda en Europa, en España y en Barcelona en particular, pero sí que la alternativa a las viejas políticas de construcción social no ha sido nuevas políticas de construcción social, sino la dimisión de entender la vivienda como un servicio público y la renuncia a plantearse la cuestión de su inaccesibilidad para una buena parte de la población. Es más, parece que la situación se invierte. Si en los sesenta y setenta se pudo ser testigo de expropiaciones masivas de suelo privado por parte de la Administración, en las fases posteriores fueron muchos ayuntamientos los que se dejaron expropiar por las inmobiliarias, en la medida en que descubrieron que poner terrenos públicos al servicio de la promoción privada y la especulación constituía una de sus grandes fuentes de recursos, si no la más importante, con una frecuente derivación en actos de corrupción. El resultado final: un marco definido por la casi desaparición de la vivienda protegida y de promoción pública, una oferta de alquileres hasta hace poco escasa y ahora cara y aun la desaparición de las pensiones baratas en los centros urbanos deteriorados, que eran el último recurso de las personas en situación más precaria. Los nuevos ayuntamientos surgidos de mayo de 2015 han hecho un esfuerzo por atenuar el problema, pero la escasez de suelo en ciudades como Barcelona hace leve su eficacia. Pero si acaso la preocupación por la vivienda social recuperara y retomara el papel central de la gestión pública en el crecimiento urbano, está claro que no se traduciría en una revitalización de lo que fueron las políticas de grandes conjuntos residenciales para las clases populares, ni la tipología de los desprestigiados polígonos de viviendas. Y es probable que, en el descarte de este tipo de opción, figure el fracaso de este formato urbanístico para purgar la vida urbana de su crónica tendencia al conflicto y su predisposición a ser justamente lo contrario de lo que se preveía que fuera, es decir, núcleos desde los que los poderosos recibieran

noticia de la consubstancial condición ingobernable de las ciudades.

De ahí el pánico ante la constitución de lo que los imaginarios social y oficial llaman guetos. Por citar los ejemplos más recientes del protagonismo de lo que en la práctica funciona como un espantajo, recordemos a Oriol Nel·lo, a la sazón secretario general de Planificación de la Generalitat y hoy otro de los técnicos-ideólogos de confianza de Ada Colau, al presentar en marzo de 2006 el Plan Territorial para Cataluña y establecer en su discurso que los planes urbanísticos debían evitar a toda costa "la formación de guetos" (*El País,* 31 de marzo de 2006). En la presentación de los planes de rehabilitación del Carmel, a principios de 2006, también se planteó la urgencia de difuminar los efectos negativos de una presencia excesiva de inmigrantes, justo para "evitar la formación de guetos" (*El País*, 26 de enero de 2006). Desde su toma de posesión, el nuevo alcalde de la ciudad, Jordi Hereu, se planteó como prioridad precisamente las políticas que impidieran la constitución de guetos, uno de los factores que —como explicitó en su primera conferencia-balance anual— más directamente amenaza "el concepto de ciudadanía" (*El Periódico*, 10 de enero de 2007).

Como ha insistido en señalar Mikel Aramburu, la prevención contra la eventual instauración de guetos está sirviendo hoy por hoy como uno de los principales argumentos para limitar la construcción de vivienda social[222]. No hay plan urbanístico que no se plantee como objetivo "evitar la formación del guetos", objetivo para el que se propone y se dispone una inyección de actuaciones de todo tipo que animen lo que se da en llamar "diversificación social" y que, como se apuntaba al principio, tomando como referencia la Ley de Barrios vigente en Cataluña, lo que se busca —o, al menos, se obtiene— no es sino una gentrificación disimulada. Por descontado, y como acertadamente señalaba Horacio Capel en su ya elogiado análisis del "modelo Barcelona", que esas políticas nunca afectan a barrios que ya eran de clase media o alta, en los que a ningún urbanista oficial se le ocurre animar a instalarse a familias pobres o marginales para asegurar la supuestamente deseada "heterogeneidad social"[223].

En diciembre de 1985 se inicia en España —bajo los auspicios de Enrique Múgica como ministro de Justicia y previo pacto entre los grandes partidos políticos mayoritarios— una política carcelaria consistente en distribuir a los

prisioneros de ETA en diversos presidios a lo largo y ancho del Estado. Esa iniciativa —conocida como "política de dispersión de presos", todavía vigente— fue después recurrentemente cuestionada, incluso por algunos de los grupos que inicialmente le habían dado apoyo. La función de esa medida en política penitenciaria fue —así se explicitó— asegurarse de que los presos de ETA nunca aparecerían reunidos en un centro con la suficiente cantidad y capacidad de contacto como para que su agrupación física se tradujera en desobediencia organizada. No deja de ser significativo que un autor como Louis Wacquant —fuente de reflexión teórica tanto para la cuestión del gueto como para las políticas de represión y castigo de la pobreza que aparecen encubiertas bajo el epígrafe de "lucha contra el delito"[224]— fuera quien advirtiera que las políticas presidiarias están siendo por doquier una continuación natural de las políticas de guetización de la miseria urbana y que la cárcel es, de algún modo hoy, una continuación natural del gueto, del que supondría una simbiosis estructural y un sustituto funcional. Tanto el gueto como la cárcel se conforman en instituciones de encierro forzoso: "El gueto es una especie de 'prisión social', mientras que la prisión funciona como 'gueto jurídico'. Ambos tienen como misión confinar a una población estigmatizada con el fin de neutralizar la amenaza material o simbólica que esa población plantea para la sociedad de la que, por decirlo así, ha sido extirpada[225]". En ese orden de cosas, no es de extrañar que haya habido quien concibiera que ni siquiera el sistema carcelario debería tolerar que la concentración de presos cuya homogeneidad fuera más allá de su condición de encerrados acabará traduciéndose en capacidad de contestación organizada a su situación.

Así, a partir de esa misma apreciación de Wacquant, bien podríamos decir que las políticas urbanísticas antiguetos están orientadas no en vano en ese mismo sentido, esto es, el de dispersar a los excluidos, difuminar su descontento, obstaculizando de ese modo que, a partir del elemental contacto cara-cara, pudieran tomar conciencia compartida de su situación, pero, sobre todo, de su capacidad de actuar colectivamente y con eficacia contra ella. La heterogeneidad social que se proclama buscar en la constitución de los barrios urbanos no sería entonces sino una estrategia para diluir la potencialidad cuestionadora de aquellos a los que se ha colocado en los

flancos más ofendidos del sistema de vida que unos gozan y muchos más han de sufrir. Dispersados, atomizados, alejados unos de otros, amontonados en reductos intersticiales, los desfavorecidos —los jóvenes sin perspectiva de incorporarse a la clase media, la depauperada y todavía desarticulada nueva clase obrera que alimentan los inmigrantes, los nuevos marginados de toda la vida—, viviendo en agujeros separados unos de otros, verán colapsada cualquier oportunidad de contemplar hasta qué punto son muchos y capaces de impugnar con fuerza el desorden que padecen.

CAPÍTULO 5

LOS JÓVENES Y LA NUEVA VIOLENCIA ARCAICA

Resulta interesante comprobar la manera en que los discursos políticos hegemónicos emplean, como si fueran naturales, nociones que apenas sí disimulan su génesis y su vocación ideológicas. Ese sería el caso de los usos que la trivialización mediática y la propaganda política —con el oportuno respaldo de unas ciencias sociales debidamente adiestradas para ello— hacen del término *violencia*, una categoría cuyo significado se da siempre por supuesto sin que quienes la emplean se sientan nunca obligados a establecer en relación con qué asuntos lo hacen y con qué otros, en cambio, no. La violencia no es, en este sentido, una cualidad de las conductas, sino un atributo que alguien, que se considera legitimado para hacerlo, les aplica desde fuera para delatar en ellas alguna cosa perversa que ha de ser controlada, atenuada o neutralizada. La violencia es mucho más algo de lo que se habla que algo que ocurre. En realidad, bien podríamos decir que la violencia es solo aquello que de ella se dice, el comentario o el juicio que, a propósito suyo, se enuncia un tema de conversación, de preocupación, de desasosiego, de ansiedad, un tema que centra debates y que incita leyes especiales. La violencia resulta siempre de valoraciones sociales, políticas y culturales, que no es que la determinen, sino que la producen en tanto que objeto de su propio discurso. Dicho de otra forma, todavía más radical, la violencia no alimenta los argumentos a propósito suyo: resulta de ellos.

Si tuviéramos que ser rigurosos, no deberíamos hablar de fenómenos de violencia, sino de sucesos a los que se atribuye una especie de calidad interna especial a la que bien podríamos destinar un neologismo acuñado por

Gerardo Guthmann: *violencidad*[226]. Esta *violencidad* y sus grados se reconocerían en función de criterios que ni tan solo tienen nada que ver con la intensidad de la fuerza injustificada o excesiva aplicada, ni con el mal físico o moral causado en las víctimas. Los usos de este principio clasificatorio que etiqueta como "violentos" ciertos comportamientos no pueden desvincularse del papel que juega el ejercicio de la fuerza en las sociedades modernas, dotadas de una institución política —el Estado— que se autoproclama su guardiana y administradora y que la concentra en instituciones especializadas —ejército, policía, sistema jurídico-penitenciario…—, cuyos fines-valores, como ha señalado Josetxo Beriain, experimentan un distanciamiento creciente con respecto de los fines-valores de una sociedad que en su conjunto afirma una y otra vez que rechaza la violencia[227]. De ahí las discusiones, las indagaciones "científicas" sobre la "agresividad", las leyes, las normativas que demarcan la violencia y exigen para ella una correcta custodia y administración. La emergencia incontrolada de la "violencia" —esto es, las fugas de una energía societaria, pero imaginada como exterior a la sociedad, que la centralización política recibe la prerrogativa de almacenar y administrar— es vista entonces como algo que imposibilita lo que se supone que debe ser un agregado humano armonioso y coherente, un sistema de órganos integrados que asume, sin acaso creérsela nunca del todo, la ilusión de que puede funcionar sin recurrir a una fuerza que de hecho ya no posee, o, mejor dicho, a la que ha renunciado para cedérsela en usufructo al Estado.

La violencia es objeto de discursos que la perfilan como una irrupción del otro absoluto, que la asocian al inframundo de los instintos, que prueban nuestro parentesco inmediato con los animales o que advierten del acecho cercano de potencias maléficas. La violencia ejercida por personas ordinarias no legitimadas es entendida como abominable, monstruosa, en cualquier caso, siempre extrasocial. La representación mediática, sobrecargada de tintes melodramáticos, de esa violencia no solo antisocial, sino asocial, no hace sino incidir constantemente en la degradación que indica el uso no legítimo de la fuerza bruta, que convierte a sus ejecutores en menos que humanos, representantes de instancias subsociales. La fantasía mediática y los discursos políticos y policiales que hablan constantemente de esa

violencia exógena a lo social humano procuran hacer de ella un auténtico espectáculo aleccionador para las masas. En los medios de comunicación y en los discursos oficiales que "condenan la violencia" no se habla nunca, por supuesto, de la violencia tecnológica y orgánica, aquella que se subvenciona con los impuestos de pacíficos ciudadanos que proclaman odiar la violencia. No mencionan la muerte aséptica, perfecta y en masa provocada por los misiles inteligentes o las bombas con uranio empobrecido, o de los bloqueos contra la población civil. No hacen alusión a las víctimas incalculables de la guerra y la represión política. Vuelven una vez y otra a remarcar lo que Jacques Derrida había llamado la "nueva violencia arcaica", elemental, sucia, la violencia primitiva del asesino real o imaginario, del sádico violador de niñas, del terrorista, del exterminador étnico, del *hooligan,* del delincuente juvenil, del joven radical, del *skin*.

Frente a una violencia homogénea, solo concebible asociada al aparato político y a la lucha por la defensa y la conquista del Estado, una violencia *heterogénea,* dispersa, caótica, errática, episódica, primaria, animal, asociada a todas las formas concebibles y hasta inconcebibles de alteridad: violencia terrorista, criminal, demente, enferma, étnica, instintiva, animal; violencia informal, poco o nada organizada: bomba casera, cóctel molotov, arma de contrabando, puñal, piedra, hacha, palo, veneno, puñetazos, mordiscos, patadas… De hecho, esa es la violencia que parece interesar de manera exclusiva a los sistemas mediáticos, ávidos por proveer al gran público de imágenes estremecedoras de las consecuencias de la desviación, la anormalidad y la locura[228]. Violencia artesanal, premoderna, "hecha a mano", paradójicamente "violencia con rostro humano" y, por ello, escandalosa e inaceptable, puesto que no tiene nada que ver con la violencia constante, con las coordinadas y estructuras fundamentadas en el uso de la fuerza que posibilitan la existencia misma de los órdenes políticos centralizados. Los violentos son siempre *los otros,* quizá porque uno de los rasgos que permiten identificar a esos "otros" es la manera en que estos contrarían el principio político irrenunciable del monopolio en la generación y distribución del dolor y la destrucción. Una magnífica estrategia, por cierto, con el fin de generar ansiedad pública y de fomentar una demanda popular de más protección policial y jurídica.

Si la noción de violencia resulta fácilmente delatable en sí en cuanto pura ideología, algo parecido ocurre cuando se le añaden especificaciones que la asocian a territorios y a presupuestos como de la alteridad social, es decir, a ámbitos que se suponen predispuestos para que en ellos se produzcan desviaciones de la norma, zonas de sombra en que lo social puede tender a toparse con su propia negatividad. Es el caso del calificativo "urbano", que no existe en oposición a, por ejemplo, una inexistente "violencia rural". En realidad, "lo urbano" de cierta violencia sirve para presentar a esta como parte de un escenario que ya se entiende como propicio al desbarajuste, la anomia, la delincuencia, la desorientación moral, la desestructuración familiar y otras cualidades negativas que una vieja tradición antiurbana ha asignado a la vida en las ciudades. Resulta interesante comprobar la manera en que el lenguaje hegemónico en cada marco sociopolítico trabaja la categoría de "violencia urbana" en función de requerimientos contextuales diferenciados. Por ejemplo, si en Francia evoca el que practican sectores marginales que habitan barrios degradados, en el Estado español lo que hace es reproducir todo el esquema que servía al régimen franquista para descalificar la actividad de los *agitadores* que rompían la impuesta tranquilidad ciudadana.

Así, en Francia la violencia urbana es asociada a expresiones irracionales, descontroladas y más bien despolitizadas de la rabia de los jóvenes de los suburbios urbanos, a menudo inmigrantes o descendientes de inmigrantes que no han conseguido los niveles deseados de "integración sociocultural". En estos casos, el calificativo "urbano" no es sino "una eufemización de una violencia social vinculada a las relaciones sociales de exclusión"[229]. En cambio, en España la violencia urbana aparece figurada bien como parte de la actividad normal de lo que la prensa denomina "tribus urbanas", sistemáticamente presentadas como violentas, bien bajo figuras no menos arbitrarias, como pasa desde la década de los noventa con el "terrorismo de baja intensidad" o la *kale borroka* o "violencia antisistema", para designar las expresiones contestatarias extremas que protagonizan jóvenes altamente politizados. Tanto en un caso como en el otro, la "violencia urbana" remite a la acción de lo que es presentado en tanto que fuerzas antiinstitucionales, despolitizadas en unos casos, hiperpolitizadas en otros, pero marcadas

siempre por su conexión a las figuras más abominables, y al mismo tiempo más inquietantes —por inconcretas, por mórbidas—, de la inseguridad, la criminalidad y todo el resto de formas concebibles —incluso inconcebibles— de la alteridad social.

Es en ese contexto discursivo que la "violencia juvenil" aparece en el centro de una atención pública que acepta e, incluso, podríamos sospechar, que segrega auténticas leyendas urbanas sobre grupos de adolescentes que se expresan preferentemente a través de una agresividad arbitraria y enfermiza. La prensa no deja de hablar de estos jóvenes violentos como los causantes de todo tipo de daños en distintos escenarios: manifestaciones, protestas, zonas de ocio, salidas de las discotecas, conciertos de *rock*. Incluso sectores a los que ese lenguaje estigmatizador les debería resultar extraño asumieron a partir de un cierto momento ese mismo lenguaje[230].

Este imaginario utiliza el referente-base de las puestas en escena de algunas microculturas juveniles para alimentar con ellas el bulo de que son estos jóvenes estéticamente organizados los responsables de todo tipo de desmanes. Lo que en principio no eran sino marcas de distinción se convierten, por ese sesgo, en marcas de infamia. Las encuestas sobre seguridad pública son reflejo de ello: la "violencia juvenil" aparece situada como una de las principales, si no la principal, fuente de inquietud para los ciudadanos[231]. Con periodicidad se convocan simposios que reúnen a especialistas en la materia, psicólogos de la infancia y la adolescencia, antropólogos y sociólogos urbanos, políticos, peritos en seguridad ciudadana. En septiembre de 1986 se convocaron las Ponencias sobre Seguridad Ciudadana, organizadas por la Escuela de la Guardia Urbana de Barcelona. En la primavera de 2000, la Cruz Roja de la Juventud catalana organiza en Girona unas Jornadas de Reflexión sobre la Violencia y el Instituto de Educación del Ayuntamiento de Barcelona, un simposio titulado "Jóvenes, deporte y conductas de riesgo". En 2016-2017, la Universitat de Barcelona ofrecía un curso de experto con el título "Intervención y gestión de la delincuencia y la violencia juvenil". Los encuentros centrados en resolver el problema del "vandalismo juvenil" no han hecho sino sucederse. En marzo de 2016, el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, confirmaba a la prensa que la Policía y la Guardia Civil mantenían el seguimiento de 427 bandas

juveniles violentas repartidas por toda la geografía española, excepto Cataluña y el País Vasco, de donde no se tenían datos. En 2015 se habían desarticulado varias de estas organizaciones juveniles: cuatro de extrema izquierda, cinco de extrema derecha y seis latinas[232].

Como respuesta a esta situación que se supone preocupante, de tanto en tanto los medios de comunicación recrean curiosas taxonomías pseudoantropológicas inventadas por "expertos" en las que se compartimenta a los jóvenes en subgrupos, ordenados en función de su supuesta peligrosidad. Se trata de órdenes clasificatorios del todo arbitrarios en los que se habla de unidades grupales que o bien no existen —es decir, que son una pura invención—, o son cuasiculturas juveniles imaginadas como fracciones incomunicadas entre sí, cuyos miembros vivirían una uniformidad ideológica, conductual y vestimentaria indetectable en la realidad[233]. Es esta pseudociencia la que permite asignar responsabilidades "tribales" a todo tipo de crímenes, agresiones, peleas multitudinarias, saqueos o destrucciones, algunos de gran magnitud. Todo ello se concreta en informes que son como monografías etnográficas caricaturizadas de cada "tribu": sus costumbres, su vestimenta, sus creencias, sus jerarquías, su territorio…[234]

Es desde instituciones vinculadas al mantenimiento del orden público que se encargan informes, como el que un grupo de sociólogos elaboró a principios de 1993 para el Gobierno Civil de Barcelona sobre las "tribus urbanas" activas en Cataluña, abundantemente recogido en su momento por los medios como confirmación "científica" de sus fantasiosas descripciones sobre lo que se suponía que era y es una grave fuente de alarma social[235]. En este trabajo, los jóvenes eran clasificados en motoras, *skinheads,* siniestros, *psychobillys, punkis, heavies, rockers, mods, hooligans,* maquineros, *b-boys, hardcores,* okupas… Una ficha recogía sus "rasgos distintivos": edad de sus componentes; actividades —"ocio y nomadismo", "música y conciertos", "ropa", "baile", "pintadas", "marginalidad", "normales"—; nivel de conflictividad —"elevado", "contenido", "escaso"…—; ideología —en la mayoría de los casos, "contradictoria"—. A estos taxones se le pueden añadir otros relativos a grupos que contrastan con los "peligrosos" por su naturaleza "pacífica", un poco a la manera de los indios buenos de las películas del Oeste. En las Jornadas sobre Ideología, Violencia y Juventud, celebradas en

Logroño en junio de 1998, organizadas por la Dirección General de la Guardia Civil, se establecía que "de todos los grupos juveniles que han ido apareciendo en nuestra sociedad, hay cuatro que se denominan violentos: *skinhead*, nacional *bakaladeros*, *punkis* y *sharps* [...] Existen otros grupos urbanos, tales como los *rockers*, *bikers*, *mods*, *heavies*, *skaters* (*sic*), *rapers*, siniestros, *ciberpunks*, *ciberhippies*, *bakalaeros* (*sic*), jóvenes flamencos (*sic*), los *grunges*, *b-boys*, que no utilizan la violencia para significarse como grupo"[236]. Por supuesto que el inventario se va actualizando y a mediados de los 2010 se reconocía la emergencia de nuevas "tribus": *hípsters*, *muppies*, *swaggers*. Aunque su identificación sea esencialmente estética, no dejan de generar problemas como consecuencia de su mera presencia física. En el verano de 2016, el servicio de Gestión de Conflictos del Ámbito Social en el Espacio Urbano del Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por Ada Colau, reconocía que estaba "siguiendo" a este último movimiento "por su ocupación intensiva de la vía pública y el alto grado de machismo detectado entre los jóvenes"[237].

La prensa confirma de manera cíclica y regular ese imaginario social que sospecha la existencia de "tribus" amenazadoras que actúan en la jungla urbana. Los moteros han sido mezclados con el tráfico de armas y de drogas, como quedó de manifiesto en Barcelona con el grupo de Ángeles del Infierno que fue juzgado a mediados del 2000. Los *heavies* son mostrados como fanáticos de músicas hiperagresivas, que usan habitualmente la violencia para comunicarse entre ellos y con el resto de seres humanos. Con frecuencia los vemos asociados a prácticas satánicas, como pintadas macabras, sacrificios de animales, profanación de tumbas u orgías en los cementerios. Los *punkis* centraron el interés de la prensa y la policía durante los ochenta y primeros años de los noventa, sobre todo a partir de las grandes movilizaciones destinadas a colapsar el centro de Londres en 1983 y 1984. De hecho, fue a ese movimiento al que se dedicó una parte importante de las ponencias sobre seguridad ciudadana en la mencionada reunión de Barcelona en 1986[238], y a ellos fue a quien se atribuyeron los altercados que desolaron el centro de Tàrrega, en septiembre de 1991, durante la Fira de Teatre al Carrer.

La cultura *hip-hop* también ha sido objeto de estigmatización, sobre todo

en un último periodo, a consecuencia de la inclusión en las normativas "procívicas" de dos elementos que le son consubstanciales: las pintadas y los desplazamientos y ejercicios acrobáticos en monopatín. La corriente *hip-hop* tiene presencia en Barcelona desde mediados de los ochenta, momento en que ya era posible asistir a entrenamientos de *breakers* en los vestíbulos encerados de ciertas estaciones de metro como Universitat. En diciembre de 1986 y enero de 1987 tiene lugar en la sala Metrònom la exposición "Barcelona Graffiti", lo que implicará un intento de homologación de la pintura *hip-hop* por los ambientes del arte contemporáneo barcelonés y una situación paradójica. Por un lado, los activistas gráficos más celebrados de la corriente —escritores o diseñadores de plantillas— reciben apoyos institucionales para llevar a cabo sus creaciones en espacios francos previstos para ellos. Al mismo tiempo, la policía se dedica a perseguir a los jóvenes que practican esa disidencia sígnica consistente en decorar —a veces con motivos bellísimos— todo tipo de paredes. Las detenciones y multas a grafiteros y *skaters* son constantes. En febrero de 1992 moría un joven que realizaba *tags* al ser atropellado por un convoy del metro en la estación de Marina, cuando huía de los vigilantes jurados que le habían sorprendido firmando[239].

La simple actividad de ocio nocturno también ha sido motivo de todo tipo de inquietudes, derivadas de una supuesta afición convulsiva de los jóvenes al alcohol y las drogas de diseño. He ahí una realidad que es extensible a otras muchas ciudades españolas. A principios de la década de los noventa se extienden graves disturbios en diferentes ciudades españolas como consecuencia de la decisión gubernativa de adelantar el horario de cierre de los bares nocturnos: Huesca, en enero de 1990; Zaragoza, en abril del mismo año; Cáceres —los más graves—, en octubre de 1991; Santiago, en noviembre de 1992… En Valladolid, se producen graves enfrentamientos de jóvenes presuntamente borrachos o drogados con la policía, al prohibirse las hogueras de San Juan a orillas del Pisuerga, en el 2000. A la pésima reputación de la ruta del Bakalao en los alrededores de Valencia, se le añadieron, al iniciarse el nuevo siglo, diferentes incidentes aislados a la entrada de discotecas o *after hours,* que en Madrid y Cataluña movilizaron las consabidas consideraciones expertas sobre las iniciativas a tomar para poner

coto a un espacio de violencia y libertinaje[240].

A partir de finales de los noventa se extendió entre la opinión oficial y bienpensante la inquietud por una práctica que parecía tender a generalizarse: por las noches y hasta la madrugada, grandes muchedumbres de jóvenes, autoaprovisionados de bebidas alcohólicas, se concentraban en determinados puntos de ciertas ciudades para practicar formas de vida social, al margen de los circuitos de locales de encuentro juvenil debidamente autorizados. Los lugares elegidos podían ser relativamente estables —aunque experimenten desplazamientos como consecuencia del acoso policial—, pero también responden a convocatorias a través de las redes sociales, como la que en Sevilla consiguió concentrar en 2004 a 70.000 jóvenes con motivo de la Fiesta de la Primavera, una celebración juvenil no oficial que consiguió enraizar como nueva tradición. La costumbre —auténtica institución juvenil en muchas ciudades— se ha generalizado en las dos Castillas, Andalucía, Euskadi, Extremadura, Comunidad Valenciana, etc., lo que ha motivado todo tipo de leyes y normativas "antibotellón", auténticas leyes secas que afectan a cualquier consumo no monitorizado de alcohol en público. De alcohol..., o de cualquier otra cosa, como cuando la policía impidió, en abril de 2010, un botellón de leche en Granada, aduciendo que estaba prohibida la concentración de jóvenes en el espacio público.

No hay duda de que esas colonizaciones nocturnas de ciertas plazas o parques constituían una reacción espontánea y autoorganizada ante el encarecimiento del ocio juvenil y una reclamación del derecho al uso sin trabas del espacio público. Más allá de las quejas vecinales, el problema para las autoridades fue precisamente de autoridad, en el sentido de que, de pronto, masas de jóvenes podían movilizarse para demostrar que era posible divertirse sin gastar apenas e ignorando los grandes núcleos debidamente tematizados para el consumo y los establecimientos autorizados. Los intentos gubernativos por impedir o disolver las concentraciones de jóvenes en ciertas plazas y calles desembocaron en graves disturbios, como los que se sucedieron en la Plaza Mayor de Madrid, sin que se consiguiera acabar con las usurpaciones consideradas ilegítimas de que el enclave era objeto por miles de adolescentes. En Barcelona —donde, de hecho, no había cuajado nunca el fenómeno—, el empeño de la policía por impedir la convocatoria de

un botellón en la Rambla del Raval, el 17 de marzo de 2006, concluyó con altercados que, a lo largo de toda una noche, asolaron parte del centro histórico de la ciudad, provocando 80 heridos y 54 detenidos[241]. Con motivo de la tragedia de la fiesta de Halloween en el Madrid Arena en 2012, se repitieron todo tipo de tópicos sobre una juventud descarriada entregada al hedonismo y a la fiesta irresponsable.

Atención aparte merece la obsesión que las autoridades barcelonesas y catalanas demuestran por un movimiento okupa al que se han atribuido todo tipo de tropelías. Como una continuación, en cierto modo natural, de la propia tradición libertaria de la ciudad, la okupación —es decir, la usurpación considerada legítima de espacios desaprovechados para hacer de ellos viviendas y locales sociales— ha conocido un singular auge y se ha convertido en una de las principales preocupaciones para la llamada "clase política" de la ciudad[242]. Otras presuntas evidencias han venido a confirmar, en el imaginario mediático-policial y para las mayorías sociales, hasta qué punto está justificada hoy la identificación sistemática entre los epígrafes "violencia juvenil" y "violencia urbana". La insistencia periodística en demonizar al independentismo de izquierdas vasco, asociándolo a la *kale borroca* o lucha callejera y, directamente, al terrorismo, es la conducción a su extremo de esa tendencia a mostrar como violenta e inaceptable cualquier impugnación frontal del orden de cosas dominante. Los okupas representan suciedad y desorden y han sido recurrentemente presentados como practicantes de la guerrilla urbana. La policía recibe el derecho y hasta la obligación de considerar sospechoso —y, llegado el caso, identificar o detener — a cualquier joven que detente "estética okupa".

Para los sectores conservadores, su crecimiento y su capacidad de movilización —su protagonismo en las protestas contra el racismo o la inasequibilidad de la vivienda, o su contribución al fracaso del Fórum 2004 — son una expresión inaceptable de desgobierno que hay que yugular urgentemente, justo como expresión extrema de ese "incivismo" que se presenta como el principal problema de Barcelona. Para la izquierda nominal gobernante, los etiquetados como "antisistema" encarnan un desacato permanente y un núcleo de disidencia con el que parece imposible acabar. Los encontronazos han sido constantes en los últimos años, derivados de

protestas en la calle no autorizadas o desalojos que se han traducido en ocasiones en polémicas públicas por su arbitrariedad —La Makabra o Can Ricart en el invierno de 2006— o en auténticas batallas campales. Desde los tan espectaculares del Cine Princesa en octubre de 1996, no han hecho sino sucederse los cercos y asaltos policiales contra casas okupadas en Barcelona. Por citar algunos ejemplos, que fueron oportunamente empleados como argumentos para estrechar el asedio contra el movimiento okupa, recordemos los desalojos o intentos de desalojo de la Kasa de la Muntanya, en La Salut, en julio de 2001; Can Masdeu, en las estribaciones del parque de Collserola, en abril de 2002; la Hamsa, en agosto de 2004; La Fera, en Gràcia, en junio de 2006…, una larga lista el último apunte de la cual serían la expulsión de la gente que usaba el Banc Expropiat, en Gràcia, en mayo de 2016. Los desalojos se sucedieron—113 a lo largo de 2006 y solo hasta noviembre, es decir, uno cada tres días—, como también las nuevas *okupaciones*, que parecían ser su respuesta automática. El amplio estallido de indignación que provocó el desalojo e intento de derrocamiento de Can Vies, en la barriada de Sants, en mayo de 2014, puso de manifiesto hasta qué punto el movimiento okupa no eran tan marginal y asocial como la prensa se había empeñado en sostener desde siempre.

Desde la eclosión de los movimientos antiglobalización a finales del siglo pasado se ha generalizado una nueva rúbrica —la de *antisistema*— que, sin que nadie se ocupe de definirla, sirve para encorsetar a toda la oposición política antagonista, a la que se tilda automáticamente de "violenta" y que ha llegado a ser aplicada masivamente a las multitudes de indignados e indignadas que ocuparon las calles y plazas de ciudades de todo el mundo a lo largo 2011 y 2012. Esta denominación —"antisistema"— empezó siendo atribuida a los manifestantes que protagonizaron las grandes movilizaciones antiglobalización de finales de los noventa y principios del 2000 —Seattle, Goteburgo, Génova, Praga, Niza…— y luego, una década después, a los de las concentraciones contra los efectos de la crisis en Londres, Barcelona, Madrid, Atenas o Roma. El señalamiento de una minoría de jóvenes como "los violentos", encargados de provocar disturbios en las manifestaciones, está sirviendo para criminalizar buena parte de la disidencia política, pero lo que nos interesa aquí es subrayar cómo la identificación de esas supuestas

minorías levantiscas por la prensa y por la propia policía se lleva a cabo a partir de parámetros que permitirían calibrar la peligrosidad de un joven a partir de su *look*. De ahí el otro calificativo todavía más despectivo que merecen estos jóvenes: "perroflautas". Recuérdese que fue a los "antisistema" a quienes se atribuyeron los gravísimos altercados que conoció Barcelona con motivo de las huelgas generales del 27 de septiembre de 2010 y del 29 de mayo de 2012.

No menos elocuente es el caso de los *skins*. Ahora mismo, los movimientos ciudadanos y los partidos progresistas no han sabido ver que sus supuestos en torno al peligro tantas veces aireado de los *skinheads* no dejaba de obedecer una lógica típicamente estigmatizadora[243]. En efecto, la mayoría de cabezas rapadas no comenzaron a ser racistas y violentos hasta que la presión de la opinión pública acabó por hacerles aceptar la imagen que de ellos circulaba: una suerte de grupo superperverso dedicado a tender emboscadas a marginados sociales e incluso a viandantes indefensos y, en especial, a encarnar un racismo contumaz y altamente agresivo. Se proyectaba así la necesidad de que el "violento total" existiese realmente, lo que eximía de sospecha a los ciudadanos "normales" y desresponsabilizaba a las instituciones y a leyes tan injustas como las de extranjería de su papel central en las situaciones de exclusión social. Insistiendo en que los *skins* eran peligrosos, se acabó no solo por conseguir que muchos *skins* acabaran siéndolo de verdad, sino, ante todo, que un buen número de peligrosos acabara adoptando rasgos *skins* con tal de hacer notar que lo era.

La presunta existencia de "tribus" racistas, en particular, de *skins*, ha servido de materia prima a los discursos del antirracismo oficial de los que la prensa se hace eco y que son asumidos por la mayoría del público. Estos discursos imaginan una grave amenaza por la convivencia social procedente de la actividad de grupúsculos de ideología o estética nazi-fascista. La presencia de tales organizaciones justifica en toda Europa iniciativas legales y policiales contra ellas que cuentan con el apoyo entusiasta de los *mass media* y de numerosas organizaciones civiles. Nos encontraríamos aquí ante un ejemplo de lo que Leo Strauss llamaba la *reductio at hitlerum*, o presunción de que los racistas tienen la culpa del racismo y que este consiste sobre todo en el activismo de grupos marginales de ultraderecha. Es fácil

desvelar el efecto distorsionador de estos relatos centrados en la figura del *skin* como racista bestial. Sirven, de entrada, para insinuar que el racismo es una cuestión de conductas, y no de estructuras. Después, confirman la sospecha de que, en efecto, *hay racistas*, para inmediatamente tranquilizarnos aclarándonos que *son ellos*. Es, además, un racista paródico, una caricatura de nazi, del que a veces se puede establecer la génesis de su invención y diseño. La imagen divulgada de los *skinheads* resulta bien ilustrativa de cómo se puede proveer de elementos de congruencia a un movimiento básicamente estético y desideologizado, sin apenas coherencia interna, al que se ha conducido al centro de la atención pública para hacer de él paradigma del racismo diabólico.

La opinión pública percibe, de esta manera, el racismo como una patología localizada que puede y ha de ser combatida. De la mano de una simplificación tal, el ciudadano llega a concebir el "auge de la intolerancia" como un hecho de pura marginalidad, en que marginados malvados persiguen y maltratan a marginados desamparados, a los que ya de por sí se suponía también de algún modo problemáticos. Los inmigrantes, vagabundos y travestidos ven de esta manera reforzada su reputación de conflictivos, puesto que, "por si fuese poco", provocan la aparición de estos parásitos característicamente suyos como son los racistas y los neonazis. Además, como se insiste en que el racismo es una cuestión de orden público, se puede llegar a una conclusión paradójica: contra el racismo…, ¡más policía! Inferencia sarcástica, sobre todo pensando en que es a las fuerzas de orden público a quienes suele temer más un inmigrante sin papeles y quienes son los destinatarios de tantas denuncias que se recogen en los informes de SOS Racismo[244]. Por lo demás, existen pruebas de que la policía ha procurado informaciones deliberadamente falsas sobre la existencia de *skins* que atacan a transeúntes indefensos, demostrando su interés en mantener viva la inquietud social al respecto[245]. La prensa, por su parte, atribuye automáticamente a los *skins* cualquier acto violento no explicado que se produzca, antes de que exista el menor indicio de que ha sido así[246]. Tenemos entonces que la figura del *racista* o *violento absoluto* permite que los mismos gobiernos que dictan leyes xenófobas puedan, encima, aparecer públicamente como defensores de sus víctimas.

Una de las más importantes fuentes de "alarma social" asociada a las subculturas juveniles —consideradas siempre al margen de cualquier determinante social— ha sido, en Barcelona —como en otros lugares del Estado, pero seguramente antes[247]—, la de las "bandas" latinas, asociadas al nombre de una de ellas: la de los *Latin kings*. El fenómeno de la aparición en las ciudades españolas de agrupaciones de jóvenes de origen latinoamericano que miman modelos de afinidad electiva —por emplear el título de la famosa obra de Goethe— de sus países de partida no plantea ningún enigma sociológico. Se trata un fenómeno recurrente y generalizado en procesos de asentamiento de corrientes migratorias, que se traduce en la articulación de adscripciones grupales que tienen la virtud instrumental de constituirse en recursos de apoyo mutuo y, en el plano simbólico, se convierten en mecanismos de afirmación identitaria que permiten —paradójicamente, si se quiere— que los procesos de integración en las sociedades anfitrionas no lo sean de desintegración, es decir, asegurando que esa incorporación se podrá hacer en las claves y términos de los sectores a integrar. En la práctica, sin embargo, la aparición de este tipo de clubes sociales, entre cuyas características está la de un fuerte énfasis en la visibilización pública y en una apropiación intensiva del espacio público, acaba siendo traducido —a partir de la amplificación mediática de ciertos episodios en realidad aislados, como el asesinato de Rodney Tapias a la puerta de su instituto en Barcelona, en octubre de 2004— en una verdadera leyenda urbana, alimentada en buena medida con elementos tomados del imaginario cinematográfico de las pandillas juveniles norteamericanas. Tal distorsión fantástica y, seguramente, la avidez del público por ver reproducido en su entorno un paisaje de conflictos pandilleros parecidos al de películas que ha visto ha acabado por hacer de estos jóvenes un asunto social y de orden público de gran entidad, que genera debates públicos, investigaciones científicas, seminarios académicos, análisis más o menos sociológicos en los media, reclamación de intervenciones públicas que solucionen o alivien "el problema", etc.[248]

En todos estos casos opera un mismo principio lógico, y viene a establecer que no es que clasifiquemos objetos reales que no están clasificados, sino que reconocemos los objetos de la realidad a partir de la organización taxonómica a la que hemos sometido previamente esta realidad. No es que nos di-

ferenciemos porque somos diferentes, sino que somos diferentes porque nos hemos y nos han diferenciado previamente. La diferencia, entonces, no es la causa, sino la consecuencia de la diferenciación. Los sistemas de clasificación son por ello instrumentos cognitivos, es cierto, pero, sobre todo, son instrumentos de poder y de control. Como ha señalado Pierre Bourdieu, estamos hablando aquí de "principios de división inseparablemente lógicos y sociológicos que, al producir unos conceptos, producen unos grupos, los mismos grupos que los producen y los grupos control que se producen"[249]. La presuntamente científica etnificación de los jóvenes es parte de una misma mecánica consistente en colocar sobre los sectores jerárquicamente subordinados y estructuralmente inestables de la sociedad una especie de parrilla nominadora de la que surgen, como por encanto, una serie de unidades discretas claras que organizan una población que no es que hasta entonces estuviese escasamente diferenciada, sino, al contrario, que presentaba unos dinteles de complejidad casi ininteligibles e imposibles, por tanto, de administrar y fiscalizar.

Vemos tal mecanismo de clasificación pseudoétnica aplicarse a jóvenes sobre todo de las clases sociales más desfavorecidas, abocados al fracaso escolar y con unas perspectivas de promoción social nulas, que en algunos casos descubren en el desafío y hasta en la violencia los únicos recursos a mano para expresar su impotencia y su frustración. En todos los casos, lejos de cualquier análisis sobre sus causas o funciones, los disturbios y altercados son sistemáticamente asignados a "tribus urbanas" organizadas, reputadamente peligrosas, que se autoafirman mediante la violencia y el odio social[250]. Y aquí entra en juego el trabajo del estereotipo. Una vez debidamente etnificados, los jóvenes no tienen problemas derivados del malogramiento de toda expectativa a un futuro profesional difícil o inexistente, a la vida en barrios maltratados, al paro, al precio de las viviendas o a condiciones sociales altamente negativas. Los jóvenes, y, muy en especial, los de clases sociales empobrecidas, son —se dice— un "problema cultural", y un problema cultural que se traduce en unos términos de orden público, de tal manera que solo puede ser resuelto policialmente o, en cualquier caso, mediante políticas de prevención a través del aparato educativo o la familia. Eso sí, todo ello previo "estudio" de aquellos

peculiares rasgos psicológico-culturales que están en la raíz de su conducta inadecuada a cargo de los correspondientes especialistas. Se despliega de este modo un imaginario social que ve en el odio, el rencor y la rabia la expresión de una desafección generacional, la crisis de valores, una rebeldía sin causa o una voluntad de afirmación identitaria que se opone como instintivamente al mundo de los adultos. Convirtiendo los conflictos asociados a los jóvenes en un asunto identitario-cultural, se desplaza la atención de contextos sociales y económicos altamente deteriorados a una vaga cuestión de límites simbólicos. La "cultura" se demuestra una vez más así como ese valor en alza para todas las políticas de marcaje social de sectores sociales conflictivos, un nuevo significante el significado del cual es la irreversibilidad de las diferencias humanas y, más allá, la irrevocabilidad de las desigualdades sociales.

CAPÍTULO 6

DEL MOVIMIENTO A LA MOVILIZACIÓN

OCUPADORES Y OCUPANTES

Se suponía que el protagonismo de las multitudes en la historia y lo político era cosa del pasado. Una amable movilización puntual cada cuatro años, consistente en salir de casa para ir a votar y volver, garantiza la buena marcha del sistema democrático. En cambio, es obvio que la idea de que el ciudadano puede y debe ejercer maneras de participación directa en los asuntos públicos, basadas en la apropiación colectiva del espacio público, mantiene una actualidad absoluta, confirmada en los últimos años incluso en las sociedades de capitalismo avanzado. El peso central de la ocupación de calles y plazas por parte de fusiones humanas sobrevenidas no deja de constituir una especie de impugnación —o, cuanto menos, de matización— de la democracia delegativa, puesto que son los propios afectados por ciertas circunstancias quienes toman la palabra por sí mismos, al margen de la mediación de sus supuestos representantes administrativos y fuera de los cauces orgánicos a los que se supone que la opinión pública debe someterse para poder existir.

En ese orden de cosas, se ha producido en las últimas dos décadas un conjunto de sucesos que ilustran hasta qué punto en Barcelona continuaba vigente la percepción polémica del espacio público por parte de las autoridades de turno, su naturaleza de marco para usos en absoluto desconflictivizados, al contrario de lo que han soñado para la capital catalana los proyectadores urbanos, empeñados en arquitecturizar a toda costa unos

escenarios que se desearían vacíos, sin practicantes, sin problemas, solo a la absoluta y absolutista disposición de una especulación que parece únicamente formal, pero que es también —lo sabemos— económica y servil con respecto a los controles políticos. Así, a lo largo de la primera mitad de la década del 2000 se produjeron en Barcelona hechos que ponían de manifiesto una evaluación ciertamente singular de lo que era y debía ser una apropiación de sus plazas y calles para determinadas utilizaciones no ordinarias. De una forma que podría antojarse enigmática —pero que no lo es tanto—, puntos de la retícula urbana se convertían en pertinentes o, al contrario, del todo inadecuados, para que ciertos colectivos ciudadanos hicieran ciertas cosas no habituales, de índole ritual y dotadas de un fuerte contenido simbólico —en el sentido de no instrumental—, confiriendo un valor proclamativo a la compleja red de funcionalidades en que se ve inmiscuido el espacio público de una gran ciudad.

¿Qué es lo que hacía, por ejemplo, que la Avinguda Diagonal no pudiera ser considerada aceptable para que se llevara a cabo un desfile de las fuerzas armadas españolas la primavera de 2000? ¿Cuáles fueron las claves que hicieron hasta tal punto problemático que las tropas usasen las calles de la ciudad, sobre todo una cargada de connotaciones a las que su antiguo nombre —avenida del Generalísimo Franco— no sería ajeno? ¿Qué llevó a ubicar finalmente aquella exhibición militar a la periferia física y simbólica de la ciudad, en este caso, al parque de Montjuïc? La decisión del Gobierno del Partido Popular de celebrar en Barcelona un desfile militar el 20 de mayo de aquel 2000 provocó un rechazo no solo de una mayoría de la ciudadanía, sino de unas instituciones políticas locales que se veían atrapadas en la contradicción de tener que alojar e incluso presidir un acto nada compatible con los valores de democracia y libertad que afirmaban encarnar. La idea inicial de celebrar el desfile en la Diagonal, tal y como había ocurrido en mayo de 1981, pocas semanas después del intento supuestamente fallido de golpe de Estado de Tejero, se antojaba inaceptable ahora, puesto que aquella era la imagen que a lo largo de décadas se había retenido amargamente para muchos: la del ejército sublevado de Franco entrando en Barcelona en enero de 1939, estampa de la que los anuales Desfiles de la Victoria fueron reactualizaciones a lo largo de cuatro décadas en Barcelona. La concesión de

trasladar el acto a la parte de Diagonal cercana a la Plaça de Pius XII, ya prácticamente en las afueras de la ciudad, y en sentido salida —y no entrada, como estaba inicialmente previsto— fue descartada cuando los rectores de las universidades de la zona se negaron a cerrar sus facultades, precisamente por lo que tenía de recuerdo de lo que había sido el recurrente cierre de universidades durante el franquismo[251]. Después de barajar otras alternativas, la decisión final fue remitir el acontecimiento a una especie de tierra de nadie, el lugar desde del que arrancan las comitivas de los Reyes Magos que recorren las calles de la ciudad, donde se celebraban los festivales infantiles y donde se levantaba una fuente mágica, en la falda de una montaña presidida por un castillo en que fueron torturadas y asesinadas miles de personas por motivos sociales o políticos.

Pero ni siquiera eso fue capaz de apaciguar la indignación de una parte importante de barceloneses. De hecho, se reproducía una reacción de rechazo frente a la presencia intrusa de militares que era la misma que habían conocido antes las calles de la ciudad, en julio de 1909 o de 1936, cuando las clases populares impidieron por la fuerza la circulación de las tropas, expresando una hostilidad sin límites, una voluntad de no dejarlas pasar fuera como fuese, de devolverlas al exterior indeseable del que procedían. Esta analogía era del todo patente y no se escondía que el ejército que pretendía desfilar ahora era aquel mismo que había entrado triunfalmente como ocupante en 1939. Lo explicitaban los cientos de jóvenes que se concentraban el 29 de abril de 2000 ante el cuartel del Bruc, en Pedralbes, o las decenas de miles que desfilaban el 20 de mayo entre el cruce del Passeig de Gràcia y la Ronda Sant Pere hasta el Moll de la Fusta, siguiendo un itinerario habitual en las marchas contra la OTAN en la década de los años ochenta. Desde aquel mismo día, un numeroso grupo de antimilitaristas acampaba sobre el césped de la Plaça d'Espanya, como vigilando lo que iba a ser una usurpación innoble de la cercana Avinguda Rius i Taulet. De madrugada, cuando faltaban pocas horas para que perpetrase lo que se interpretaba como una deshonra del espacio público, la policía desalojaba violentamente a los acampados.

La madrugada del problemático desfile, el 27 de mayo, se confirmó la codicia por apropiarse de las calles de Barcelona a partir de criterios de

legitimidad y deslegitimidad que no podían ser sino históricos y colectivos, es decir, procedentes de una memoria compartida para la que el suelo que se pisa está marcado por todo tipo de rastros y marcas, como si una cartografía simbólica que los viandantes estaban en condiciones de leer automáticamente se sobrepusiese, como una transparencia, a aquella otra en la que en principio no parece que haya nada que no sea un esquema abstracto, solo alterable por los urbanistas, de líneas y cruces con nombre. El Carrer Lleida y la Avinguda Rius i Taulet eran escenarios forzosos aquella mañana de un acto militarista que había sido denunciado como el *déjà vu* de un pasado ignominioso, presidido por las autoridades del Estado, incluso aquellas que habían intentado esconder el sombrío acontecimiento lejos del corazón de la ciudad, en el doble sentido del centro urbano, pero también en el metafórico de músculo que impulsa y recoge los flujos urbanos y también lugar que unifica simbólicamente la vida sentimental de la ciudad o la ciudad como sentimiento. Al mismo tiempo, centenares de jóvenes iniciaban una marcha por la Avinguda de Madrid sobre la Plaça d'Espanya, puerta de Montjuïc. A la altura del Carrer Joan Güell topaban con fuerzas policiales que les cerraban el paso violentamente. En pequeños grupos, los manifestantes antimilitaristas accedieron a las proximidades del Carrer Tarragona y fueron de nuevo interceptados por la policía, que les obligó a dispersarse por las callejuelas del barrio gitano de clase media de Hostafrancs y por el Parc de l'Escorxador, donde se reprodujeron los enfrentamientos con la policía y con grupos de ultraderechistas que acudieron en su ayuda.

También, al mismo tiempo que se desarrollaba el desfile militar en la montaña de Montjuïc, tenía lugar un masivo acto de desagravio en otro parque público: el de la Ciutadella. Decenas de miles de personas —más del doble de las que había conseguido reunir el Día de las Fuerzas Armadas— desautorizaban lo que se interpretaba como una utilización indigna de las calles de Barcelona, por mucho que estuvieran alejadas de su centro. Al día siguiente, jóvenes independentistas limpiaban con lejía la calzada de la Avinguda Rius i Taulet hasta el Pueblo Español, es decir, la vía que veinticuatro horas antes había conocido la marcialidad de las tropas, patentizando la idea de que aquel espacio había sido literalmente *ensuciado* y requería una limpieza, evocando de esta manera una vieja práctica de los

habitantes de Barcelona a lo largo del siglo XIX, que dramatizaban actos simbólicos parecidos para expresar su rechazo al ejército y a la monarquía, barriendo las calles que habían "manchado" los destacamentos militares o las comitivas reales horas antes.

Al poco tiempo, el 12 de octubre del mismo 2000, otro punto de la ciudad de Barcelona —la Plaça dels Països Catalans, en el barrio de Sants— era considerado incompatible con un acto político de la ultraderecha, pensada también como una presencia sin derecho a flotar en la superficie de un espacio público al que se asignaban ciertos valores y atributos simbólicos. Se volvía a repetir el mismo esquema que contraponía la figura del *ocupador* del espacio urbano, que lo hace suyo mientras lo usa, que se apropia de él en tanto lo considera apropiado, y el *ocupante*, potencia ajena y contraria que se hace presente por la fuerza en un espacio del que se apodera de manera ilegítima. Desde los años ochenta, la plaza —expresión de la vanguardia en diseño urbano cuyos autores fueron los arquitectos Piñón y Viaplana y primera de las plazas duras que caracterizarían el "modelo Barcelona"— había venido siendo escenario de los mítines del Día de la Bandera, actos que consistían no solo en parlamentos ultraderechistas, sino que solían ir acompañados de agresiones de los reunidos contra viandantes indefensos, preferiblemente de piel oscura o que pudieran ser identificados como izquierdistas. El lugar no era solo un punto de encuentro anual de los fascistas, sino el de partida para violentas marchas sobre aquel centro de la ciudad que se les negaba. Alguna de estas incursiones había sido especialmente brutal, como la de 1991, cuando decenas de personas fueron apaleadas solo por su aspecto de "rojos" en un alucinante recorrido de dos horas, bajando por el Carrer Tarragona, siguiendo luego por la Gran Via hasta llegar al centro: Plaça de Catalunya, Ferran, Rambla, Dressanes…, sin que la Policía Nacional, presente en todo momento, hiciera nada por impedir las agresiones.

La edición del Día de la Hispanidad de 1998 volvió a registrar graves incidentes cuando los manifestantes marcharon sobre el lugar en que se producía la reunión fascista desde la Plaça de Sants. La comitiva avanzaba por la carretera de Sants e intentaba acceder a la Plaça dels Països Catalans por Badal y Brasil. A la altura de la Avinguda de Madrid toparon con la

policía, que protegía —ciertamente, lo protegía— el acto ultraderechista y que forzó a los manifestantes contrarios a dispersarse. Siguió una batalla campal que se extendió a lo largo y ancho de buena parte de Sants: Galileu, Sagunt, Vallespir, alrededores del Carrer Numància. Más graves fueron todavía los hechos del Día Nacional de España —así es como fue convocado — de 1999. Encabezaba aquel año la contramanifestación una pancarta en la que se podía leer: "No pasarán", el viejo lema antifascista que en el 36 animaba a impedir el avance de los sublevados con Franco. Más de una veintena de escaparates de entidades bancarias e inmobiliarias fueron destruidos y se capturó a veintiséis jóvenes que acusaron después a la policía de malos tratos.

Temerosas de que se reprodujesen los disturbios, las autoridades gubernativas decidieron trasladar la reunión fascista del 12 de octubre de 2000 a la Plaça de Sant Jordi, una vez más en la socorrida montaña de Montjuïc, a la que el desfile militar de unos meses antes ya había conferido el carácter de auténtico vertedero de presencias inaceptables y conflictivas. A pesar de ello, un número importante de asociaciones civiles quisieron dejar patente su voluntad de reparar simbólicamente lo que se pensaba como una lesión al espacio colectivo barcelonés, por marginal que este volviera a ser. La mecánica que los movimientos antifascistas aplicaron en esta oportunidad fue la misma que la ensayada con motivo del desfile militar. Los contrarios a la usurpación del espacio urbano por las Juntas Españolas —la organización convocante— ocuparon la noche anterior la Plaça dels Països Catalans, el antiguo escenario de las conmemoraciones neofranquistas. Con ello, se declaraba recuperado aquel espacio, al tiempo que se territorializaba provisionalmente una parte de la trama urbana que se declaraba excepcionalmente no pública, es decir, no accesible a todos, en la medida en que alguno de estos *todos* era considerado ajeno e inasumible.

A la misma hora en que cada año se había producido el mitin ultraderechista en Sants y que en aquellos momentos se estaba llevando a cabo en Montjuïc, se celebraba un acto antifascista frente a la estación central de trenes de Sants, en la ahora "reconquistada" Plaça dels Països Catalans. Una vez finalizados los parlamentos, miles de personas emprendían un camino en dirección al centro, de nuevo hacia el corazón urbano, como si

un nudo humano restituyese al tejido urbano no solo física, sino también moralmente, una parte que le había sido enajenada. Los manifestantes que recorrían la Plaça Joan Peirò, la Avinguda de Roma, Urgell, Gran Via, Plaça Universitat, Pelai, hasta Plaça de Catalunya, hacían explícita la dimensión *topográfica* de su protesta, colocándose tras una pancarta que proclamaba: "*Feixisme mai més, ni a Sants, ni a Montjuïc, ni enlloc*" ("Fascismo nunca más: ni en Sants, ni en Montjuïc, ni en ningún sitio").

Al año siguiente, en el 2001, las mismas fuerzas sociales —no solo en el sentido de asociaciones o grupos, sino en el de *energías* o *potencias*— que habían refutado a otras, consideradas perversas, extrañas, sucias…, llegaban a la conclusión de que ni siquiera la montaña de Montjuïc era merecedora de la triste condición que se le asignaba de depósito de detritus civiles. Una semana antes, los oponentes al Día de la Hispanidad, fuera donde fuese, hicieron circular un autobús por las calles de Barcelona, convocando a los vecinos a protestar contra los actos franquistas del 12 de octubre. El día en cuestión, grupos radicales intentaron impedir el acceso de los ultraderechistas a la Plaça de Sant Jordi, topando de nuevo con las fuerzas de "orden público" encargadas de proteger el encuentro fascista. Igual que en los tres años anteriores, los disturbios resultaron inevitables, adoptando en esta ocasión como escenario la barriada de la Font de la Guatlla —Santa Dorotea, Mèxic, Sant Fructuós—, en las laderas urbanizadas de Montjuïc.

Antes de ese episodio, en lo que había de ser la culminación de estas jornadas contra el Banco Mundial, el 24 de junio de 2001 —después de una verbena de Sant Joan vindicativa en la playa de la Mar Bella, insistiendo todavía más en el solapamiento fiesta/protesta— el céntrico Passeig de Gràcia —el escenario predilecto de las manifestaciones más institucionalizadas en Barcelona— era marco de una batalla, moral y, finalmente, física también, por el derecho al libre uso de la calle para alguna cosa que no fuera ir de compras o hacer circular el coche. La marcha repetía la misma escenificación de una repulsa ciudadana ante una presencia extraña e indeseable que pretendía penetrar ilegítimamente hasta el corazón mismo de la colectividad. Curiosamente, la presencia física contra la que se protestaba —la de los convocados por el Banco Mundial— ni siquiera se llegó a producir, puesto que un posiblemente bien fundado miedo de los

responsables del evento hizo que reconsideraran su decisión de escoger Barcelona como su sede y decidieran suspender la reunión. La cumbre del Banco Mundial se haría finalmente *on line*. Pero los actos contra la encarnación de las injusticias provocadas por el sistema económico mundial ya estaban decididos y se pensó que los motivos de la protesta continuaban vigentes, estuviesen presentes físicamente o no los interpelados. En aquella oportunidad, la pretensión de los movimientos anticapitalistas de usar una calle tan emblemática de la actividad ciudadana, tanto ordinaria como extraordinaria, como el Passeig de Gràcia, se desvelaba como inasumible, al menos según los argumentos de la delegada del Gobierno español en Cataluña, Julia García Valdecasas.

Las autoridades impusieron entonces el traslado de la manifestación contra el Banco Mundial al Passeig de Sant Joan, mucho más secundario y relativamente alejado del centro, pero una decisión judicial devolvió a los convocantes su derecho a emplear el itinerario inicialmente previsto. La contribución de los medios de comunicación —desde hacía tiempo comprometidos en una feroz campaña de criminalización de la disidencia política radical que todavía dura— a generar un clima de inquietud ante las supuestas intenciones violentas de los manifestantes fue fundamental y resultó significativo cómo actuó a partir de apreciaciones espaciales, relativas a sentimientos que podían ser atribuidos a una calle súbitamente personalizada y capaz de experimentar emociones. Así, *El Periódico de Catalunya* anunciaba en su portada del mismo día de la marcha, el 24 de junio: "El Passeig de Gràcia teme actos radicales durante la marcha". Como suele pasar en estos casos, la profecía acabó cumpliéndose y se produjeron graves incidentes que ocasionaron —o fueron ocasionados, según numerosos testigos y según la denuncia presentada ante los tribunales y finalmente archivada— una violentísima actuación policial, con decenas de manifestantes pacíficos heridos o detenidos.

Esta capacidad de Barcelona de demostrarse fiel a su propio pasado y provocar el miedo de quienes creían tenerla sometida y poseída llegó a un máximo de intensidad con motivo de la cumbre de jefes de Estado de la Unión Europea el 14, 15 y 16 de marzo de 2002. De nuevo, las autoridades pudieron percibir hasta qué punto la ciudad podía mostrarse hostil e

inhóspita ante la presencia considerada no solo como ajena, sino, ante todo, como moralmente inaceptable. Durante los tres días que duró el evento, los mandatarios internacionales tuvieron que reunirse literalmente escondidos en un recinto fortificado, a las puertas de la ciudad, sin poder penetrar en ella, sin el mínimo contacto con una población que no estaba predispuesta a depararles ninguna bienvenida multitudinaria, sino más bien lo contrario. En el extrarradio, los poderosos debían verse a sí mismos como marginados, reconocidos como una materia extraña y repugnante que la urbe se negaba a recibir. Eran invitados, es cierto, pero ¿de quién? No de la ciudad, estaba claro, como lo demostraba que no se atreviesen a salir de un estrecho perímetro en la zona de Pedralbes, encerrados por una muralla de cemento y dobles rejas que, al pie de la letra, los mantenía en todo momento enjaulados. Los líderes europeos se sometían a sí mismos a una especie de efecto túnel que los llevaba directamente desde el aeropuerto de El Prat hasta el aislado hotel de lujo Juan Carlos I y al contiguo Palau de Congressos, en un sector limítrofe de Barcelona que solo ocupaban instalaciones deportivas y descampados. Los reunidos no temían un atentado terrorista, ni la acción de violentos fuera de control. Los jerarcas planetarios allí congregados le tenían miedo a Barcelona. De hecho, la recepción oficial que debía celebrarse uno de los días del encuentro en el Palau de la Generalitat tuvo que trasladarse al palacio de Montjuïc, una vez más vertedero de lo que la ciudad parecía negarse a aceptar en su seno.

Barcelona, una vez más asediada —como tantas veces antes a lo largo de su historia—, ocupada por ocho mil policías destinados a vigilar de cerca unos habitantes que había que mantener a toda costa lejos y a raya. Aquellos días quedó patente de quién era, en última instancia, la calle. Multitud de manifestaciones de todo tipo recorrieron la ciudad en todas direcciones. El día 9 tenía lugar una edición del Reclaim the Streets, el movimiento lúdico-protestatario que se había apropiado con su peculiar estilo, poco antes, de las calles de Seattle, Londres o Praga. El domingo 10, se daba otra manifestación masiva contra el Plan Hidrológico Nacional, en gran medida nutrida por gentes venidas de las comarcas aragonesas y catalanas de las riberas del Ebro, forasteros que, en las antípodas de mandatarios y policías, sí que eran acogidos por la ciudad como propios. A los pocos días, otra marcha de

decenas de miles de personas convocadas por los sindicatos bajaba por la Via Laietana.

Durante las tres jornadas que duró la cumbre, las marchas se intensificaron y se expandieron a lo largo y ancho de la trama urbana. Unos manifestantes circulaban en bicicleta por la Gran Via, al mismo tiempo que otros bajaban a pie desde la Sagrada Familia, en lo que se había convocado como Rúa de las Resistencias. A lo largo de su recorrido los manifestantes se fueron deteniendo, como en un vía crucis, por delante de las sedes de las multinacionales que iban pasando. Poco después, otra manifestación ante el Liceo, en la Rambla, y concentración en la Plaça dels Àngels, frente al MACBA. Todo con evidencias de hasta qué punto los actores sociales habían generado un continuo entre el paralenguaje festivo —batucadas, músicas *rap* o tecno que se emitía desde camiones en marcha, dragones, *dimonis*, grupos de animación— y los contenidos de protesta proclamados en forma de pancartas y consignas gritadas y pintadas a lo largo de las deambulaciones y aglomeraciones rituales por las calles de la ciudad. El último día de la cumbre, el 16 de marzo, centenares de miles de personas ocupaban el centro de la ciudad, desfilaban de nuevo Via Laietana abajo en contra de la mundialización, en una explosión de heterogeneidad que contrastaba con las masas oscuras de los omnipresentes piquetes de la policía y la siniestra sombra del helicóptero que no dejaba de revolotear sobre las cabezas de los manifestantes.

El nivel máximo de intensidad en las apropiaciones colectivas del espacio público urbano con fines expresivos, en buena medida al margen de la voluntad monopolizadora de las instituciones políticas, se conoció con motivo de las masivas demostraciones de protesta contra la invasión de Irak por las tropas norteamericanas. Las protestas ante la sede del Partido Popular en el Carrer Compte d'Urgell fueron constantes y un campamento en la Plaça Francesc Macià sirvió —con el montado frente a la Delegación del Gobierno en la Plaça Palau— para constatar una culpabilización de las instancias políticas que aquellos dos edificios albergaban. Nunca la ciudad había conocido una ocupación masiva de las calles como la del 15 de febrero, cuando una cifra de ciudadanos hasta entonces no registrada —cientos de miles— no se conformó con circular por el Passeig de Gràcia en señal de

protesta, sino que invadió literalmente todas las calles adyacentes y el centro urbano en general. Solo las grandes movilizaciones independentistas de los Onze de Setembre de 2012, 2014 y 2015 superaron en número de concentrados aquellas protestas.

En otra de las jornadas de protesta, el 22 de marzo, una cifra parecida utilizó vías hasta entonces desdeñadas por las rutas rituales para manifestaciones oficialmente patrocinadas y circuló por el Paral·lel entre Plaça Espanya y la Delegación del Gobierno. Un día antes, sábado por la tarde, decenas de miles de personas habían unido, por medio de una cadena humana, la embajada de los Estados Unidos, en Pedralbes, con la sede del Partido Popular, indicando topográficamente una vinculación cómplice. Varias noches consecutivas, sin convocatoria previa con excepción de la primera, miles de personas se asomaron a sus balcones y ventanas o bajaban a la calle golpeando cacerolas y todo tipo de objetos, al tiempo que los automóviles hacían sonar sus cláxones. Paulatino paso del murmullo de fondo urbano a un rumor creciente que avanzaba como una ola y al estallido de un clamor ensordecedor. La imagen final acabó siendo la de una ciudad que se había convertido de pronto en una suerte de ser vivo colosal, un gigante que se despertaba de su sueño para emitir un impresionante gruñido.

Manifestaciones altermundistas como aquellas marcaron el inicio de un ciclo de contestaciones que seguían itinerarios no prefijados, o, al menos, no comunicados a la autoridad, con lo cual resultaba imposible pronosticar sus periplos. Por ejemplo, el 26 de marzo de 2009 miles de estudiantes se prestan en Plaça Universitat a manifestarse contra el desalojo días antes de sus compañeros encerrados en el rectorado de la Universidad de Barcelona, en protesta contra las nuevas políticas educativas inspiradas en los planes de Bolonia. Hay una gran expectación, porque los convocantes han anunciado que la comitiva circulará por la Carrer Pelai y luego continuará bajando por las Ramblas, una vía que las autoridades hacía tiempo que habían inhabilitado para las manifestaciones de protesta, lo que auguraba choques con la policía. Un nutrido cordón de antidisturbios y decenas de periodistas esperaban la embestida de los estudiantes que estaban a punto de emprender la marcha. Llegado el momento de arrancar, los manifestantes empiezan a caminar, pero lo hacen en sentido contrario al advertido y, subiendo por

Aribau y girando por Diputació, atraviesan la izquierda del Eixample y terminan su caminata en la Plaça d'Osca, en el barrio de Sants. La policía y los periodistas quedan plantados, esperando inútilmente el embate de una manifestación violenta que no será violenta y que nunca llegará.

Lo que hicieron en aquella oportunidad los estudiantes anti-Bolonia era lo que de algún modo habían prometido, que era desviarse de uno de los circuitos rituales —es decir, simbólicos, repetitivos y obligatorios— por los que transcurren las manifestaciones estudiantiles en Barcelona: como hemos visto, partir de Plaça Universitat, seguir por Pelai, Fontanella y bajar luego por Via Laietana para penetrar en el Barri Gòtic y plantarse ante el Palau de la Generalitat. La transgresión con que se amenazaba era usar una ruta prohibida, que había sido la principal para las demostraciones políticas hasta 1939 y que había sido clausurada para la acción colectiva por órdenes del Ayuntamiento. Pero el desacato fue, si se piensa, más grave: los manifestantes no emplearon ni el camino autorizado ni el prohibido, sino *otro*, es decir, ignoraron la lógica topográfica institucionalizada de lugares y de itinerarios entre lugares e inventaron una distinta, que se permitía incluso despreciar el centro de la ciudad como centralidad simbólica para elevar a tal rango un barrio popular.

El Primero de Mayo de 2011 se dan en Barcelona dos grandes manifestaciones. La que convocan los sindicatos mayoritarios por la mañana hace el recorrido rutinario para ese día: Via Laietana abajo hasta desembocar ante la catedral, es decir omitiendo la confrontación al tiempo física y simbólica con sedes gubernamentales, dando a entender que el acontecimiento no iba con ellas. A la tarde, sindicatos y colectivos alternativos convocan otra que se reúne en los jardincillos de la parte baja del barrio de Gràcia, casi en la Diagonal. La comitiva arranca tomando una dirección extraña: en lugar de seguir la inercia de *bajar*, como otras manifestaciones que parten de ese punto, lo que hace es *subir*, y hacerlo además hacia esos barrios que suelen ser denominados como "altos" —Sant Gervasi, Galvany, Tres Torres…—, es decir, ricos, aquellos en que residen las clases dominantes. Toman Travessera de Gràcia, Aribau hacia arriba, Via Augusta, General Mitre, Sant Gregori Taumaturg, Francesc Macià… Fácil interpretar el valor simbólico del itinerario escogido como desafío a los

poderosos en su propio territorio, a la puerta de sus casas, "ultrajando" zonas de la ciudad que se había considerado a salvo de las protestas y, más todavía, de los disturbios —contenedores ardiendo, rotura de vidrios de entidades bancarias, pintadas, enfrentamientos con la policía, detenciones— con que concluirá la marcha.

Tenemos así que lo inopinado e imprevisto pasan, a partir del 2000, a asumir un lugar central en la acción colectiva radical y su objetivo de alterar las rutinas. La asunción de la sorpresa como técnica de apropiación insolente del espacio urbano encontraría su precedente en las manifestaciones-relámpago bajo el franquismo, cuando un grupo reducido de manifestantes, convocados clandestinamente, llevaba a cabo una súbita aparición —un "salto"— en un determinado punto de la ciudad, para disolverse rápidamente antes de la llegada de la policía. Pero su inspiración principal procede de formas de creación propias del arte contemporáneo, en concreto del movimiento situacionista y la contracultura de los años sesenta. Se trata de modalidades de accionismo, como la *performance*, el *happening* o la deriva, asumidas por el arte activista a partir de los años noventa y que enseguida sirvieron de modelo para golpes de mano contra organismos oficiales, empresas inmobiliarias, sedes bancarias, hoteles de lujo…, cuyas sedes eran asaltadas tumultuosamente y por sorpresa por grupos de activistas que impugnaban aquello que representaban. En Barcelona, las protestas contra el Fórum de las Culturas en el verano de 2004 depararon ejemplos espectaculares de este procedimiento para la protesta, como la toma del propio recinto del evento el 18 de julio, cuando decenas de embarcaciones, a cual más imaginativa, hechas con todo tipo de materiales, desembarcaron enarbolando banderas pirata en la sede del evento. Desde entonces, las acciones de este tipo de han generalizado y han constituido el *modus operandi* habitual de colectivos como los Iaioflautes —jubilados devenidos activistas que han protagonizado protestas de comando de gran impacto— o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

En el nuevo clima de protestas que inaugura el nuevo siglo, encontramos otras formas de acción colectiva que trasgreden sus expresiones más aceptables. Ese sería el caso de aquellas en las que los manifestantes no marchan de manera compacta recorriendo un trayecto entre puntos de la

trama urbana, sino que permanecen en un lugar cargado de significación durante un periodo de tiempo que puede durar días o meses. El movimiento de los indignados implicó, en 2011, acaso la máxima expresión de este tipo de protestas y no dejó ninguna ciudad importante en España sin su acampada en pro de una democracia real. Barcelona ya conocía esta modalidad de acción colectiva —campamentos en favor del 0,7 por ciento en la Diagonal en diciembre de 1994 o contra la Guerra del Golfo en las plazas Palau y Francesc Macià, en 2003— y levantó su acampada del 15-M en la Plaça de Catalunya, sin duda el corazón de la ciudad, en el doble sentido de su núcleo neurálgico y su principal referente sentimental. De su valor simbólico da cuenta el que fuera la imagen del mosaico de la rosa de los vientos que ocupa el centro de la plaza lo que se adoptara como logo del movimiento.

El día 27 de mayo de 2011, se produjo un escandaloso intento de desalojo de la plaza, disfrazado de operación de higiene pública. De madrugada, las brigadas municipales, protegidas por la policía antimotines, irrumpieron en el lugar para proceder, dijeron los medios oficiales, a la limpieza de la plaza, lo que daba entender que los concentrados no estaban amenazando el orden público, sino la salud pública. Los acampados eran desacreditados como incívicos, no como subversivos. Su culpa no era querer hacer una revolución, sino pisar los parterres y no usar correctamente las papeleras. Sorprendidos mientras dormían, los reunidos en la plaza se vieron enseguida rodeados por los antidisturbios, que los inmovilizaban mientras sus enseres eran abocados en camiones de basura. Pero, al poco, los destacamentos de empleados de la limpieza y la policía asaltantes se veían a su vez cercados por una muchedumbre airada que había acudido espontáneamente para defender no solo a los acampados, sino la misma apropiación democrática de un espacio —la propia plaza— que consideraban suyo, es decir de todos. En unas horas se habían congregado miles de personas, que primero resistieron la brutalidad policial que se desató sobre ellas y, en un determinado momento, se lanzaron a la reconquista de la plaza, obligando a retirarse vergonzantemente a quienes habían intentado usurparla.

Al cabo de unos días, los acampados pasaban a la contraofensiva y devolvían la visita. Miles de personas, convocadas por el 15-M, ponían cerco desde la noche del 14 de junio de 2011 a la sede del Parlamento catalán,

para protestar contra el pleno que, al día siguiente, iba a aprobar unos presupuestos restrictivos. La sesión del Parlamento se celebró con graves dificultades y, al final, la comparecencia condenando el asedio de todos los grupos parlamentarios sin excepción —también los de la izquierda oficial— puso de manifiesto cómo de inaceptable se consideraba que los acampados hubieran demostrado que su campamento irradiaba su protesta a la totalidad de la ciudad y era capaz de hacer notar sus efectos incluso a la misma puerta de las instituciones.

LEVANTAR LAS CALLES

La incapacidad de los sistemas políticos centralizados —incluso de aquellos que se autopresentan como democráticos— a la hora de convertir las relaciones entre dominantes y dominados en asuntos políticos dirimibles en público se ha traducido en usos de la fuerza, y en usos *públicos* de la fuerza. En este sentido, la imagen que los medios de comunicación divulgan de lo que se etiqueta como "violencia urbana" nunca se ha limitado a una aséptica crónica de los hechos, sino que ha aparecido modelada por un discurso que venía a exaltar las actuaciones de la llamada "fuerza pública" como justas y pertinentes y que impregnaba las expresiones de ira colectiva con todo tipo de descalificaciones, en tanto que antisociales, perturbadoras de una visión bien sesgada de lo que había que entender por "orden público".

La emergencia de la propia naturaleza polémica del espacio público se concreta en un espectáculo que vemos repetirse una y otra vez. De entrada, la imagen de viandantes que marchan juntos, en la misma dirección, demasiado alterados, diciendo unas mismas cosas que no se quisiera escuchar y en voz demasiado alta, increpando poderes en apariencia poderosos, pero que, con su reacción ante todo eso, pronto se revelan mucho más vulnerables de lo que se imagina. El escenario, una vez más, el centro urbano, esa provincia que la especulación inmobiliaria, las políticas tematizadoras y el consumo espectacularizado habían creído suyo y el territorio donde se erigen los palacios gubernamentales y los monumentos más emblemáticos de la ciudad. Ese marco conoce, de pronto, la irrupción de una multitud airada que traspasa los límites de la ciudad sagrada donde habitan las más altas

potestades políticas, religiosas y económicas, y desobedece las órdenes relativas a qué debe y qué no debe pronunciarse, gritando las frases malditas, las reclamaciones imposibles.

Justo en ese momento, una vieja técnica, bien conocida, se vuelve a poner en marcha, ciega y sorda: la represión. Los inaceptables deben ser expulsados de la calle, disueltos, devueltos a la nada de la que se los imagina procedentes, puesto que representan potencias que son oficialmente mostradas como ajenas, física o moralmente extrañas al presunto orden que esa presencia no invitada viene a desmentir. La estampa se repite entonces por doquier en el mundo: botes de humo, pelotas de goma, chorros de agua a presión, golpes de porra, no pocas veces disparos con fuego real. La policía irrumpe en escena como garante de la buena fluidez por los canales que irrigan la forma urbana. Ha de hacer lo que siempre ha hecho: desembozar la ciudad, disolver los grumos humanos, drenar los obstáculos físicos que dificultan la correcta circulación de los coches, acallar las voces cargadas de emoción, hiperexpresivas, vehementes, de aquellos que han sido declarados oficialmente intrusos. Las enigmáticamente llamadas "fuerzas del orden" —¿de qué orden?— conforman una masa uniforme, inevitablemente siniestra —¿por qué los uniformes de la policía son siempre sombríos?—, una especie de mancha oscura en una escenario que hasta su llegada era multicolor y polifónico, y más todavía por el griterío de los manifestantes, por el colorido de los estandartes, las pancartas, las banderas y de la propia diversidad humana congregada.

En cuanto a los efectos de la llamada "violencia urbana", como se ha visto asociada entre nosotros al tipo de apropiación del espacio urbano de las movilizaciones consideradas "antisistema", un análisis detenido de la forma que adoptan y de los objetivos que escogen no permitiría certificar su atribuida naturaleza de arbitrarias o irracionales. De hecho, bien podría entenderse que las agresiones contra cosas y enclaves están cargadas de intención ética y hacen manifiesta una impugnación frontal de aquello que lo atacado encarna simbólicamente. Eso es obvio en el caso de las agresiones contra mobiliario urbano o transportes públicos —una forma clara de atacar a la Administración de que dependen—, cabinas telefónicas —agresiones metafóricas contra Telefónica— o los cristales de ciertos negocios

moralmente condenados por los manifestantes, como hamburgueserías, oficinas bancarias o inmobiliarias, tiendas de moda, delegaciones de multinacionales… Los manifestantes que, por ejemplo, protestaron el 8 de mayo de 1970 en Barcelona contra la intervención norteamericana en Vietnam y la matanza de estudiantes en la Universidad de Kent, apedrearon el Instituto Norteamericano, en la Via Augusta, o los almacenes Sears, en lo que entonces era la Plaza de Calvo Sotelo —hoy Francesc Maciá—. El 13 de febrero de 1971, después de un frustrado recital de Pete Seeger en la Escuela de Ingenieros y de unos disturbios que afectaron al entorno del Palau de Pedralbes, un grupo de manifestantes se citó en el centro de Barcelona, donde destrozó las vitrinas de la IBM, en la Plaça Urquinaona. El 5 de diciembre de 1970, coincidiendo con el consejo de guerra contra militantes de ETA en Burgos, los manifestantes recorrieron el Carrer Tuset —uno de los escenarios predilectos de la *gauche divine* catalana de la época—, asolando todo a su paso. En las octavillas que lanzaron puede leerse el motivo de lo que ciertamente era un operación de castigo: "La misma burguesía que asesina en Burgos se refugia en la paz de Tuset"[252].

Una vez superada oficialmente la dictadura franquista, este tipo de agresiones de fuerte contenido simbólico, consistentes en interpelar violentamente a expresiones del mal social, económico y político, se ha continuado considerando pertinente por parte de ciertos grupos. En Barcelona, las celebraciones deportivas por victorias del Barça han desembocado de manera casi preprogramada en el apedreamiento de establecimientos de comida rápida pertenecientes a cadenas internacionales, al grito de "Butifarra, sí; hamburguesa, no". Las acciones de protesta en la calle a lo largo de los noventa insistieron en ese tipo de actos, dirigidos contra empresas de trabajo temporal, delegaciones inmobiliarias, sedes bancarias, etc., como si se tratase de hacerles pagar su responsabilidad en los abusos del capitalismo, la precarización del trabajo temporal, el precio de la vivienda, etc. En el transcurso de las manifestaciones contra la globalización que tuvieron lugar en Barcelona el 24 de junio de 2001 o el 16 de marzo del año siguiente, los participantes partidarios de la acción directa apedrearon tiendas de moda, al tiempo que pintaban en sus paredes contiguas lemas contra el imperio de medidas que provocan la anorexia[253], pero también

contra oficinas de La Caixa o la sede de Comisiones Obreras, sindicato este supuestamente culpable de haber traicionado la causa proletaria. En la primavera de 2006 se pudo ver, en el transcurso de los disturbios ocasionados por victorias futbolísticas del Barça o por la aplicación de la nueva normativa municipal en materia de civismo, que los objetivos fueron establecimientos pertenecientes a grandes cadenas de consumo —Decathlon, Séphora, La Sirena, FNAC, Burger King, Levi's y Springfield—, o bien instalaciones culturales consideradas responsables de la violencia urbanística en Barcelona, como fue el caso del MACBA en octubre de 2006.

Refiriéndose a las destrucciones provocadas por los manifestantes de Mayo del 68 en París, Michel de Certeau advertía cómo estas nunca fueron de verdad un cataclismo y asumieron desde el principio y en todo momento un fuerte contenido simbólico, al mismo tiempo que recordaba que ninguna instalación estratégica, ni ninguna sede política o empresarial importante fue importunada por los revoltosos. "Los daños —anota Certeau—, además de los ocasionados inevitablemente por el desorden, provocan más bien el efecto de sacrificios necesarios a la *expresión* de una reivindicación"[254]. Por eso, Certeau nos habla de auténticas *luchas rituales*, para enfatizar la relativa vocación destructiva de aquella revuelta, algo que podría ser ampliado a la mayoría de disturbios asociados a marchas civiles, ejercicios de fuerza tan protocolizados como las dramaturgias de que forman parte y de la que no pocas veces no dejan de ser una especie de prótesis muchas veces perfectamente prevista.

La lógica escénica aplicada es siempre la misma y responde a una idéntica obsesión por ritualizar al máximo el espacio y por marcar territorio. Por ejemplo, los grupos más radicales que acompañan las manifestaciones antiglobalización se infiltran en su corazón para, desde allí, ir marcando los puntos fuertes por los que van pasando, como si quisiesen dejar un rastro etológico que hiciese inequívoco el itinerario seguido, puntuando gracias a ellos con destrozos el recorrido, a la manera de las migajas de pan del cuento. A las pocas horas, los cristaleros han repuesto los vidrios rotos y las brigadas municipales han retirado los contenedores incendiados, como respondiendo a una voluntad de borrar las huellas de lo que ha venido a ser como un fenómeno meteorológico, una especie de huracán humano que ha arrastrado a

su paso todo aquello que había sido señalado antes como indigno de estar allí, como inaceptable factor de impureza que había que suprimir de raíz del paisaje urbano.

Los choques entre manifestantes y policías o entre manifestantes de signo contrario han adoptado casi siempre un carácter ritual, en los que las cargas, los repliegues y los movimientos de defensa… asumían el aspecto de juego ceremonial, dominado siempre por la convicción de que la violencia usada será limitada y no tendrá consecuencias irreversibles. Ni los manifestantes —ni siquiera los más hostiles— ni los policías dejan nunca de explicitar este énfasis en la dimensión fundamentalmente escénica de sus actos. Las actuaciones contra sitios considerados encarnación de lo maligno o difusores de corrupción e infamia estaban orientadas por esa misma voluntad dramatúrgica. En esa línea, el tipo de vestuario que usan los manifestantes más radicales quiere ser elocuente y la policía y los espectadores son capaces de reconocerlo. Esta preocupación por distinguirse acaba generando no solo un efecto estético, sino estetizante, cuyo destino último es en buena medida mediático. Hoy, en una deriva de la que las manifestaciones antiglobalización de finales de los noventa y principios del siglo XXI han sido confirmaciones, se puede apreciar una notable tendencia mundial a uniformizar a los propios protestatarios. Los pasamontañas —línea comandante Marcos—, las sudaderas con capucha, el calzado deportivo… han acabado perfilando un *look* característico del manifestante radical.

Por descontado que los policías, por su parte, no olvidan tampoco nunca esa dimensión teatral de su actuación. Los despliegues de los agentes antidisturbios no son simples intervenciones destinadas a alcanzar un cierto objetivo —defender el orden público ofendido, dicen—, sino auténticas coreografías en que cada movimiento funciona como un verdadero paso de baile. El producto final muchas veces no disimula sus resonancias cinematográficas. La imagen de los policías de muchas ciudades europeas o norteamericanas que avanzan por las calles golpeando con las porras sus escudos recuerda inevitablemente a las batallas de las películas "de romanos". Con motivo de los hechos de Seattle, en 1999, la prensa ya llamó la atención acerca de cómo los uniformes y el equipo de los antidisturbios parecían extraídos de una película de ciencia-ficción. La vestimenta de

trabajo que estrenó la policía española con motivo de las movilizaciones antiglobalización en Barcelona, en junio de 2001, estaba en esa misma línea de fantasía. Pierre Sansot habla de las furgonetas que transportaban a los CRS franceses de Mayo del 68 como "grandes bestias fabulosas en la caída de la tarde, monstruos que se hundían en la noche parisiense"[255]. Michel de Certeau decía que los "manifestantes de Mayo luchaban contra marcianos negros y con casco"[256]. La propia presencia de espectadores es una prueba de esta naturaleza controlada, ritualizada y espectacularizada del disturbio urbano. Su desencadenamiento, en efecto, no implica muchas veces que los viandantes tengan que huir y, si la intensidad de la lucha no alcanza un cierto nivel, buena parte de ellos permanecerá en el lugar como público de lo que es vivido como un acontecimiento urbano más[257]. Ni que decir tiene que la condición de actualidades retransmitidas que poseen las manifestaciones en la calle no ha hecho sino agudizar esa preocupación por la puesta en escena de los eventuales choques posteriores.

Por descontado que esa naturaleza ritual —que implica el deslinde claro entre el daño simbólico y el daño físico y elude este último— ha tenido sus excepciones. En algunas ocasiones, la acción de los manifestantes ha podido implicar consecuencias graves, en forma de lesiones, en sus oponentes policiales. Fue el caso, en Barcelona, del guardia urbano que sufrió quemaduras graves como resultado de un ataque con cócteles molotov a la comisaría de la Plaça Bonsuccés, en el verano de 1977, en el marco de las protestas por la detención del pintor Ocaña. Lo mismo valdría para el caso de otro guardia urbano que quedó en coma en los disturbios que siguieron a la intervención policial contra una casa okupada en el Carrer Sant Pere més Baix, en febrero de 2006. Lo mismo valdría para lo que se presenta como "actuaciones desproporcionadas" de las fuerzas policíacas, con lo que se sugiere que estas se han saltado las normas implícitas y han hecho, por así decirlo, "trampa", abusando de su poder, invirtiendo en su acción un encarnizamiento con el adversario e incluso con los propios espectadores. Esa ruptura de las reglas sobreentendidas que hacen de la lucha callejera contemporánea un juego ritual —inaplicable en contextos de alta tensión política, como es el caso del País Vasco— implica que los policías no se amoldan a su papel de funcionarios de los que cabe esperar una actuación

profesional comedida. La mera exhibición de armas de fuego, y no digamos su uso, funciona como una trasgresión inaceptable por parte de uno de los intervinientes. Estas actuaciones "que no se valen" se producen casi siempre por cuenta de la policía, con casos recientes tan desgraciados como los Goteborg y Génova en el año 2001. En Barcelona, la imagen de policías nacionales esgrimiendo sus pistolas no ha sido inusual en los últimos tiempos, según denuncias de movimientos sociales que no han sido recogidas casi nunca por los medios de comunicación.

En algunas ocasiones, la acción destructiva puede ser atribuida no a alborotadores que creen ejecutar una tarea sagrada, sino a agentes gubernativos o a sueldo suyo. A raíz de la escandalosa actuación policial contra los manifestantes anti Banco Mundial el 24 de junio de 2001 en Barcelona, diversas organizaciones presentaron ante los juzgados más de un centenar de testimonios que declaraban haber visto a presuntos manifestantes que arrasaban escaparates y que salían o volvían a entrar en furgonetas policiales, cambiando pañuelos por porras y deteniendo o apaleando a manifestantes pacíficos. Al año siguiente, en marzo, en los disturbios derivados de las protestas contra la cumbre europea, también se pudo fotografiar a personas enmascaradas que salían de furgonetas de la Policía Nacional y que actuaban como si fueran manifestantes violentos. En estos casos, y si fuesen ciertas las imputaciones hechas contra la policía, nos encontraríamos ante una táctica bien conocida en la historia de la represión contra las revueltas urbanas, consistente en la actuación de provocadores policiales o en connivencia con la policía, que servirían para desacreditar las movilizaciones y justificar la actuación de las propias "fuerzas de orden público", "obligadas" a actuar por un "cariz de los acontecimientos" que ellas mismas se han encargado de propiciar.

Las violencias en que desemboca una manifestación inicialmente pacífica son, en no pocas ocasiones, el resultado de intervenciones policiales que parecen buscar el enfrentamiento. En ese sentido, la policía puede ser responsabilizada muchas veces de ser ella la que altera un orden público que sobre el papel afirma defender. Eso no quiere decir que los alborotos no puedan desencadenarse como la consecuencia de la acción de elementos exaltados que confían en las virtudes mágicas de la acción directa y se

abandonan a una tarea purificadora del espacio por el que transitan. El ataque contra los edificios que albergan instituciones tenidas por perversas es un ejemplo de esa voluntad de borrar literalmente del mapa potencias tenidas al mismo tiempo como intrusas y malignas. Esa misma lógica de "castigar y liberar", de higiene y purificación, hace de los agresores una especie de ángeles exterminadores que ejecutan una misión de limpieza de la ciudad de corporaciones espaciales del mal. Con ello, no dejan de darle la razón a Henri Lefebvre, que, ante el espectáculo de las calles de París en Mayo del 68, creía ver en la revuelta un instrumento espontáneo de renovación urbana, la expresión de una voluntad absoluta de modificar no solo el espacio físico, sino también el espacio social: "Solo el buldócer y el cóctel molotov podrían cambiar el espacio existente[258]".

Esta reclamación polemista de la calle y la plaza por parte de conglomerados humanos dotados de congruencia moral y operacional no pocas veces conlleva la evidencia de hasta qué punto debería costar sostener la naturaleza naturalmente armónica y tranquila del espacio público, con demasiada insistencia presentado como escenario natural de los principios democráticos de igualdad y libertad expresivas. Lo que se quería mostrar como páramo límbico en que se realizaba el concepto político de participación democrática —nueva ágora en que proclamar sin trabas lo que se piensa sobre asuntos que conciernen o deberían concernir a todos— aparece de pronto como marco de y para el conflicto, en que determinados sectores ven considerada como inaceptable su voz y son forzados a desalojar por la fuerza un espacio que ya no pertenece —como se decía— a todos. Vemos de nuevo irrumpir ese elemento consustancial a la existencia misma de las grandes ciudades, extremo vehemente de lo que Simmel definía como su *nerviosidad* natural, que es la algarada, el disturbio, la revuelta, lo que los comunicados oficiales llaman "incidentes" o "desórdenes" y que no son sino los afloramientos súbitos de la condición en última instancia inamistosa de las metrópolis, su lado iracundo e ingobernable, desautorización de lo que los prospectos de promoción dicen de las ciudades cuando son puestas en venta. Momento en que lo urbano habla o hace hablar de alguna de las sustancias básicas de las que también está hecho: insolencia, rabia, desobediencia, enfurecimiento súbito de los viandantes.

CAPÍTULO 7

EL MITO DEL ESPACIO PÚBLICO

Todo lo expuesto en los capítulos precedentes insiste en presentar a Barcelona como paradigma de un estilo de construcción de la vida urbana que aparece marcada por la reapropiación capitalista de la ciudad, en una dinámica de la que los elementos fundamentales y recurrentes —en su caso y en el de otras muchas ciudades— son la conversión del espacio urbano en un parque temático, la gentrificación de centros históricos —debidamente expulsada la historia de ellos—, la terciarización —lo que implica la reconversión de barrios industriales enteros—, la dispersión de una miseria creciente que no se consigue ocultar, el control sobre un espacio público cada vez menos público, etc. Ese proceso —de hecho, ya de alcance planetario— requiere una dimisión de los agentes públicos de su hipotética misión de garantizar derechos democráticos fundamentales —el del disfrute de la calle en libertad, el de la vivienda digna y para todos, etc.— y la desarticulación de los restos de lo que un día se presumió el Estado del bienestar. En una aparente paradoja, tal dejación por parte de las instituciones políticas de lo que se supone que son sus responsabilidades principales en materia de bien común ha sido compatible con un notable autoritarismo en otros ámbitos. Así, las mismas autoridades que se mostraban sumisas o inexistentes ante el liberalismo urbanístico y sus desmanes podían desplegar toda su energía para asegurar el control sobre un espacio público concebido como mera guarnición de acompañamiento para las grandes operaciones inmobiliarias.

En el caso de Barcelona, la constatación de que la reconversión de la ciudad en puro producto de marketing requería mantener en estado de revista

permanente calles y plazas llevó a plantearse la necesidad de borrar u ocultar cualquier elemento que pudiera desmentir la imagen que se pretendía ofrecer de un espacio público expurgado de cualquier ingrediente de conflictividad. De hecho, toda la prospectiva sobre el futuro de la ciudad que se hizo desde las instancias políticas y urbanísticas que concibieron y emprendieron el "modelo Barcelona" trabajaba a partir del supuesto de que la intervención en materia de diseño urbano y las sistemáticas campañas en pro del nuevo patriotismo ciudadano que se quería como su base ideológica bastarían para que, como por arte de magia, la ciudad entera se entregara con entusiasmo a la tarea de su reconstrucción simbólica y morfológica. Pero no fue así. Como no podía ser de otro modo, ni la promoción publicitaria ni la disposición de "espacios de calidad" significaron la pacificación de unas calles a las que no les quedaba más remedio que ser testimonio y escenario de las nuevas y viejas formas de miseria urbana, ni la inclinación al desacato crónica en la historia de Barcelona, ni las inevitables expresiones de desbarajuste que la vida urbana no puede dejar de producir. Y fue así como, en lugar de la amable arcadia de civilidad y civismo en que debía haberse convertido Barcelona según lo planeado, lo que se mantuvo a flote, en la superficie, a la vista de todos, fueron las pruebas de que la desigualdad, la exclusión, la anomia e incluso la violencia continuaban siendo, y en aumento, ingredientes consubstanciales a la existencia de una gran ciudad capitalista. La decepción de las expectativas de constituir una ciudad que escenificara el triunfo final de las clases medias, el espectáculo de un desastre social que no hacía sino intensificarse era lo que escandalizaba a unas clases altas que veían que su sueño de recuperar Barcelona para su utopía civil se desvanecía y se mostraba ya inalcanzable, a la vez que se veían peligrar las perspectivas abiertas para la promoción inmobiliaria, comercial y turística de la ciudad.

Había que tomar medidas y, como fuera que las virtudes portentosas de los buenos planes no se habían cumplido, no cabía más remedio que recurrir a métodos más tradicionales, sobre todo al más tradicional de todos: el de la represión de la pobreza. Para ello, era indispensable crear un clima propiciatorio, un estado de ánimo social que llevara implícita la demanda de más firmeza policial y jurídica. Además de un buen número de reportajes y artículos de opinión, en el verano de 2005 los periódicos recogieron diversos

testimonios cualificados de una intelectualidad burguesa a la que lo que le molestaba no era que hubiera miseria, sino que esa miseria tuviera que verse y, todavía peor, que tuvieran que verla *ellos*. Oriol Bohigas denunciaba la falta de mano dura de las autoridades municipales ante lo que pasaba en la Plaça Reial, al lado mismo de la Rambla, adonde se había mudado como consecuencia de la perspectiva que se había abierto de una recuperación para las clases medias y altas de la ciudad vieja, no solo para bajar a divertirse, sino incluso para irse a vivir en ella:

> Dudo que se enteren de los graves abusos del botellón nocturno, sostenido por una mafia ilegal de vendedores de latas de cerveza a los que nadie reclama su adecuación a las normas legales de la venta ambulante… Dudo que hayan presenciado la acumulación de una cuarentena de *sin techo* bajo los porches, con sus camastros, sus cajas de cartón, sus papeles de periódico, sus defecaciones y su bodega de botellas de vino. Dudo que se hayan dado cuenta de la inutilidad de la amable gestión de unos guardias excesivamente respetuosos y bien educados cuando se acercan a reprimir cualquier acto escandaloso, abatidos por la insolencia de las tribus, los *bango perros* o los botelloneros. Dudo que se enteren de que la gente que se trasladó a vivir o a trabajar a la Plaza Reial —en la época que se anunció su proceso de rehabilitación— se está marchando, incapaz de resistir tanta porquería sin esperanza, abandonando el barrio a los okupas menos controlados, sin ninguna expectativa de rehabilitación. Dudo si se enteran del juego de navajazos nocturnos en la calle de Escudellers. Lo dudo porque nuestras autoridades no actúan con medidas urgentes y no puedo imaginar que sea por desidia premeditada y por mala intención. Debe ser por ignorancia supina, lo cual es una irresponsabilidad todavía más grave ("Cloaca de miseria", 27 de julio de 2005).

En realidad, nada nuevo bajo el sol. En el ya mencionado artículo "La Bacelonota" —publicado en 1920 en *La Publicidad*—, el poeta J. V. Foix —miembro de una de las familias más emblemáticas de Sarrià— ya había definido a la Ramblas como la "cloaca de la ciudad". En su diálogo con Narcís Comadira, a principios de los ochenta, insistía: "Lo era y lo continúa siendo"[259].

La cuestión no era solo que la cloaca estuviera donde siempre había estado y fuera lo que siempre había sido, sino que el pavoroso espectáculo de una miseria y un desorden que se negaban ya a esconderse se había extendido, como en una metástasis, al conjunto de la ciudad, y estaba contaminando los barrios altos de la ciudad, donde residía todavía una parte importante de la burguesía que había resistido la tentación de mudarse a barrios rehabilitados

y continuaba manteniéndose fiel en sus nichos "naturales" en la zona alta del sur de la ciudad —Sarrià, Sant Gervasi, Tres Torres, Bonanova…—. Días después del artículo de Bohigas, Félix de Azúa planteaba ese tema de la generalización del "incivismo" hasta contaminar los feudos de la burguesía barcelonesa:

> Es cierto que la Plaza Real (donde vive Bohigas) da asco, pero no menos que la totalidad de las Ramblas y sus aledaños. Tampoco es imprescindible bajar al sur de Barcelona, lugar notablemente mediterráneo, es decir, guarro, porque en el norte (llamado "pijo" por la gente resentidilla) sucede lo mismo. Para no abandonar lo doméstico les diré que en una de las zonas más caras de la ciudad, la plaza Boston, rincón exquisitamente diseñado por Beth Galí como acceso a un parque modesto, recoleto y frecuentado por cientos de perros encantadores, un grupo de hombres y mujeres ha pintarrajeado todas las paredes de la zona, hacen carreras de motos cada noche, se emborrachan, se pegan, vomitan, defecan, en fin, hacen exactamente lo mismo que en casa de Bohigas, solo que en una zona de la ciudad donde se pagan impuestos descomunales. Hace años hubo allí un restaurante de cocina fina aunque no ridícula, frecuentado por gente guapa que no hablaba a gritos. Está abandonado, claro. Es duro ser burgués en Barcelona ("Canícula elemental y fúnebre", *El País*, 11 de agosto de 2005).

La situación era inaceptable y era indispensable una actuación enérgica que "limpiara" los exteriores urbanos de presencias y conductas inconvenientes y que lo hiciera por la vía normativa y policial. Fue ese clima de "ley y orden" lo que llevó a las autoridades municipales barcelonesas a la aprobación urgente de una legislación especial que se presentó en el otoño de 2005: la "Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público de Barcelona", que el Gobierno de Ada Colau preveía modificar a principios de 2017 y que estaba destinada a "preservar el espacio público como un lugar de convivencia y civismo", pomposidad retórica que sirve para disimular lo que no deja de ser una versión posmoderna de la vieja consigna "la calle es mía", por mucho que ahora se enmarque en un contexto global de "tolerancia cero" —Giuliani, Sarkozy— que se traduce en el establecimiento de un estado de excepción o incluso de un toque de queda para los sectores más estigmatizados de la sociedad[260]. Se trata de la generación de un auténtico "entorno intimidatorio"[261] y la aplicación de lo que acertadamente Jordi Borja llama "represión preventiva"[262] contra sectores vulnerables y ya habitualmente

vulnerados de la población. Todo ello con la función de disciplinar ese escenario urbano en el que no solo no había sido posible mantener a raya las expresiones de desafecto e ingobernabilidad, sino que ni siquiera se había logrado disimular el aumento de los niveles de visibilidad de la pobreza y la marginación social. Las mismas autoridades que hacían la vista gorda protegían o protagonizaban actuaciones urbanísticas o inmobiliarias depredadoras y destructivas —casi siempre, del todo legales—, se ensañaban con "la práctica de juegos en el espacio público", "limpiarse o bañarse en las fuentes", "utilizar los bancos públicos para usos diferentes a los indicados"… El resultado no podía ser más significativo de quiénes consideran las autoridades que son los enemigos públicos número uno del ciudadano. En un documento interno de enero de 2007, la Guardia Urbana informaba que las denuncias recibidas desde el momento de aplicación de la Ordenanza, un año antes, aumentaron de 60 a 838, por lo que hace a "actividades que adoptan la forma de mendicidad", de 83 a 4.280 por "servicios sexuales", de 350 a 10.340 en el apartado de "pintadas y carteles", de 312 a 8.369 en el de "consumo de bebidas alcohólicas" y de 256 a 17.334 en el de "venta ambulante"[263].

Toda la retórica que acompañó la promulgación de esa nueva normativa en materia de "urbanidad" ponía de manifiesto cómo el civismo es hoy uno de los discursos políticos centrales de nuestras autoridades políticas y mediáticas. Como se sabe, el civismo concibe la vida social como un colosal proscenio de y para el consenso, en que ciudadanos libres e iguales acuerdan convivir amablemente cumpliendo un conjunto de preceptos abstractos de buena conducta. El escenario predilecto de ese limbo es un espacio público no menos ideal, en que una clase media universal se dedica al ejercicio de las buenas prácticas cívicas. En ese espacio modélico no se prevé la posibilidad de que irrumpa el conflicto, puesto que la calle y la plaza contemplan la realización de la utopía de una superación absoluta de las diferencias de clase y las contradicciones sociales por la vía de la aceptación común de un saber comportarse que iguala.

Sería interesante seguir la génesis del uso creciente y crecientemente central que está recibiendo esa noción de espacio público, un concepto que ha ido ganando protagonismo en las dos últimas décadas, que ocupa hoy un

lugar principal en las iniciativas y en las retóricas a propósito de los contextos urbanizados y que es bastante menos inocente y natural de lo que se antojaría a primera vista. De entrada, *espacio público* podría ser un instrumento conceptual que le permitiera a las ciencias sociales de la ciudad agrupar los diferentes exteriores urbanos: calle, plaza, vestíbulo, andén, playa, parque, muelle, autobús…, entornos abiertos y accesibles sin excepción en que todos los presentes miran y se dan a mirar unos a otros, en que se producen todo tipo de agenciamientos —microscópicos o tumultuosos, armoniosos o polémicos—, en que se despliegan encuentros y encontronazos, luchas y deserciones, reencuentros y extravíos…, toda esa inmensa urdimbre de acuerdos automáticos entre desconocidos o conocidos de vista que nos depara el espectáculo de una sociedad interminable, rebosante de malentendidos y azares. Ese espacio solo existe como resultado de los transcursos que no dejan de atravesarlo y agitarlo y que, haciéndolo, lo dotan de valor tanto práctico como simbólico.

Para el urbanismo oficial, *espacio público* quiere decir otra cosa: un vacío entre construcciones que hay que llenar de forma adecuada a los objetivos de promotores y autoridades, que suelen ser los mismos, por cierto. En este caso, se trata de una comarca sobre la que intervenir, un ámbito que organizar con el propósito de que quede garantizada la buena fluidez entre puntos, los usos adecuados, los significados deseables, un espacio aseado y bien peinado que deberá servir para que las construcciones-negocio o los edificios oficiales frente a los que se extienden vean garantizada la seguridad y la previsibilidad. No en vano, la noción de espacio público se puso de moda entre los planificadores sobre todo a partir de las grandes iniciativas de reconversión de centros urbanos, como una forma de hacerlas apetecibles para la especulación, el turismo y las demandas institucionales en materia de legitimidad.

En paralelo a esa idea de espacio público como complemento sosegado y tranquilizador para los grandes festines urbanísticos, hemos visto prodigarse otro discurso también centrado en ese mismo concepto, pero de más amplio espectro. En este caso, el espacio público pasa a concebirse como la realización de un valor ideológico, lugar en que se materializan diversas categorías abstractas como democracia, ciudadanía, convivencia, civismo,

consenso y otras supersticiones políticas contemporáneas, proscenio en que se desearía ver deslizarse una ordenada masa de seres libres e iguales, guapos, limpios y felices, seres inmaculados que emplean ese espacio para ir y venir de trabajar o de consumir y que, en sus ratos libres, pasean despreocupados por un paraíso de cortesía, como si fueran figurantes de un colosal *spot* publicitario. Por descontado que en ese territorio cualquier presencia indeseable es rápidamente exorcizada y corresponde expulsar o castigar a cualquier ser humano que no sea capaz de mostrar modales de clase media[264].

Barcelona es un ejemplo de cómo, a la que te descuidas, ese sueño de un espacio urbano desconflictivizado, por el que pulula un ejército de voluntarios ávidos por colaborar, se derrumba en cuanto aparecen los signos externos de una sociedad cuya materia prima es la desigualdad y el fracaso. Y es porque lo real no se resigna a permanecer secuestrado por lo que ese espacio público no puede ser lo que proclaman que es o deberían ser las campañas publicitarias oficiales: un cordial ballet de ciclistas sonrientes, recogedores de caquitas de perro y pulcros paseantes incapaces de tirar una colilla al suelo. ¿Quiénes son los responsables de que se frustre esa expectativa de ejemplaridad que debe presidir la vida pública en la ciudad? Parece que esas bolsas crecientes de ingobernabilidad se nutren de lo que se mencionaba como las nuevas "clases peligrosas", aquellas que el nuevo higienismo social, como el del siglo XIX, clama por ver neutralizadas, expulsadas o sometidas a toda costa: los jóvenes, los drogadictos, las prostitutas, los mendigos, los inmigrantes sin alojamiento. Lo que en la práctica es la restauración en Barcelona de la antigua Ley de Vagos y Maleantes resulta de la lucidez con que el Ayuntamiento ha entendido cuál es la regla de oro que debe orientar sus políticas en materia urbana: total servilismo ante los poderosos —los promotores inmobiliarios, la banca, las empresas multinacionales—, severidad máxima con los sectores más frágiles e inconvenientes de la sociedad.

Así, en Barcelona la población flotante de personas sin hogar, que se había mantenido estable en las últimas décadas, ha aumentado en los últimos años, constituyéndose en un objeto habitual de los servicios de asistencia social municipales. Diferentes opciones residenciales –albergues, centros de media

estancia, pisos sociales— y servicios —duchas, comedores, roperos— atienden a un número creciente de protagonistas de lo que se da en llamar "nueva pobreza urbana". Según los datos del Anuario Estadístico de Barcelona (2001 y siguientes), se ha venido produciendo un aumento constante en el número de personas atendidas: 1.924 en 1994; 2.016 en 1998; 3.274 en 2011; 3.934 en 2015 —que, especialmente, hacen estancias cada vez más numerosas y prolongadas—, 25.254 en 1994; 70.508 en 1998; 74.061 en 1999; 83.401 en 2000; 90.636 en 2011; 91.458 en 2015[265]. A partir de este año, los inmigrantes son considerados estadísticamente como constituyentes de una problemática específica, parecida técnicamente a la de los sin techo habitualmente tratados por los servicios sociales, pero con unas demandas particulares, sobre todo pensando que no son personas que han perdido su hogar, sino que, en cierto modo, todavía no lo han ganado. La misma fuente señalaba que las personas inmigradas atendidas por los servicios sociales municipales habían pasado de 1.796 en 1997 a 6.430 en 2001, frente a las 11.369 atendidas en 2015 por el Servicio de Atención a los Inmigrantes Extranjeros y Refugiados (SAIER). A su vez, los inmigrantes que recibieron alojamiento municipal en 2001 habían sido 210, efectuando un total de 6.298 estancias. En cambio, en 2012, el total de extranjeros atendidos fue de 1.410 personas, de las cuales respondían a la categoría de no comunitarias 1.035, y en 2015 el número total fue de 1.455, siendo extranjeras no comunitarias 1.006[266].

Un sector de sin techo lo constituyen recién llegados a Barcelona, casi todos en situación irregular y sin papeles, que recalan como transeúntes de paso hacia otros puntos o que, decididos a quedarse en la ciudad, no cuentan con parientes o amigos en condiciones de prestarles albergue en tanto dura su adaptación al contexto sociolaboral de acogida. Estas personas tampoco pueden acceder a un establecimiento hotelero, en primer lugar, porque el Plan de Usos de Ciutat Vella de 1988 llevó a la desaparición de más de 200 pensiones asequibles, que ofrecían más de 4.000 camas en el centro urbano de Barcelona. Las pocas pensiones que han sobrevivido están orientadas al turismo de recursos escasos y joven, y sus precios resultan prohibitivos para los inmigrantes pobres. Además, estos establecimientos tampoco les son accesibles por su propia condición de *ilegales*, en la medida en que han de

entregar semanalmente una lista de huéspedes a la policía. Tampoco tienen acceso a los albergues municipales, que, para atenderlos, les exigen estar empadronados.

Por todo ello, el último recurso es dormir en la calle, como *homeless* provisionales, pero hacerlo formando auténticos asentamientos colectivos que alivien la desprotección a que se verían sometidos durmiendo solos, a merced de los ataques de gamberros o *skins* o de las incursiones de la policía, para la que pernoctar al raso es motivo suficiente para expulsarles del país en aplicación de la Ley de Extranjería actual. Se producen entonces auténticos campamentos de inmigrantes que pueden apropiarse de espacios abandonados, como ocurrió durante meses —y hasta febrero de 2003, cuando fueron desalojados— con los cuatrocientos inmigrantes que habían improvisado un verdadero poblado en los antiguos cuarteles militares de Torres i Bages, en el barrio de Sant Andreu. Otros asentamientos parecidos se levantaban en los antiguos terrenos de Renfe en La Sagrera, en el Pont del Treball, en el mismo escenario de lo que había sido uno de los barrios de barracas más importantes de Barcelona: La Perona. Son chilenos, georgianos, búlgaros, también españoles pobres, hombres y mujeres con frecuencia con estudios universitarios y que aceptan empleos transitorios que les permiten sobrevivir. Allí viven familias enteras y la presencia de niños motivó un cierto movimiento de solidaridad de los vecinos del barrio, que se ve matizado por asiduas acusaciones de estar relacionados con un supuesto aumento de pequeños delitos en sus respectivas zonas de asentamiento. La organización solidaria no pudo impedir que la policía llevara a cabo *razzias*, como la que llevó a la detención el 14 de diciembre de 2002 de 44 personas en el asentamiento de Sant Andreu, acusadas de estancia ilegal en el país. La operación fue presentada como un "control rutinario de documentación". Más tarde, en los primeros días de 2007, una actuación parecida se produjo en las viviendas abandonas del complejo industrial de Can Fabra, también en Sant Andreu, de donde fueron expulsados —algunos detenidos— sus ocupantes: 69 personas —20 de ellas, niños y niñas— de ocho nacionalidades. Un nuevo asentamiento de barracas se levantaba poco después en los terrenos abandonados de Can Batlló, en Hostafranchs. En julio de 2013 se dio el último de estos desalojos masivos, cuando los mossos d'esquadra obligaron a

desocupar las naves industriales del Carrer Puigcerdà y del Carrer Pere IV, por las que habían pasado cientos de inmigrantes, la mayoría negroafricanos dedicados a la recolección de chatarra. El asedio contra los inmigrantes dedicados al comercio informal se reeditó de la mano del Gobierno de Ada Colau, que, responsabilizada por su supuesta tolerancia con los *manteros* —vendedores ilegales en la calle—, quiso congeniarse con los comerciantes aceptando someterles a constante acoso por parte de la policía municipal.

Pero acaso el episodio más espectacular y más emblemático de los producidos en Barcelona contra la población de origen inmigrante y sin papeles se conoció entre enero de 1999 y agosto de 2001. Lo protagonizaron unos 130 senegaleses, gambianos, nigerianos, cameruneses, que ocuparon uno de los rincones de la Plaça de Catalunya, en pleno centro de la ciudad. En lo que se dio en llamar el *black cornell*, estos inmigrantes —todos ellos varones— mantenían un punto de reunión permanente que se convertía en dormitorio de noche. Dormían en los bancos de piedra, siempre sentados, porque la Guardia Urbana les prohibía acostarse en nombre de las normativas municipales. Por la mañana, se aseaban en las fuentes públicas de la propia plaza. Una problemática parecida la planteaba otro grupo de inmigrantes búlgaros que habían generado un asentamiento parecido en la Plaça dels Països Catalans, en el barrio de Sants, cerca de la principal estación de trenes de la ciudad. Estas personas encontraban empleos precarios en la construcción, la hostelería o en la agricultura, en este último caso desplazándose a poblaciones del Baix Llobregat, del Maresme o, incluso, a las comarcas de Lleida[267]. Todos esos inmigrantes al raso fueron siendo paulatinamente expulsados de sus ubicaciones y acabaron concentrándose en un único campamento en la Plaça André Malraux, en el barrio de Fort Pienc, donde constituyeron un campamento de casi dos centenares de personas. El 16 de agosto de 2001 una brutal operación conjunta de Policía Nacional y Guardia Urbana se abalanzaba por sorpresa sobre los acampados y capturaba —en una alucinante cacería que duró varias horas— a 160 de ellos, deteniéndolos, trasladándolos al infame centro de detención de La Verneda y deportando finalmente a un buen número de ellos.

Lo mismo valdría para las mujeres de las esquinas. Hasta las iniciativas de Ada Colau en ese ámbito y el cese con ella de la presión policial, la

preocupación de las autoridades por el problema de la prostitución y todas sus derivaciones consistió en acosar a las mujeres y multarlas constantemente. En este caso, el agravio contra esas mujeres se multiplica cuando las afectadas añaden a su estigma profesional el de ser inmigrantes. Si en el caso que se acaba de mencionar de los inmigrantes sin papeles detenidos en masa en la Plaça André Malraux en el verano de 2001 se suscitó un movimiento de solidaridad por parte de ciertas ONG, una operación similar, que tuvo como víctimas pocos días después a casi una cincuentena de prostitutas negroafricanas que trabajaban en la parte baja de las Ramblas, no motivó ningún tipo de protesta y apenas fue recogida por la prensa. El espectacular operativo policial para "limpiar" de prostitutas la Ronda Sant Antoni una madrugada de enero de 2006 implicó la detención y posterior expulsión del país de decenas de ellas, la mayoría de origen rumano. En Barcelona, la persecución contra la prostitución es persecución contra las prostitutas.

Más allá de esas actuaciones concretas, las políticas urbanísticas e inmobiliarias que están transformando el casco antiguo de la ciudad consisten en justificar el cambio de nombre del propio barrio. Conseguir que llegue a ser el Raval y deje de ser para siempre el Barrio Chino pasa por ir cerrando uno a uno los locales que centraban en o en torno suyo la prostitución de calle tradicional en Barcelona, ejercida de forma creciente por inmigrantes de origen africano o euroriental. Obligándolas a desaparecer de aquel entorno puesto en venta se habría logrado, al mismo tiempo, que esas mujeres entendieran de una vez por todas que la prostituta autónoma —que las hay— y el chulo son personajes del pasado, antiguallas que deben dejar paso al moderno empresariado de las industrias cárnicas humanas, plenamente integrado en la lógica de las grandes superficies y del trabajo en red. Curiosa forma esta de luchar contra la explotación sexual la de asediar y castigar a las explotadas. La ordenanza de 2005 de medidas "para fomentar y garantizar la convivencia", en su sección segunda del capítulo 5 —"Utilización del espacio público para la oferta y la demanda de servicios sexuales"—, va en dirección contraria de lo que se supone que debería ser el esfuerzo de las instituciones por asegurar lo que esas mujeres —en palabras de Margarita Carreras, una de sus portavoces y miembro del colectivo Línea

de Investigación y Cooperación con Inmigrantes y Trabajadoras Sexuales (LICIT)— quieren y necesitan: acceso a los recursos de que pueden beneficiarse las mujeres maltratadas, cese de las vejaciones y maltratos procedentes de las propias instancias —sanitarias, asistenciales, policiales— que deberían protegerlas, cobijo jurídico gratuito, tarjeta de residencia y de trabajo para las extranjeras, derechos laborales, etc.

Por su parte, los extranjeros pobres son, todos ellos, sistemáticamente acusados de prácticas "incívicas". Los pakistaníes suelen estar vinculados a la venta ilegal de cerveza. Los magrebíes y negroafricanos están, desde hace años, asociados con el tráfico de drogas y la pequeña delincuencia de calle; los latinoamericanos de rasgos amerindios —peruanos, bolivianos, ecuatorianos— son sistemáticamente expulsados de las parcelas de espacio público que convierten en lugares en los que jugar al fútbol, merendar o simplemente charlar con los paisanos. Los dominicanos son culpables de "hacer ruido" y escuchar la música demasiado alta. A los inmigrantes de procedencia china se les reprocha sus poco higiénicas conductas en el espacio público, sobre todo por su supuesta costumbre de escupir en el suelo y el supuesto monopolio que ejercen en algunos tipos de comercio. La presencia de europeos del Este incomoda por la asociación que el imaginario local establece entre ellos y las "mafias". En cambio, sería fácil poner de manifiesto cómo un grueso de comportamientos que deberían pasar como inaceptables desde los principios de urbanidad —orinar en la calle, impedir el sueño de los vecinos en las zonas de ocio, etc.— está protagonizado por jóvenes que ni son compendiados como problemáticos, ni por su radicalidad, ni como inmigrantes, a pesar de ser de otras nacionalidades. Sin que nunca aparezcan ni siquiera insinuadamente como responsables de sus actos, se trata con frecuencia de turistas nada marginales ni pobres y, sobre todo, de estudiantes erasmus o jóvenes licenciados que han acudido por miles a completar sutilmente el proceso de gentrificación del centro histórico y que permanecen en la ciudad durante uno o dos años para cursar todo tipo de cursos universitarios, másteres, posgrados o doctorados. Pertenecen a esa nueva clase social de lo que se conoce como *guiris*, término que se empleó inicialmente para designar a los turistas en general y que se concreta ahora en un sector de jóvenes endogámicos, que se mueve en ambientes de ocio

casi exclusivo y que conforma una sociedad paralela que, a pesar de la alta visibilización de sus conductas, nunca se hace objeto de consideraciones negativas sobre la "incivilidad"[268].

Todo ello se vuelve a combinar en el discurso oficial con lo que el alcalde Joan Clos llamó "fiestas ingobernables" (*La Vanguardia*, 14 de junio de 2006). Hace tiempo que los espacios festivos no son capaces de cumplir con la misión que se les tiene encomendada en Barcelona, que es la de constituirse en ámbitos felices de cohesión social. Y es que la fiesta continúa siendo en Barcelona lo que siempre ha sido: un territorio en el que la condición crónicamente problemática de la vida social encuentra una oportunidad para expresarse. Es en ese orden de cosas que conviene recordar cómo la ciudad ha vivido en los últimos años una creciente monitorización de las actividades públicas, que solo son autorizadas si son controlables policialmente y resultan política o económicamente rentables. Ese afán por controlar la actividad colectiva en la calle se ha traducido en acoso a todo lo que desborde los estrechos mapas mentales del Ayuntamiento. Los intentos oficiales por celebrar de manera "cívica" la Nochevieja han fracasado y, de hecho, hasta 2013 no se instauró una convocatoria patrocinada oficialmente, tal y como sucede en otras grandes ciudades, para seguir las doce campanadas del cambio de año, y entonces se hizo escogiendo como escenario, eso sí, la Avinguda Maria Cristina, en Montjuïc, lejos del centro. Los poderes municipales mantienen desde hace décadas un contencioso con un carnaval que se resiste a convertirse en una fiesta de diseño más y, de hecho, también han renunciado a mantener su celebración como acto festivo oficial. La noche de San Juan —una multitud innumerable agitándose en todas direcciones o acumulándose en las playas— ha acabado convirtiéndose en una pesadilla para las autoridades. Fiestas de barrio como las de Sants o Gràcia están siendo afrontadas como una cuestión de orden público, luego de disturbios, algunos tan graves como los de 2005, con el resultado de un joven muerto.

En ese campo la versión oficial suele mezclar interesadamente varias cuestiones. Por una parte, la del consumo masivo de alcohol, que no se ataja porque, en gran medida, depende de él la financiación de esas fiestas. Lo que ocurre es que después se acabará sosteniendo que los desmanes los han

provocado jóvenes borrachos de cerveza vendida por los "lateros" pakistaníes y no por la que les han servido los "buenos ciudadanos" que atendían las barras legales. En cuanto a la implicación de grupos alternativos, es un argumento perfecto para el hostigamiento policial contra la disidencia política radical. Igual no es casual que la asignación de culpa a movimientos sociales anticapitalistas en altercados como los mencionados de Gràcia en 2005 precediera en unos días a un informe en que los Mossos d'Esquadra daban cuenta de la localización en Barcelona de activistas entre cuyos "crímenes" figuraba la difusión de ideas anarquistas y antisistema. Entre los logros del "modelo Barcelona" debe figurar, sin duda, el de haber garantizado, también en materia de orden público, el continuismo con respecto de las políticas represivas del franquismo. Entre el aparatoso desalojo del Cine Princesa en el otoño de 1996 y finales de 2006 se produjeron en torno a 2.000 detenciones de motivación política en Barcelona, a cargo de unidades policiales directamente herederas de la Brigada Político-Social, ya fuera el Grupo VI de la Brigada de Información[269] o las Unidades de Intervención Policial de la Policía Nacional —800 detenidos en su historia en Barcelona —. A mediados de 2007, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña hacía públicas dos sentencias condenatorias contra el Departament d'Interior de la Generalitat por haber impedido el derecho de manifestación a los movimientos contrarios a la especulación urbanística. Todo ello —que conste — no es la consecuencia del declive del supuestamente ultrademocrático y participativo momento dorado del "modelo Barcelona", puesto que ese estilo de tratar la disidencia política ya tuvo la oportunidad de lucirse con la "operación Garzón", detención de 38 independentistas catalanes que "preparó" las Olimpiadas del 92 y que, como se sabe, acabó dirimiéndose en el Tribunal Internacional de Estrasburgo con varias acusaciones por torturas contra la Guardia Civil.

Un escandaloso caso de corrupción policial se produjo como consecuencia del desalojo de un edificio okupado —el Palau Alòs, en el barrio de Sant Pere — la noche del 4 de febrero de 2006, en el transcurso del cual un guardia urbano resultó herido de gravedad. Como resultado, diversos jóvenes fueron detenidos. A partir de ese momento todo fue un cúmulo de irregularidades, desde las torturas que denunciaron los arrestados hasta el juicio, en el que,

gracias a la desconsideración de ciertas pruebas y el falso testimonio de algunos policías que declararon, cuatro jóvenes ingresaron en prisión. Uno de ellos, Rodrigo Lanza, cumplió cinco años de cárcel y otra, Patricia Heras, de quien ya hemos hablado en el primer capítulo —y que insistió en que ni siquiera estaba en el lugar de los hechos—, se suicidó en abril de 2011 durante un permiso penitenciario[270]. Todo ello ocurrió cuando la coalición socialista-ecosocialista-comunista mandaba en la ciudad y sobre la Policía Municipal. En mayo de 2016, cuatro mossos d'esquadra fueron condenados por el homicidio de Juan Andrés Benítez, que murió como consecuencia de la paliza que le propinaron en una calle del Raval en octubre de tres años atrás.

Pero no debe engañarse, el llamado aumento del incivismo no es el resultado de un excesivo índice de libertad, sino todo lo contrario, de un aumento en los constreñimientos de una desconfianza frontal ante cualquier apropiación del espacio urbano no fiscalizable o que no rinda beneficios y de la hostilidad contra las puestas en escena de los descontentos que toda sociedad no puede dejar de producir. Por eso, es ingenuo suponer que la represión vaya a atenuar eso que para algunos es una especie de patología urbana. Es más, bien se puede prever el efecto inverso, mucho más en una ciudad como Barcelona, con su casi vernácula inclinación al desacato. Y está siendo así. Pocos meses después de la aprobación de la ordenanza municipal para disciplinar a la ciudadanía —en la primavera de 2006—, se conocieron las tres explosiones de violencia colectiva más importantes registradas en la ciudad en los últimos años. Dos de ellas, con motivo de victorias futbolísticas, al mismo tiempo que se decidía suprimir los actos en la Plaça de Sant Jaume en los que los poderosos solían ser obligados a hacer públicamente el ridículo en el balcón del Palau de la Generalitat. La otra, como consecuencia de una invitación a beber juntos a la intemperie, que acabó con el barrio del Raval poco menos que en llamas. Magnífica moraleja, por cierto: la férrea normativa contra el botellón no solo provocó unos gravísimos disturbios, sino que consiguió que en Barcelona se diera una práctica que apenas se había conocido en la ciudad hasta entonces.

A todo lo expuesto hasta aquí cabría añadir toda la retahíla de "impresentables" cuya presencia en la calle debe ser evitada o sometida a control. Las mismas autoridades que se manifiestan siempre complacientes

con la depredación capitalista de la ciudad se muestran inflexibles ante cualquier expresión externa de fealdad, pobreza o injusticia, o incluso de simple espontaneidad humana. Generadores de ruido o contaminadores visuales mil veces más dañinos que otros ven toleradas, protegidas e incluso subvencionadas sus prácticas desfiguradoras de la ciudad porque pagan impuestos o generan beneficios. En cambio, ninguna tolerancia no solo con las mujeres de las esquinas, los vagabundos, los inmigrantes, los mendigos, los "radicales"…, sino tampoco con los patinadores, los *skaters,* los ciclistas, los vendedores ambulantes, los músicos y los artistas callejeros, las estatuas vivientes…, cualquiera que sea sorprendido viviendo de o en la calle o que no cuente con los preceptivos permisos para ser libre. Todos ellos pasan a engrosar la lista de ciudadanos desviados o indignos hacia los que dirigir el malestar social y hacer culpables de los males que sufre la ciudad. Lógica punitiva sorprendente por parte de un Gobierno de izquierdas, que en lugar de erradicar la pobreza, la persigue. He ahí la evidencia: lo que se da en llamar incivismo no es otra cosa que la afloración de realidades sociales que se niegan a esconderse, al tiempo que confirmación de que el desorden social o la creatividad humana no han sido todavía derrotados por los convencionalismos de la "buena educación" burguesa.

El advenimiento del llamado cambio democrático abrió nuevas perspectivas —en Barcelona y en tantas otras ciudades— a una visión de la ciudad más preocupada por el bienestar de las mayorías sociales. El balance, treinta años después, señala que es cierto que las mejoras han sido ostensibles por lo que hace a la calidad de buen número de entornos. En cambio, la evidencia ha acabado advirtiendo también de que ciertas constricciones para el desarrollo de una ciudad verdaderamente abierta no procedían del régimen autoritario liquidado, sino de estructuras socioeconómicas intrínsecamente injustas, que han continuado generando un urbanismo adecuado a sus intereses. Si durante el franquismo estos intereses habían sido sobre todo los de la incorporación a las grandes dinámicas productivas y de mercado iniciadas en la posguerra europea, en el último tercio del siglo XX las orientaciones hegemónicas han tenido que ver con la globalización, con el consumo de masas espectacularizado, con las nuevas tecnologías y con una concepción de la ciudad como objeto de técnicas

comerciales. Y lo peor es que el movimiento asociativo que había nacido del combate contra los abusos de la dictadura fue quedando en gran medida desactivado, y no como la consecuencia de la represión política, sino de la capacidad estupefaciente de la nueva ciudad-espectáculo, ciudad-logotipo, ciudad-*spot* publicitario, ciudad-efectos especiales. Una ciudad trivializada que ha acabado por generalizar el conformismo acrítico de gran parte de ciudadanos. Esto ha permitido que la mayoría de grandes decisiones relativas a la ciudad se hayan tomado de espaldas a la opinión o contando con la indiferencia de sus usuarios y habitantes.

En el plano de las políticas urbanas y su correspondiente soporte legal, nunca han renunciado a su primacía los grandes promotores inmobiliarios, pocas veces se ha impuesto el beneficio social o la sostenibilidad sobre la especulación con el suelo o los materiales o, más allá y en general, sobre los propósitos de las castas económicas o políticas. A los grandes bloques de viviendas que atendieron las demandas de las masas inmigradas a la ciudad desde el campo, le vienen a sustituir ahora las grandes superficies comerciales, las exigencias de los nuevos mercados de servicios, la generalización de los suburbios de viviendas unifamiliares adosadas, la tematización de unos centros urbanos cada vez más despoblados, o las magnas realizaciones destinadas a la Cultura como nueva religión de Estado. Y todo ello acompañado de una creciente renuncia por parte de las administraciones municipales a las visiones globales —que no a las unitarias u homogeneizadoras, con las que no deberían confundirse— sobre la ciudad.

Ciertos problemas han acabado deviniendo crónicos para ciudades como Barcelona. Así, los déficits infraestructurales, el despotismo del vehículo privado, las dificultades en el acceso a la vivienda debidas a su elevado coste, la producción incontrolada y en aumento de residuos, las agresiones contra el medio ambiente, el abandono de los centros urbanos a favor de las nuevas periferias o su gentrificación, el excesivo consumo de suelo, la liberalización sin apenas trabas del mercado inmobiliario. Se han dispuesto nuevos festines para la especulación, como la privatización de grandes extensiones de suelo procedentes del Ministerio de Defensa o de la Renfe, por ejemplo. Muchas de las iniciativas urbanísticas han estado relacionadas con formas inéditas de conocimiento y de relación social: la telefonía móvil, el trabajo y el comercio

telemático a gran escala, las conductas de movilidad asociadas a nuevas pautas de ocio y de consumo, familias inéditas —monoparentales, unipersonales, no nucleares…— con sus correspondientes expresiones residenciales. Nuevas necesidades sociales, pero también nuevas vulnerabilidades, relativamente nuevos marcajes excluyentes —los inmigrantes, las minorías religiosas, los "radicales", los toxicómanos, los jóvenes…—, que se añaden a los ya conocidos —los ancianos, las mujeres, los niños, los enfermos, los miserables—. Por su lado, gran parte de la creatividad urbanística y arquitectónica desplegada a lo largo de los años ochenta en Barcelona —pero también en muchos otros sitios— fue colocada al servicio de la autocontemplación de las elites políticas y económicas, pero ni fue capaz de reclamar los logros de las etapas anteriores, ni supo asumir con radicalidad las posibilidades de un futuro de veras innovado. Por lo demás, la tendencia a disolver la distancia entre ocio, producción, consumo y residencia, la labilidad de las fronteras entre lo público y lo privado, la imposición de estructuraciones basadas en la movilidad y en la capacidad de aprovechar los flujos de información, han acabado provocando nuevas formas de discriminación al mismo tiempo social y espacial, en las que el precio, las posibilidades de conexión y los derechos de admisión son los nuevos criterios de selección y enclasamiento.

Hemos visto cómo Barcelona encarnó inmejorablemente las nuevas políticas municipales destinadas a promocionar identidades locales como un nuevo patriotismo urbano. De ahí no solo el "espíritu olímpico" barcelonés a principios de los noventa o su heredera, la ecúmene multicultural de la década siguiente, sino, antes, también las "movidas" que conocieron Madrid, Bilbao o Vigo a principios de los ochenta. Pero las puestas en escena de la identidad urbana han acabado procurando auténticas caricaturas, en que se han cultivado nuevos y viejos tópicos y se ha organizado para ellos el decorado adecuado.

Ya hemos visto cómo las grandes rehabilitaciones y las monumentalizaciones han servido para acercar muchas ciudades a la lógica de los parques temáticos, haciendo de ellas puros simulacros o, más bien, parodias de su supuesta idiosincrasia cultural o histórica, todo siempre pensando en un turismo que está siendo para muchas ciudades —Barcelona,

por ejemplo— un recurso estratégico y a veces único. La generación de lugares para una memoria artificial ha hecho, en realidad, casi irreconocibles a numerosas ciudades españolas, de las que con frecuencia solo han visto sobrevivir de su antigua singularidad elementos dispersos y desestructurados, ya reducidos a pura escenografía para visitantes y nuevos propietarios. Los edificios-esculturas firmados por grandes estrellas de la arquitectura internacional, y que toda ciudad que se precie debe poseer y exhibir, se despliegan arrogantes de espaldas a la realidad social que les circunda, como si esta no existiera, como si toda la función de las construcciones singulares fuera olvidar y hacer olvidar las condiciones de vida real de la gente real. A una voluntad acaso inicialmente sincera de servicio público se le ha acabado imponiendo la prioridad por generar pura mercadotecnia. A los pies de los volúmenes arquitectónicos singulares, a su alrededor, se extiende la ciudad indeseada, pero verdadera, la ciudad de los jóvenes sin posibilidades de adquirir una vivienda; la de las mujeres; las de los inmigrantes, los trabajadores hiperprecarios y los parados; la de la pobreza; la de la marginación. La ciudad utópica de los diseñadores estrella y los políticos se levanta ciega ante las miserias que cobija, sordomuda ante las exclusiones que genera sin parar.

Todo ello contrasta con la gran retórica en que se ha envuelto el "modelo Barcelona" desde su invención como marca comercial: la de la realización de una utopía urbana en que una imaginaria "sociedad civil" —sin clases, sin antagonismos, una congregación toda ella hecha de consenso y diálogo— se despliega como sociedad virtuosa, basada en la civilidad y el civismo. Fue para legitimar simbólicamente y en clave "social" la forma que adoptó en la capital catalana la apropiación capitalista de las ciudades, que se acuñó una modalidad moral de márketing urbano: el ciudadanismo, con su visión casi mística del espacio público —y la ciudad, toda ella, como su extensión—, a la manera de un territorio ideal de conciliación de los antagonismos presidido por la figura del ciudadano, un personaje hipotético que encarna la posibilidad imposible de una tregua entre segmentos sociales con intereses incompatibles, que aceptan olvidar sus contenciosos. Todo ello en nombre de un ámbito de coincidencia en que las viejas clases sociales se funden en pos de metas de convivencia compartidas, todo ello en nombre de valores

universales de igualdad, justicia y participación. Poco antes de aprobada la antes mencionada normativa cívica, y como parte de su fase de elaboración, se organizó un seminario en el CCCB, convocado por el Plan de Promoción del Civismo del Ayuntamiento, cuyo título fue "Civismo por la convivencia". A él fueron invitados a participar algunos de los más conspicuos representantes del ciudadanismo catalán: Manuel Castells, Jordi Borja, Marina Subirats, Josep M. Terricabras, Salvador Cardús, Victòria Camps… [271]. En aquel encuentro cada intervención estaba presidida por un gran término: "espacio público", "convivencia", "solidaridad", "civismo", "ética común" y otras palabras-sortilegio con que contribuir a la pacificación social, o, como escribe Pere López, "aplanar contradicciones y erradicar el antagonismo"[272]. Luego vinieron otros manuales de cómo apaciguar las ciudades lanzando "valores compartidos" sobre los potenciales descontentos[273]. Curiosamente —o no—, algunos de los teóricos de la "buena ciudadanía" —Jordi Borja, Joan Subirats, Zaida Muxí, Josep Maria Montaner…— acabaron constituyendo el aparato ideológico del Gobierno de Ada Colau, que asumiría la tarea de llevar hasta las últimas consecuencias en materia urbana un nuevo tipo de capitalismo: el capitalismo enrollado.

Un episodio podría servir como paradigma y al tiempo como cierre en forma de moraleja para esta exposición sobre los procesos de transformación que han convertido a Barcelona ciertamente en modelo, pero en modelo de cómo una ciudad se concibe solo como poder y como dinero, contra o de espaldas a los problemas más acuciantes de sus habitantes y a la perspectiva de elevar los niveles de justicia y libertad que se supone que deberían corresponder a un Gobierno que presume de progresista. Una mañana de octubre de 2006 el recién nombrado nuevo alcalde de la ciudad, Jordi Hereu, inauguraba solemnemente las nuevas instalaciones de la Universitat de Barcelona en el mismo núcleo del Raval donde se levantan el MACBA y el CCCB, dos de los grandes contenedores culturales de la ciudad. A la semana siguiente, a poca distancia, en el barrio de la Ribera, podíamos contemplar la pavorosa imagen de los antidisturbios de la Guardia Urbana protegiendo el arrancado por empleados municipales de las tomateras que los vecinos habían plantado en el Forat de la Vergonya, un solar a unos metros del mercado de Santa Catarina al que ya nos habíamos referido anteriormente, la

única zona realmente verde —y no gris— que había en todo el casco viejo de la ciudad.

La interpretación de tal coincidencia no es difícil. Ambos momentos representaban los episodios más recientes de una vieja dinámica de lo que los urbanistas llaman "esponjamiento" o "higienización" de Ciutat Vella, consistente en desenmarañarla y limpiarla, es decir, resolver los problemas de control que implicaba su tendencia a la opacidad y deshacerse de aquellos elementos tanto inmuebles como humanos que pudieran suponer un obstáculo para la apropiación del barrio por parte de clases medias y altas ansiosas de un baño de venerabilidad histórica, debidamente sazonada con elementos de ese nuevo sabor local que da el multiculturalismo e incluso de un moderado toque canalla. Para ello, se inyectaba saber, cultura y sano ambiente juvenil allí donde antes había solamente vida, prosiguiendo la campaña de deportación y borrado de pobres en marcha desde hacía años en el sector.

Lo sucedido en el Forat de la Vergonya fue bien ilustrativo de esa dinámica, a la que se asigna el eufemístico título de "rehabilitación". En aquel solar de 5.000 metros cuadrados el Ayuntamiento tenía previsto la apertura de un *parking* a disposición del "turismo cultural" que acude al área ya debidamente desinfectada de pobres del Carrer de Montcada y los alrededores del Museo Picasso, el Born y Santa María del Mar. Allí una enorme mutación urbanística había empezado a restaurar edificios para dedicarlos al comercio "de nivel", a la venta de *lofts* para profesionales con éxito o al alquiler de apartamentos para esa pequeña multitud de extranjeros con dinero que los están convirtiendo en residencias de vacaciones o de fin de semana.

La operación no cuajó como consecuencia de la resistencia de los habitantes, que hicieron suyo aquel espacio e hicieron de él un insólito vergel urbano autoconstruido. Jardín, huerto, zona de juegos infantiles, tarima para espectáculos, modestas canchas de fútbol y baloncesto, mobiliario…, todo había sido elaborado a mano por los vecinos, con unos parámetros estéticos a años luz de la afectación formal de los llamados "espacios públicos de calidad", cuya característica suele ser que parecen diseñados para ahuyentar a sus posibles usuarios. Allí se podía ver en todo momento a gente de todas las edades convirtiendo la plaza en un lugar de sociabilidad que, por otra

parte, representaba la encarnación del multiculturalismo real, no el de los prospectos oficiales, sino el que protagonizaban seres humanos de carne y hueso que encontraban por fin un lugar donde encontrarse. No en vano, el lugar había sido vindicado como la auténtica Plaza Mayor del barrio y así se propuso en el pregón de su fiesta mayor, unas semanas antes de su desalojo.

Pues bien, eso fue lo que las autoridades parecían incapaces de soportar: que se hubiera suscitado de forma espontánea todo un apasionante experimento de autogestión, un emocionante ejemplo de cómo los vecinos de un barrio podían generar sin permiso escenarios para su vida cotidiana, de espaldas a la insaciable voluntad municipal de monitorizarlo absolutamente todo y de solo tolerar las maneras de estar en el espacio urbano previamente homologadas por sus técnicos en ciudadanía y sus expertos en convivencia. No se podía tolerar un espacio público que fuera realmente público, es decir, del público. Esa imagen de niños jugando en parques que ellos no habían dispuesto, de abuelos charlando en bancos que ellos nunca instalarían en sus plazas, significaba el más inaceptable de los desacatos.

Por desgracia, tuvo que producirse un problema de orden público para que la sentencia de muerte contra el Forat de la Vergonya fuera recogida por los medios de comunicación. Las imágenes de jóvenes que disparan cohetes de feria contra la policía y profanasen el MACBA, lanzando bolsas de pintura contra su fachada, sirvieron para que los portavoces oficiales —todos— desfigurasen las vindicaciones vecinales y volvieran a agitar el fantasma del Okupa Feroz, con lo que, de paso, aprovechaban para continuar malignizando al movimiento que encabezaba una lucha de los jóvenes por el derecho a la vivienda que se estaba extendiendo en aquel momento y que acababa de conocer y continuaría conociendo grandes movilizaciones, la culminación de las cuales sería el 15-M.

Una vez más volvieron a ganar y a perder los de siempre. Pero así se escribe la historia. Como sincronizados, una solemne inauguración y un desalojo a la fuerza. Se levantaba un nuevo templo en el que el Saber y la Cultura oficiarían sus misterios, y, muy cerca, pero también muy lejos de allí, se desbarataba una ilusión colectiva forjada a ras de suelo. La Barcelona hecha poder y hecha dinero se había vuelto a salir con la suya y había conseguido derrotar —como siempre, solo por el momento e inútilmente— a

las sustancias básicas de las que toda vida urbana está formada y nunca olvida: el amor por la vida y la manía de desobedecer.

NOTAS

1. Como Bernat Muniesa, *Dictadura y transición. La España lampedusiana,* (Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, Barcelona, 2005). Inmejorable forma la anticipada en el subtítulo del libro para describir cómo la llamada transición democrática fue, en realidad, una transacción —como Muniesa sostiene—, cuyo objetivo fue precisamente el de reeditar el viejo principio enunciado por Lampedusa en su *Gatopardo*: "Hacer que todo cambie, para que no cambie nada".

2. Oriol Bohigas, *Plans i projectes per a Barcelona. 1981-1982,* Ayuntamiento de Barcelona, Barcelona, 1983, p. 12.

3. El documento del Plan Barcelona 2000, por cierto, es una prueba de hasta qué punto el concepto de "espacio público" —que no se menciona en ningún momento— es de implementación relativamente reciente en los discursos tanto políticos como urbanísticos.

4. *Barcelona año 2000. Estudio de ordenación urbana*, Ayuntamiento de Barcelona, Barcelona, 1970. No por casualidad, el proyecto en el que se resumirá la visión de futuro de la ciudad se presenta oficialmente por Pasqual Maragall en marzo de 1990 y se titula igual que el de Porcioles, *Barcelona 2000*, lo mismo que su publicación trimestral, que aparece entre 1988 y 1999.

5. *Cf.* Rosa Tello, "Barcelona post-olímpica: de ciudad industrial a escenario de consumo", *Estudios Geográficos*, Madrid, 212 (julio-septiembre de 1993), pp. 507-522.

6. *Cf.* Josep M. Vilanova, "La renovación del espacio residencial: estrategias y políticas de intervención en Barcelona", en Horacio Capel y Paul-André Linteau, *Barcelona-Montreal. Desarrollo urbano comparado,* Publicacions de la Universitat de Barcelona, Barcelona, 1998, pp. 450-470.

7. Sobre el asunto del Carmel y las responsabilidades que de él nunca se desprendieron, me remito a "El Carmel: política y economía de la irresponsabilidad", *Mientras tanto,* Barcelona, 23 (marzo de 2005). Disponible en http://www.ucmes/info/nomadas/mientrastanto/23.htm; visitado el 5/4/2007. También el libro de Laura García, *El Carmel, ferida oberta,* Mina, Barcelona, 2005.

8. En el verano de 2007 se hizo más evidente que nunca la distancia entre la imagen publicitada de la ciudad y la ciudad que padecían sus habitantes. Grandes apagones que se prolongaron varios días, atascos gigantescos en las autopistas, saturación del aeropuerto y constantes averías y retrasos

en la red ferroviaria de cercanías generaron la sensación de que Barcelona, al pie de la letra, había dejado de funcionar.

9. Véase la entrevista a Itziar González publicada en *El Periódico de Catalunya*, el 19 de febrero de 2014.

10. *Cf.* Saida Palou, *Barcelona, destinació turística: un segle d'imatges i promoció pública,* Vitel·la, Bellcaire d'Empordà, 2012, pp. 316-326.

11. En el libro de Arcadi Espada *Raval: del amor a los niños* (Anagrama, Barcelona, 2000) se describe la caza de brujas que se desencandenó tras el descubrimiento en el barrio de una presunta red de pederastia en 1997 y que sirvió para desarticular la Taula del Raval, la organización que con más decisión se estaba oponiendo a las intenciones especuladoras del Ayuntamiento. La película *De nens*, del desaparecido Joaquim Jordà (2003), llevó a la pantalla esta sórdida historia.

12. Citado por Ignasi Riera, "Porcioles 'ministro' de Franco en Barcelona", en *Los catalanes de Franco,* Plaza & Janés, Barcelona, 1999, p. 356. No se menciona el origen preciso de la referencia.

13. Horacio Capel, "La ciudad de los prodigios", *La Veu del Carrer,* 69 (septiembre-octubre de 2001), p. 11.

14. *CAU*, 21 (septiembre-octubre de 1973), con artículos de Manuel Campo Vidal, Josep María Huertas-Claveria, Eugeni Giral, Salvador Tarragó, Josep M. Alibes y Rafael Pradas. Esos materiales aparecerían luego en forma de libro: *La Barcelona de Porcioles*, Laia, Barcelona, 1974. Treinta años después, la revista *L'Avenç* reunía en una mesa redonda a los coautores del libro para hacer balance de lo transcurrido desde entonces: "La Barcelona de Porcioles", *L'Avenç,* Barcelona, 295 (octubre de 2004), pp. 28-38.

15. *CAU*, 10 (noviembre-diciembre de 1970). También este número aparecería luego como libro: Jordi Borja (ed.), *Gran Barcelona*, Alberto Corazón, Madrid, 1972.

16. Manuel de Solà-Morales, Joan Busquets, Miquel Domingo, Antoni Font y José Luis Gómez, *Barcelona: Remodelación capitalista o urbana o desarrollo urbano en el sector de la Ribera*, Gustavo Gili, Barcelona, 1974, y Salvador Tarragó, *En defensa de Barcelona*, Aedos, Barcelona, 1974.

17. Ignasi de Solà-Morales, *Eclecticismo y vanguardia. El caso de la Arquitectura Moderna en Catalunya,* Gustavo Gili, Barcelona, 1980, p. 209.

18. Francesc Martí y Eduard Moreno, *Barcelona, ¿a dónde vas?*, Dirosa, Barcelona, 1974, p. 15-16.

19. Carles Lladó Badia, *Barcelona, adéu*, edición del autor, Barcelona, 1971, pp. 84-88.

20. Una visión en perspectiva de la figura de José Maria de Porcioles y su época como alcalde de Barcelona la brinda Martí Marín i Corbera, *Porcioles. Catalanisme, clientelisme i franquisme*, Base, Barcelona, 2005. Todavía bajo la dictadura de Franco se editó en Francia el libro de Jesús Ynfante en el que inventariaba la trama de asuntos financieros turbios en que estaba mezclado el más representativo exponente del franquismo catalán, *Los negocios de Porcioles. Las sagradas familias de Barcelona*, Toulouse, Monipodio, 1974.

21. Manuel Vázquez Montalbán, "La limpieza étnica de los señoritos", *El País*, Barcelona, 14 de septiembre de 1993.

22. Citado en José M. de Porcioles, *Mis memorias*, Prensa Ibérica, Barcelona, 1994, p. 197.

23. Dolors Genovès, *Les Barcelones de Porcioles. Un abecedari*, Proa/TV3, Barcelona, 2005, pp. 91-95.

24. Oriol Bohigas, "Per un altre urbanitat", en Oriol Bohigas, Albert Puigdomenech, Josep Antoni Acebillo y Jaune Galofré, *Plans i projectes per Barcelona 1981/1982*, Ayuntamiento de Barcelona, Barcelona, 1983, p. 11.

25. Así los presenta Oriol Bohigas, que consideraba que los técnicos izquierdistas que concibieron el PGM eran "unos 'infiltrados', que pudieron actuar un poco gracias a las circunstancias del franquismo tardío" (Bohigas, *Plans i projectes*…, p. 12).

26. La sospecha estaba justificada por cuanto algunos de los profesionales a sus órdenes pertenecían a Bandera Roja, una organización comunista de orientación prochina que posteriormente, en 1974, se incorporaría al partido comunista catalán (PSUC).

27. Genovès, *Les Barcelones de Porcioles*…, p. 141.

28. Albert Serratosa, *Objetivos y metolodogía en un plan metropolitano*, Oikos-Tau, Barcelona, 1979, p. 44.

29. Genovès, *op. cit.,* p. 166-167.

30. Josep María Montaner, "La evolución del modelo Barcelona, 1977- 2004", en Jordi Borja y Zaida Muxí (eds.), *Urbanismo en el siglo XXI. Una visión crítica,* Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, 2004, pp. 203-231.

31. Ese es el criterio cronológico que organiza el volumen coordinado por Josep Maria Montaner, Fernando Álvarez, Zaida Muxí y Roser Casanovas (eds.), *Reader modelo Barcelona 1973-2013*, Comanera, Barcelona.

32. El propio Oriol Bohigas sería un ejemplo de ese despotismo ilustrado. En una publicación de 1969, escribía: "Nunca tanto como ahora y aquí hay que diseñar contra el gusto del público, para hacerlo, precisamente, a favor del público" (*Contra una arquitectura adjetivada*, Seix Barral, Barcelona, 1969, p. 69).

33. *Cf.* Jaume Barnada (coord.), *Àrees de nova centralitat*, Ayuntamiento de Barcelona, Barcelona, 1987.

34. Cuatro ejemplos de los que el responsable principal es Jordi Borja: *Manual de formación municipal*, Centre d'Estudis Urbans i Metropolitans, Barcelona, 1979; *Un año de ayuntamientos democráticos*, Secretaría de política municipal i moviment popular del PSUC, Barcelona/Madrid, 1980; *Manual de gestión municipal democrática*, Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1983, o, un poco más tarde, *Democracia local, descentralización del Estado, políticas económico-sociales en la ciudad y participación popular*, Diputación de Barcelona, Barcelona, 1988. Conviene notar que los contenidos de este tipo de materiales, con su énfasis en palabras como

"parcipacón", "transparencia", "gestión eficaz", "honradez", "democracia territorial", "descentralización", "derecho a la ciudad"…, anticipan lo que, décadas después, en Barcelona y en otras ciudades españolas, se presentaría como "nuevo municipalismo". Por ejemplo, Joan Subirats, *El poder de lo próximo. Las virtudes del municipalismo*, Icaria, Barcelona, 2016.

35. Por ejemplo, Oriol Bohigas, *Reconstrucció de Barcelona*, Edicions 62, Barcelona, 1986; Pasqual Maragall, *Refent Barcelona*, Planeta, Barcelona, 1988, y *Barcelona la ciutat retrobada*, Edicions 62, Barcelona, 1991; Joan Busquets, "Recuperación de Barcelona en los años ochenta", *Barcelona. Evolución urbanística de una ciudad compacta*, Mapfre, Barcelona, 1994, pp. 312-375, o Pep Subirós *et al., El vol de la fletxa. Barcelona 1992. Crònica de la reinvenció de la ciutat*, Electa/CCCB, Barcelona, 1996.

36. Jordi Borja, "Introducción", *Gran Barcelona*, p. 11.

37. Véase, por ejemplo, Jordi Borja (ed.), *Barcelona, un modelo de transformación urbana*, Programa de Gestión Urbana, Quito, 1995.

38. La crónica de aquella crisis aparece en Josep Maria Huertas Clavería y Marc Andreu, *Barcelona en lluita. El moviment urbà (1965-1997)*, FAVB, Barcelona, 1996, pp. 31-32. También en Miguel Domingo y María Fosa Bonet, *Barcelona i els moviments socials urbans*, Fundació Jaume Bofill, Barcelona, 1998, pp. 69-72.

39. Jordi Borja, *Luces y sombras del urbanismo de Barcelona*, UOC, Barcelona, 2010, p. 178.

40. Una expresión del grado de institucionalización —léase domesticación— de la FAVB en relación con los ayuntamientos de izquierda fue la celebración oficial de su 40 centenario en 2010. Significativo el catálogo de la exposición conmemorativa, que era una enumeración de las luchas vecinales bajo el franquismo, en la que, en cada una de ellas, aparecía una cronología de su desarrollo que en casi todos los casos concluía en un *happy end*, con la vindicación finalmente satisfecha por la consecuente intervención urbanística (Marc Andreu [coord.], *1970-2010. 40 anys d'acció veinal*, FAVB, Barcelona, 2010). Sobre la campaña contra los recibos del agua, cf. Joaquim Sempere, "La guerra del recibo del agua. Una movilización popular atípica en el área metropolitana de Barcelona, 1992-2002", *Revista Internacional de Sociología,* 38 (mayo-agosto de 2004), pp. 169-187.

41. Así lo hace, por ejemplo, Jordi Borja, que le reprocha a esa supuesta nueva etapa su renuncia al "urbanismo ciudadano y redistributivo que define el 'modelo Barcelona'" ("Barcelona y su urbanismo. Éxitos pasados, desafíos presentes, oportunidades futuras", en Borja y Muxí, *op. cit.*, *Urbanismo en el siglo XXI*, p. 178). En esa misma dirección de denuncia del agotamiento del "modelo Barcelona" por parte de quien fuera uno de sus ideólogos, véase el artículo del mismo Jordi Borja, "La seducción del lugar", *El País*, Barcelona, 19 de febrero de 2007. Por último, sobre el clima de desencanto de aquellos momentos en relación con Barcelona y las expectativas que despertó en su día, véase la entrevista con uno de los principales referentes internacionales en materia de teoría de la arquitectura, William J. R. Curtis, presentada con el titular "Barcelona ha entrado en decadencia", *El Periódico de Catalunya,* Barcelona, 20 de febrero de 2007.

42. Otro ejemplo de cómo se tipifican esas cuatro fases en Tim Marshall, "La glòria olímpica i més enllà", *L'Avenç,* Barcelona, 272 (septiembre de 2002), pp. 58-66.

43. Una excelente crónica etnográfica de lo que fue por dentro el Fórum de las Culturas la brindó Gerard Horta en su *L'espai clos. Fòrum 2004: Notes d'una travessia pel no-res*, Edicions de 1984, Barcelona, 2005. El título juega con la palabra catalana *clos*, "cerrado", y el nombre del alcalde socialista que auspició el evento, Joan Clos.

44. Un ejemplo de cómo se aplica esa normativa contra el ejercicio de la prostitución de calle en el Raval, en Livia Motterle, "Som un barri digne! Etnografia d'una prostitució indignada com fenomen de resistència urbana al Raval", *Revista d'Etnologia de Catalunya,* 41, 2016, pp. 239-242.

45. Esa modesta, pero heroica y al tiempo tierna vindicación vecinal fue liderada por la escritora Isabel Nuñez, desaparecida prematuramente en 2013, que escribió sobre aquella gesta —el árbol sigue en pie en su sitio— *La plaza del azufaifo*, Melusina, Barcelona, 2008, y que dedicaría otra obra a censurar el ansia especuladora que estaba destruyendo su ciudad: *Mis postales de Barcelona*, Triangle, Barcelona, 2012.

46. Un repaso de este tipo de actuaciones poco claras en las últimas décadas puede encontrarse en el número 100 de *La Veu del Carrer,* la publicación oficial de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, que apareció en febrero de 2007. En ella también se podrá encontrar una nómina bastante exhaustiva de los nombres de empresas, familias y personas que se habían beneficiado económicamente del "modelo Barcelona".

47. Para el caso del barrio de Sant Pere, véase el excelente trabajo de Pere López, *El centro histórico. Un lugar para el conflicto,* Publicacions de la Universitat de Barcelona, Barcelona, 1986.

48. Por ejemplo: Antonio Giménez Merino, "El pobre a la periferia. Especulación urbanística en la Barcelona actual", *Mientras tanto,* 58 (abril de 1994), Barcelona, pp. 67-73. También "Especulación en la Barcelona olímpica" y "La Barcelona olímpica", notas editoriales de los números 43 y 55 de la misma revista.

49. Véanse, por ejemplo, Pere López Sánchez, "1992, objectiu de tots? Ciutatempresa i dualitat social a la Barcelona olímpica", *Revista Catalana de Geografia,* Barcelona, 15 (junio de 1991), pp. 91-99; "Todos, mayoría y minorías en la Barcelona olímpica-empresa. Apuntes sobre el Gobierno de lo social en la ciudad-empresa", *Economía y sociedad,* Madrid, 9 (1993), pp. 103-115; Núria Benach, "Producción de imagen en la Barcelona del 92", *Estudios Geográficos,* Madrid, LIV/212 (julio-septiembre de 1993), pp. 483-505, y Rosa Tello, "Barcelona post-olímpica: de ciudad industrial a escenario de consumo", *Estudios Geográficos,* Madrid, 212 (julio-septiembre de 1993), pp. 507-522.

50. Josep María Montaner, "Barcelona y la propaganda", *El País,* Barcelona, 13 de junio de 1986, incluido en *Repensar Barcelona,* Ediciones UPC, Barcelona, 2003, pp. 31-32. Estas y otras referencias que aparecerán inmediatamente las he obtenido de la lectura del libro de Julià Guillamon, *La ciutat interrompuda* (Península, Barcelona, 2003), un exhaustivo trabajo de recopilación y análisis de las visiones intelectuales sobre Barcelona entre 1977 y 2000.

51. Esa misma sensación se expresa, con mayor rabia si cabe, en la compilación de textos breves de autores jóvenes —Javier Calvo, Roberto Juan-Cantavella, Llucia Ramis, Eloy Fernández Porta, Javier Blázquez…— escritos a la sombra de la Barcelona del Fórum 2004, titulada no en vano *Odio Barcelona*, Melusina, Barcelona, 2008.

52. Desde Michel Wieviorka, "Le marketing urbain", *Espaces et sociétés,* París, 16 (noviembre de 1975), pp. 109-123.

53. Beatriz García, "Urban Regeneration, Arts Programming and Major Events: Glasgow 1990; Sidney 2000 and Barcelona 2004", *Internacional Review of Cultural Policy,* X/1 (2004).

54. Citado por Miquel Fernández, *Matar al Chino. Entre la revolución urbanística y el asedio urbano en el barrio del Raval de Barcelona*, Virus, Barcelona, 2014, p. 128.

55. Josep Maria Montaner, "Viviendas, barrios y paisajes", *El País*, Barcelona, 23 de octubre de 2006.

56. Disponible en http://www.europapress.es/catalunya/noticia-barcelona-reformara-calle-pere-iv-priorizando-peatones-20151207131440.html; visitado el 5/12/16.

57. "Carta de medidas contra la violencia inmobiliaria y urbanística", en Taller contra la Violencia Inmobiliaria y Urbanística, *El cielo está enladrillado. Entre el mobbing y la violencia inmobiliaria,* Bellaterra, Barcelona, 2006, pp. 98-117.

58. Recuérdese que en las elecciones autonómicas de 2005 conquista la Generalitat una coalición de la izquierda institucional —socialistas, ecosocialistas, comunistas e independentistas catalanes— que ya gobernaba desde hacía años en las ciudades más importantes de Cataluña, incluyendo, por supuesto, Barcelona.

59. Suplemento "Propiedades", *El País,* Barcelona, 16 de febrero de 2007, p. 5.

60. Daniel García Andújar, "Nos echan de Barcelona". Disponible en http://www.danielandujar.org/2016/12/03/nos-echan-barcelona-ciudad-turistica/; visitado el 8/9/2017.

61. Un magnífico trabajo levantó acta del proceso: el de Stefano Portelli, *La ciudad horizontal. Urbanismo y resistencia en un barrio de casas baratas de Barcelona*, Bellaterra, Barcelona, 2014.

62. Aludo al título de un artículo de Marina Subirats en un monográfico dedicado a la nueva estructura social barcelonesa ("Profesionales y técnicos, 'nuevos señores' de la sociedad catalana", *Barcelona metròpolis mediterrània,* Barcelona, 7 [primavera de 1988], pp. 89-95).

63. Una novela ficciona sobre esa especie de proceso de expansión de Gracia como barrio "creativo" hacia Vallcarca. Se trata de *Emet o la rebelión*, de Sebastià Giovani (Duomo, Barcelona, 2012). Sobre la destrucción "creativa" de Vallcarca, me remito a Marco Luca Stanchieri, "Uso del espacio, conflicto y reproducción social en el barrio de Vallcarca", en Martin Lundsteen *et al.* (eds.), *Reproducción social y conflicto en las periferias urbanas del estado español*, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 2014, pp. 172-195.

64. Manuel de Solà-Morales *et al.*, *Barcelona: Remodelación capitalista…* y Salvador Tarragó, *En defensa de Barcelona*, Aedos, Barcelona, 1978.

65. Muna Makhlouf, "Movimientos vecinales y transformaciones urbanísticas. Una aproximación etnográfica al caso de la Barceloneta, Barcelona", en Giuseppe Aricó y Marco Stanchieri (eds.), *Mierda de Ciudad. Una rearticulación crítica del urbanismo neoliberal desde las ciencias sociales,*

Pol·len, Barcelona, 2015, pp. 154-167; Marc Trias Ginert, *Com i per a qui es dissenya la ciutat. Paricipació i seguredat a la Marina Port Vell*, Icaria, Barcelona, 2016.

66. Jorge Cañas, "Vulnerabilidad social y rehabilitación de la vivienda en el barrio de El Besòs de Barcelona", en Socorro Pérez y Rosa Tello (eds.), *¿Derecho a la vivienda?: miradas críticas a las políticas de vivienda*, Bellaterra, Barcelona, 2012.

67. José Mansilla, "El triunfo de las clases medias. Dialéctica entre cambio social y urbanismo en el Poblenou, Barcelona", *Revista de Antropología Experimental*, 15 (2015). Disponible en http://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/rae/article/view/2384; visitado el 21/1/2017.

68. Giuseppe Aricó, "La vida en 'Venus'. Gentrificación, conflicto y reproducción social en el barrio de La Mina, Barcelona", en Martin Lundsteen *et al*. (eds.), *Reproducción social y conflicto en las periferias urbanas del estado español*, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 2014, pp. 15-39; "La pacificación de la periferia: conflictividad social, regeneración urbanística y esterilización de lo urbano en el barrio de La Mina, Barcelona", en Neiva Viera da Cunha (ed.), *Antropologia do conflito urbano: nexões Rio—Barcelona,* Lamparina Editora, Rio de Janeiro, 2015, pp. 182-193.

69. María Gabriela Navas, "Crónicas de una degeneración inducida: de la aniquilación de la antigua Icària a la seguritización de la Vila Olímpica de Barcelona". *Jornadas Científicas COAC-ETSAB*, Departament de Projectes Arquitectònics de la UPC. Barcelona, 2014.

70. Josep Maria Montaner, "Besòs: tierra prometida", en *Repensar Barcelona*, Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona, 2003 [1997], pp. 120-121.

71. Véase el artículo de Josep Maria Montaner, "Besòs, la gran oportunidad metropolitana", *El País,* Barcelona, 19 de febrero de 2016.

72. Marc Dalmau, "La colònia Castells: un barri al corredor de la mort". *Quaderns-e de l'Institut Català d'Antropologia*, 15 (2010). Disponible en http://www.antropologia.cat/quaderns-e-149

73. La población de Barcelona no hizo sino descender entre 1980 y 1995, periodo en el que la ciudad perdió casi un cuarto de millón de habitantes. Posteriormente, solo la llegada de extranjeros —el 16 por ciento en 2014— ha permitido invertir la tendencia, sin que ello implique que los barceloneses de nacimiento hayan dejado de mudarse a la periferia, cada vez más expulsados por el encarecimiento de los alquileres y la vivienda de primera mano, que alcanzaría sus niveles máximos en 2017.

74. Cabe destacar tres libros excelentes sobre la cuestión: Nadja Monnet, *La formación del espacio público. Una mirada etnológica sobre el Casc Antic de Barcelona,* Los Libros de la Catarata, Madrid, 2002; Mikel Aramburu, *Los otros y nosotros. Imágenes del inmigrante en Ciutat Vella de Barcelona,* Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid, 2002, y Gerard Horta, *Rambla del Raval. De apropiaciones viandantes y procesos sociales*, Montesinos, Barcelona, 2010.

75. En efecto, casi todas las muestras supuestamente emblemáticas del gótico en el Barri Gòtic son neogóticas del siglo XIX y XX —algunas, de sus años sesenta— o adulteraciones de edificios rescatados de las destrucciones provocadas por la apertura de la Via Laietana. Véase al respecto el completo inventario del falso gótico del Gòtic de Agustín Cócola Gant, *El Barrio Gótico de*

Barcelona : planificación del pasado e imagen de marca, Madroño, Barcelona, 2011.

76. La historia de los intentos de destrucción de la zona de Barcelona hoy conocida como el Raval aparece inmejorablemente descrita en el ya citado libro de Miquel Fernández, *Matar al Chino.*

77. Un ejemplo: la historia del hoy ya desaparecido Bar Amistad, en el Carrer d'en Robardor, narrado por Eva Sirvent y Jordi Carreras, *Dones del carrer. Canvi urbanístic i treball social a Barcelona, 2005-2009*, IPEC. Departament de Cultura, Barcelona, 2012.

78. La propiedad de Focivesa correspondía, en 2007, en un 57 por ciento al Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona. El resto se lo distribuyen La Caixa, Caixa de Catalunya, BBVA, SABA y Telefónica.

79. Sobre el divergente destino que han experimentado algunas de estas intervenciones que ha sufrido el Raval, véase el estudio comparativo de Francesc Magrinyà, "Hacia una relectura de los espacios públicos desde la posmodernidad. El ejemplo del Raval en Barcelona", en Ramón Parramón (ed.), *Idensitat. Proyectos de intervención crítica e interacción social en el espacio público,* Instituto de la Juventud, Madrid, 2003, pp. 229-241.

80. *Cf.* Gary McDonogh, "Discourse of the City. Policy and Response in Post-Transitional Barcelona", en Setha M. Low (ed.), *Theorizing the City. The New Urban Anthropology Reader*, Rutgers University Press, Londres, 1999, pp. 342-376; Joan Guillamon, "La geografia del risc i la ciutat", en Horacio Capel (ed.), *Habitatge i conflicte a la ciutat catalana*, Ayuntamiento de Tàrrega, Tàrrega, 1996, pp. 59-70, y Paulo José Da Silva, "Raval en (des)construcción. La importancia de las imágenes periodísticas en la comprensión de un plano urbanístico: la Rambla del Raval", en Joan Josep Pujadas, Manuel Delgado y Teresa Tapada, *Espacio, tiempo y entorno en contextos urbanos. Actas del IX Congreso de Antropología. Barcelona 2002,* Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español/Institut Català d'Antropologia, Barcelona, 2003.

81. Gary McDonogh, "The Geography of the Evil: Barcelona's Barrio Chino", *Anthropological Quaterly*, LX/4, pp. 174-185. No hay que olvidar que esta percepción del Chino como barrio literalmente poseído por una presencia diabólica podía resultar del todo explícita. Pensemos si no, como colofón de la imaginación literaria y cinematográfica de sus bajos fondos, en la Barcelona inquietante y maligna que nos dibujaba George Bataille en *Le bleu du ciel,* habitada y permanentemente recorrida por potencias extrañas, malvadas y al mismo tiempo fascinantes, punto de destino del Maligno en persona. Sobre la generación de esa imagen de la Barcelona canalla en la literatura europea de los años veinte y treinta del siglo pasado —Montherland, Mac Orlan, Kesel, Genet, Mandiargues Simon…—, vinculada directamente a la naturaleza portuaria de la ciudad y emparentada con otros escenarios parecidos —Marsella, Nápoles…—, véase el artículo de Jordi Castellanos, "Barcelona, las tres caras del espejo", *Revista de Filología Románica,* Barcelona, vol. 2 (2002), pp. 189-202.

82. La película *En construcción*, dirigida por José Luis Guerín (2000), recoge diversas expresiones de esa decepción de los nuevos vecinos que llegaron ávidos de "sabor de barrio".

83. Por cierto, a principios de la década de los ochenta la Filmoteca fue literalmente expulsada del Carrer de la Cera, en pleno asentamiento gitano del barrio, para ser trasladada a la Travessera de Gràcia, en el barrio de Sant Gervasi-Galvany. Este cambio respondió a la convicción de sus nuevos

administradores —el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que había asumido competencias en cinematografía— de que aquella ubicación era indigna de una instalación cultural de nivel. Un cuarto de siglo después, regresará a unos metros de donde estuvo, una vez debidamente higienizada la zona y como contribución a la tarea de su "elevación moral".

84. Sobre las arbitrariedades de la actuación en la Illa Robador, véase Coordinadora contra l'especulació del Raval, "Robador 29, entre la espada y los tiburones", en *Taller contra la Violencia Inmobiliaria y Urbanística,* pp. 98-117.

85. Monica Degen, "Sensing regenerated public life in Castlefield, Manchester and El Raval, Barcelona. A comparison", en Pujadas, Delgado y Tapada (coords.), *Espacio, tiempo y entorno…*, y Gaspar Maza, Gary McDonogh y Joan Josep Pujadas, "Barcelona, ciutat oberta: transformacions urbanes, participació ciutadana i cultures de control al barri del Raval", *Revista d'Etnologia de Catalunya*, Barcelona, 21 (noviembre de 2002), pp. 114-131.

86. Carles Col, "Sant Antoni: Abre el mercado; se van los vecinos", *El Periódico de Catalunya*, 28 de octubre de 2016. Disponible en http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/sant-antoni-abre-mercado-van-los-vecinos-5710608; visitado el 8/9/2017.

87. *Cf.* Francesc Magrinyà y Gaspar Maza, "Inmigración y huecos en el centro histórico de Barcelona (1986-2000)", en Manuel Delgado (ed.), *Cultura e inmigración,* CCCB, Barcelona, 2003, pp. 170-200.

88. Esa es la tesis que desde la sociología urbana marxista defendió en su día Manuel Castells (*cf.* el capítulo 2 de *Problemas de investigación en sociología urbana,* Siglo XXI, Madrid, 1971, pp. 15-72).

89. Louis Wirth, "El urbanismo como forma de vida" (1938), en Mercedes Fernández Martorell (ed.), *Leer la ciudad,* Icaria, Barcelona, 1988, p. 45.

90. Ibídem, p. 41.

91. Colette Pétonnet, "Variations sur le bruit sourd d'un mouvement continu", en Jacques Gutwirth y Colette Pétonnet (dirs.), *Chemins de la ville. Enquêtes ethnologiques,* Editions du CTHS, París, 1987, p. 248.

92. Castells, *op. cit.*, p. 169.

93. Jordi Borja, "Cataluña y Barcelona", en *Estado y ciudad,* PPU, Barcelona, 1988, p. 342. El autor sitúa la redacción del texto original en 1982, "cuando no se había producido el relanzamiento de la Barcelona actual".

94. En el marco de las políticas urbanísticas de Joan Antoni Solans, Josep A. Acebillo y Oriol Bohigas, Barcelona se ha convertido, en efecto, en una tierra de promisión para los arquitectos de vanguardia, tanto extranjeros —Pei, Foster, Gehry, Merier, Gae Aulenti, Isozaki…—, como españoles y catalanes —Piñón, Viaplana, Peña Ganchelli, Bofill, Calatrava, Moneo, Domènec, Ignasi y Manuel Solà-Morales, Clotet, Tusquets—. Una novela de éxito reflejó lúcidamente ese protagonismo de los arquitectos en los últimos años de desarrollo urbano en Barcelona: Llatzer Moix, *La ciudad de los arquitectos,* Barcelona, Anagrama, 1992. Para los precedentes históricos de esa alianza entre políticos y arquitectos urbanos, me remito a Helio Piñón, *Nacionalisme i modenitat*

en l'arquitectura catalana contemporània, Edicions 62, Barcelona, 1980.

95. No es casual que las autoridades municipales bautizaran con el nombre de Nova Icària el barrio residencial construido con motivo de las Olimpiadas de 1992. Con ello recordaban que los terrenos sobre los que se levantaba el nuevo barrio habían sido los que los seguidores catalanes de Cabet eligieran para su falansterio. Por supuesto que las posturas críticas con respecto de la política municipal han enfatizado la impostura que supone confundir el proyecto de comunismo utópico inspirado por Cabet en Barcelona con lo que ha resultado ser en realidad lo que Eduard Moreno y Manuel Vázquez Montalbán definían como una "nueva Copacabana para postales de turistas" (*Barcelona, cap a on vas?,* Llibres de l'Index, Barcelona, 1991, p. 101).

96. Se trata, al fin, de trasladar lo que significó la Mancomunitat impulsada por Prat de la Riba en los años veinte para la construcción simbólica de la idea nacional de Cataluña al campo contemporáneo de la elaboración de una idea de nacionalidad específicamente urbana. A este respecto, Bohigas declaraba: "Lo más urgente es reducir la cultura escenográfica y finalista, los festivales, los conciertos, las representaciones, y volver atrás para crear las grandes instituciones" (*El País,* Madrid, 16 de abril de 1993; sobre este mismo asunto, véase el artículo del mismo Bohigas, "Catalunya será un programa cultural o no será", *El País*, Barcelona, 9 de julio de 1992).

97. *Cf.* Teresa Camps, "Del monument a l'ornament: materials i consideracions", en Martí Peran, Alicia Suàrez y Mercè Vidal (eds.), *Noucentisme i Ciutat,* Electa, Madrid, 2000, pp. 89-102; Josep María Bou, "Cúpules i tràmvies. La Barcelona del noucentisme i l'avanguartda", *Barcelona metròpolis mediterrània,* Barcelona, 23 (otoño de 1993). De manera bien elocuente, Ferran Mascarell, glosando la inauguración del Museo Nacional d'Art de Catalunya en la montaña de Montjuïc, titulaba un artículo suyo "El noucentisme, culminado", *El Período de Catalunya,* 6 de enero de 2005; incluido en *La cultura en la era de la incertidumbre,* Roca, Barcelona, 2005, pp. 266-268.

98. La imagen "Barcelona, ciudad mediterránea" —ese es el título de la revista de cultura que publica el Ayuntamiento barcelonés— y las constantes apelaciones a la reconciliación de Barcelona con su mar fueron argumentos reiterados y centrales en las grandes reformas urbanísticas iniciadas por los ayuntamientos posteriores a las elecciones de 1979. Pero las consignas publicitarias basadas en la "recuperación del mar" habían sido acuñadas durante la dictadura. El subtítulo del folleto en que se publicitaba lo que sería el Plan de la Ribera —anticipo de la actual refuncionalización del litoral barcelonés— era: *Barcelona. Una ciudad que no puede seguir viviendo de espaldas al mar.*

99. Pep Subirós, "El vol de la fletxa", en Subirós *et al., El vol de la fletxa,* p. 65.

100. Oriol Bohigas, *Reconstrucció de Barcelona,* p. 30.

101. La intercambiabilidad entre las esferas arquitecturales y festivas puede quedar perfectamente explicitada. Así, uno de los arquitectos más críticos con respecto a las realizaciones de la Nueva Barcelona, Xavier Monteys, se refería a los nuevos edificios de Barcelona en su conjunto como un auténtico "baile de disfraces" ("Projecte: Barcelona", *Avui,* Barcelona, 13 de febrero de 1994).

102. Una dinámica esta que ha producido todo tipo de fórmulas festivas de nuevo cuño, algunas incluso envueltas en un *look* "ancestral". Como el *correfoc* de Barcelona, inventado en 1979 por los gabinetes de diseño de fiestas del Ayuntamiento y que ya se ha generalizado por toda Cataluña como

una de las más genuinas expresiones de "cultura popular y tradicional" del país.

103. Sobre el combate municipal contra ciertos aspectos de la Noche de San Juan en Barcelona, especialmente contra los relacionados con la cultura infantil de calle, véase Marta Contijoch, "Cuando la calle era nuestra. Acuartelamiento de la infancia y desaparición de la cultura infantil de calle", en Giuseppe Aricó, José A. Mansilla y Marco Luca Stanchieri (eds.), *Barrios corsarios. Memoria histórica, luchas urbanas y cambio social en los márgenes de la ciudad neoliberal,* Pol·len, Barcelona, 2016, pp. 101-116.

104. Temma Kaplan, *Ciudad roja, periodo azul. Movimientos sociales en la Barcelona de Picasso,* University of California Press, Berkeley, 2003.

105. Stéphane Michonneau, *Barcelona: memoria e identidad,* Vic, Eumo, 2002.

106. Eugenio Trías, *La Catalunya ciutat i altres assaigs,* L'Avenç, Barcelona, 1984.

107. Miguel de Unamuno, "Sobre el problema catalán: oposición de culturas", *El Mundo*, Madrid, 13 de febrero de 1908 (*Meditaciones y ensayos espirituales,* volumen VII de *Obras Completas*, Escelicer, Madrid, 1967, p. 454).

108. Eugeni d'Ors, "Entre les runes de Civilitat", *La Veu de Catalunya,* Barcelona, 24 de enero de 1907 (*Glossari,* Edicions 62/La Caixa, Barcelona, 1982, p. 41).

109. Joan Maragall, "¡Ah, Barcelona!", *La Veu de Catalunya,* Barcelona, 1 de octubre de 1909 (*Elogi de la paraula i altres assaigs,* Edicions 62/La Caixa, Barcelona, 1978, p. 246).

110. Pasqual Maragall, *Refent Barcelona,* Planeta, Barcelona, 1986, p. 119. O, planteado como lo hacía Ferran Mascarell: "Yo defiendo por encima de todo una cultura entendida esencialmente como intercambio y no como identidad histórico-antropológica". En la mesa redonda "Ciudad taller Ciudad escaparate", en *Ajoblanco,* Barcelona (abril de 1991), pp. 65-73.

111. Pasqual Maragall, *Refent Barcelona,* p. 120.

112. Hay que destacar cómo una cierta tradición historiográfica —Pierre Vilar, Manuel Arranz, Jordi Maluquer, Joaquim Albareda, entre otros— fue recuperada para justificar con argumentos históricos esa vocación por hacer de Barcelona la esencia de la catalanidad, frente a las postulaciones ruralizantes del romanticismo nacionalista todavía bien activo. Una síntesis de tales enfoques la brindó Joaquim Nadal en una conferencia conmemorativa de la fiesta nacional catalana —el Once de Septiembre— en el Ayuntamiento de Barcelona, publicada después en forma de artículo en *El País* ("Barcelona després del combat", Barcelona, 17 de septiembre de 1992). Nadal era en aquel momento también alcalde de Girona, otra más de las ciudades catalanas bajo gobierno socialista que están siguiendo las prefiguraciones de Barcelona en materia de construcción de una identidad urbano-nacional de nuevo cuño.

113. Pep Subirós, "Notas para una teoría de Barcelona", *Revista de Occidente*, 97 (julio de 1989), p. 106.

114. Una curiosa anécdota dio cuenta de cómo se procuró en su momento que la ciudadanía comprendiera e hiciera suya esa idea de "tercera vía" nacionalista, cuya capacidad de sugestión

reside en gran medida en que nunca se presenta como tal. Durante las Olimpiadas de 1992 la Generalitat llamó a los ciudadanos a colocar *senyeres* —banderas catalanas— en los balcones, consigna que fue seguida por una parte importante de los vecindarios. Tímidamente, una exigua minoría instaló, como respuesta, banderas españolas. Al poco, el Ayuntamiento inició una campaña de distribución de banderas de Barcelona, lo que concitó que una masa importante de barceloneses tomara partido por una alternativa que resolvía en el plano simbólico el crónico contencioso entre catalanistas y españolistas, en favor de una tercera opción que, en el fondo, no dejaba de ser una variable —bien podríamos decir que una modernización o incluso una posmodernización— de lo que las otras representaban. Disponible en http://www.ara.cat/opinio/Barcelona-Catalunya-nou_0_1408659146.html; visitado el 24/2/2017.

115. Véase el capítulo "La ciutat de Barelona, capital de Catalunya i el model dual d'Espanya", en Pasqual Maragall, *Barcelona retrobada*, pp. 123-128.

116. *Cf.* Donald McNeill, "Battles for Barcelona", en *Urban Chenge and the European Left Tales from the New Barcelona*, Routledge, Londres/Nueva York, 1999, pp. 55-81.

117. Que la asunción del poder municipal por parte de Ada Colau, en el contexto de la efervescencia independentista en aquel momento, suponía el restablecimiento de la "cuestión barcelonesa" en Cataluña o, si se prefiere, la "cuestión catalana" para Barcelona, era explicitada por uno de los hombres que sirven de nexo entre el maragallismo y Barcelona en Comú, el geógrafo Oriol Nel·lo. Véase su artículo "Barcelona i Catalunya, de nou", publicado en *Ara*, el 7 de agosto de 2015. Tampoco es casual que Oriol Nel·lo se haya mantenido como el principal vindicador de la Cataluña-ciudad retomada de Gabriel Alomar y el noucentismo. Véase la entrevista que publicó *El Diario* el 27 de febrero de 2015. Disponible en http://www.eldiario.es/catalunya/Oriol-Nello-catala nismo-conservador-Barcelona_0_361164899.html; visitado el 27/2/2016.

118. Trías, *La Catalunya ciutat*…, p. 17.

119. Amos Rapoport, *Aspectos humanos de la forma urbana,* Gustavo Gili, Barcelona, 1978, p. 61.

120. Amos Rapoport, *op. cit*., p. 53.

121. Ibídem, p. 288.

122. Ibídem, p. 287.

123. Kevin Lynch, *La buena forma de la ciudad,* Gustavo Gili, Barcelona, 1980, p. 108.

124. Kevin Lynch, "La ciudad como medio ambiente", en Scientific American, *La ciudad,* Alianza, Madrid, 1982 [1965], pp. 248-249.

125. Oriol Bohigas, *Proceso y erótica del diseño,* La Gaya Ciencia, Barcelona, 1978, pp. 149-150.

126. Robert Venturi, Steven Izenour y Denis Scott Brown, *Aprendiendo de Las Vegas,* Gustavo Gili, Barcelona, 2016, pp. 167-168.

127. Paolo Portoghesi, *Después de la arquitectura moderna,* Gustavo Gili, Barcelona, 1984, p. 192.

128. Claude Lévi-Strauss, *El pensament salvatge,* Edicions 62, Barcelona, 1973, pp. 244-246.

129. *Cf.* Jean Baudrillard, *El sistema de los objetos,* Siglo XXI, México DF, 2010, pp. 83-97.

130. Oriol Bohigas, *Polèmica d'arquitectura catalana,* Edicions 62, Barcelona, 1970, p. 24.

131. Óscar Tusquets y Oriol Bohigas, *Diàlegs a Barcelona*, Ayuntamiento de Barcelona, Barcelona, 1986, p. 38.

132. "Se usa disonancia estructural para indicar una situación en la que los productos de las unidades de acción no tienden a reforzar un mismo proceso adquisitivo que es central para el sistema" (Raúl A. Hernández y Raquel García Mochkofsky, *Teoría del entorno humano,* Nueva Visión, Buenos Aires, 1977, p. 89).

133. Oriol Bohigas, *Proceso y erótica del diseño,* La Gaya Ciencia, Barcelona, 1978, pp. 149-150.

134. Ibídem, p. 20.

135. Ibídem, p. 148.

136. Ibídem, p. 157.

137. Josep María Montaner, "El arte en la calle", *El País,* Madrid, 23 de noviembre de 1991.

138. Kevin Lynch, *La buena forma de la ciudad*, p. 108.

139. Como se ve, he trasladado aquí al plano de las eficacias simbólicas lo escrito por Jean-Paul de Gaudemar en el capítulo "La ciudad tomada" de su obra *La movilización general,* La Piqueta, Madrid, 1981, pp. 231-249.

140. Juan de la Haba, "La ciudad y sus metáforas. Formulación ideológica y procesos de reestructuración urbana en la Barcelona contemporánea", *Astrágalo,* septiembre de 1999, pp. LVIII-LIX.

141. Eric J. Hobsbawm y Terence O. Ranger (eds.), *L'invent de la tradició,* Eumo, Vic, 1993.

142. Ernest Gellner ha reclamado para esta intuición de Renan la importancia que merece en el análisis de los actuales procesos de construcción de las identidades nacionales (*cf.* "El nacionalismo y las dos formas de cohesión en sociedades complejas", en *Cultura, identidad y política. El nacionalismo y los nuevos cambios sociales*, Gedisa, Barcelona, 2003, pp. 17-39).

143. La polémica en torno a las llamadas "plazas duras" en Barcelona podría ser un ejemplo de ello. Muchos vecinos consideraron inaceptable que los parques y plazas de hormigón con que se dotaba a sus barrios estuvieran carentes casi de espacios verdes y en muchos casos hasta de bancos para sentarse. La actitud autoritaria ante este tipo de resistencias ha sido una constante. Así: "Con el problema entre la opinión pública y la autoría personalizada, hay que tener el coraje de enfrentarse. No hay que pensar que lo que dice el pueblo está necesariamente bien, ni que los conocimientos técnicos pueden estar al alcance general" (Tusquets y Bohigas, *Diàlegs a Barcelona*, p. 38). O, citando a Eco: "Es más fácil para las masas usuarias vivir dentro de la mala arquitectura que dentro

de la buena" (Oriol Bohigas, *Polèmica d'arquitectura catalana,* Edicions 62, Barcelona, 1970, p. 24).

144. Ezio Bonfanti, " 'Funzionalismo' e 'Monumentalità' ", *Controspazio,* Roma (mayo- junio de 1972). Citado en Bohigas, *Proceso y erótica…*, p. 159.

145. Henri Lefebvre, *La production de l'espace social,* Anthropos, París, 1971, p. 32.

146. Gilles Deleuze y Félix Guattari, "City/State", *Zone 1/2*, París, 1986, pp. 195-197.

147. *Cf.* Josep María Montaner, "Maquinista: amnesia y consumo", *El País,* Barcelona, 10 de julio de 2000, incluido en *Repensar Barcelona*, pp. 157- 158. También su artículo "Memoria metropolitana", *El País,* Barcelona, 21 de febrero de 2003.

148. Más casos en la completa obra de Octavi Aleixandre, *Catàleg de la destrucció del patrimoni arquitectònic històrico-artístic del centre històric de Barcelona*, Veïns en Defensa de la Barcelona Vella/Estudiants del Patrimoni, Barcelona, 2000.

149. La destrucción del patrimonio urbanístico y arquitectónico, pero también social, en Barcelona es uno de los asuntos centrales en la valiosa crítica que Horacio Capel hacía del "modelo Barcelona". Me remito a ella como una variante —acaso más plausible por menos vehemente— del tipo de perspectiva crítica que aquí se adopta. Horacio Capel, *Un análisis crítico del modelo Barcelona,* Serbal, Barcelona, 2005. Como complemento y actualización, véase también "De nuevo el debate sobre Barcelona y el urbanismo barcelonés", *Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales*, XI/629 (2006). Disponible en http://www.ub.es/geocrit/b3w-629.htm#_edn14

150. Un relato exhaustivo del preocupante futuro del patrimonio industrial en Barcelona en Martí Checa, Xavier Basiana y Jaume Orpinell, *Barcelona, ciutat de fàbriques,* Nau Ivanow, Barcelona, 2000.

151. Juan José Lahuerta, *Destrucción de Barcelona*, Mudito & Co., Barcelona, 2004.

152. *Cf.* Magrinyà y Maza, "Tinglados de Bar-cel-ona", *op. cit.* Antes de empezar las obras de remodelado del litoral barcelonés, bien cerca de lo que sería la playa de la Mar Bella, en el Poblenou, se pudieron apreciar restos de un navío que estaban esparcidos ofreciendo el cuadro de lo que había sido un naufragio o un *embarrancament.* Una quilla, un *respirall,* una parte de un puente. Después, estos restos acabaron presidiendo una de las zonas ajardinadas del sector. Claro está que todo estaba dispuesto a fin de que se tuviera la percepción de que aquello era una de las pruebas del pasado marinero e incluso épico de aquella parte del litoral. En realidad era un fraude, la preparación tramposa de un escenario de cartón-piedra para la memoria de hechos que nunca habían tenido lugar. La chatarra había sido trasladada deliberadamente desde el puerto y correspondía a un barco liberiano destinado al desguace. Sobre la falacia según la cual Barcelona había vivido de espaldas al mar me remito a Mari Paz Balibrea, "Descobrint Mediterranis: la resignificació del mar a la Barcelona postindustrial", en Nuria Enguita, José Luis Marzo y M. Romaní (eds.), *Tour-ismes. La derrota de la disensió,* Fundació Tàpies, Barcelona, 2004, pp. 34-52. Ver también Edgar Illas, "The City Where Europe Meets the Mediterranean", *Thinking Barcelona: Ideologies of a Global City,* Liverpool University Press, Liverpool, 2012, pp. 81-132.

153. Hay que advertir que este no es un fenómeno nuevo. *Cf.* Carles Carreras, "L'evolució de les activitats comercials a la ciutat de Barcelona", *Revista Catalana de Geografía,* Barcelona, 15 (junio de 1991).

154. *Cf.* Carles Carreras, "Los nuevos espacios del consumo en Barcelona", *Revista de Geografía,* Madrid, XXXIX/2 (julio-septiembre de 1995), pp. 69-77.

155. La noción de "lugar de olvido" la he tomado de Jonathan Boyarin, que la acuña para referirse a la ocultación del barrio pobre del Lower East Side, en favor de la exaltación de Brooklyn, con vista a la construcción de una memoria étnica urbana "pertinente" de los judíos de Nueva York. En "Un lieu de l'oubli: le Lower East Side dels Juifs", *Communications,* París, 49 (1989), pp. 185-193.

156. Oriol Bohigas, "El imaginario literario barcelonés, de Icària a Icària, S. A.", *El País,* Barcelona, 23 de abril de 1992.

157. Manuel Vázquez Montalbán, "Sobre las ruinas del Céntrico", *El País*, Barcelona, 11 de mayo de 1997.

158. Oriol Bohigas, "La reconstrucció de la ciutat", en DD AA, *La ciutat històrica dins la ciutat,* Ayuntamiento de Girona/Universitat de Girona, Girona, 1997, p. 164.

159. Sobre la memoria del Camp de la Bota y de los fusilamientos de que fue escenario puede consultarse el número monográfico que le dedicó la revista *L'Avenç,* 291 (mayo de 2004). Merece la pena atender el trabajo de investigación y reflexión al mismo tiempo ética y estética del artista Francesc Abad, que ha podido ser conocido a través de diferentes montajes. Un resumen del proyecto en Francesc Abad, "El parapeto", *Quaderns d'Arquitectura,* Barcelona, 240 (invierno de 2004), pp. 153-163, y "El Camp de la Bota", en José Miguel G. Cortés, *Impasse. Ciutats negades,* Centre d'Art La Panera, Lleida, 2007, pp. 42-54.

160. No es una excepción el Fossar de la Pedrera, levantado en 1985 en el cementerio de Montjuïc, lejos del casco urbano de la ciudad.

161. *Cf.* Pierre Nora (dir.), *Les Lieux de mémoire,* Gallimard, París, 1997.

162. Esta es la conclusión a la que llega Michel Izard en su trabajo sobre el reino Yatenga de los moose, en el oeste africano: "La scène de la mémoire", en *L´Odysée du Pouvoir,* Éditions de l'EHESS, París, 1992, pp. 119-128.

163. Juan Antonio Fernández de Rota, "Límite y cultura: el contenido de una forma", *Revista de Antropología Social*, 3 (1994), p. 69.

164. Maurice Halbwachs, *La memoria colectiva*, Publicaciones de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2004, pp. 67-68. Véase también al respecto, Isaac Joseph, "Decors et rituals de la mémoire collective", *Métamorphoses de la ville. Colloque de Cerisy,* Económica, París, 1985.

165. Raymond Ledrut, *Les images de la ville,* Anthropos, París, 1973. Está claro que Ledrut quería contrastar su postura teórica con la de Lynch, con su preocupación por la legibilidad, la coherencia y las "buenas formas". El mismo título del libro parece obvio que se opone —con su énfasis en la forma plural— al de una de las obras de referencia de Lynch, *The Image of the City,* aparecida trece

años antes (*cf. La imagen de la ciudad,* Gustavo Gili, Barcelona, 1998).

166. Richard Sennett, *Carne y piedra,* Alianza, Madrid, 1997.

167. Teresa del Valle, *Andamios para una nueva ciudad,* Cátedra, Madrid, 1997, pp. 101-132.

168. *Cf.* A. Ponte, "L'arquitectura i el fal·locentrisme en la teoria de Richard Payne Knight", en *Sexualitat i espai. El disseny de la intimitat*, Edicions UPC, Barcelona, 1997, pp. 177-195.

169. David Harvey, *Urbanismo y desigualdad social,* Siglo XXI, Madrid, 1977, p. 88.

170. Sobre esta etapa en la historia del crecimiento urbano en España, me remito a Horacio Capel, *Capitalismo y morfología urbana en España*, Libros del Cordel, Barcelona, 1975.

171. Sobre el barraquismo en Barcelona, *Cf.* Xavi Camino *et al.*, *Barraquisme. La ciutat (im)posible. Els barris de Can Valero, el Carmel i La Perona a la Barcelona del segle XX,* Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya, Departament de Cultura, Barcelona, 2011.

172. Sobre la historia social de un barrio de casas baratas de Barcelona, Can Tunis, hoy desaparecido, me remito al excelente trabajo de Pere López Sánchez, *Rastros de rostros en un prado rojo (y negro). Las Casas Baratas de Can Tunis en la revolución social de los años treinta,* Virus, Barcelona, 2013.

173. Josep M. Colomer, Josep M. Huertas Claveria y Jaume Fabré, "Josep M. Porcioles, 'ministro' de Franco en Barcelona", *L'Avenç*¸ 1982, p. 225.

174. Un balance de lo que fueron las políticas de vivienda social en Cataluña bien interesante, por el momento en que estuvo formulado por quien luego sería uno de los referentes teóricos del posterior desarrollo urbano de Barcelona, con sus ideas sobre "nuevas centralidades", lo encontramos en Joan Busquets, "La ciudad y la versión 'social' de su crecimiento", *CAU,* Barcelona, 42 (marzo-abril de 1977), pp. 56-61.

175. Amador Ferrer, *Els polígons a Barcelona,* Edicions UPC, Barcelona, 1984.

176. *Cf.* Amador Ferrer, "L'immerescut descrèdit dels polígons", en Josep Lluís Mateo (ed.), *1856-1999. Barcelona contemporània,* CCCB, Barcelona, 1996.

177. Le Corbusier, *Principios de urbanismo,* Planeta/Agostini, Barcelona, 1984 [1942], p. 41.

178. En el continente americano, pensemos en los asedios o incursiones sobre centros urbanos desde suburbios empobrecidos que supusieron el *caracazo* en la capital venezolana en febrero de 1989; en los disturbios de Los Ángeles en 1992; en las marchas sobre el centro de La Paz desde El Alto en octubre de 2004; en los bloqueos de los piqueteros argentinos desde finales de los años noventa.

179. Manuel Castells, "Política de la vivienda y sindicalismo urbano: los *Grands Ensembles* de París", en *La ciudad y las masas. Sociología de los movimientos sociales urbanos,* Alianza, Madrid, 1986, pp. 118-148.

180. Ramón Fernández Durán, *La explosión del desorden. La metrópoli como escenario de la crisis*

global, Editorial Fundamentos, Madrid, 1996, pp. 143-145.

181. A. Iglesias *et al.*, "Urbanismo y lucha de clases", *Cuadernos para el Diálogo,* Madrid, XIX extraodinario (abril de 1970), p. 62.

182. Javier Auyero, "L'espace des luttes. Topographie des mobilisations collectives", *Actes de la Recherche en Sciences Sociales,* París, 160 (diciembre de 2005), pp. 122-132.

183. Sobre los cambios urbanísticos que afectaron a lo que había sido un barrio popular como Poblenou y su transformación en el 22@, véase Isaac Marrero, "¿Del Manchester catalán al Soho barcelonés? La renovación del barrio del Poblenou en Barcelona y la cuestión de la vivienda", *Scripta Nova,* Barcelona, VII/146 (agosto de 2003). Disponible en http://www.ub.es/ geocrit/sn/sn-146 (137).htm

184. En octubre de 1990, en el momento mismo en que se desataron los disturbios en el barrio del Besòs, asigné a un grupo de estudiantes del seminario de antropología política del Departament d'Antropologia de la Universitat de Barcelona el encargo de llevar a cabo una investigación de urgencia sobre el terreno. Se trataba de revindicar un estilo de hacer etnografía que, asumiendo como objeto acontecimientos que no iban a repetirse, imitara las técnicas del periodismo de actualidad, con su capacidad de movilizarse ante los hechos, acudir a sus escenarios y recoger la información de manera ágil e inmediata, homenaje en buena medida a la formación como periodistas de varios de los fundadores de la Escuela de Chicago y de la primera antropología urbana. De esa tarea surgió el trabajo *Viviendas no, equipamientos sí. Barrio del Besòs en lucha*, cuyos autores fueron Xavier Argemí, Arola Castellà, Miguel González, David Gràcia, Margarida Llavina, Ricard Pagés, Anna Puig i Boltes y Margarida Salillas. Buena parte de la información de base para el presente capítulo procede del mencionado trabajo de investigación.

185. Sobre la naturaleza fuertemente territorial del conflicto, escribe David Lagunas: "El espacio inerte de la Palmera señalaba un límite que no podía ser violado y que se actualizaba en los conflictos. Se reivindicaba por parte de los vecinos de El Besòs una utilización exclusiva del mismo. Esos espacios-límite podían activarse y desactivarse dependiendo del contexto. La movilización vecinal reflejaba la necesidad de delimitar áreas de influencia en un espacio, lo cual se había convertido en los últimos años en una causa permanente de conflicto. El detonante fue el plan de construcción de nuevas viviendas de l'Ajuntament, el cual generó e hizo visibles conflictos larvados. La reivindicación vecinal del espacio de la Palmera se conceptuaba como un intento legítimo de 'guerra', puesto que entre los vecinos de El Besòs aparecía una lógica y un amplio consenso de que era legítimo 'defender' el espacio" (*Segregar, producir, contestar. Una etnografía con gitanos andaluces en La Mina*, Barcelona, Entimema, 2010, pp. 63-64). Marco Marchioni, por su parte, citaba la intifada del Besòs como un ejemplo de *corporativismo territorial*, "conjunto de actitudes, valores y comportamientos que se centran de manera exclusiva y excluyente en un determinado espacio físico y social" (*Comunidad, participación y desarrollo. Teoría y metodología de la acción comunitaria*, Madrid, Editorial Popular, 1999, p. 43). Encontramos idéntica percepción en artículos de prensa de firmas sin duda legitimadas, como el de Francisco Marín, antropólogo y líder histórico de la lucha vecinal en el Besòs ("De la periferia al centro urbano, sin despegar de la carencia", *El Observador*, Barcelona, 4 de noviembre de 1990), o el de Francisco Candel, a quien corresponde haber llevado a la literatura popular aquellos territorios en los que, como titulara una de sus novelas, "la ciudad perdía su nombre" ("Las razones de la sinrazón", *El Periódico*, Barcelona, 2 de

noviembre de 1991).

186. Ese es el cálculo que recogen todas las fuentes consultadas entre 1975 y 2015. Cuál fue el método que permitió obtener ese dato y mantenerlo en el tiempo es todo un misterio.

187. Datos tomados de *El País,* Barcelona, 2 de septiembre de 1990.

188. El alcalde de Sant Adrià, Antoni Meseguer, no se cansó de repetir tal versión en cuanto tuvo la oportunidad. Véanse sus declaraciones en *La Vanguardia,* 8 de noviembre de 1990: "Estoy convencido de que se debe a una campaña intoxicadora que enfrenta a los vecinos contra las viviendas. A esto se han añadido grupos extremistas, de derechas y xenófobos". El Ayuntamiento hacía pública también una encuesta en la que la mayoría de vecinos consultados reconocían una motivación xenófoba en su postura (*El País,* Barcelona, 20 de noviembre de 1990). Cuando finalmente se retiró el proyecto de la construcción de viviendas, el concejal de Urbanismo de la ciudad, Joaquim Miquel, admitió que "se ha cedido a la violencia y al racismo de un grupo de vecinos" (*El País,* Barcelona, 1 de diciembre de 1990).

189. Cabe destacar que esa postración no era consecuencia del "tono étnico" del barrio, sino de la pobreza de sus habitantes. De hecho, en Barcelona existen otros núcleos gitanos no solo no marginales, sino bien situados económicamente, y en los últimos tiempos beneficiarios incluso de una excelente reputación cultural, como consecuencia de haber sido la cuna de lo que la puesta en escena olímpica consagraría y promocionaría como el sonido barcelonés por excelencia y una de las claves de la popularidad internacional de la ciudad: la rumba catalana. Se hace referencia a los enclaves de gitanos de clase media y catalanohablante de Hostafranchs, el Raval —el entorno del Carrer de la Cera y la Plaça del Pedrò— o Gràcia, autodistinguidos de forma inequívoca de lo que ellos llaman "gitanos peludos", castellanohablantes, que viven en barrios que recogieron a antiguos barraquistas, como Sant Cosme, La Mina o Gornal.

190. Manuel de Solà-Morales; Joan Busquets, Miquel Domingo y Antoni Font, "Notas sobre la marginalidad urbanística", *Cuadernos de Arquitectura y urbanismo*, 81 (1971), pp. 85-91.

191. Fabio Vallbonesi Prieto, "El Besòs crític: una aproximació a la realitat dels barris del Besòs", *Revista Catalana de Sociologia*, 14 (2001), pp. 105-121.

192. Es antiguo el objetivo de convertir Sant Adrià en clave para la expansión de la capital catalana, el Área Metropolitana de Barcelona, que ya estaba prevista en el Plan Comarcal de Ordenación Urbana de 1953 y en el que se insiste tanto en Plan Director de 1966, como en nuevo Plan Comarcal de 1974. Eso es importante, puesto que recuerda que la Gran Barcelona que pretendiera ejecutar Pasqual Maragall de la mano de los planes olímpicos es una continuación natural de proyectos surgidos en el periodo franquista, proyectos que en todos los casos requerían la redención urbanística de la zona costera de Sant Adrià. Ese sueño de conquistar para el crecimiento barcelonés el litoral de su ciudad vecina incluyó el traslado del zoológico de Barcelona y su conversión en parque natural temático, instalaciones universitarias y deportivas, remodelaciones artístico-patrimoniales de las tres chimeneas de la Térmica y, sobre todo, la creación de un nuevo frente litoral artificial ganando 80 hectáreas al mar.

193. Se trata de lo que se llamó el "caso Regesa", una acusación de estafa contra, entre otros, el alcalde de Sant Adrià, Antoni Messeguer, finalmente absuelto.

194. Así se presentaba el proyecto destinado a la zona, aludiendo a como el Ministerio de Obras Públicas español lo consideraba una verdadera "operación de Estado" (Lluís Cantallops, Manuel Ribas y Estanislau Roca, "El pla del marge dret del Besòs a Sant Adrià", *Papers: Regió Metropolitana de Barcelona: Territori, estratègies, planejament*, 13 [1993], pp. 49-64). Este informe se elabora poco después de los disturbios en el barrio del Besòs y en él se les reconoce como un síntoma de las dificultades que va encontrar su ejecución, sino es acompañado de una adecuada pedagogía que la haga aceptable para la población (ibídem: 61-62).

195. Literalmente, puesto que en el propio proyecto se sugería la eliminación física del barrio como recurso ideal. Esa posibilidad —más bien deseo— siempre estuvo presente en todos los planes de reforma del barrio maldito (Aricó, 2014).

196. El planteamiento podía ser explícito. Así, en algún lugar podemos leer que La Mina estaba habitado por "familias marginales, la mayoría gitanas", y el Besòs por "trabajadores procedentes de Andalucía y Extremadura" (Anroni Vara Coomonte, "Administración pública, educación social y administración del conflicto. Estudio de los sucesos de Sant Adrià del Besòs. Una aproximación empírica", *Pedagogía social: revista interuniversitaria,* nº 11 [2005], pp. 149-164).

197. Otra forma de contemplar el contencioso podría ser como proponía Josep Roca en su análisis de aquel estallido de rabia social del otoño de 1990, reconociéndolo como entre *clases integradas*, aunque lo fueran en los bajos de la estructura social, y *clases periferizadas*, es decir, en la frontera o más allá del sistema (Joan Roca, "Recomposició capitalista i periferització social", in Institut de Batxillerat Barri Besòs. *El futur de les perifèries urbanes. Canvi econòmic i crisi social a la metròpoli*, Barcelona: Departament de Benestar Social, Generalitat de Catalunya, 1994, pp. 664-669).

198. Louis Chevalier, *Classes laborieuses et classes dangereuses à Paris pendant la première moitié du XIXe siècle*, Plon, París, 1969.

199. Según la prensa, uno de los jóvenes detenidos era un *skin*, el otro, un vecino de Sants y, en efecto, los ocho restantes resultaron ser de La Mina. Uno de ellos habría respondido al juez: "Cómo quiere que proteste contra eso si soy de La Mina y esos pisos van a ser para los míos" (*La Vanguardia*, Barcelona, 31 de octubre de 1990).

200. Acaso solo unos apuntes desde una sociología de urgencia a cargo de Lluís Flaquer ("Movidas, movilizaciones y movimientos", *El País,* Barcelona, 15 de noviembre de 1990), en los que se constataba la posibilidad de orientar la lectura en dos direcciones: la de calificar los acontecimientos como erráticos, faltos de objetivos claros e incapaces de disimular un trasfondo racista en sus intenciones, o hacerlo entendiéndolos como acciones autogestionadas de impugnación frontal del sistema y que cuestionaban el papel de los líderes vecinales de etapas anteriores que se habían dejado domesticar por las instituciones, de las que en muchos casos ya formaban parte orgánica.

201. Un motivo de reflexión debería ser el que algunas de las movilizaciones vecinales más importantes que se han producido en Barcelona hayan tenido como objetivo mantener a raya la "amenaza" que suponía la presencia de grupos sociales estigmatizados, colaborando con las políticas institucionales y urbanísticas que se preocupan de que la exclusión social se traduzca en segregación espacial. Otro ejemplo, además de los citados, sería las acciones de protesta de los vecinos de la Ronda Sant Antoni para expulsar a las prostitutas de sus aceras, a finales de 2006.

202. Iván Miró, "Accions en la participació. La cotització del consens i la mediació per a la pau social", en Unió Temporal d'Escrives, *Barcelona, marca registrada. Un model per desarmar,* Virus, Barcelona, 2004, pp. 178-181.

203. Consúltese el material editado desde Barcelona '92 y el documental *Besos al Besòs* (youtube.com/watch?v=KSBxPaJ0Om8). El órgano del Col·lectiu de Joves Comunistas del Besòs, apareció al menos durante un año, entre 1998 y 1999, llevaba por nombre La Intifada del Besòs, hasta tal punto la izquierda menos institucionalizada podía reclamar aquellos acontecimientos como emblemáticos de su ideario. En alguna oportunidad, ciertamente de excepción, trabajos periodísticos trajeron a primera plana la filiación radical de izquierdas de los amotinados, presentándolos ya fuera como antiguos líderes vecinales que se habían mantenido fieles a sus ideas sociales, ya fuera como jóvenes libertarios partidarios de la acción directa. Véase, por ejemplo, el reportaje de Eugenio Madueño, "El Besòs se fue a las barricadas", en el suplemento "La Revista" de *La Vanguardia,* 4 de noviembre de 1990.

204. Manuel Castells, "Planificación urbana y movimientos sociales. El caso de la renovación urbana en París", en Christian Beringuier *et al., Urbanismo y práctica política,* Los libros de la frontera, Madrid, 1979, pp. 127-128.

205. Las pancartas que enarbolaban los manifestantes decían "Fuera okupas y camellos". La muerte fue la de un vecino que fue acuchillado por un inquilino ilegal que bajó para encararse con quienes protestaban (*El Periódico de Catalunya*, 10 de enero de 2016).

206. El acertado concepto de "violencia urbanística" lo tomo de un artículo de Lorenzo Martín Retortillo, "Salamanca: la violencia urbanística", *Cuadernos para el Diálogo,* Madrid, 76 (enero de 1970), p. 41.

207. Fudamental el libro de Owen Jones, *Chavs. La demonización de la clase obrera,* Capitán Swing, Madrid, 2013.

208. Como se recordará, todo arrancó con la muerte de dos adolescentes perseguidos por la policía en Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint Denis, cerca de París. A partir del 8 de noviembre, los disturbios prendieron por los barrios periféricos de diferentes ciudades francesas a lo largo de varias semanas y conllevaron centenares de heridos y detenidos, la destrucción de todo tipo de instalaciones públicas, comercios y edificios religiosos, la quema de miles de coches… De hecho, se repetía una misma lógica que ya habían conocido todas las otras explosiones de ira popular en ciudades europeas, cuyo origen fueron casi siempre brutalidades y arbitrariedades policiales, desencadenante que es común también a los disturbios raciales en Estados Unidos, como se vio en Miami en 1980 y 1989; en Cincinnati, en abril de 2001; en Ferguson, en el otoño de 2014, o en Baltimore, en abril de 2015. El caso más parecido ocurrido en España correspondería al de los enfrentamientos entre vecinos y policías en el barrio sevillano de Los Pajaritos, en agosto de 2002, como consecuencia de la muerte de un joven delincuente por la Policía Nacional, o en el barrio de La Florida, en l'Hospitalet de Llobregat, en septiembre de 2012 y febrero de 2017.

209. Es significativo que todos los pronunciamientos políticos y expertos sobre las revueltas urbanas del otoño de 2005 en Francia insistieran en que estas eran el resultado de "un fracaso en el modelo de integración", por plantearlo siguiendo el título de un artículo de Michel Wieviorka publicado en *La Vanguardia* el 8 de noviembre de 2005.

210. Sobre la situación en las grandes concentraciones de viviendas de protección oficial francesas y las explosiones de violencia que experimentaban periódicamente, antes del gran estallido del otoño de 2005, me remito a Éric Macé, "Les violences dites 'urbaines' et la ville", *Les Annales de la Recherche Urbaine,* París, 83/84 (septiembre de 1999), pp. 59-64, y Henry Rey, *La Peur des banlieues,* Presses de Sciences Po., París, 1996. Acerca de aquellos disturbios, Alessi Dell'Umbria, *¿Chusma? A propósito de la quiebra del vínculo social, el final de la integración y la revuelta del otoño de 2005 en Francia y sus últimas manifestaciones*, Pepitas de Calabaza, Zaragoza, 2009.

211. Yves Grafmeyer, *Sociologie urbaine,* Nathan, París, 1994, p. 37.

212. De hecho, como se sabe, la noción de "región moral", tan cara en la Escuela de Chicago, no era sino la transposición a la nueva sociología urbana del concepto de "área cultural" que había acuñado la primera antropología cultural norteamericana.

213. Aunque acaso la principal lucidez de los chicaguianos residió, por encima de todo, en notar cómo entre los factores que acaban definiendo la forma de la ciudad y sus distribuciones, no dejaban nunca de agitarse y actuar lo que Park, en su prólogo de 1928 al *The Ghetto* de Wirth, llamaba "tendencias que hasta el momento apenas conocemos y controlamos" (Robert E. Park, *La ciudad,* Serbal, Barcelona, 1999, p. 12).

214. Alguna vez se explicita lo obvio, como cuando una periodista escribía, sobre los polígonos de viviendas en que se recluía o era recluida la población más pobre, que "todo pesa sobre esos barrios que crecen en los límites de nuestras ciudades. Controlarlos, ya no solo policialmente, se termina convirtiendo en una prioridad obligada para evitar males mayores en el futuro" (Patricia Ortega, "Los guetos en España. Los suburbios empiezan a incubar la exclusión", *El País,* Madrid, 18 de diciembre de 2005).

215. Juli Ponce, "Els nostres barris: noves migracions, nous riscos de sorgiment de guetos urbans?", en Observatori del Risc, *Habitatge. Cohesió social i sostenibilitat,* Institut d'Estudis de la Seguretat, Barcelona, 2006, p. 100.

216. Sebastià Jornet, Carles Llop, Joan Enric Pastor, "La Mina, transformación urbana del barrio", *Quaderns d'Arquitectura i Urbanisme,* Barcelona, 240 (octubre de 2004), p. 146.

217. En efecto, las exigencias legales de los municipios a la hora de presentarse a los sorteos de vivienda protegida hacen que los extranjeros pobres sean una minoría muy reducida de beneficiarios de esa, por lo demás, escasa oferta. Según datos de la Generalitat de Catalunya, desde 2004 a 2006, por ejemplo, solo el 9,3 por ciento de pisos sociales se había adjudicado a inmigrantes (*El País,* Barcelona, 19 de febrero de 2007).

218. Cabría evocar la lúcida defensa que en su día hiciera Oriol Bohigas del chabolismo en ese mismo sentido, es decir, en el de advertir que aquella solución era una mala solución, pero era una solución al fin y al cabo para las familias inmigradas que iban llegando a Barcelona. Ese elogio de la barraca era entonces un alegato contra una mucho peor solución: los bloques de viviendas que estaban emponzoñando la periferia barcelonesa. Es posible que en el momento actual a Oriol Bohigas le pareciese que aquella alternativa de los grandes bloques de la que entonces abominaba todavía era preferible a las que ahora se proponen para los problemas de vivienda de los jóvenes y de los nuevos inmigrantes: ninguna. Véase Oriol Bohigas, "Elogi de la barraca", en *Barcelona: entre*

el pla Cerdà i el barraquisme, Edicions 62, Barcelona, 1963, pp. 149-155.

219. François Chaslin, "Los disturbios de París desde una perspectiva urbana", *Arquitectura Viva,* 103 (octubre de 2005).

220. Ubaldo Martínez Veiga, "Vivienda e integración social de los inmigrantes en España", *Quaderns de l'ICA*¸ Barcelona, 1997, pp. 27-64, y *Pobreza, segregación y exclusión espacial,* Icaria/Institut Cátala d'Antropologia, Barcelona, 1999.

221. Disponible en http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/02/08/catalunya/1486563414 _582369.html; visitado el 27/2/2017.

222. Mikel Aramburu, "La immigració i els usos de l'espai públic", *Suplements de Barcelona metròpoli mediterrània,* 5, Barcelona, 2005.

223. Capel, *Un análisis crítico del modelo Barcelona,* p. 34.

224. Louis Wacquant, *Les presons de la misèria,* Edicions de 1984, Barcelona, 2003.

225. Louis Wacquant, "La presó com a substitut del gueto", en *Castigar els pobres. El nou govern de la inseguretat social,* Edicions de 1984, Barcelona, 2004, pp. 215-230.

226. *Cf.* Gerardo Guthmann, *Los saberes de la violencia y la violencia de los saberes,* Nordan-Comunidad, Montevideo, 1996.

227. Josetxo Beriain, "Violencia, sociedad y religión", en J. A. Binaburo y X. Etxeberria (eds.), *Pensando en la violencia,* Bakeaz/Los Libros de la Catarata, Bilbao/Madrid, 1994, p. 66.

228. Juan Luis Pintos de Cea-Naharro, "La espada y el puño. Acerca de los imaginarios sociales de la violencia", *La balsa de la Medusa,* Madrid, 29, 1994, pp. 35-48.

229. Macé, "Les violences dites 'urbaines' et la ville", p. 61.

230. Un ejemplo: Eulalia Vintró, teniente de alcalde ecosocialista en el Ayuntamiento de Barcelona, escribía cuando el "fenómeno" empezaba a "alarmar a la sociedad": "Las grandes ciudades europeas y norteamericanas se han transformado, desde hace años, en un campamento urbano de *tribus* de jóvenes que, algunas pocas veces, desentierran el hacha de la violencia. Muchos ciudadanos se preguntan si algunos jóvenes han optado por la violencia salvaje" (*El Periódico de Catalunya,* Barcelona, 23 de abril de 1991).

231. La Encuesta de Seguridad Pública de Cataluña correspondiente al 2000 reflejaba que la "violencia juvenil" a cargo de "minorías visibles" era el principal asunto que preocupaba a los ciudadanos, con 8,58 puntos sobre 10. La respuesta por parte de las autoridades debía ser, según la misma encuesta, un aumento de la "mano dura" (8,43 sobre 10).

232. Disponible en http://www.publico.es/espana/427-bandas-juveniles-violentas-espana.html; visitado el 27/2/2016.

233. En la práctica, la movilidad de los jóvenes que optan por adherirse a culturas juveniles es

grande y la fidelidad a un canon vestimentario o conductual más que relativa. De hecho, lo más frecuente es que los jóvenes adopten estilos sintéticos, en que se articulen elementos procedentes de diferentes estilos. Sobre estos extremos, véase el trabajo de Yves Delaporte, "*Teddies, rockers, punks et cie.:* Quelques codes vestimentaires urbains", *L´Homme,* París, XXII/4, 1982, pp. 49-62.

234. Véase, por ejemplo, el informe interno anónimo "Aproximación al movimiento punk en Barcelona", emitido en septiembre de 1986 para el Ayuntamiento de Barcelona "a fin de conocer la realidad de ciertos grupos, colectivos o tendencias que aparentemente presentan signos de una cierta marginación cultural ante la mayoría de sectores juveniles y que a lo largo del año en curso han sido protagonistas de situaciones conflictivas de diferente signo y grado".

235. Los materiales fueron publicados más tarde. *Cf.* Pere-Oriol Costa, José Manuel Pérez Tornero y Fabio Tropea, *Tribus urbanas. El ansia de identidad cultural,* Paidós, Barcelona, 1997. En los agradecimientos del libro figura un sorprendente pie de página. En él se da cuenta de que Ferran Cardenal, a la sazón gobernador civil de Barcelona y una de las personas hacia la que se expresa gratitud, "nos propuso el trabajo y colaboró en el trabajo de campo" (¡?).

236. *Cf.* Disponible en http://www.guardiacivil.org/kio/viorioja

237. Disponible en http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/07/10/catalunya/1468172137_ 181410.html; visitado el 25/2/2017.

238. M. Vila y M. J. Calvo, "Aproximación al movimiento *punk*", y T. Moore, "Los grupos juveniles en la Gran Bretaña y la alteración del orden público", en *Societat i conflictes culturals. Els grups juvenils a Barcelona*, V Ponències sobre Seguretat Ciutadana, Escola de la Guardia Urbana, 1986, memoria inédita mecanografiada.

239. Para un visión del movimiento *hip-hop* en la Barcelona de mediados de los ochenta, me remito a Joaquim Dols, "La subcultura urbana de la trepa i l'esprai", *Barcelona metròpolis mediterrània*, Barcelona, 4 (abril-junio de 1987).

240. Algunos ejemplos de titulares de artículos de opinión y editoriales al respecto, publicados en la prensa barcelonesa los primeros meses de 2000: "Violència gratuïta" (*Avui,* Barcelona, 4 de enero); "La nueva violencia" (*El Periódico de Catalunya*, Barcelona, 4 de enero); "Los misterios del mal" (*El Periódico de Catalunya,* Barcelona, 9 de abril); "Triple crimen y aficiones obsesivas" (*El Periódico de Catalunya,* Barcelona, 6 de abril), "Violencia y *after hours*" (*El País,* Barcelona, 17 de abril); "Jóvenes y alarma social" (*La Vanguardia,* Barcelona, 17 de mayo), etc.

241. Sobre el botellón, me remito a Artemio Baigorri, Ramón Fernández, GIESyT, *Botellón, un conflicto postmoderno,* Icaria, Barcelona, 2004.

242. Según la Guardia Urbana, en el área de Barcelona se contabilizaban a finales de 2006 unas 300 casas okupadas, sobre todo en los distritos de Gràcia, Horta-Guinardó, Sants, Sant Martí y Ciutat Vella (*La Vanguardia,* Barcelona, 8 de diciembre de 2006). Acerca del movimiento okupa en Catalunya, *cf.* Ricard Gomà (dir.), *Joventut, okupació i polítiques públiques a Catalunya,* Departament de la Presidència, Secretaria General de Joventut, Barcelona, 2006.

243. *Cf.* Carles Viñas, *Skinheads a Catalunya,* Columna, Barcelona, 2004.

244. Recuérdese que algunos de los casos de violencia racista más escandalosos, como la muerte de una muchacha dominicana en Madrid en septiembre de 1993, inicialmente atribuida a *skins,* resultó ser obra de un guardia civil libre de servicio. En marzo de 1996, más de trescientos legionarios sembraron el terror por las calles del barrio musulmán de Melilla. En julio de 1997, otro guardia civil mató de un tiro por la espalda a un magrebí en Madrid, sin motivo aparente. Dentro de la relación de agresiones *skins* consignada en el informe inicial de las mencionadas jornadas de Logroño, convocadas por la Dirección General de la Guardia Civil, se incluía la que el 25 de julio de 1995 mató a un agente de la Benemérita en la Plaça de Tetuán de Barcelona. Curiosamente, se olvida que informaciones posteriores revelaron que, de hecho, el *skin* era él y su muerte fue atribuida a un grupo de antifascistas (véase *El Periódico,* Barcelona, 10 de agosto de 1995). También es ejemplo de ello el papel cómplice de las fuerzas de seguridad en los disturbios racistas de Ceuta, en 1995, y de El Egido, en el 2000.

245. El 29 de marzo de 2000 la prensa publicaba la noticia de una agresión *skin* completamente "gratuita" en pleno centro de Barcelona, un sábado, a las 6 de la tarde. La víctima había sido una muchacha, que habría quedado tetrapléjica como consecuencia de los golpes recibidos. La prensa se hizo eco de la rueda de prensa de la Brigada de Información de la Policía, dando cuenta de la actividad de las fuerzas de orden público contra el vandalismo de los "grupos violentos". Al cabo de unos días se desvelaba que todo había sido un montaje policial y que el ataque *skin* nunca se había producido.

246. Por ejemplo, en su edición nacional del 25 de octubre de 2000, *El País* titulaba así una noticia: "Un grupo de 'cabezas rapadas' mata a golpes y prende fuego a un mendigo en Bilbao". Al día siguiente, el titular era otro: "La Ertzaintza acusa a un hombre de 20 años del asesinato de un indigente en Bilbao. La policía vasca descarta que el crimen sea obra de un grupo de 'cabezas rapadas'".

247. Téngase en cuenta la repercusión mediática que tuvieron los sucesos de Alcorcón en enero de 2007, en el que una disputa entre jóvenes fue convertida por la prensa en un enfrentamiento "étnico" generalizado entre españoles y latinoamericanos.

248. *Cf.* Carles Feixa, Laura Pozio y Carolina Recio (eds.), *Jóvenes "latinos" en Barcelona. Espacio público y cultura urbana,* Ayuntamiento de Barcelona/Anthropos, Barcelona, 2006. El asesinato de Rodney Tapias dio pie a un iluminador artículo de Carles Feixa: "¿Reyes latinos? Pistas para superar los estereotipos", *El País,* Barcelona, 12 de diciembre de 2004. Sobre el intento más bien frustrado de institucionalización de este tipo de organizaciones, véase Carles Feixa y Noemi Aselles, "De bandas latinas a asociaciones juveniles. El caso de Barcelona", *Jóvenes. Revista de Estudios sobre juventud,* México DF, X/24 (enero-junio de 2006), pp. 56-67.

249. Pierre Bourdieu, *La distinción. Las claves sociales del gusto,* Taurus, Madrid, 1988, p. 490.

250. Sobre cómo las crónicas de actualidad se nutren de manera constante de este imaginario que asocia juventud y "violencia urbana", me remito a David Lepoutre, "Odien, els joves?", *Revista d´Etnologia de Catalunya,* Barcelona, 12 (abril de 1998), pp. 50-59. Una visión en conjunto del fenómeno de las llamadas "tribus urbanas" en Catalunya en Joan Pallarés, Carmen Costa i Carles Feixa, "*Okupas, makineros, skinheads.* Ciudadanía y microculturas juveniles en Cataluña", en Carles Feixa, Carmen Costa y Joan Pallarés (eds.), *Movimientos juveniles en la península Ibérica. Grafftis, grifotas, okupas,* Ariel, Barcelona, 2002, pp. 89-114.

251. Por desgracia, el rectorado de la Universitat de Barcelona sí que se plegó a los deseos de la Delegación del Gobierno de cerrar todas las facultades con motivo de la cumbre europea de marzo de 2002.

252. Citado por Josep M. Colomer i Calsina, *Els estudiants de Barcelona sota el franquisme,* Curial, Barcelona, 1978, vol. II, p. 61.

253. En la manifestación contra la cumbre europea de marzo de 2002, los escaparates de la tienda de moda Gonzalo Comellas, en la esquina Casp/Passeig de Gràcia, lucían grandes carteles, colocados en el interior por la propia empresa, en los que, como si de un sortilegio mágico apotropaico ante las piedras de los manifestantes se tratase, se podía leer: "No a la globalización".

254. Michel de Certeau, *La conquesta de la paraula,* Estela, Barcelona, 1970, pp. 11-12.

255. Pierre Sansot, *Poetique de la ville,* Armand Colin, París, 1996, p. 129.

256. De Certeau, *La conquesta de la paraula,* p. 12.

257. No es casual que una coartada recurrente por parte de todo manifestante detenido por la policía es la de declarar que "él solo miraba" o "pasaba por allí"; lo cual no quiere decir, por cierto, que muchas veces la policía detenga a viandantes o mirones con el fin de justificar su incapacidad para detener a los verdaderos manifestantes.

258. Lefebvre, *La production de l'espace social,* p. 68.

259. J. V. Foix y Narcís Comadira, *Diàlegs a Barcelona,* Ayuntamiento de Barcelona/Laia, Barcelona, 1983, p. 41.

260. Jaume Asens, "La política de 'tolerancia cero' a la ciutat", *Nous Horitzons,* Barcelona, LXIV/183 (2006), pp. 27-32.

261. Héctor C. Silveira, "Barcelona y el 'fomento de la convivencia' a través de la represión del espacio público", en Roberto Bergalli e Iñaki Rivera (eds.), *Emergencias urbanas,* Anthropos, Barcelona, 2006, pp. 239-260.

262. Jordi Borja, "Pors urbanes i demandes de seguretat: la repressió preventiva", *Revista Catalana de Seguretat Pública,* Barcelona, 16 (noviembre de 2006), pp. 77-84.

263. Citado por Luis Caldero, "¿La calle es mía?", *La Veu del Carrer,* Barcelona, 100 (enero-febrero de 2007), p. 47.

264. *Cf.* Manuel Delgado, *El espacio público como ideología*, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2014.

265. Disponible en http://www.bcn.cat/estadistica/catala/dades/anuari/cap04/C0409020.htm; visitado el 28/2/2017.

266. Albert Sales, Joan Uribe e Inés Marcos, *Diagnosis 2015. La situación del sinhogarismo en Barcelona. Evolución y políticas de intervención*, XAPSLL, Barcelona, 2015, pp. 23-25. Disponible en http://www.bcn.cat/barcelonainclusiva/ca/2015/12/diagnosi2015.pdf; visitado 28/2/2017.

267. Un reportaje periodístico (Luis Benvenuti, "Una vida lejos de la plaza", *La Vanguardia*, Barcelona, 19 de agosto de 2001) permitía conocer el avatar personal de alguna de estas personas que habían improvisado una cierta forma de hogar en la Plaça de Catalunya. Edwin, un nigeriano de 28 años, atravesó Nigeria, el Congo y acabó en Canarias. Después de 36 días en un centro de internamiento para inmigrantes, fue embarcado en un avión militar y depositado en otro centro de internamiento, en este caso el anexo a la comisaría de La Verneda, en Barcelona. Tras cuatro días detenido, le soltaron y le dijeron que fuera a la Plaça de Catalunya, donde podría encontrar más africanos. Allí estuvo viviendo cinco meses, hasta su desalojo forzoso.

268. Sobre esa nueva figura de la "diversidad étnica" barcelonesa y su papel gentrificador, me remito a Nadja Monnet: "Moros, sudacas y guiris. Una forma de contemplar la diversidad humana en Barcelona", *Scripta Nova*, 94 (agosto de 2001). Disponible en http://www.ub.es/geocrit/sn-94-58.htm; visitado el 27/2/2917.

269. Véase el libro de Jordi Panyella y David Fernández, *Cròniques del 6 i altres relats de la clavaguera policial*, Virus, Barcelona, 2006.

270. La emisión en la televisión pública catalana del un documental sobre el caso —*Ciutat morta*, dirigida por Xavier Artigas y Xapo Ortega en 2013— causó un verdadero trastorno en una sociedad en una buena parte convencida de que el "modelo Barcelona" no podía registrar hechos de esa naturaleza. Otro testimonio del caso fue el libro de Mariana Huidobro, Helen Torres y Katu Huidobro, *Ciutat morta. Crònica del cas 4F*, Virus, Barcelona, 2015.

271. El resultado de este encuentro fue recogido en Marina Subirats *et al.*, *Civisme per la convivencia. Un debat obert*, Icària, Barcelona, 2006. Un precedente en esta línea sería Jordi Borja y Zaida Muxí, *Espacio público: ciudad y ciudadanía*, Electa, Barcelona, 2003.

272. Pere López Sánchez, "Acotar los espacios. Los márgenes de las periferias (con anotaciones sobre la Barcelona de los barrios)", en Luis Urteaga y Vicente Casals (eds.), *Horacio Capel*, geógrafo, Publicacions y Edicions de la Universitat de Barcelona, Barcelona, p. 128.

273. Por ejemplo, Josep Maria Montaner y Zaida Muxí, *Arquitectura y política*, Gustavo Gili, Barcelona, 2011, o Jordi Borja, *Revolución urbana y derechos ciudadanos*, Alianza Editorial, Madrid, 2013.